

Luislina Martínez,
compilador

Estudios Rurales

ciencias sociales

ANTLOGIA

FLACSO - ECUADOR

EDIS

Antología de estudios rurales

**LUCIANO MARTÍNEZ,
COMPILADOR**

© 2000, FLACSO, Sede Ecuador
Páez N19-26 y Patria, Quito – Ecuador
Telf.: (593-2) 232030
Fax: (593-2) 566139
ILDIS, Fundación Friedrich Ebert
Calama 354 y Juan León Mera
Telefax: (593-2) 231620

Registro derechos de autor: 013818
ISBN Serie: 9978-67-049-1
ISBN Obra: 9978-67-050-5
Compilador: Luciano Martínez Valle
Edición: Alicia Torres
Diseño de portada: Antonio Mena
Diseño y diagramación: RISPERGRAF
Quito, Ecuador, 2000

ÍNDICE

ESTUDIO INTRODUCTORIO

- La investigación rural a finales de siglo
Luciano Martínez Valle

9

BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

55

ARTÍCULOS

- La adquisición de tierra por dos generaciones de comuneros
en la comunidad minifundista Santa Lucía Arriba, Tungurahua
Nancy R. Forster

71

- Mercado de tierras en Ecuador
COTECA

95

- La especificidad del empleo rural
Luciano Martínez

121

- Globalización de la economía y campesinado serrano:
un análisis en tres dimensiones
Roberto Santana

151

- Los campesinos arroceros
y el mercado andino
Rafael Guerrero B.

169

- Ecuador:
Pobreza rural
Peter Lanjouw

193

- Políticas agrícolas y desarrollo rural en el Ecuador:
con referencia a Morris D. Whitaker
Louis Lefebre

247

Aspectos políticos-sociales del manejo de los recursos naturales
en la cordillera occidental de las provincias de Cotopaxi
y Tungurahua

Leonard Field

271

El desarrollo de las agroexportaciones en
el Ecuador: la primera respuesta empresarial

William F. Waters

291

Presentación

En la última década han ocurrido muchos hechos de trascendencia en el campo de las ciencias sociales no sólo del Ecuador, sino en el ámbito latinoamericano e incluso mundial. La tan reiterada crisis de los paradigmas es posiblemente el hito determinante en este sentido, especialmente en cuanto ha significado la ruptura los ejes de análisis y de los puntos de referencia largamente considerados como inamovibles.

Paralelamente, más allá del campo estricto del conocimiento, varios procesos han dejado también su huella, a través de las exigencias que han planteado a las ciencias sociales, no sólo por ser fenómenos relativamente nuevos sino fundamentalmente por las transformaciones que han contribuido a desatar. De igual manera, el surgimiento de nuevos actores sociales y de nuevas identidades, con sus formas particulares de expresión ha constituido un acicate para explorar nuevos temas y nuevas metodologías. Mientras se han sucedido estos hechos, las ciencias sociales ecuatorianas han vivido transformaciones internas, redefiniciones de su entorno institucional y cambios sustanciales en sus mecanismos de financiamiento.

En estas condiciones es imprescindible volver la mirada sobre el desarrollo reciente de las ciencias sociales ecuatorianas, ya que en este período no sólo ha habido transformaciones de mucha importancia, sino que se han abierto nuevos campos de interés, se han incorporado visiones renovadoras y se han adoptado formas alternativas de acercamiento a los problemas.

Por ello, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y el Instituto de Investigaciones Sociales, ILDIS – Fundación Friedrich Ebert consideran necesario emprender en el esfuerzo de elaborar una visión de conjunto y en profundidad de las ciencias sociales ecuatorianas, dentro de lo que podría considerarse como una evaluación de fin de siglo. Este es el sentido de la Serie Antologías en Ciencias Sociales, cuyo primer tomo lo ponemos a consideración.

Fernando Carrión

Director

FLACSO- Sede Ecuador

Hans Ulrich Bunger

Director

Fundación Friedrich Ebert ILDIS

La investigación rural a finales de siglo

LUCIANO MARTÍNEZ VALLE

Introducción

En el Ecuador, un país con una importante población rural y donde el sector agrario había sido, durante la 'década perdida', el principal motor del crecimiento económico, conjuntamente con el petróleo, era improbable que la investigación sobre el sector rural se hubiera estancado. Si se compara la producción académica desde los años setenta con la de los últimos diez años, se evidencia una real disminución en el volumen no así en la calidad.

Durante los años setenta y ochenta, el país se convirtió en un verdadero laboratorio para la investigación social, especialmente la agraria. Los principales agraristas del continente tenían la posibilidad de estudiar, cotejar hipótesis y plantear nuevas perspectivas sobre un espacio rural pequeño, pero muy rico en diversidad de procesos sociales (reforma agraria, colonización, diferenciación social, etc.). Hay dos tendencias claras durante esos veinte años: los estudios sobre los cambios agrarios y posteriormente, los estudios sobre el campesinado.

La primera línea impulsada por el pionero trabajo del CIDA (1965), retomada posteriormente por las tesis de la maestría de CLACSO, fue sin duda muy sugerente y constituye una base de sólida reflexión para la historiografía agraria futura¹. La segunda, enmarcada en

1 Ver: Varios Autores, *Ecuador: Cambios en el Agro Serrano*, FLACSO-CEPLAES, Quito, 1980. En la línea de los estudios históricos, no se puede dejar de mencionar el importante trabajo de Andrés Guerrero, *La semántica de la dominación*, Ediciones Libri Mundí, Quito, 1991.

la discusión latinoamericana ‘campesinistas vs descampesinistas’, aportó con una renovada visión la complejidad de la economía campesina, más centrada en la dimensión socioeconómica, pero sin abordar los aspectos culturales y organizativos. La dinámica de toda esta rica experiencia tenía indudablemente su base en la afloración de toda una generación de sociólogos volcados a la investigación que marcaron hasta los años ochenta el ‘qué hacer’ sobre el problema agrario; en cambio, fueron menos frecuentes los estudios económicos y antropológicos².

La pauta sociológica marcó en cierto sentido ‘el paso’ de la investigación de las otras disciplinas. No hubo en esta fase ni ‘alteridad’ ni ‘multidimensionalidad’ en la investigación sobre lo rural. En cambio, sí hubo una abundante producción, tanto que algunos analistas mantienen una visión altamente optimista de este período: riqueza en cuanto a los nuevos problemas abordados, importantes avances metodológicos y hasta impacto en la sociedad civil (Chiriboga 1988).

En una coyuntura en que empezaba a desmoronarse el modelo de substitución de importaciones, repensar la realidad agraria del país y su importancia, es como llegar un poco tarde al convite. Desde la mitad de los años ochenta, se asiste a una ofensiva de las políticas neoliberales hacia el mismo sector agrario que culminó con la expedición de la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) en 1994. En este período, sobre todo en los años noventa, se evidencia una relativa situación de crisis de la investigación y pensamiento agrarios. Se pueden señalar algunas de las posibles causas:

- ▲ disminución y en algunos casos pérdida de la importancia del rol de la investigación en las ONG y organismos estatales vinculados al desarrollo rural,
- ▲ agotamiento prematuro de algunas temáticas de investigación,
- ▲ falta de incentivos a la investigación agraria y pérdida de espacio en universidades, centros e institutos de investigación,
- ▲ imposición de modas temáticas relacionadas con las posibilidades reales de obtener financiamiento, inexistencia de vínculos reales entre la investigación y las necesidades de la sociedad civil.

2 Dentro de los pocos estudios de orientación económica de esa época, vale mencionar a Carlos Larrea et alii, 1987. El estudio de Blanca Muratorio, (1982), marca una veta de investigación antropológica, lamentablemente no continuada en el país.

Solo a partir del levantamiento indígena de 1990 y luego de su réplica en 1994 se empieza a reflexionar nuevamente sobre el sector rural, aunque ahora bajo el paradigma del indigenismo de viejo y nuevo cuño.

En una coyuntura tan delicada, con una ofensiva del pensamiento neoliberal más ortodoxo y una constatada crisis y debilidad del movimiento campesino, las ONG e instituciones de desarrollo no realizaron esfuerzos para frenar a tiempo o al menos discutir ampliamente el diseño de las políticas para el sector agrario. No existía en la sociedad civil ningún otro sector capaz de presentar alternativas al modelo neoliberal. La prueba está en que una ONG como IDEA, con una clara orientación afín a las políticas neoliberales, logra sentar las bases científicas de la posterior LDA. Las universidades tampoco lograron articular una mínima reflexión sobre la suerte de los sectores más desfavorecidos del medio rural, peor presentar críticas al modelo en curso, lo que demuestra la postración de la investigación universitaria sumida en una profunda crisis³.

Quizá lo que más afectó a la investigación fue su desconexión con las fuentes de financiamiento. La investigación social, en general, empezó a ser considerada como inútil o poco relevante para aquellas instituciones que si tenían fuentes económicas y posibilidades de hacerlo como las organizaciones de financiamiento para el desarrollo ubicadas en los países centrales y las ONG. Era más importante la ‘acción’ en cualquier línea antes que disponer de una reflexión sólida sobre las tendencias económicas y sociales predominantes en el medio rural. Bastaba con aplicar los métodos del ‘diagnóstico participativo’, para disponer de los elementos científicos para la acción. De esta forma, se evacuaron las posibilidades de investigar en importantes áreas campesinas donde se implementaban proyectos desarrollistas.

La otra dimensión importante es la imposición de ‘modas’ de investigación por aquellas instituciones que sí necesitaron de ella durante estos años (género, agroecología, sostenibilidad, y actualmente el tema del capital social). Así, la investigación se subordinó a demandas

3 Así por ejemplo, la *Revista de Ciencias Sociales* editada por la Escuela de Sociología de la Universidad Central, que hasta mitad de los años 80 publicó interesantes números sobre el problema agrario, desapareció de la escena casi sin dejar rastro.

puntuales de financiamiento. Esto no es nada nuevo y sucede en todas partes del mundo. Lo grave es que en un país como el Ecuador, con pocos recursos humanos, esta tendencia absorbió tal vez los mejores cuadros, mientras otros sectores importantes de la sociedad civil con prioridades políticas quedaron huérfanos de estos apoyos.

Un último elemento es el marco de la globalización o mundialización de la economía y la cultura que empieza a perfilarse claramente a principios de los años 90. En esta línea, hay que decirlo claramente, todavía no existen estudios que muestren su impacto sobre la estructura productiva, las respuestas de los diversos actores económicos y la viabilidad de los grupos campesinos. Hacia finales de siglo, donde caen las barreras y los últimos obstáculos para el funcionamiento del capitalismo global, la investigación de nuevos problemas tanto desde la dimensión estrictamente técnica como de la socioeconómica, brillan por su ausencia, lo que constituye un serio *handicap* para el diseño de políticas para el sector rural. Se podría decir que esta no es una tarea fácil y que se necesita de enfoques pluridisciplinarios y de metodologías de trabajo renovadas, un verdadero reto para la investigación futura, si finalmente lo que se busca es vincular el conocimiento con la práctica, en otras palabras, crear el puente entre la investigación y las políticas para el sector rural.

Pero no toda la investigación -hay que remarcarlo- estuvo desvinculada de los procesos de cambio más importantes del sector rural. De hecho, existen trabajos pioneros en este sentido en el contexto latinoamericano. Así por ejemplo, los estudios sobre la relación campo-ciudad, empleo no-agrícola, tipología de los campesinos y políticas focalizadas para el desarrollo rural son temas prioritarios dentro de la actual agenda para la elaboración de 'políticas diferenciadas' para el sector rural⁴. Lamentablemente estos estudios tuvieron poca difusión o no fueron aprovechados por las instancias que toman las decisiones de las políticas agrarias. Esta desvinculación afectó al país al no procesar todos los avances teóricos disponibles, al contrario de lo que sucede en otros países (caso de México y España) en donde, dentro de las instan-

4 Este fue el tema del "Seminario Latinoamericano de Heterogeneidad Agraria y Políticas Diferenciadas", realizado en México entre el 27 y 29 de noviembre de 1997, con el auspicio de FAO, SAGAR y RIMISP.

cias institucionales de gobierno, subsiste un importante espacio para la reflexión de los problemas del sector.

La brecha entre investigación y diseño de políticas es importante cerrarla a través de un doble esfuerzo: del lado de la investigación, priorizando los temas que permitan a los *policy makers* disponer de mayores elementos de juicio para el diseño de políticas de mediano y largo plazo; por parte de las instituciones del sector, abriendo las puertas a la discusión, al debate y a la difusión sobre los temas prioritarios. Como vínculo agenciador podrían actuar las ONG que trabajan en el sector rural, más proclives a la discusión y a la necesaria concertación para aprovechar los pocos esfuerzos que todavía se realizan en el campo de la investigación.

Los aportes al conocimiento del sector rural

El sector rural ecuatoriano tiene una característica básica: su alta heterogeneidad, tanto en lo que se refiere al paisaje agrario, a la configuración de la estructura productiva, así como en la conformación de los sujetos sociales, formas de organización social y prácticas culturales. Se trata de un país pequeño en superficie pero altamente diferenciado en regiones y dentro de ellas. De allí la enorme dificultad de la generalización, y el acecho -siempre presente- de la simplificación de la realidad basándose en unos pocos datos estadísticos. La situación es más grave si se comprueba que la investigación sobre las principales regiones del país (sierra, costa y oriente) son muy desiguales en cantidad y calidad: existe abundante información sobre la sierra, pero no hay un equivalente sobre las otras dos regiones. Así pues, muchos de los temas analizados en este trabajo tienen esta desventaja que solo podrá ser llenada cuando se equilibre el conocimiento sobre el sector rural de las regiones mencionadas.

En este estudio, la multiplicidad de temas se agrupó bajo siete ejes que considero centrales para la explicación de los problemas rurales hacia fines de siglo; además, estarán presentes al menos en los 20 años por venir. Estos son: las transformaciones rurales, las políticas agrícolas, el capital financiero, el mercado, la sostenibilidad, la tecnología y el capital social.

Una antología sobre los estudios del medio rural en su concepción más amplia, habría significado abordar muchas otras temáticas como migración, historia agraria, género, medio ambiente. Estas serán abordadas en otros volúmenes, lo que me ha permitido poder profundizar el abanico de temas seleccionados para esta antología.

Las principales transformaciones rurales

Se acepta que la sociedad rural de hoy no es la misma que hace veinte años. El predominio de 'lo agrario' no es tan evidente, en cambio, la transformación de la estructura agraria y la quasi desaparición del sistema de hacienda sí es clara, lo que no significa, en ningún caso, una mejor distribución de la propiedad.

El fenómeno más interesante es que mientras el perfil ocupacional de hombre rural ha cambiado mucho, también el mercado, en la acepción más profunda del término, ha invadido los más recónditos intersticios del hábitat rural. Cuando uno visita las comunidades más indias del centro del país, no puede dejar de constatar que algo profundo ha ocurrido en el paisaje y más aún en la vivienda, en los hábitos alimenticios, en el vestido, en la demografía. La sociedad rural se ha modificado profundamente en estas dos últimas décadas (Martínez 1994) y ahora experimenta las consecuencias negativas del avance de aquellos procesos que incuba el capitalismo y erosiona las sociedades campesinas: pobreza, migración, inviabilidad económica.

Hacia finales del siglo XX, el país no escapa a los efectos de la globalización, pero experimentando la resistencia organizada de aquellos sectores sociales más golpeados por el proceso modernizante, como el indígena. La sociedad rural también es diferente en su conformación social y surge un reacomodo de poderes que todavía no cuaja en una nueva estructura. Nuevas demandas, nuevos actores se enfrentan a desafíos inéditos. El Estado, contra el que se luchaba en los años sesenta y setenta, ya no es más el protagonista económico aunque sí político.

Las condiciones en las que funciona actualmente la economía inducen a replanteamientos en la sociedad rural que atraviesan los códigos y el lenguaje de los expertos del mercado. Se asiste a un reacondi-

cionamiento de las clases sociales y al surgimiento de nuevas formas de organización y de lucha en arenas poco conocidas, lo que crea una imagen aparente de confusión y de angustia. En este ‘nuevo espacio social’ hay tendencias que subyacen, otras que lentamente se transforman para dar paso a una sociedad rural diferente.

Por otro lado, se han creado condiciones potencialmente explosivas desde el punto de vista social como la pobreza y la falta de recursos para más de un tercio de la población rural. Más grave aún, sin políticas, ni públicas ni privadas, que permitan avizorar su solución en el mediano o largo plazo. El cambio ha traído como secuela la inequidad y la creación de condiciones injustas para los pobres rurales. Así pues, las propuestas alternativas deberían considerar estas dimensiones -escandalosas y explosivas al mismo tiempo- para enfrentar con mucho realismo las soluciones más adecuadas en una coyuntura de fines de siglo que Wallerstein la caracteriza como “un tiempo de desórdenes masivos, tanto locales como regionales y mundiales” (Wallerstein 1997).

La tierra y el mercado de tierras

La tierra es el tema más importante y conflictivo del siglo. Las investigaciones y trabajos desarrollados durante la última década, tuvieron su corolario político en la expedición de la Ley de Desarrollo Agropecuario (LDA) en 1994. Ya desde finales de la década del 80, a pesar de no disponer de datos provenientes de un censo agropecuario actualizado, se empezó a comentar sobre los cambios en la estructura de tenencia de la tierra. Así, por ejemplo, Manuel Chiriboga, aprovechando los datos del ex-IERAC, mostró la disminución del número de las grandes explotaciones (mayores de 100 hectáreas) y el crecimiento de las propiedades medianas, tanto en número como en la superficie controlada, mientras los minifundios continuaban su marcha hacia una mayor fragmentación. De esta forma, la estructura bipolar del agro ecuatoriano aparecía matizada por la presencia de un importante sector de propiedades medianas que se formaron por varias vías: subdivisión de la grandes haciendas, consolidación de procesos de colonización, penetración del capital extra-agrario en el campo, entre otras causas. Los cam-

bios más notables se dieron sobre todo en la sierra centro-sur, en la costa centro-norte y en la Amazonia (Chiriboga 1989).

Los cambios en la estructura de la propiedad sobre todo en la sierra central ya habían sido analizados a principios de la década del 90, desde la perspectiva de la disolución de las haciendas tradicionales por la presión de los campesinos en el caso de Chimborazo (Thurner 1990) y el funcionamiento de un dinámico mercado de tierras entre campesinos minifundistas en el caso de Tungurahua (Foster 1990). El estudio de Thurner muestra cómo ya no eran viables las grandes haciendas en áreas de denso poblamiento indígena y cómo finalmente triunfó el 'asedio interno y externo' sobre las reservas hacendales, aunque con resultados diferentes de acuerdo a las estrategias desplegadas, a la ubicación ecológica y al acceso al mercado.

En Chimborazo, a inicios de los años 80, existía un mercado de tierras que no funcionaba de acuerdo a las reglas del mercado, sino como el producto de subdivisiones hacendales y por la 'presión' de los campesinos. En algunos casos, esta presión se ejercía por tierras de buena calidad y con riego, lo que permitió en contados casos consolidar una economía mercantil comunera exitosa (caso de Gatazo Zambrano).

El estudio de Foster, ubicado en Tisaleo, provincia de Tungurahua, en cambio, muestra el funcionamiento de un mercado de tierras más dinámico en el que los campesinos con recursos tienen acceso a la venta parcial o total de propiedades de ausentistas pueblerinos, lo que les permite una importante movilidad hacia arriba. Lo interesante de este mercado es que, analizado a través de varias generaciones, el acceso a nueva tierra no conforma una base para la formación de estratos de 'burguesía rural', aunque se conserva la diferenciación campesina.

No obstante, en ambos casos, solo se logran cristalizar unidades de producción minifundistas, con movilidad social importante, en el caso de Tungurahua, sin ella en el caso de Chimborazo. El minifundio avanzó, entonces, en la sierra central en gran parte, como efecto del funcionamiento del mercado de trabajo todavía encapsulado en las relaciones patrón-cliente en Chimborazo, más cercano a las leyes de la oferta y demanda en Tungurahua. Un dato interesante que permite reflexionar sobre el funcionamiento de mercados de tierras sin mayores cambios en la legislación agraria del país.

Hacia inicios de la década del 90 y frente a la necesidad de implementar las políticas de ajuste en todos los sectores de la economía, se empezó a estudiar el sector rural con una visión más empresarial, esto es, vinculada con las políticas de desregulación. El estudio más polémico, realizado en 1993 es el de Camacho, auspiciado por IDEA (Camacho 1993). Un trabajo tendencioso y con fragilidades metodológicas sorprendentes como aquella de generalizar una tesis a partir de cuatro estudios de caso. La tesis central, que alcanzó notoria publicidad gracias al apoyo de las cámaras de agricultura, es que los comuneros de la sierra tienen mucha tierra de páramo que no la utilizan eficientemente, por lo mismo, ya no necesitan acceso a más recursos sino más bien abrirlos a un mercado de tierras que permita dividirlos en forma individual. Más allá de la validez o no de los resultados alcanzados con esta investigación, lo cierto es que sirvió de base 'científica' para justificar varios de los postulados centrales de la LDA, por ejemplo, la posibilidad de subdivisión de la tierra comunal, la eliminación de la reforma agraria, la apoteosis exagerada del mercado de tierras como el mecanismo más justo para el acceso a la tierra.

Visto desde otro ángulo, se demostró que se necesitan trabajos de investigación que sustenten las políticas agrarias, aunque en este caso, las de corte neoliberal. Sorprendentemente, el análisis sobre la tenencia de la tierra, tema que entre los 'cientistas sociales' y ONG se consideraba ya obsoleto, fue recuperado por el 'lobby' empresarial que buscaba cambiar radicalmente la legislación agraria. Las lecciones del relativo éxito de este trabajo se encuentran en los vínculos entre investigación, difusión y políticas agrarias a través de las esferas de poder existentes en la sociedad. El otro aspecto que llamó la atención es que tampoco hubo una respuesta 'contundente' a esta visión del agro, lo que mostró la debilidad de la investigación sobre este tema tan crucial entre ONG, investigadores, organizaciones indígenas y campesinas.

El tema de los mercados de tierra fue recuperado inicialmente por el FEPP y más tarde por la FAO, a través de sendos estudios sobre la sierra, costa y amazonia (Ibarra y Carrasco 1991; Speiser 1993; Ibarra y Ospina 1994; Rodríguez 1994; Tamariz y Villaverde 1997). Los primeros constituyen interesantes monografías de algunas de las provincias en donde desarrolla actividades esta institución vinculada a la Iglesia Católica y muestran los principales cambios en la conformación

de una nueva estructura agraria, la estructura productiva, los conflictos por la tierra y solo marginalmente la situación de los mercados de tierra.

El estudio más importante es el realizado por Hernán Ibarra y Pablo Ospina sobre la provincia de Cotopaxi, en donde se evidencia claramente las tendencias señaladas anteriormente por Chiriboga: minifundización de estructura agraria provincial, pero acompañada del incremento de las propiedades medias, aumento de la ganadería entre los pequeños y medianos propietarios, agudización de conflictos intra-comunitarios en torno al páramo y una crisis del funcionamiento interno de las comunidades. Los precios de la tierra son más altos en las zonas densamente pobladas y tienden a disminuir en las áreas subtropicales, mientras las tierras del páramo son evaluadas de acuerdo a la calidad de los suelos y a su vocación agrícola o pecuaria.

Los estudios realizados por la FAO muestran también varias tendencias importantes:

- a) En la costa, el mercado de tierras más dinámico se ubica en las áreas de predominio de la agricultura y ganadería comercial: banano, ganado, camarón, maíz duro. En importantes zonas estudiadas de las provincias de El Oro y Los Ríos se estarían generando procesos de concentración de la tierra, acompañados en algunos casos de un incremento del minifundio (maíz duro) y en otros, de la medianización de la propiedad (banano). En las áreas arroceras, en cambio, gracias a la política de apoyo estatal, las unidades productivas en manos de campesinos se conservan y no se ha desarrollado un mercado importante de tierras ni una mayor diferenciación campesina.
- b) En la sierra, se ha generalizado un mercado intra-campesino de transacciones de unidades minifundistas, tanto por la vía legal y especialmente por la informal; un mercado que es denominado como simétrico pero que exige una expulsión permanente de campesinos.
- c) Se evidencia que el mercado formal funciona en áreas de cultivos comerciales y beneficia a los grandes empresarios, mientras que el mercado informal es importante en áreas campesinas más deprimidas. De esta última experiencia se formula la pregunta de si a tra-

vés de este tipo de mercado no se perfila también una estrategia de resistencia campesina a las presiones del mercado.

Posteriores estudios, todavía no publicados, demuestran que el mercado de tierras disponibles para grupos campesinos es muy limitado y de baja calidad, esto es, que únicamente las tierras marginales de escaso valor para hacendados y empresarios estarían disponibles, de esta forma quienes más se benefician son los empresarios que pueden deshacerse de tierras de escaso valor a precios muy altos, dada la presión de los campesinos (FUNDAGRO 1996). De todas formas, continúa la subdivisión y venta de tierras comunales de páramo, al tenor de la aplicación de la LDA. Este nuevo mercado de tierras, también consolida la propiedad minifundista, aunque no siempre en beneficio de los propios comuneros.

Antes de terminar este acápite, es importante reseñar el trabajo de Pablo Ospina, sobre la aparcería en la provincia de Cotopaxi (Ospina 1993). En efecto, la aparcería ha comenzado a ser vista favorablemente como una modalidad para dinamizar los mercados de tierra, sin necesidad de traspaso de la propiedad. En este sentido, cada cierto tiempo las cámaras de agricultura (sobre todo de la sierra) promueven la legalización de esta forma de tenencia, argumentando que con ello crearían empleo en el campo y pondrían en producción toda la tierra actualmente disponible. El trabajo de Ospina, demuestra que la aparcería no solo es una forma de producción sino también de empleo y que se practica principalmente entre pequeños campesinos afectados por la falta de este recurso. La aparcería es un fenómeno vinculado a la escasez de tierra para los campesinos pobres y escasez de mano de obra para aquellos que disponen de más recursos (campesinos medios y empresarios). En la práctica existen varios tipos de aparcería, algunos más parecidos a las formas de reciprocidad andina, otros más cercanos al arrendamiento en especie de corte capitalista, con modalidades intermedias en las cuales intervienen diversos actores sociales, desde el campesino pobre, hasta el capitalista, pasando por intermediarios, prestamistas o 'chulqueros' y transportistas. Es una forma muy compleja que subsiste ya que en el medio rural, sobre todo serrano, los salarios son tan deprimidos que es mejor cualquier trabajo en la ciudad.

La estructura agraria

Este tema, uno de los ejes del pensamiento agrarista hasta fines de los años 80, no ha sido retomado sino en muy pocos estudios. Uno de ellos, es el de Charles Surenaim (1994), realizado en la zona de plantaciones empresariales de Sto. Domingo de los Colorados. El estudio muestra la heterogeneidad de empresas agrícolas y las diversas estrategias utilizadas por los empresarios con respecto a la mano de obra: desde empresas modernas y con avanzada tecnología que utilizan mano de obra temporal, hasta empresas más atrasadas que inclusive han formado en su interior 'reservorios de mano de obra' como una forma de abastecerse de trabajadores. Como telón de fondo se dibuja el permanente temor de los empresarios hacia los trabajadores siempre dispuestos a las invasiones. De allí que en la mayoría de las empresas se contrata trabajadores temporales a través de intermediarios 'contratistas' convertidos en personajes centrales de la relación entre capital y trabajo. En algunos casos, cuando las empresas se encuentran cerca de los pueblos (verdaderos bolsones de mano de obra barata), el temor a las invasiones incluso ha llevado a la utilización de guardias de seguridad y a aumentar la supervisión del trabajo de los temporales.

Los procesos de colonización han sido objeto de muy pocos estudios, a diferencia de lo que sucedió en la década del 70. Surenaim (1994) estudia la zona de vieja colonización de Santo Domingo de los Colorados. Desde una perspectiva etnográfica analiza la continuidad y discontinuidad en las cooperativas agrícolas surgidas de la primera ola colonizadora de esta región. El estudio de caso de una cooperativa en la parroquia de Alluriquín, muestra la articulación de grupos de parentesco sobre formas novedosas de gestión de los recursos, en especial la tierra. Según este autor, se habrían recreado algunas de las formas de reciprocidad andina que a su vez, han incubado procesos nuevos, tanto en la identidad de sus miembros como en el manejo de recursos. Así, por ejemplo, los colonos ya no hablaban quichua, pero mantenían un sistema de cargos de corte serrano aunque con adaptaciones a la zona. Igualmente, se ha modificado el patrón de herencia 'multilateral' por uno diferente, en el cual conserva la propiedad el hijo que decide quedarse en la zona y casarse con una persona de la cooperativa, de esta manera logran mantener un tamaño similar al original.

En definitiva, se ha ‘reinventado’ una nueva comunidad bajo la denominación formal de ‘cooperativa’, como una forma de frenar los conflictos latentes al interior de los grupos parentales y evitar así las situaciones de pobreza y desintegración social, causa originaria de su migración hacia las tierras bajas.

El empleo rural

Sin duda, la modificación en el perfil de la ocupación y en general de la estructura del empleo es uno de los cambios más espectaculares registrados en el medio rural ecuatoriano. Hasta hace unos pocos años, era normal considerar a la población rural como ocupada únicamente en la actividad agropecuaria. Con este criterio se diseñaban las políticas hacia el sector y con mayor razón las políticas de desarrollo rural para los campesinos.

A raíz de la elaboración de la Encuesta de Hogares Rurales, realizada por el INEM en 1990, se dispuso, por primera vez, de datos consistentes relativos al empleo en los hogares y no solo en la UPA como se había utilizado hasta ese momento. De esta forma, se pudo analizar datos sobre las estrategias ocupacionales de los miembros de las familias rurales, de las diversas fuentes de ingreso y de la estacionalidad del empleo. El estudio pionero de Martínez sobre el *Empleo rural en el Ecuador* (1992), descubre que cerca del 40% de la población rural del país, está dedicada a actividades no-agropecuarias, donde sobresalen la artesanía, comercio y servicios.

Las diferencias regionales también son importantes: en la costa predomina el trabajo agrícola en manos de los hombres, mientras en la sierra la agricultura prácticamente se ha feminizado. Las categorías ocupacionales más importantes son las de cuenta propia y trabajador familiar, mientras el trabajo asalariado temporal solo es mayoritario en la agricultura. En el contexto del predominio de la economía campesina, toma un rol de primera magnitud el trabajo femenino, mucho más importante y diversificado en la sierra, con menor peso e importancia en la costa. Otro rasgo importante es la segmentación regional del mercado de trabajo rural, lo que obedece a fuertes cambios poblacionales y al desarrollo de las ciudades intermedias sobre todo en el ca-

so de la costa. El estudio advierte que la economía campesina es la que genera más empleo pero en la medida en que un 30% de la PEA rural trabaja como 'familiar no remunerado' encubre el subempleo, situación que no puede mantenerse a largo plazo antes que la sociedad rural experimente graves problemas sociales. Este trabajo cuestiona la visión agrarista tradicional de los productores rurales e induce a plantear nuevas perspectivas de análisis, considerando que los campesinos ya no son tan campesinos (si es que alguna vez lo fueron) y que es necesario considerar la situación de heterogeneidad social rural y la multocupación.

En otro estudio, Martínez (1993) profundiza el estudio de los trabajadores asalariados temporales para demostrar que en realidad se trata de un grupo 'estable' en su categoría ocupacional aunque muy inestable en sus relaciones de trabajo. Mayoritariamente este grupo no se vincula con empresas de tipo capitalista, sino sobre todo con unidades campesinas muy heterogéneas. Llama la atención el mercado de trabajo existente en unidades campesinas con recursos, sobre todo las formas de contratación de mano de obra y el variado sistema de intermediarios según las regiones. Se trata, en definitiva, de un mercado de 'segunda categoría', en donde participan los trabajadores menos calificados, con remuneraciones bajas y con una oferta casi siempre precaria. Todo esto es posible dada la situación generalizada de pobreza rural que permite la proletarización 'informalizada' de una fuerza de trabajo que se refugia en la economía campesina.

Este mismo autor incursiona en el análisis del empleo femenino en el área rural (Martínez 1992), poniendo en evidencia las importantes diferencias regionales: las mujeres de la sierra están más integradas en el proceso productivo que las mujeres de la costa. Existe una marcada diversificación ocupacional, y las mujeres conforman una mano de obra de 'segunda categoría'. En efecto, las mujeres casi siempre son 'trabajadores familiares no remunerados', es decir que participan activa y en algunos casos mayoritariamente en el trabajo de la familia, pero no reciben remuneración. Muestra también que en algunas ramas de actividad como la artesanía, servicios y comercio, las mujeres dentro de la categoría ocupacional 'cuenta propia' tienen porcentajes importantes, situación que no ocurre con la agricultura. El 'empoderamiento', entonces, se realiza en actividades más diversificadas y no

tanto en la agricultura, a pesar de que al menos en la sierra, el porcentaje de mujeres al frente de la finca es importante en áreas de población indígena migrante. Por último, la educación de las mujeres permite una inserción más productiva en el mercado de trabajo, en especial en el caso de las jóvenes.

La relación campo-ciudad

Debido a las transformaciones ocurridas en la actual sociedad rural este tema debería concentrar los esfuerzos y recursos disponibles de la investigación, pero la realidad es que se dispone de escasos trabajos.

Un primer acercamiento a esta problemática se puede encontrar en la tesis no publicada de Carlos Larrea, en donde se elabora una interesante tipología de ciudades del Ecuador (Larrea 1992). Dentro de su clasificación, se encuentran por lo menos 4 tipos de ciudades que tienen estrecha relación con el medio rural: los centros manufactureros y artesanales, los centros informales, las ciudades agrícolas, las ciudades agrícolas-mercado. A pesar de que en todas ellas predomina la PEA en el sector servicios, sin embargo, tienen un importante porcentaje de población ocupada en la agricultura. El hecho de que durante el 'boom' petrolero, no se haya producido una concentración poblacional en las dos principales ciudades del país se debe a incentivos a la descentralización, pero también al importante crecimiento de la manufactura en pequeña escala y de pequeñas empresas del sector terciario en los centros urbanos intermedios e incluso pequeños.

Un acercamiento más detenido de la relación campo-ciudad se ha hecho a través del estudio de la 'dinámica mercantil' y su difusión en el medio rural, sobre todo entre los pueblos ubicados cerca de ciudades-mercado. El estudio de Martínez muestra la estrecha relación existente entre el desarrollo de las actividades artesanales en los pueblos rurales que rodean a la ciudad de Ambato y el capital mercantil ubicado en esta última (Martínez 1994). Factores tales como la presencia de una estructura agraria minifundista y la muy débil presencia del sistema de hacienda, el desarrollo de buenas vías de comunicación, la presencia de una red de ferias urbano-rural, permitieron el temprano desarrollo de estrategias artesanales en el medio rural y la

posibilidad de convertir a los minifundios en económicamente viables. Todo ello no habría sido posible si no se toma en cuenta la acción de los comerciantes y del capital mercantil sobre el 'hinterland' rural, aprovechando la abundante mano de obra barata, los conocimientos de los artesanos y el dinámico mercado urbano. El papel de los comerciantes, que pueden ser al mismo tiempo productores, en este caso no es tan desestructurador como en las actividades agrarias y gracias a su dinámica, los productos artesanales fluyen en el mercado interno y hasta externo.

El mismo fenómeno se observa en la provincia del Azuay, con focos artesanales importantes como Gualaceo, Paute, Chordeleg y varias parroquias cercanas a la ciudad de Cuenca. En esta provincia, más que en ninguna otra, el campesinado busca alternativas como la minería y la artesanía o desarrolla también iniciativas en la comercialización de productos agrícolas, que han sido estudiadas como 'casos de reorientación campesina en la crisis' (Einzmenn, 1991; Vázquez et alii, 1991). Actualmente, hay toda una dinámica artesanal relacionada con el trabajo organizado y no organizado de las mujeres (bordadoras, tejedoras, etc.) que surge como respuesta de los campesinos a las limitaciones de sus recursos y al trabajo tradicional agrícola (OFIS y Sendas 1993).

El flujo de divisas proveniente de los migrantes campesinos a Estados Unidos ha transformado el medio rural de varias zonas en Cañar y Azuay. Una inyección de divisas provenientes de fuera ha generado una nueva dinámica económica, no siempre orientada a la esfera productiva, pero sí a la suntuaria de la construcción. No se puede negar que un importante porcentaje de los activos financieros de la ciudad de Cuenca proviene de estas remesas originadas por el trabajo de los campesinos migrantes al exterior⁵. Este fenómeno también ha sido visto como resultado de una intensa vinculación de la economía campesina con el capital internacional, una de cuyas manifestaciones más interesantes es justamente la migración al exterior, el trabajo artesanal y las actividades extractivas (Vásquez 1991).

5 Según una estimación realizada recientemente, unos 50.000 azuayos residen en Nueva York y los migrantes envían a la provincia un monto anual de 200 millones de dólares. Cf. Mariana Moor, 1996.

En varias ciudades ‘intermedias’ del país se pueden constatar iguales fenómenos, que gracias al desarrollo de importantes actividades económicas han empezado a transformarse. Este es el caso, por ejemplo de Cayambe, en Pichincha, que se ha convertido en un importante centro de transacciones financieras y económicas con el consecuente florecimiento de actividades turísticas, restaurantes, etc., gracias al impacto de las empresas lecheras y más recientemente de las plantaciones de flores. Se constata, así, una importante línea de investigación hacia el futuro, sobre todo si se tiene en cuenta los probables cambios políticos (como la descentralización) que podrían beneficiar la consolidación de procesos parecidos. El espacio urbano, sobre todo de las pequeñas y medianas ciudades se ha modificado radicalmente en los últimos veinte años y es necesaria una nueva lectura tanto desde el punto de vista económico, como desde el político, cultural y hasta étnico (de la Torre 1996).

Campesinado y comunidades indígenas

En la década del 80, el campesinado de la sierra fue uno de los sectores sociales privilegiados para el análisis. La variedad de estudios de caso realizados principalmente en la provincia de Chimborazo (la de mayor densidad indígena del país) y en menor medida en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Azuay, confirman este hecho. Sin duda, la influencia de los estudios de Chayanov, Sahlins y Wolf se pueden detectar en los enfoques socio-demográficos y antropológicos que predominan en estos trabajos. A pesar de que ya se disponían de los trabajos de E. Feder, de Carmen Diana Deere y de Alain de Janvry, escaseaban los enfoques desde el punto de vista económico (a excepción de los trabajos realizados sobre el Azuay). A principios de la década del 90, estos estudios disminuyeron en número y se empezó a privilegiar los referentes a las comunidades indígenas, vistas no tanto desde el análisis económico sino preferentemente desde el antropológico-etnicista⁶.

6 Esta dimensión de los estudios sobre comunidades indígenas es analizada en otro volumen de esta misma colección, coordinado por Andrés Guerrero.

Sin embargo, sobre el campesinado considerado como una categoría social más amplia, esto es, que incluye a los productores sin considerar el corte étnico, se dispone de algunos trabajos novedosos.

Un trabajo interesante sobre los nuevos desafíos del campesinado serrano frente a los desafíos de la globalización fue desarrollado por Roberto Santana (1993). Frente al aperturismo y la entrada del país en la OMC, hay el riesgo de que grandes sectores del campesinado serrano se queden fuera de las posibilidades de competir en el mercado, precisamente por su calidad de 'minifundistas'. Santana advierte sobre la necesidad de cambiar el paradigma del análisis del campesinado y las comunidades indígenas por sobre la visión del desarrollo rural y las estrategias 'étnico-campesinas' privilegiadas tanto por ONG como por las mismas organizaciones indígenas como la CONAIE.

El asunto es cómo enfrentar al mercado, para lo cual se necesita pensar más allá del proceso de la comercialización y por lo mismo se requiere un cambio de actitud entre los productores, sean indígenas o no, para ver todo el proceso desde el 'qué produzco al cómo y a quién vendo'. Esto pasa por un cambio de 'mentalidades' en los niveles organizativos de las comunas, las OSG en donde se debería privilegiar la dimensión de 'gestión empresarial'. En este sentido existiría más bien una debilidad en las organizaciones campesinas e indígenas antes que una fortaleza, lo que demanda la formación de cuadros que privilegien las estrategias empresariales en las comunidades. Una propuesta interesante, a pesar que no analiza los límites impuestos por el grado de monopolización del mercado, la lucha social en la arena del mercado y las restricciones impuestas por la etnicidad.

Otro estudio más reciente es el realizado por Martínez sobre las comunidades indígenas de la zona de Cotacachi (1996). En este caso se trata de un estudio comparativo temporal de dos comunidades para mirar sus cambios en el ámbito socioeconómico y también demográfico. El autor comprueba que estas comunidades continúan su proceso de minifundización, se han acentuado las tendencias migratorias y han desaparecido las escasas posibilidades internas de generación de empleo a través de la artesanía. En estas condiciones, no hay mucha base para la vigencia de las relaciones de reciprocidad y solidaridad andinas, es decir que el capital social es muy débil, salvo la vigencia de la minga comunitaria para obras de beneficio social. Lo interesante es

que se evidencian importantes modificaciones en el patrón reproductivo comunal: predominio de familias con pocos hijos, tendencia a la baja de la tasa de fertilidad, nueva valoración de los hijos y surgimiento de la preocupación entre las mujeres con respecto a los temas reproductivos.

La preocupación por el tema demográfico también está presente en otro trabajo del mismo autor, publicado en 1995, sobre la base de una investigación realizada en 1986-87 (Martínez 1995). Se trata de un análisis de las ex-cooperativas de la zona de Cayambe, en donde se analiza el proceso interesante de bloqueo del acceso a la tierra para las nuevas generaciones de arrimados, lo que generó el surgimiento de conflictos sociales y de un nuevo patrón de comportamiento demográfico: reducción del tamaño de la familia, valoración de la educación como dote para los hijos, disminución de la fecundidad. En ambos estudios el autor acentúa el hecho de que la vinculación mercantil de estas comunidades produce importantes cambios en la demografía indígena.

Sobre el campesinado indígena de la zona de Otavalo, Tanya Korovkin estudió el significado de la producción diversificada de las comunidades en el contexto del mercado capitalista (Korovkin 1997). Si bien el avance del capitalismo genera transformaciones importantes en las comunidades (que se evidencian en la migración, el trabajo asalariado en las empresas de flores y el desarrollo mercantil de las manufacturas), la presencia de sólidas redes familiares en las comunidades, permite un mínimo de seguridad e identidad cultural para enfrentar al capitalismo. La autora se pregunta si a través de esta última estrategia, los campesinos no implementan una 'resistencia' a la transformación capitalista total. Un razonamiento similar desarrolla esta autora al analizar el trabajo de los indígenas en las pequeñas empresas de otavaleños, pues allí a pesar de recibir salarios bajos y trabajar largas jornadas, por lo menos tienen un mínimo de seguridad económica y de identidad cultural (op.cit. 1998). Sin embargo, la desaparición progresiva de ciertos rasgos comunales como el trabajo recíproco y los gastos ceremoniales permitió el ascenso de 'nuevas élites económicas'.

La presencia de sectas protestantes entre las comunidades de artesanos en el área de Otavalo, ha colaborado con el crecimiento de estas actividades económicas y la pérdida de importancia de las fiestas ceremoniales. Se asiste entonces a importantes cambios dentro de un

aparentemente inmóvil caparazón comunal: en la división del trabajo, en la orientación mercantil y hasta en las motivaciones religiosas. La etnicidad no es un obstáculo para la introducción de prácticas más relacionadas con la lógica del capital que con las prácticas pre-capitalistas que erróneamente se piensa están ancladas en las comunidades.

Rafael Guerrero estudia al campesinado costeño (Guerrero 1992). El análisis se centra en las posibilidades que tienen los arroceros de competir en el mercado andino utilizando datos de la década del ochenta. Este ensayo muestra la diferenciación social y productiva existente entre los campesinos de dos zonas productoras de la gramínea (Daule y Vinces) y las pocas posibilidades que tendrían para integrarse en un proceso competitivo (en especial el caso de Vinces) donde es central demostrar eficiencia y altos niveles de productividad. Esto depende del grado o nivel de incorporación de tecnología moderna, de la que carecen precisamente los arroceros de la zona de Vinces en la provincia de Los Ríos. El autor demuestra que las políticas proteccionistas del Estado no generaron aumentos de productividad sino inefficiencia, sobre todo entre los medianos y grandes productores quienes habrían sido los principales beneficiarios de los subsidios estatales (a través del crédito del BNF) desde mediados de la década del setenta hasta 1984. Muchas de las políticas supuestamente dirigidas hacia el pequeño campesino, en realidad terminaban beneficiando a medianos y grandes productores inefficientes lo que constituye 'una carga para la sociedad'.

Pobreza Rural

El tema de la pobreza rural, como una de las principales manifestaciones de la poca capacidad de las políticas de ajuste para resolver los principales problemas del sector rural, fue analizado recientemente gracias a la disponibilidad de nueva información estadística. Por un lado, la realización de la Encuesta de Hogares Rurales en 1990 por el INEM, permitió un primer acercamiento real a la situación de las familias campesinas y incluso sobre esta base se logró elaborar una 'tipología de productores' que facilitó ubicar a la población pobre rural (Martínez 1985); por otro, la realización de la Encuesta de Condiciones

de Vida (ECV) por el SECAP (1994) y el INEC (1995), con el apoyo del Banco Mundial, permitió la elaboración del informe de la pobreza sobre datos empíricos a nivel nacional (The World Bank 1996). Por primera vez, entonces, la pobreza rural apareció cuantificada e incluso graficada (Larrea, et alii. 1996). Al mismo tiempo se la analizó en el contexto de los principales factores relacionados con este problema y sobre todo de las políticas de focalización a implementarse para reducir su impacto.

El informe del Banco Mundial y posteriormente el estudio de Lanjouw (1996) tienen el mérito de recuperar la discusión sobre la concentración de la tierra, como uno de los elementos estrechamente ligados a la situación de la pobreza en el medio rural. En efecto, con datos a la mano, muestran que en el país, el grado de concentración de tierra (coeficiente Gini), no se ha modificado mucho desde 1954 y las reformas agrarias no han incidido en la distribución desigual de la tierra. Lanjouw constata que la mayoría de pequeños campesinos son pobres pero, al mismo tiempo, son más eficientes que los grandes propietarios en los rendimientos por unidad de superficie. Así, la solución para la pobreza consistiría en dotar de tierra a los pequeños campesinos, a través del mercado de tierras. Para ello se requiere formalizar este mercado, implementar la titulación, registro y delimitación de la propiedad basándose en la Ley de Desarrollo Agrícola. Nuevamente aquí se encuentra una visión muy esquemática del mercado de tierras que no considera las dimensiones sociales y políticas que existen con relación a la propiedad fundiaria. En efecto, es poco probable que las tierras excedentarias de los empresarios pasen a poder de los campesinos pobres y se inicie una desconcentración de este recurso. La estructura de poder a escala rural, así como el poco peso político del campesinado y de los pobres rurales, no lo permite.

La pobreza rural también fue examinada en otro documento elaborado por Luciano Martínez en el que se identifican a los pobres rurales en situación más precaria: "los indígenas, las mujeres cabezas de familia, los campesinos minifundistas, y los asalariados temporales" (Martínez 1995). Fuera de los campesinos pobres y los indígenas, el autor destaca el surgimiento de dos nuevos actores de la pobreza: las mujeres jefas de hogar y los trabajadores sin tierra y asalariados temporales, poco estudiados en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Las características de la pobreza, en el caso de las mujeres, están acompañadas por situaciones extremas de precariedad social (mujeres de avanzada edad, viudas y sin educación) que frecuentemente se encuentran en el medio rural serrano y costeño. En el caso de los trabajadores sin tierra y asalariados temporales, además de conformar una cohorte de población joven, se trata de un proletariado que sufre las peores consecuencias de la 'desregulación' del mercado de trabajo. En este documento, además de plantear los problemas centrales de este grupo, se delinean algunas acciones a desarrollarse, entre las que destacan: la ampliación de recursos en tierra, creación del empleo en actividades no agrícolas en el medio rural, el apoyo a las iniciativas de los pobres rurales, la ampliación de la educación a las mujeres rurales, la adopción de nuevas tecnologías y un conocimiento más preciso de las posibilidades del mercado, la capacitación en pequeñas actividades empresariales-gerenciales y el apoyo a formas de organización democrática (comunas) en el medio rural con un rol económico más activo.

Dentro del esfuerzo por redefinir el mismo concepto de pobreza entre los grupos pobres hay que mencionar el trabajo de Galo Ramón sobre la *Pobreza Indígena* (1995) y el de IICA-CEPLAES sobre *Políticas para combatir la pobreza* (1995). Ambos estudios muestran que los conceptos de pobreza pueden variar mucho si se consideran otras variables y la percepción de la misma población, 'a priori' denominada como pobre. De hecho, para el caso del mundo rural la selección de variables homogéneas para todo el país, tal como lo ha hecho el Banco Mundial en sus encuestas de condiciones de vida, podría significar cierto sobredimensionamiento de la pobreza en áreas como las del oriente.

El trabajo de Sánchez Parga sobre la pobreza indígena, es un intento por acercarse a este tema a través del manejo de los datos censales y los criterios de etnicidad basándose en la lengua o idioma hablado (Sánchez Parga 1996). De este modo, llega a cuantificar a la población indígena en cerca del 10% de la población nacional y aunque este dato ha suscitado resquemores entre la dirigencia indígena, tiene el mérito de redimensionar en cifras el problema indígena en un país donde la misma población rural ha empezado a declinar substancialmente. Los indicadores utilizados en este estudio son los tradicionales como salud,

educación, vivienda y servicios básicos y en este sentido, las soluciones también están limitadas a esos aspectos básicos pero son insuficientes para la compresión de la pobreza rural. Como lo señala este autor, la pobreza no puede reducirse a una construcción teórica de cifras e indicadores sino que tiene otras dimensiones sociales y sobre todo políticas que tienden a ocultarse y a mostrar solo el lado 'indio' de aquella, olvidando que se trata de un producto de la misma sociedad.

Las políticas agrícolas

En el período de análisis no existen muchos estudios sobre las políticas orientadas hacia el sector rural. La implantación de un modelo económico neoliberal, sustentado en el peso de las políticas macro-económicas de ajuste, al parecer bastaba para la transformación y adecuación de todos los sectores de la economía. De esta forma, no se habría necesitado políticas específicas para el sector agropecuario. La única excepción es el análisis del equipo comandado por M. Whitaker que realiza, en primer lugar, un diagnóstico de la agricultura ecuatoriana a principios de los noventa y, posteriormente, evalúa las reformas a las políticas agrícolas, en especial las tendencias derivadas de la aplicación de la LDA (Whitaker 1996).

En el primer trabajo, centrado en la evolución de la agricultura en las dos últimas décadas, realiza una crítica del modelo sectorial en la agricultura, que habría conducido a un deterioro y mal manejo de los recursos naturales (tierra y agua), escaso desarrollo tecnológico, el fracaso de las políticas de subsidios y fijación de precios y la poca capacidad de almacenamiento disponible. La propuesta central dentro de la concepción neoliberal es la apuesta total al mercado, la disminución del rol del Estado y la orientación del sector hacia el exterior.

En el segundo estudio, se plantea que, en general, las reformas políticas han sido exitosas, en especial en la implantación de un sistema de investigación, educación y extensión para la agricultura, en la desregulación de precios a partir de 1994 y en la privatización de empresas públicas. No obstante, desde su perspectiva ortodoxa, recomienda profundizar y completar aún más estas reformas, en los ámbitos del mercado de tierras (en especial en las comunidades indígenas), la

transferencia de los sistemas públicos de riego hacia asociaciones privadas de aguas (AUAS) y el mejoramiento del sistema de información censal.

Las cifras que presenta Whitaker para demostrar el impacto positivo de las políticas de ajuste para 1988-95 y que llega al 2.9% de crecimiento del PIB agrícola son bastante rezagadas con respecto a aquella que experimentó el país durante la década del 80 y que llegó al 4.1%. Una cosa es clara: la implantación de las políticas de ajuste no ha significado un crecimiento importante del sector, pero sí transformaciones en su estructura y orientación productiva (disminución de la injerencia del sector público, crecimiento de las exportaciones, orientación de la producción hacia afuera, etc.). En ese trabajo no se aborda la agudización de la pobreza y su concentración en el medio rural, tema que indudablemente se refiere a los costos sociales del ajuste, sobre el que hay un profundo silencio en los análisis de este tipo.

Frente a esta visión de las políticas agrícolas derivadas de las políticas macro-económicas de ajuste, actualmente se dispone de una excelente crítica realizada desde el punto de vista económico por Louis Lefeber (1998). Para empezar, este autor menciona con claridad que el trabajo de Whitaker es 'ideológico' y parte de un principio maniqueista, pues las políticas para apoyar el mercado hacia afuera son intrínsecamente buenas, mientras las políticas para promocionar el mercado interno, son malas. Al comparar con los casos asiáticos, encuentra que por ejemplo, Corea y Taiwan produjeron una importante redistribución del ingreso a través de políticas de gobierno como fue la realización de una profunda e igualitaria reforma agraria⁷. Eso no ocurrió en Tailandia y Filipinas, dos de los países con serios problemas financieros actuales. Lefeber llama la atención sobre la actual distribución inequitativa de la tierra y las pocas posibilidades de un desarrollo equilibrado si no se realiza una reforma agraria que permita crear empleo y una mejor distribución del ingreso que incremente el poder de compra de los pobres rurales.

7 Para un análisis más detenido de estas reformas, ver el excelente artículo de Lisa North, "¿Qué pasó en Taiwan?, Un relato de la Reforma Agraria y de la Industrialización Rural", en, Luciano Martínez (ed), *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, N° 2, Quito, 1997.

Si, por el contrario, se deja al mercado que imponga sus reglas de juego, se producirá la destrucción de las formas tradicionales de producción rural y artesanal, incrementando todavía más el desempleo y subempleo con costos sociales verdaderamente explosivos. La agricultura es importante en el Ecuador, pero para su reactivación, se requiere de políticas tanto para la agricultura comercial como para aquella ‘marginal’. Aquí el autor realiza una importante reflexión, pues la reactivación de la agricultura comercial de productos de primera necesidad, no depende tanto de los precios políticos y de las interferencias estatales, sino ante todo del poder de compra de los consumidores. La distribución del ingreso se convierte en el punto nodal para explicar el éxito del desarrollo de la agricultura.

Las políticas desde el Estado, por lo mismo, son importantes para el apoyo tecnológico y crediticio de estos productores. Mucho más significativo es el papel de las políticas de Estado para el ‘sector marginal’. Aquí, el autor reivindica la necesidad de impulsar la reforma agraria y las formas organizacionales cooperativas asociativas tan injustamente vilipendiadas en el informe Whitaker. El Estado debería apoyar la creación de empleo a través del impulso a los trabajos públicos (irrigación, drenaje, infraestructura) y el uso de tecnologías intensivas en mano de obra. En un país como el Ecuador, con potenciales recursos y una abundante mano de obra, el rol del Estado es central para no permitir que los intereses de los grupos de poder se impongan a través del uso ideológico del mercado.

De otra parte, existen muy pocos trabajos sobre los costos sociales del modelo neoliberal. Tal vez la excepción es el trabajo de Martínez y Urriola (1994) quienes plantean que en el caso ecuatoriano se estarían consolidando las siguientes tendencias: una disminución tanto en volumen como en rendimientos de los productos para el mercado interno, un proceso sostenido de ‘expulsión’ de los productores campesinos fuera del ámbito rural y el incremento de las actividades no-agrícolas, la consolidación de una fracción pequeña de empresarios orientados a la exportación de nuevos productos. Se destaca también en este trabajo que dentro del contexto de la subregión andina, el proceso de implantación de las medidas de ajuste ha debido enfrentar al descontento de la sociedad civil, en especial el de la población indígena mayoritariamente ubicada en el medio rural.

Desarrollo Rural

El tema del desarrollo rural adoptó un nuevo giro durante la última década acorde con los nuevos lineamientos de la política aperturista del sector. En efecto, las críticas que se venían realizando desde finales de la década anterior, sobre todo frente al 'modelo institucional' adoptado en el país y a la orientación agrarista y proyectista del desarrollo rural, tuvieron eco en la realización de dos tipos de estudios, los primeros orientados a delinejar nuevas propuestas institucionales (Jordán y Echenique 1994) y los segundos, fundamentados en los 'estudios de base', sentar las premisas para la realización de evaluaciones sistemáticas (Martínez y Barril 1995 y DHV, 1995).

Dentro del primer estudio, se encuentran elementos importantes de lo que constituiría la nueva estrategia de desarrollo rural: focalización en los campesinos 'con potencial productivo agropecuario', descentralización del sistema, implantación de proyectos de largo plazo. En cuanto a los componentes prioritarios, no se plantea nada nuevo: generación y transferencia de tecnología, crédito, comercialización, inversiones prediales y capacitación. El aporte más interesante es la reflexión sobre la necesidad de una nueva institucionalidad, con una dirección centralizada normativa y una ejecución descentralizada y muy flexible. La concertación entre los diversos actores sociales del campo solo actúa en la fase de elaboración de propuestas y no en la de ejecución. Este tipo de propuestas no incorpora, como parte del desarrollo rural, a la pobreza y en general elude el agudo problema de la heterogeneidad productiva y social de los productores rurales, amén que se parte, otra vez, de una propuesta excesivamente agrarista.

Los estudios de base son el resultado de investigaciones (con aplicación de encuestas) sobre los componentes prioritarios de los proyectos PRONADER, actualmente en curso. Se trata de investigaciones que abarcan desde variables sociodemográficas hasta variables productivas y socio-organizativas y apuntan a disponer de una base de datos que permita realizar evaluaciones periódicas y a reflexionar sobre las tendencias que se desarrollan en los actuales proyectos para realizar ajustes o reflexiones renovadoras desde el punto de vista conceptual y práctico. El estudio realizado por Luciano Martínez y Alex Barril sobre las doce áreas DRI, con el apoyo del IICA, muestra la alta he-

terogeneidad del campesinado ‘beneficiario’ de los proyectos; la falta de adecuación entre los componentes implementados de acuerdo a un patrón general y la especificidad de los aspectos productivos, sociales y organizativos a nivel regional y local (Martínez y Barril 1995).

Los autores logran detectar altas potencialidades productivas en los proyectos ubicados en la costa húmeda (Daule, Tres Postes y Playas de Higuerón), medianas posibilidades en los proyectos de estribaciones (Pangua, Facundo Vela y Sta. Isabel) y bajas posibilidades en los proyectos que corresponden a áreas serranas mayoritariamente indígenas (Norte de Pichincha, TTP y Guano); en la sierra solo escapa a esta tendencia el proyecto Espejo-Mira con mejores posibilidades de tipo económico.

La tipología desarrollada al final del estudio presenta una propuesta diferenciada de componentes a implementarse de acuerdo a las características productivas y socioeconómicas predominantes en cada una de las áreas. El desarrollo rural debería conservar un compromiso moral con los pobres y no excluirlos de las propuestas productivas, es decir no ampliar aún más la actual diferenciación social existente en el medio rural. Pero, para ser una propuesta sostenible es importante que los beneficiarios sean algo más que espectadores y puedan ser capaces de ‘apropiarse’ de los proyectos, lo que va a depender mucho de su actual nivel de organización y capacitación para cumplir nuevas funciones vinculadas con el mercado y con las novedosas demandas de las mismas bases campesinas.

Más recientemente, se ha empezado a sistematizar las experiencias de desarrollo rural impulsadas por ONG que buscan recuperar los éxitos o fracasos de su ya largo trabajo entre los campesinos sobre todo de la sierra. Un importante estudio en esta línea es el de Liisa North (1999) sobre el ya conocido caso de Salinas en la provincia de Bolívar. Esta investigadora analiza los impactos sociales de esta experiencia. Encuentra que los beneficios más importantes radican en la creación de empleo, la disminución de la migración, la diversificación económica y la redistribución de recursos (tierra). Sin embargo, el impacto parece estar concentrado en la cabecera parroquial y en cierto grupo de beneficiarios. ¿Se repetiría también aquí, aunque en una micro-escala, el modelo centro-periferia característico del subdesarrollo andino? La hipótesis que finalmente defiende North es que se trata de

procesos que requieren un largo tiempo de maduración para que puedan caminar por sí solos, pero que gracias a los esfuerzos del FEPP se están creando las bases para ello.

La sostenibilidad, tecnología y sistemas productivos en el medio rural

La investigación sobre el tema del desarrollo sostenible en el medio rural es todavía incipiente en el país. Es probable que se esté investigando el tema de la sostenibilidad con relación al manejo de recursos naturales, pero en ningún caso desde una perspectiva más integral, esto es, que abarque las dimensiones económicas, ecológicas y sociales⁸. No quiere decir que el tema carezca de importancia tanto en el ámbito público como en el privado, sino que se lo aborda únicamente desde la perspectiva ambiental, para desembocar en lineamientos de política que apenas alcanzan a ser declaraciones de buenas intenciones con pocas posibilidades de implementarse en la práctica (CAAM 1995).

Una excepción es el interesante trabajo de Bebbington sobre Chimborazo, donde se estudia la dinámica de las comunidades pobres y de las federaciones indígenas desde la perspectiva sustentable, señalando los límites y posibilidades reales de desarrollo regional (Bebbington 1993). El autor desarrolla la idea de que lo tecnológico no es siempre la panacea para las comunidades indígenas pobres, si además no se consideran otras variables, entre las cuales sobresale la 'organizativa'. Además plantea interesantes hipótesis, tanto sobre los límites de la 'agroecología' como sobre las respuestas de la organización campesina. En esta última perspectiva son interesantes sus anotaciones sobre la falta de respuesta tecnológica frente al paquete de la revolución verde, así como la incapacidad de intervenir en la economía regional.

El seminario sobre *Desarrollo sostenible en el medio rural*, realizado en la FLACSO en noviembre de 1997, muestra algunos estudios

⁸ En muchas instituciones como la FLACSO, Fundación Natura, Acción Ecológica, Ecoscience, por solo señalar algunas, existen varios proyectos de investigación, lamentablemente muy pocos se han publicado.

donde se aborda el tema desde varias perspectivas. Luciano Martínez, propone la necesidad de un enfoque integrado (económico, ecológico y social) para el estudio de la sostenibilidad en el medio rural, de esta manera se podría avanzar desde la perspectiva micro hasta una dimensión regional que explique las imbricadas conexiones de lo rural con lo urbano (Martínez 1997). Analiza el caso de las comunidades de la cordillera occidental de Tungurahua, donde la conservación del páramo ha dependido en gran medida de la presencia de otras alternativas productivas diferentes de la agricultura, por lo cual la presión interna de las comunidades no se orientó en dirección hacia ese frágil recurso ecológico.

Guadalupe Tobar (1997) reflexiona sobre la práctica institucional de CESA, para mostrar la importancia de abordar el tema de la sostenibilidad a través del trabajo con los campesinos y comunidades, enfrentados a resolver bajo métodos participativos sus principales problemas. Amparo Eguiguren (1997), a partir de un estudio sobre la zona de Nanegal (noroccidente de Pichincha), analiza la poca viabilidad de la extracción maderera tal como se la practica actualmente, y la necesidad de modificar las ‘representaciones’ de los colonos en el sentido de internalizar la dimensión ‘sostenible’ en el manejo de los recursos, lo que incluye aspectos que van desde la participación de la comunidad hasta la toma de conciencia de un problema que no se agota en el ámbito local.

Leonard Field estudia el impacto del manejo inadecuado de los recursos naturales en las áreas de páramo de la cordillera occidental en Cotopaxi y Tungurahua: expansión de la frontera agrícola, deforestación, erosión y contaminación de aguas (Field 1996). Los factores que determinan los impactos (expansión de los mercados, inversión en carreteras, acumulaciones primarias de capital, crecimiento demográfico) actúan en una forma combinada y dependen mucho de los sistemas de producción y de las especificidades locales. En la actual conceptualización sobre la sostenibilidad también es importante considerar aquellos elementos intrínsecos provenientes de las comunidades para quienes es vital su sobrevivencia por sobre las variables ecologistas provenientes de la conceptualización externa a su medio, se necesita por lo tanto llegar a consensos sobre el contenido del desarrollo sostenible (Field 1997).

La ‘sostenibilidad’ se va convirtiendo en el paradigma de análisis y de reflexión aún dentro del estricto campo de la investigación sobre tecnología y sistemas de producción. Sin entrar a describir toda la investigación desarrollada en los institutos de investigación nacionales (tema que queda fuera del alcance de este trabajo), me limitaré a mencionar dos vertientes que empiezan a aportar nuevos elementos de reflexión: la agroecológica y aquella vinculada a la revolución verde pero que incluye elementos críticos provenientes del desarrollo sostenible. Sobre la primera, son interesantes los estudios de caso de CEA (1997), donde se parte de una crítica radical al modelo de la revolución verde, pero más allá de los estudios ubicados en contextos específicos no se vislumbra la viabilidad de un modelo alternativo que supere la condición de ‘inviabilidad’ de la mayoría de los productores pobres. Así por ejemplo, por solo mencionar un caso, el estudio realizado en Otón, en la provincia de Pichincha (Peralvo, et alii 1997), nunca menciona si la estrategia agroecológica logró parar la corriente migratoria en la cual se inserta la principal mano de obra de esta comunidad y que constituye la principal fuente de los ingresos de estas familias. La experiencia puede haber sido exitosa para diversificar la dieta alimenticia pero no para cambiar el patrón ocupacional de la comunidad.

Los otros estudios, más centrados en la investigación agronómica propiamente dicha, ponen el acento en los parámetros productivistas, las limitaciones tecnológicas de los productores y las necesidades imperativas del cambio tecnológico para entrar a competir en el mercado mundial. No obstante, el estudio de Crissman, muestra las importantes relaciones entre el cambio tecnológico y la salud ocupacional. Al analizar la producción papera del Carchi, debido al mal manejo de insumos químicos, se encontraron impactos más negativos en la salud de los trabajadores que en el medio ambiente (Crissman y Espinoza 1997).

La mayor parte de los trabajos realizados en el INIAP, continúan privilegiando el enfoque de sistemas como herramienta metodológica para derivar en los ‘modelos de simulación’, más útiles para la explicación científica que para la solución de los problemas de los campesinos (Rodríguez, et alii, 1993; Arce et alii, 1993). Estos estudios se centran en productos mercantiles tanto de exportación (café), como de consumo interno (ganadería de leche). En cambio, otros estudios realizados en el marco de ONG, han sido más permeables a la incorporación de la va-

riable ambiental. Así por ejemplo, el estudio de FUNDAGRO sobre las ventajas del uso de la tecnología agroforestal en los cultivos de café en la Amazonia del nororiente, muestra que la producción de madera puede ayudar a contrarrestar los efectos cílicos en los precios del café. (Uquillas, Ramírez, Seré, 1993).

Una notable excepción es el estudio de Leonard Field realizado en tres áreas de la sierra norte, en donde se utiliza el concepto más amplio y complejo de sistema de producción, que involucra varios sistemas de cultivo, la familia como unidad de análisis e incorpora tanto actividades agropecuarias como no agrícolas (Field 1991). Este trabajo puntualiza que existen diversas estrategias de los productores (con su propia identidad cultural) tendientes a aprovechar de mejor manera el recurso al que tienen acceso. Igualmente, que los sistemas de producción agrícolas solo utilizan una mínima porción de la mano de obra disponible y que las actividades de la parcela tienen poca posibilidad de absorberla. Con respecto al incremento de la productividad de los cultivos, esto solo sería factible con un mejoramiento en la estructura del suelo, es decir con la incorporación de materia orgánica.

El trabajo de Manuel Suquilanda (1996), sobre las potencialidades de la agricultura orgánica en el Ecuador, sobre todo por la síntesis de las iniciativas en la generación de tecnologías alternativas que se vienen desarrollando en el país a partir de la década del 90, especialmente en ONG que trabajan con sectores campesinos, es interesante.

A pesar del importante esfuerzo realizado hasta ahora, no se ve con claridad que esta sea la opción para los pequeños agricultores pobres, sino para un estrato que puede beneficiarse sobre todo para la producción 'orgánica' con miras a la exportación; en este sentido, el desarrollo de la agricultura orgánica en el país solo estaría apuntando hacia la búsqueda de la producción de alta calidad que beneficia a una élite de productores rurales y consumidores urbanos dispuestos a pagar altos precios y no a reducir las desigualdades sociales en el campo.

Mercado y capital financiero

Estos dos temas constituyen actualmente el meollo de la posible integración de los campesinos en el modelo aperturista; por ello, la disku-

sión sobre el futuro del campesinado tiende a 'reducirse' a estas dimensiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

En realidad no se trata de temas nuevos. El mercado fue analizado entre los agraristas en los años setenta desde la perspectiva de la 'comercialización', el permanente 'talón de Aquiles' de la economía campesina y para ello casi siempre se proponía eliminar a los intermediarios, convertidos en los 'expoliadores' del campesino, sin lograr comprender el rol importante que en el contexto de la economía campesina jugaban estos sectores (agilidad y oportunidad en los préstamos, disminución de los costos de transacción del dinero). Si bien la monetización de la economía campesina se realizaba desde los años setenta con visos de altas exacciones económicas, sin embargo, mostraba a los incrédulos agentes del capital financiero formal que los campesinos también pueden endeudarse pero bajo ciertas reglas acordes con su idiosincrasia y las limitaciones del ciclo de los cultivos. Este fue siempre el éxito de los 'chulqueros, comerciantes, intermediarios y fomentadores' que pululan en el campo, en especial entre los pequeños campesinos mercantiles.

En la década del 90, la reflexión sobre el capital financiero proviene de las preocupaciones de nuevos agentes financieros que pretenden irrumpir entre los campesinos mercantiles, sobre todo de la costa. En este sentido, el aporte de FINAGRO es importante en la nueva reflexión sobre este tema, aunque es justo señalarlo, también fue una de las preocupaciones centrales de ONG que buscaban nuevos derroteros para su accionar en el medio rural, luego de la desilusión del fracaso desarrollista. Y lo más sorprendente de todo, los mismos indígenas empiezan a preocuparse por este tema, al comprobar que el proceso de desregulación agrario eliminaba al Banco Nacional de Fomento (BNF) como un banco orientado hacia los campesinos y pasaba a ser un simple banco comercial con pocas posibilidades de orientar sus créditos hacia los pequeños productores rurales⁹.

A continuación se examinan las tendencias de discusión más importantes sobre el tema del capital financiero.

9 Esta es la preocupación central para la formación de la CORFINCA, Corporación Financiera del Campo, auspiciada por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional. Cf. Varios Autores, *Crédito para la Vida*, Abya Yala, Quito, 1999.

El análisis realizado sobre el BNF muestra que en realidad el crédito no fluía en su mayoría hacia los campesinos pequeños sino hacia medianos y grandes (Santos 1993, Younger 1996). De esta forma, los campesinos mercantiles de la costa casi siempre acudían a los intermediarios 'crediticios' informales, ubicados en la esfera de la comercialización, que a pesar de cobrar tasas de interés del 150% anual, permitían que la producción tanto de arroz como de soya, se realice. Este agresivo endeudamiento significó la pérdida de la propiedad en importantes sectores de campesinos beneficiarios de la reforma agraria, lo que significaba que la producción arrocera para el mercado interno se lo hacía a un alto costo social. La ineficiencia del BNF, sus altos costos operativos, su descapitalización y corrupción implicaron que desaparezca una opción que desde el Estado no pudo cumplir sus objetivos centrales.

Frente a esta 'debacle' financiera estatal, surgieron otras opciones ubicadas en el ámbito del crédito formal, como es la de FINAGRO. Hacia 1993, trabajaba en la provincia de Los Ríos con productores pequeños, pero bajo la lógica del mercado: tasas reales, asistencia técnica, cadenas de comercialización en búsqueda de mejores precios, etc. (Santos 1993). Posteriormente, actuando ya como banco privado realizó una encuesta en la misma provincia, y logró detectar una serie de importantes problemas que afectan a los productores con relación al crédito (FINAGRO 1996).

En primer lugar, una alta proporción de los campesinos de esta área no recibe crédito y cuando lo hace, es a través del crédito informal. En segundo lugar, el crédito informal tiene una serie de ventajas sobre el formal, los agricultores buscaban en esta fuente el financiamiento de sus actividades: oportunidad en la entrega del préstamos, trámites sencillos, tasas de interés nulas o bajas, buena atención, cercanía a sus lugares de trabajo, sin garantías y sin mayores gastos adicionales. La recuperación de este tipo de crédito era también alta y el porcentaje de deudores muy bajo. Frente a esto, el crédito formal a pesar de que en su mayor proporción fluía a través del BNF y en menor medida de la banca privada, adolecía de varios problemas: altas tasas de interés, plazos muy cortos, necesidad de garantías, gastos adicionales y solo cubría a una pequeña parte de las familias.

El esquema, comprobado en otras partes del Tercer Mundo, se repite, en donde el crédito formal si no se adapta a las condiciones de

la economía campesina no tiene ningún futuro en este medio¹⁰. Llama la atención la no presencia de fomentadores y/o chulqueros como oferentes de crédito. La mayor parte del crédito informal es ofrecido por los ‘familiares y amigos’ y, en segundo lugar, por los ‘mayoristas’. Por ello, el préstamo se realiza ‘sin intereses’ en la mayoría de los casos, aunque con ciertas obligaciones como la ‘entrega de la producción en cosecha’. Considerando que se trata de campesinos pobres que constituyen la demanda de este tipo de crédito, es lógico suponer que lo hacen a parientes y amigos más acomodados, lo que permite afirmar la gran heterogeneidad social del campesino arrocero de la costa. Si bien FINAGRO era optimista en el papel que podría jugar la banca privada con estos productores, sobre todo por su ‘solvencia’ en el pago de la deuda, es probable que si no se modifican las rígidas condiciones de acceso al crédito, los productores pobres quedarán marginados y seguirán dentro del marco de la informalidad financiera.

La importancia del crédito rural fue retomada por las ONG (COASER 1994). El FEPP fue una de las primeras instituciones en desarrollar líneas de crédito para la compra de tierra en varias provincias de la sierra a través del mecanismo de conversión de deuda externa (Tonello y Verdesoto 1994). Pero, además de esta experiencia, la discusión más interesante se centró en el tema de los ‘mercados financieros rurales’. Se constató la complejidad de la nueva sociedad rural, el surgimiento de nuevas iniciativas y las pocas posibilidades que tendrían los campesinos pobres de ser sujetos de crédito formal. Se rescataron algunos ejemplos embrionarios en el país como el del FEPP en Salinas, provincia de Bolívar y experiencias vinculadas al crédito formal a través del sistema de garantías crediticias en Tungurahua. Al final, faltó una reflexión sobre otras alternativas más avanzadas en Latinoamérica y sobre aquellas mucho más ambiciosas de crédito rural que funcionan exitosamente en el sudeste asiático y en Bangladesh (González y Chávez 1995; Jain 1997).

10 A esta conclusión llegaron otros estudios realizados sobre la década del 80. en los cuales se constataron los bajos costos de transacción en los pequeños créditos informales establecidos sobre lazos de confianza entre el prestamista y el prestatario. Cf. Ramos. 1989.

Las investigaciones sobre el tema del ‘mercado’ son aún más escasas y se orientan al tema del ‘aperturismo’ y de la integración en la OMC (Hernández y Urriola 1993; Martínez Jaime 1996). Pocas reflexiones, en cambio, se han hecho con respecto a las características del funcionamiento de los ‘mercados reales’, en el sentido utilizado por Cynthia Hewitt de Alcántara: “instituciones cultural y políticamente específicas que cuestionan las supuestas ventajas del mercado conceptualizado, de manera simplista, como el mejor asignador de los recursos a través de las reglas impersonales de la oferta y la demanda” (1993:2-3).

En esta línea, el reciente artículo de Emilia Ferraro (1996), muestra la riqueza de análisis sobre el tema de los mercados aplicado a las economías campesinas. A partir de la hipótesis que los mercados no responden solo a criterios económicos sino también a criterios socio-culturales demuestra, en el caso de comunidades indígenas de Cayambe, en la provincia de Pichincha, que en las relaciones de mercado no rige únicamente el precio, sino que existen toda una variedad de criterios que van desde el crédito que otorga el intermediario ‘lechero’ hasta la confianza depositada y el grado de solidaridad con la comunidad. Los ‘lecheros intermediarios’ para poder captar su clientela entre los indígenas debieron adaptarse a ciertos rasgos subsistentes del sistema de hacienda como los ‘suplidos y socorros’. El mercado real funciona con parámetros pre-capitalistas para ser eficiente, en un medio donde la ganadería empieza a tomar auge frente a la agricultura. La autora destaca además el tema del ‘poder’, lo que determina el acceso al mercado, la permanencia y las reglas de juego con los productores. En definitiva, el mercado en este caso no funciona sobre las bases teóricas neo-liberales impersonales, basadas en intereses individuales y donde la cultura y las relaciones sociales no juegan ningún papel. Al contrario, el mercado debe necesariamente estructurarse con relación a estos elementos si quiere ser eficiente.

Existen también algunos trabajos que desde la perspectiva económica abordan los problemas de comercialización, sobre todo de los productos de la costa. Estos, desarrollados en el PRSA del Ministerio de Agricultura y Ganadería, plantean los principales problemas que afectan a cultivos como soya, arroz y maíz duro (Vallejo Páez 1996). Los estudios evalúan los efectos de las políticas macro-económicas sobre la rentabilidad de estos cultivos y en casi todos ellos, los problemas

de comercialización saltan a la vista: falta de sistemas de almacenamiento en el caso de la soya, transferencia de recursos desde el productor a las piladoras obsoletas en el caso del arroz y la presencia de un mercado monopólico en el caso del maíz duro.¹¹

Desde la perspectiva de los nuevos productos de exportación y su vinculación con el mercado mundial, destacan los trabajos de William Waters sobre el crecimiento de las exportaciones de flores y cultivos no tradicionales en el conjunto de las exportaciones del país hasta inicios de la década del 90 (Waters 1991, 1993). Se examinan las consecuencias de la inserción en el mercado mundial en el contexto de las transformaciones 'fordistas'. Únicamente productores grandes o medianos como máximo pueden beneficiarse de este proceso debido a los altos niveles de inversión requeridos, a las condiciones de calidad y a las restricciones sanitarias impuestas por los países centrales importadores de frutas, hortalizas y flores.

La flexibilidad de los sistemas productivos permite que la producción obtenida en determinadas condiciones agroecológicas, pueda responder a una demanda concentrada en ciertas épocas del año. Existen también diversas formas de articulación entre productores y el mercado mundial: desde empresas que controlan todo el proceso hasta empresas que trabajan a través de contratos con productores medianos y pequeños. Sin embargo, no se analiza a fondo los efectos sobre la diferenciación entre productores, ni la generación de empleo para las comunidades minifundistas cercanas a las plantaciones. Tampoco se estudia los efectos negativos en la salud de los trabajadores y sus consecuencias a largo plazo sobre la viabilidad de las comunidades, aspecto que no ha sido sustentado en investigaciones empíricas (Harari 1989).

Organización rural y capital social

Primero la crisis de los años setenta y luego las políticas de ajuste erosionaron las economías campesinas, cuyo impacto se manifestó en la

11 La presencia mayoritaria de las piladoras obsoletas, que procesaban el 40 % del arroz producido entre 1982-87, ya fue observada en el mencionado estudio de Hugo H. Ramos (1989).

organización rural. Cristóbal Kay (1995), señala, para el contexto de América Latina, que la década perdida también tuvo su corolario en el debilitamiento de las organizaciones campesinas tradicionales. Para el caso ecuatoriano, la década del ochenta fue al contrario calificada por algunos investigadores como la ‘década ganada’, al constatar el crecimiento ‘numérico’ de las organizaciones de segundo grado, sobre todo en el medio indígena. Esta es la tesis principal de Bebbington y sus colaboradores (Bebbington, A. et alli 1992): demostrar que pese a los problemas económicos que acosaron al campesinado y comunidades indígenas, la respuesta vino por el lado de la organización que contempla ya no solo demandas de corte productivo sino también demandas organizativas, culturales y étnicas.

Este mismo autor avanzó esta idea en un trabajo anterior basado en Chimborazo, en el cual mostraba la presencia de una “estrategia agraria indígena que implicaba la administración de sus recursos y el proceso de desarrollo en el espacio rural por parte de las organizaciones locales” (Bebbington 1992:161). Si bien es cierto que las organizaciones crecieron en esa década, tampoco es menos cierto que este dato cuantitativo no es suficiente para arribar a conclusiones tan optimistas. En efecto, las organizaciones de segundo grado crecieron paralelamente a la oferta de proyectos de desarrollo. Una vez que estos ya no fueron tan copiosos en la década del noventa, muchas de estas organizaciones entraron en crisis y algunas desaparecieron o figuran solo en el membrete institucional. Las más recientes aproximaciones a este tema muestran que muy pocas organizaciones de segundo grado tienen capacidad para generar propuestas y menos aún para ejecutarlas (Martínez 1997).

El perfil organizacional de los años noventa pasa por otras variables más cercanas a aquellas de la micro-empresa y de la gestión gerencial que aquellas de corte socio-organizativo y étnico-político. La pregunta sobre la ‘calidad’ de este capital social se torna pertinente si, como sucede actualmente, muchas propuestas sobre el futuro del desarrollo rural o la viabilidad de los proyectos, se basa en las potencialidades de la organización campesina.

Un estudio que demostraba las debilidades y potencialidades de las organizaciones de segundo grado es el realizado por Paola Sylva en tres áreas del oriente, sierra y costa a principios de los años noventa

(Silva 1991). En efecto, las OSG no actuaban como entidades productivas sino más bien como ‘grupos de presión’; es decir, se trataba de organizaciones que privilegiaban el ámbito socio-organizativo y político y no tanto el económico-productivo. Las OSG estudiadas no fueron rentables, ni generaron utilidades, es decir, no consiguieron capitalizarse. Tenían varios problemas en su funcionamiento interno, como la falta de participación de las bases, la utilización de los puestos directivos como mecanismo de ascenso individual y económico. Frente a esto, la reivindicación de las organizaciones de base como instancias más representativas de los intereses de campesinos e indígenas y la necesidad de que las OSG definan las relaciones de cooperación con ellas fue natural.

Paola Silva somete a las OSG al análisis sobre el paradigma ‘autogestionario’, cuando en realidad, estas organizaciones más bien fueron impulsadas desde fuera para viabilizar las acciones de desarrollo rural. Era bastante improbable que hubieran surgido como el resultado de una acumulación de éxitos organizativos o económicos en pequeña escala. Las debilidades de las OSG hacia adentro y hacia fuera, a finales de la década de los 80, constatadas en ese estudio vienen a cuestionar la visión un poco ‘naif’ de la década ganada.

Las mismas organizaciones de segundo grado han realizado esfuerzos por reflexionar sobre su situación (CPOCA 1992). Así por ejemplo, en el caso del Azuay, se acepta la relación entre organización campesina y proyectos, en el sentido que muchas organizaciones son el resultado de las exigencias externas para canalizar proyectos antes que de un proceso interno de consolidación de sus propias organizaciones tradicionales. Esta fue la situación de la mayoría de organizaciones hasta la mitad de la década de los 80, articuladas en torno a los proyectos. Cuando disminuyeron los proyectos, empezó una etapa de ‘desestructuración’ de las organizaciones. Los proyectos de mayor permanencia fueron los de comercialización, mientras que los más difíciles de concretarse fueron los agrícolas. Surgieron proyectos nuevos como los de artesanía, mientras continuaban los ‘recurrentes’, como los de obras de infraestructura. El ‘proyectismo’ dentro de la organización campesina, causó en general más problemas que beneficios: desvinculación de las necesidades de los campesinos, presencia de paternalismo, fracasos y manejo inescrupuloso de fondos, división en las comunidades, falta de compromiso con las bases, manejo no autónomo de los proyectos, po-

ca replicabilidad de micro-proyectos, etc. En general, para los campesinos del Azuay, la experiencia acumulada hasta principios de los años noventa no era positiva y requería de una reconceptualización del rol de la organización.

El nivel de organización, al menos en las doce áreas PRONADER, fue analizado por Carlos Arrobo y Mercedes Prieto (1995). Se trata de una muestra bastante representativa del campesinado ecuatoriano y, por lo mismo, las tendencias que se expresan demuestran las debilidades y fortalezas de la organización en el medio rural. La visión de los autores es que en el sistema PRONADER, los niveles de participación de la población beneficiaria son deficitarios, poniendo en duda la sostenibilidad futura de los proyectos.

Los problemas derivados del término 'participación', su utilización instrumental por parte de los técnicos de campo, a través de los 'comités de campo y comités locales de producción', ha impedido potenciar la organización como base de la sostenibilidad de las acciones entre los campesinos. Estos comités, por ejemplo, al encontrarse 'subordinados' al proyecto tienen poca capacidad de autogestionarse. En el funcionamiento de algunas organizaciones se pueden ver las trazas de paternalismo y clientelismo en la relación Estado - organizaciones campesinas. Igualmente, han proliferado cierto tipo de organizaciones 'ad hoc', más relacionadas con la necesidad de ejecutar acciones que con el apoyo a formas más tradicionales del campesinado. Pero también los actores campesinos demuestran ciertas debilidades y situaciones conflictivas y de desconfianza. Los autores encuentran las mismas debilidades constatadas por estudios anteriores: apatía y desconfianza, alejamiento entre bases y dirigentes, paternalismo y abuso de poder de la cúpula de dirigentes.

El estudio sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de las cuales efectivamente ha desplegado su acción en el medio rural, abre una veta de investigación novedosa (Arcos y Palomeque 1997). Las reflexiones sobre estas instituciones se centran en el análisis de sus experiencias exitosas y, en menor medida, en sus problemas o debilidades. Frente a la vigencia del modelo neoliberal y a la necesidad urgente de responder a las pocas fuentes financieras disponibles, se pone el énfasis en la necesidad de un vuelco total en su orientación. Como dicen los autores, es necesario pasar de ser institu-

ciones sin finalidades de lucro a ser instituciones de 'venta de servicios'. Para ello es necesario consolidar una capacidad técnica-gerencial que permita aumentar el nivel de eficiencia y oportunidad de las ONG en las relaciones definidas por el mercado y las nuevas orientaciones de las agencias de financiamiento. Se enfatiza en la necesidad del autofinanciamiento a través del cobro de servicios y el trabajo en espacios más amplios, a través de redes y de una coordinación efectiva. No se abandona completamente el espíritu solidario de colaboración con los pobres, pero se da a entender que las reglas del juego ya no serán las mismas, ni desde el punto de vista institucional ni del entorno social en donde se buscarían socios estratégicos inclusive en el sector privado, puesto que la pobreza no es solo asunto del Estado y las ONG. Esta nueva posición no parte de una crítica al actual modelo económico y la búsqueda de alternativas. Las ONG pretenden transformarse en 'empresas' especializadas del sector social y de algunos sectores productivos en los cuales la actual empresa privada no estaría interesada en arriesgar capital. El nuevo rol de estas instituciones no contempla las deficiencias institucionales del modelo neoliberal, mientras es más claro el de 'intermediación' funcional a los intereses del capital, antes que de los sectores sociales a los cuáles se desea beneficiar.

Algunas tendencias para la investigación

De la revisión de los principales estudios realizados durante la última década sobre el sector rural, entendido en su visión más amplia y no solamente agraria, se puede concretar algunas tendencias que ante todo pueden ilustrar el camino seguido y las pistas para profundizar o completar los vacíos en las investigaciones futuras.

1. Los problemas del sector rural no han perdido su vigencia en esta década, a pesar de los obstáculos económicos y la relativa disminución de la investigación en Ciencias Sociales y afines. Una primera sorpresa es constatar que existe un número importante de estudios sobre campos mucho más variados que hace unos 15 años. No obstante, también es cierto que este abanico de temas no generó debates en torno a los problemas centrales del sector rural, ni tampoco estudios globales que recojan y procesen toda la riqueza analítica

de estos diez últimos años. Sin embargo, la diversidad muestra también la actual heterogeneidad social y productiva del sector rural que no puede en adelante ser enfocado únicamente a través de estudios 'agraristas'.

2. La desigualdad en los trabajos sobre el sector rural puede evidenciarse en la calidad de los mismos. Algunos son el producto de investigaciones serias de al menos 2 ó 3 años de duración, otros en cambio, son aproximaciones o hipótesis de trabajo condensadas en artículos de revistas y finalmente, lo que más abunda son informes y folletería vinculados al trabajo de instituciones de desarrollo y ONG, que responden a las necesidades prácticas del trabajo con diversos sujetos sociales.
3. La diversidad de temas analizados, desde los tradicionales (tenencia de la tierra), hasta los nuevos (mercado, capital social), indica también que hay cierta renovación en el 'portafolio' de la investigación rural. Por un lado, una aproximación a trabajos interdisciplinarios en temas como la sostenibilidad y la tecnología, por otro, innovación de marcos teóricos en temas nuevos como el capital social y el problema organizacional. No hay producción sobre un tema tan crucial como el de la 'política económica' que ha quedado en manos de expertos extranjeros encargados de sentar líneas sobre lo 'que hay qué hacer' en el medio rural. Esto a su vez es una muestra de la dispersión académica y la falta de espacios de discusión y debate que permitan crear las bases de una producción más sistemática en torno a los problemas estructurales de la sociedad rural.
4. Los temas de la agenda actual son promovidos, la mayoría de las veces, por instituciones de financiamiento e investigación internacionales: políticas diferenciadas, relación campo-ciudad, multiocupación rural, género, descentralización, etc., temas, de alguna manera, objeto de atención en nuestro medio, aunque no a partir de una política de investigación definida, sino más bien por iniciativas de investigadores o de instituciones de desarrollo. La etniedad es, probablemente, el 'tema de moda' en el medio rural y en el caso ecuatoriano ha tenido una prolífica respuesta institucional y privada. En este estudio por razones de división del trabajo no se lo analiza, pero seguirá manifestándose con fuerza en el futuro.

Otros temas, hasta ahora considerados ‘superados’, como por ejemplo, el acceso y tenencia de la tierra, el agua, la reforma agraria, el mercado de tierra, el empleo rural, etc., pueden adquirir importancia por su relevancia en las políticas para el sector rural y por los cambios que se implementan en las actuales políticas macro-económicas.

5. Las posibilidades de la investigación rural futura van a depender mucho de la articulación de los intereses de la sociedad civil, en especial de las redes que existan o que puedan formarse alrededor de una agenda de investigación viable y sostenible. Por el momento, los espacios académicos de la investigación no tienen posibilidades de tomar iniciativas de tal naturaleza, así que queda la esperanza de que los mismos investigadores (de diversos ámbitos, públicos y privados) apoyados por instituciones estatales y privadas, puedan concretar ideas parecidas hacia el futuro. La actual desarticulación de la investigación y su dependencia financiera cortoplacista de modas o agendas no compatibles con las prioridades del mundo rural, puede resultar nada eficiente desde el punto de vista del impacto que se espera de estos trabajos. Es importante avanzar en la conformación de espacios de investigación en todos los niveles posibles: desde el estatal, pasando por las universidades y ONG hasta el de las mismas organizaciones campesinas; única manera de acumular un conocimiento que hoy más que nunca es necesario para orientar los derroteros de la sociedad rural del próximo siglo. Frente al proceso de la ‘globalización’ sería muy importante fortalecer las relaciones con investigadores afines de fuera del país, de manera que se pueda aprovechar los estudios que se realizan en las universidades y centros de investigación y por otro lado, impulsar la realización de proyectos conjuntos para estudiar procesos del mundo rural que empiezan en nuestro país pero que terminan en los mercados de los países centrales.
6. La progresiva recuperación del análisis y de la investigación, desde una perspectiva social en el diseño de proyectos que se ha producido en agencias multilaterales de financiamiento, cuando se dirigen hacia los pobres rurales, muestra una importante revaloración del rol de los analistas sociales. Temas como el capital social, la agricultura ampliada, la sostenibilidad, la pobreza, etc., indican-

el fracaso de numerosos proyectos de desarrollo rural cuando no se considera las iniciativas, potencialidades y alternativas de los mismos beneficiarios, es decir 'de la gente'. Actualmente, es una necesidad contar con estudios, análisis y aportes desde las Ciencias Sociales (Cernea 1995). Esta es una veta que debe ser aprovechada eficientemente para institucionalizar la investigación multidisciplinaria en un medio que hasta ahora ha sido poco proclive a esta iniciativa.

Siglas utilizadas

CIDA	Centro Internacional de Desarrollo Agrícola
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
CEPLAES	Centro de Planificación y Estudios Sociales
IDEA	Instituto de Estrategias Agropecuarias
LDA	Ley de Desarrollo Agropecuario
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
ONG	Organización No Gubernamental
IERAC	Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (desaparecido)
INDA	Instituto de Desarrollo Agropecuario
FEPP	Fundación Ecuatoriana Populorum Progressio
FUNDAGRO	Fundación de Desarrollo Agropecuario
INEM	Instituto Nacional de Empleo (desaparecido)
UPA	Unidad de Producción Agropecuaria
PEA	Población Económicamente Activa
OMC	Organización Mundial del Comercio
CONAIE	Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
OSG	Organización de Segundo Grado
BNF	Banco Nacional de Fomento
SECAP	Servicio de Capacitación Profesional
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola
PIB	Producto Interno Bruto
PRONADER	Programa Nacional de Desarrollo Rural
DRI	Desarrollo Rural Integral
CESA	Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
CEA	Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología
INIAP	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
FINAGRO	Financiera del Agro (desaparecida)
PRSA	Programa Sectorial Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Bibliografía temática

Bibliografía temática

- Albán, Jorge. "Ecuador: Modernización y diferenciación campesina. Una tipología de situaciones", *Movimiento Campesino*, T. I., IDIS, Cuenca, 1991.
- Arce, B. et alii. "Desarrollo y uso de modelos de simulación para el estudio de sistemas de producción de leche en áreas de la sierra ecuatoriana", *Memorias del Simposio Latinoamericano sobre Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios*, FUNDAGRO, Quito, 1993.
- Arcos, Carlos y Edison Palomeque. *El Mito al Debate. Las ONG en Ecuador*. Abya-Yala, Quito, 1997.
- Arrobo, Carlos y Mercedes Prieto. *La participación campesina en Proyectos de Desarrollo Rural*, IICA, Quito, 1995.
- Arroyo, Aline y Rutgerd Boelens. *Mujer campesina e intervención en el riego andino*, CAMAREN, CESA, SNV, Quito, 1997.
- Ayuda en Acción, OFIS y Sendas. "Las tejedoras de chompas en lana de borrego", *Cántaro*, N ° 4, marzo-mayo de 1993.
- Bebbington, Anthony. "Grassroots perspectives on Indigenous Agricultural Development: Indian Organisation and NGOs in the Central Andes of Ecuador", *The European Journal of Development Research*, Vol 4, N° 2, Frank Cass. London, decembre, 1992.
- Bebbington, Anthony et alii. *Actores de una década ganada. Tribus, comunidades y campesinos en la modernidad*, COMUNIDEC, Quito, 1992.
- Bebbington, Anthony. "Desarrollo sustentable en los Andes. Instituciones locales y uso regional de los recursos en Ecuador", *Lati-*

- noamérica Agraria hacia el siglo XXI*, CEPLAES, Quito, 1993.
- Bebbington, Anthony. "Movements, Modernizations and Markets. Indigenous organizations and agrarian strategies in Ecuador", Richard Peet and Michael Watts, Eds., *Liberation Ecologies*, Routledge, London and New York, 1996.
- Bretón, Víctor. *Capitalismo, reforma agraria y organización comunal en los Andes. Una introducción al caso ecuatoriano*, espai-temps, Edicions de la Universitat de Lleida, España, 1997.
- CAAM. *Propuestas de políticas y estrategias ambientales*, PAE, Quito, 1995.
- Camacho, Carlos. "Evaluación del proceso de cambio en la tenencia de la tierra en la sierra norte y central (1964-1991)", *Latinoamérica Agraria hacia el siglo XXI*, CEPLAES, Quito, 1993.
- Carrasco, Hernán. *Campesinos y Mercados de Tierras en la Costa Ecuatoriana*, FAO, Roma, 1994.
- CESA, "Campesinado y Entorno Ecosocial: Diagnósticos socioeconómicos y de recursos naturales en ocho áreas de acción de CESA", Quito, 1991.
- CESA, "Logros y Traspiés del Desarrollo Rural contados por CESA", Quito, 1992.
- Cevallos, José Vicente. "Reforma agraria y cambio estructural: Ecuador desde 1964", *Ecuador Debate*, Nº 20, CAAP, Quito, Julio de 1990.
- Chiriboga, Manuel. "Los cambios recientes en la agricultura ecuatoriana y el papel del campesinado", *Debate Agrario*, Nº 6, Lima, abril-junio, 1989.
- Chiriboga, Manuel. "Desarrollo rural y diferenciación campesina: el caso de los Proyectos Salcedo y Puerto Ila-Chone", *Movimiento Campesino*, T. II., IDIS, Cuenca, 1991.
- Chiriboga, Manuel. "Desarrollo Rural de América Latina en los Noventa", *Ecuador Debate*, Nº 28, CAAP, Quito, abril de 1993.
- Chiriboga, Manuel. "ONGs y el desarrollo rural en los países andinos: dilemas y desafíos", *Ecuador Debate*, Nº 35, CAAP, Quito, agosto de 1995.
- Chiriboga, Manuel. "Las Organizaciones No Gubernamentales, Las Organizaciones Campesinas y el Desarrollo Rural Sostenible

- en los Países Andinos”, *Memorias del Seminario Regional para la Promoción de Sistemas de Producción Agrícola Sostenible para el sector campesino en los Andes Centrales*”, MAG-FAO-CIP-IICA-UNEP -CONDESAN, Quito, enero, 1996.
- COASER. Mercados Financieros Rurales, Memoria del seminario-taller, Quito, 1-2 de junio de 1995.
- CPOCA. “Proyectos y organización campesina en el Azuay”, *Cántaro*, Nº 2, Cuenca, agosto de 1992 .
- Crespo, María Rosa. “Los campesinos, la sed y las mingas: Proyecto Nero”, *Movimiento Campesino*, T.II, IDIS, Cuenca , 1991.
- Crissman, Charles y Patricio Espinoza. “Papas, pesticidas y política”, Luciano Martínez (Ed), *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Quito, 1997.
- De la Torre Espinosa, Carlos. *El racismo en el Ecuador: experiencias de los indios de la clase media*, CAAP, Quito, 1996.
- DHV Consultants BV. *Economía Campesina y Sistemas de Producción. Estudio de Base en la Sierra Andina*, Quito, 1995.
- Dubly, Alain y Alicia Granda. *Desalojos y despojos, los conflictos agrarios en Ecuador*, Ed. El Conejo, Quito, 1991.
- Eberhart, Christophe et alii. *El campesinado de Chimborazo: Situación Actual y Perspectivas*, CESA, Quito, 1997.
- Einzmann, Harald. *Minería de oro artesanal e informal. El caso de Tres Chorreras en Pucará, Azuay*, Cuadernos del Austro, Nº 2, ILDIS, Quito, 1991.
- Eguiguren, Amparo. “Importancia de la percepciones y representaciones sobre los recursos naturales”, Luciano Martínez (Ed.), *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Quito, 1997.
- Espinoza, Patricio y Charles Crissman. *Raíces y Tubérculos Andinos. Consumo, aceptabilidad y procesamiento*, CIP, Quito, 1997.
- Espinoza, Patricio et alii. *Raíces y Tubérculos Andinos. Cultivos marginados en el Ecuador*, CIP, Quito, 1997.
- Fernández Avilés, Gladys. *Perspectivas del Desarrollo Agroindustrial en la Provincia del Azuay*, ILDIS, Quito, 1997.
- Field, Leonard. *Sistemas Agrícolas Campesinos en la Sierra Norte*, CAAP, Quito, 1991.
- Field, Leonard. “Conflictos de intereses y presión sobre los recursos

- naturales. El caso del páramo ecuatoriano “, *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP. Quito, 1993.
- Field, Leonard. “Preguntas Actuales para la Investigación Agropecuaria y de los Recursos Naturales”, *Ecuador Debate*, Nº 31, CAAP, Quito, abril de 1994.
- Field, Leonard. “Imaginarios, cuentas y una condición básica del desarrollo sostenible”, Luciano Martínez (Ed.), *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Quito, 1997.
- Flores, Rubén y Ernesto Lara. *Sistema de Intermediación Financiera Agropecuaria en Áreas Rurales*, IDEA, Quito, 1995.
- Flores, Rubén. “Los gremios agropecuarios y el nuevo enfoque para la agricultura”, *Ecuador Debate*, Nº 41, CAAP, Quito, agosto de 1997.
- Fuentealba, Gerardo. “Resistencia indígenas a la modernización en Cañar”, *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP. Quito, 1993.
- FINAGRO. “Caracterización del mercado financiero rural en la Provincia de los Ríos”, Encuesta efectuada según convenio INEC-FINAGRO, mimeo, Agosto de 1996.
- FUNDAGRO. “Regularización, tenencia de tierras y aguas”, mimeo, Quito, 1996.
- García, Fernando. “El campesinado indígena y la educación bilingüe: entre la identidad cultural e intercultural”, *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP. Quito, 1993.
- Guerrero, Andrés. *De la Economía a las Mentalidades: Cambio Social y Conflicto Agrario en el Ecuador*, Ed. El Conejo, Quito, 1991.
- Guerrero, Andrés. *La semántica de la dominación: el concertaje de indios*, Ediciones Libri Mundi, Quito, 1991.
- Guerrero, Andrés. “El levantamiento nacional de 1994: discurso y representación política”, *Memoria*, Nº 5, Marka, 1995.
- Guerrero, Fernando. *Dinámica Poblacional y Estructura Agraria en algunas comunidades de la cuenca del río Mira y del valle del Chota*, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Quito, 1996.
- Guerrero B., Rafael. “Sujetos agrarios y revolución conservadora”, *Ecuador Debate*, Nº 24, diciembre de 1991.

- Guerrero B, Rafael. "Los campesinos arroceros y el mercado andino", *Ecuador Debate*, N° 26, CAAP, agosto de 1992
- Guerrero B, Rafael. "Voluntad de Dios: los Campesinos y la Producción del Banano", *Ecuador Debate*, N° 28, CAAP, abril de 1993.
- Haubert, Maxime. "Coopératives de réforme agraire et sécurité alimentaire dans la Sierra équatorienne", *Etudes Rurales*, janvier-juin, 1989.
- Haney, Emil B. y Haney, Wava G. "Transición agraria en la sierra del Ecuador: del semifeudalismo al capitalismo en Chimborazo", *Ecuador Debate*, N° 20, CAAP, julio de 1990.
- Harari, Raúl y otros. *Plaguicidas y salud de los trabajadores y campesinos de diversas estrategias productivas del Ecuador*, FIT-PAS, Quito, 1989.
- Hernández, Carmen y Rafael Urriola. *Los Pequeños productores agropecuarios y la apertura comercial*, IICA-ILDIS, Quito, 1993.
- Hess, Carmen H. *La racionalidad de una economía agropecuaria: Una Contribución hacia el Desarrollo Ecuatoriano: El caso de Cotopaxi*, Editorial Ecología Humana, Quito, 1992.
- Hibon, Albéric, Marco Vivar y Héctor Andrade. *El sistema de cultivo de la papa en la Provincia de Cotopaxi: condiciones de producción, prácticas de los agricultores y necesidades de investigación y transferencia de tecnología*, INIAP-MAG-FEPP, Quito, mayo, 1995.
- Ibarra, Hernán. "El campesinado indígena postmoderno y rocolero", *Memoria del Seminario: Campesinado indígena y desafíos de la modernidad*, IDRC, CELA, CAAP, Quito, 1993.
- Ibarra, Hernán y Hernán Carrasco. "Conflictos y mercado de tierras en la provincia de Chimborazo", mimeo, FEPP, Quito, 1991
- Ibarra, Hernán y Pablo Ospina. *Cambios agrarios, comunidades campesinas y mercado de tierras en Cotopaxi*, Cuadernos de Investigación N°3, FEPP, Quito, 1994.
- IICA-CEPLAES. "Proyecto Políticas para combatir la pobreza rural", mimeo, Quito, 1995.
- Jordán, Fausto. "Desarrollo Rural. Elementos de política social y económica", *Políticas Sociales, Desarrollo y Compensación Social*, Grupo de Trabajo sobre Deuda Externa y Desarrollo, Quito, 1993.

- Jordán, Fausto y Jorge Echenique. "Proposición de Estrategias de Desarrollo Rural y Alternativas Institucionales para el Ecuador", BID, mimeo, 1994.
- Jordán, Rosa. "Políticas frente a la mujer como productora de alimentos en el Ecuador", *Ecuador Debate*, Nº 34, CAAP, abril de 1995.
- Kay, Cristóbal. "El desarrollo excluyente y desigual en la América Latina rural", *Nueva Sociedad*, Nº 137, Caracas, mayo-junio, 1995.
- Korovkin, Tanya. "Indigenous Peasant Struggles and the Capitalist Modernisation of Agriculture: Chimborazo 1964-1991", *Latin American Perspectives*, Sage Periodical Press, Issue 94, Vol.24, Nº 3, May, 1997.
- Korovkin, Tanya. "Taming capitalism: The Evolution of the Indigenous Peasant Economy in Northern Ecuador", *Latin American Research Review*, Vol 32, Nº 3, 1997.
- Korovkin, Tanya. "Commodity Production and Ethnic Culture: Otavalo, Northern Ecuador", *Economic Development and Cultural Change*, (de próxima aparición), Spring, 1998.
- Lanjouw, Peter. "Ecuador: Pobreza Rural", *Cuestiones Económicas*, Nº 27, Banco Central, Quito, 1996.
- Lanjouw, Peter. "Ecuador's Rural Nonfarm Sector as a Route Out of Poverty", *Policy Research Working Paper*, Nº 1904, The Work Bank, march, 1998.
- Larrea, Carlos (ed), Malva Espinoza, Paola Sylva. *El banano en el Ecuador, Transnacionales, Modernización y Subdesarrollo*, FLACSO, Quito, 1987.
- Larrea, Carlos. "The Mirage of Development: Oil, Employment and Poverty in Ecuador (1972-1990)", PhD Thesis, York University, 1992.
- Larrea, Carlos et alii. *La Geografía de la Pobreza en el Ecuador*, Secretaría Técnica del Frente Social, Quito, 1996.
- Lefeber, Louis. "Políticas Agrícolas y Desarrollo Rural en el Ecuador", *Ecuador Debate*, Nº 43, CAAP, Quito, abril de 1994.
- Lentz, Carola. *Buscando La Vida. Trabajadores temporales en una plantación de azúcar*, Abya-Yala, Quito, 1991.
- León Trujillo, Jorge. *De Campesinos a Ciudadanos Diferentes*, CEDI-ME, Abya-Yala, Quito, 1994.

- López, Ernesto. "La ley de desarrollo agrario y la modernización", *Ecuador Debate*, N° 32, CAAP, Quito, agosto de 1994.
- Martínez, Luciano. "Empleo Rural y Campesinado: el Caso Ecuatoriano", *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol 13, N° 1-2, Bogotá, enero-agosto, 1990.
- Martínez, Luciano. "Iniciativas campesinas frente a las presiones del mercado", Fernando Bernal (Ed), *El Campesino Contemporáneo*, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990.
- Martínez, Luciano. *El Empleo Rural en el Ecuador*, INEM-ILDIS, Documentos de Investigación N° 2, Quito, 1992.
- Martínez, Luciano. "Sobre el concepto de comunidad", *Cuadernos de la Realidad Ecuatoriana*, N° 5, CIRE, Quito, 1992.
- Martínez, Luciano. "Mujer y empleo en el sector rural ecuatoriano", UNICEF-INEM, mimeo, Quito, 1992.
- Martínez, Luciano. "El empleo en economías campesinas productoras para el mercado interno", *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, N° 53, Amsterdam, december, 1992.
- Martínez, Luciano. "Las recientes transformaciones en el medio campesino indígena", *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP. Quito, 1993.
- Martínez, Luciano. "El Empleo Rural no agrícola en el Ecuador", Primer Encuentro Nacional sobre Población y Desarrollo, AEPO-FNUAP-UNICEF, Quito, 1993.
- Martínez, Luciano. "Los asalariados temporales agrícolas: el caso ecuatoriano", Sergio Gómez y Emilio Klein (editores), *Los Pobres del Campo*, FLACSO-PREALC, Santiago, 1993.
- Martínez, Luciano. *Los campesinos artesanos en la sierra central: el caso Tungurahua*, CAAP, Quito, 1994.
- Martínez, Luciano. "Situación actual y perspectivas de la economía campesina", *Ecuador Debate*, N° 31, CAAP, Quito, abril de 1994.
- Martínez, Luciano y Rafael Urriola. "El impacto del ajuste en el agro ecuatoriano", *Debate Agrario*, N° 20, CEPES, Lima, 1994.
- Martínez, Luciano. *Familia campesina y comportamiento demográfico*, AEPO, Colección Avances, N° 1, Quito, 1995.

- Martínez, Luciano. *La pobreza rural en el Ecuador*, Fundación Esquel, Quito, noviembre, 1995.
- Martínez, Luciano. "Tipología de productores rurales", mimeo, CAAP, 1995.
- Martínez, Luciano y Alex Barril. *Los desafíos del desarrollo rural frenante a la modernización económica*, IICA, Quito, 1995.
- Martínez, Luciano. "El Rol de los Proyectos DRI en el Contexto de las Políticas de Ajuste", *Revista Latinoamericana de Sociología Rural*, Nº 3, Valdivia- Chile, 1995.
- Martínez, Luciano. "Desarrollo rural: limitaciones y alternativas", *Ecuador Debate*, Nº 35, CAAP, Quito, agosto de 1995.
- Martínez, Luciano. *Familia Indígena: cambios socio-demográficos y económicos*, CONADE-FNUAP, Quito, 1996.
- Martínez, Luciano. "Hacia una visión multidimensional del desarrollo sostenible en el medio rural", *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Quito, 1997
- Martínez, Luciano. "Organizaciones de Segundo Grado, Capital Social y Desarrollo Sostenible", *ICONOS*, No. 2, FLACSO, Quito, mayo-julio, 1997.
- Martínez, Luciano. "Comunidades y Tierra en el Ecuador", Carlos Iván Degregori, Editor, *Comunidades: Tierra, Instituciones, Identidad*, DIAKONIA-CEPES-ARARIWA, Lima, 1998.
- Martínez Jaime, Patricio. "El pequeño productor agropecuario y la integración", *Ecuador Debate*, Nº 39 , CAAP, Quito, 1996.
- Merchán P., Gonzalo. *Cacique y tierra: la lucha de la comuna Panyátug*, FEPP, Cuadernos de investigación, Nº 5, Quito, 1995.
- Moor, Mariana. "Cholas, chulqueros y chompas", *Cántaro*, Nº 15, Cuenca, 1996.
- Ortiz, Jaime; Julio Patricio y George Norton. "Impacto de la investigación agropecuaria en Ecuador: el caso del maíz duro", *Ecuador Debate*, Nº 36, CAAP, Quito, diciembre de 1995.
- Ospina, Pablo. "Apuntes sobre la aparcería agrícola en la sierra ecuatoriana: observaciones sobre la Provincia de Cotopaxi", *Ecuador Debate*, Nº 30, Quito, diciembre de 1993.
- Palán Tamayo, Zonia. *La Nueva Cara del Agro Ecuatoriano. Estado, crisis y agroindustria*, CIUDAD, Quito, 1989.
- Peralvo, Lourdes; Fernando Quishpe; Julio Olivera. "Otón: De la agro-

ecología al manejo de cuencas para recuperar los suelos y mejorar la vida en los Andes”, *Agroecología: Tres opciones sustentables*, CEA, Quito, 1997.

- Perreault, T.A.; A.J. Bebbington; T.F. Carroll. “Indigenous Irrigation Organizations and the Formation of Social Capital in Northern Highland Ecuador”, *Yearbook, Conference of Latin Americanist Geographers*, 1998.
- Prieto, Mercedes. “Políticas frente a la mujer productora de alimentos”, Suplemento Técnico IICA, Nº 7, *Boletín IICA - Informa*, Quito, junio-agosto, 1994.
- Ramos, Hugo H. “The Financial System Supporting Rice Marketing in Ecuador”, PhD Thesis, Michigan State University, (no publicado), 1989.
- Ramón, Galo. “Indios, tierra y modernización”, *Movimiento Campesino*, T. 1, IDIS, Cuenca, 1991.
- Ramón, Galo. *Población indígena y pobreza*, Fundación Esquel, Quito, mayo, 1996.
- Rodríguez J., Lourdes. *Tenencia de la tierra en los valles del Chota y de Salinas*, Cuadernos de Investigación Nº 4, FEPP, Quito, 1994.
- Rodríguez, M.; N. Chávez; G. Suárez. “Sistemas de producción de café en la zona central de la provincia de Manabí, Ecuador”, *Memorias del Simposio Latinoamericano sobre Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios*, FUNDAGRO, Quito, 1993.
- Rosero, Luis. “Diversificación de las Exportaciones Agrícolas: el Caso del Mango”, *Ecuador Debate*, Nº 30, CAAP, Quito, diciembre de 1993.
- Rudel, Thomas K. y Bruce Horowitz. “La Desforestación Tropical; Pequeños Agricultores y Desmonte Agrícola en la Amazonía Ecuatoriana”, *Hombre y Ambiente*; Nº 35-36, número monográfico, Quito, 1996.
- Ruiz, Lucy. “Amazonía y Modernidad: el movimiento indígena como actor político”, *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP, Quito, 1993.
- Sánchez-Parga, José. “Modernizaciones en la tradición: transformaciones en la comunidad indígena”, *Memoria del Seminario:*

- Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP, Quito, 1993.
- Sánchez-Parga, José. *Población y pobreza indígenas*, CAAP, Quito, 1996
- Sánchez-Parga, José. "Exitos y fracasos de los pequeños agricultores en experiencias de intensificación de la producción y conservación de los recursos naturales en los andes ecuatorianos: un estudio de caso sobre el análisis de las causas determinantes", *Memorias del Seminario Regional para la promoción de Sistemas de Producción Agrícola Sostenible para el sector campesino en los Andes Centrales*, MAG-FAO-CIP-IICA-UNEP-CONDESAN, Quito, enero, 1996.
- Sánchez-Parga, José et alii. *Enfoques Participativos para el Desarrollo Rural*, CAAP, Quito, 1997.
- Santana, Roberto. "Globalización de la economía y campesinado serrano: un análisis en tres dimensiones", *Ecuador Debate*, Nº 29, CAAP, Quito, agosto de 1993.
- Santos, Grace. "Crédito y Financiamiento Rural", *Ecuador Debate*, Nº 29, CAAP, Quito, agosto de 1993.
- Speiser, Sabine. *Tenencia de la tierra en la provincia de Esmeraldas*, Cuadernos de Investigación Nº 1, FEPP, Quito, 1993.
- Suquilanda, Manuel. *Agricultura Orgánica. Alternativa Tecnológica del Futuro*, Fundagro, Abya-Yala, UPS, Quito, 1996.
- Suremain, Charles Eduard de. "Tierra prometida, tierra profanada. Dos testimonios sobre la difícil cohabitación de los inmigrantes de arriba y abajo en Santo Domingo de los Colorados (Ecuador)", *Hombre y Ambiente*, Nº 15, Abya-Yala, Quito, 1990.
- Suremain, Charles Eduard de. "Les systèmes de Plantation d'un Système d' Hacienda", *Bulletin Français d' Etudes Andines*, Nº 21 (1), Lima, 1992.
- Suremain, Charles Eduard de. "De la Coopérative a la Communauté", *Bulletin de l' Institut Français d' Études Andines*, Nº 22 (2), Lima, 1993.
- Sylva Charvet, Paola. *La organización rural en el Ecuador*, CEPP-Abya Yala, Quito, 1991.
- Tamariz, María Eugenia y Xabier Villaverde. *Diagnóstico de la tenencia de la tierra en la provincia de Esmeraldas*, FEPP, Quito, 1993.

- cia de la tierra en las Provincias de Sucumbíos y Napo, Cuadernos de Investigación N° 7, FEPP, Quito, 1997.
- The World Bank. *Ecuador Poverty Report.*, Washington D.C., 1996.
- Thurner, Mark, "Disolución de la hacienda, luchas campesinas y mercado de tierras en la sierra central del Ecuador, cantón Colta, provincia de Chimborazo", *Ecuador Debate* N° 20, CAAP, Quito, julio de 1990.
- Tobar, Guadalupe. "Aprendiendo desde la experiencia", Luciano Martínez (Ed.) *El Desarrollo Sostenible en el Medio Rural*, FLACSO, Quito, 1997.
- Tonello, José y Ximena Verdesoto. *Deuda y Desarrollo. Del pago de la deuda externa al pago de la deuda social*, FEPP, Quito, 1994.
- Tonello, José. *La Fantasía en el Desarrollo Rural. Creación de puestos de trabajo en el campo*. Serie Reflexiones y Propuestas, N° 2, FEPP, Quito, 1995.
- Trujillo, Jorge. *Indianistas, Indianófilos, Indigenistas. Entre el enigma y la fascinación: una antología de textos sobre el problema indígena*, ILDIS - Abya Yala, Quito, 1993.
- Uquillas, J.; A. Ramírez; C. Seré. "Posibilidades de optimizar un sistema agroforestal basado en el cultivo del café: resultados de una evaluación de impacto en la amazonía ecuatoriana", *Memorias del Simposio Latinoamericano sobre Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios*, FUNDAGRO, Quito, 1993.
- Urriola, Rafael. "Elementos para una estrategia de desarrollo agropecuario de largo plazo", *Ecuador Siglo XX: Aportes Agricultura-Aspectos Económicos*, *Ecuador - Condiciones Económicas*, GTZ-CONADE, Quito, 1992.
- Vallejo Páez, Silvana. "El impacto de las políticas sobre la agricultura de la costa", *Ecuador Debate*, N° 38, CAAP, Quito, 1996.
- Vázquez, Paciente; Orlando Arévalo; Iván González. "En vez de la maquila, para el sector informal del Azuay", Varios autores, *¿Es viable la maquila en el Ecuador?*, Cuadernos del Austro, N° 4, ILDIS, Quito, 1991.
- Vázquez, Paciente. "Condicionantes Internacionales de las economías campesinas del Azuay", *Movimiento Campesino. T.I*, IDIS, Cuenca, 1991.

- Waters, William y Fernando Guerrero. "Sistemas productivos en la Transformación de la Amazonía Ecuatoriana", *Memoria del Seminario: Campesinado Indígena y Desafíos de la Modernidad*, IDRC, CELA, CAAP. Quito, 1993.
- Waters, William. "Las agroexportaciones no tradicionales como respuestas a las transformaciones fordistas mundiales", *Latinamérica agraria hacia el siglo XXI*, CEPLAES, Quito, 1993.
- Waters, William. *Rosas y claveles: reestructuración de la agricultura ecuatoriana y nuevas agroexportaciones*. Universidad San Francisco de Quito, Serie Documentos Nº 5, Quito, 1991.
- Whitaker, Morris D., Editor. *El rol de la agricultura en el desarrollo económico del Ecuador*, IDEA, Quito, 1990.
- Whitaker, Morris D., Editor. *Evaluación de las reformas a las políticas agrícolas en el Ecuador*, IDEA, Quito, 1996.
- Younger, Stephen D., et alii. *Incidencia Distributiva del Gasto Público y Funciones de Demanda en el Ecuador*, FLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales, Nº 3, Quito, 1997.
- Zamosc, León. *Estadística de las Areas de Predominio Étnico de la Sierra Ecuatoriana*, Abya-Yala, Quito, 1995.

Luciano Martínez Valle

Doctor en Sociología, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, 1981. Ha sido profesor de la Universidad de Chile, sede Temuco. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central y de la FLACSO, sede Ecuador. Ha dictado cursos de Sociología Rural en la Universidad San Francisco. Ha realizado consultorías para la CEPAL, Banco Mundial, UNICEF, OIT, IICA, y para varias instituciones públicas y ONG locales e internacionales.

Desde 1980 viene investigando el sector rural en temáticas como estructura agraria, desarrollo rural, relación campo-ciudad, actividades no agropecuarias, empleo, cambios demográficos, pobreza. Actualmente investiga sobre capital social y mercados de tierra. Ha publicado varios libros sobre la problemática agraria y desarrollo rural. Entre los principales: *De Campesinos a Proletarios, Economía Política de las Comunidades Indígenas, El Empleo Rural en el Ecuador, Los Campesinos Artesanos en la Sierra Central: el caso Tungurahua, Desafíos del Desarrollo Rural frente a la Modernización Económica, La Familia Indígena: Cambios Demográficos y Económicos*.

También ha publicado varios artículos en revistas nacionales: *Economía, Ecuador Debate, ICONOS*; y extranjeras: *Debate Agrario* (Perú), *Revista de Estudios Latinoamericanos* (Holanda), *Revista Paraguaya de Sociología, Revista Latinoamericana de Sociología Rural*.

Algunos de sus trabajos más recientes han sido recogidos en libros publicados en Colombia, Chile, España y Perú.

Actualmente es consultor y profesor - investigador asociado a FLACSO, sede Ecuador.

La adquisición de tierra por dos generaciones de comuneros en la comunidad minifundista Santa Lucía Arriba, Tungurahua¹

NANCY R. FORSTER²

Desde los años 60 había mucha esperanza entre grupos progresistas que la reforma agraria podría reducir la desigualdad extrema en la estructura agraria de América Latina. Sin embargo, la implementación de las reformas agrarias en casi todos los países de la región fue limitada y casi siempre provocó la oposición (a veces contrarrevolución) de los sectores conservadores. En el Ecuador, el proceso de reforma agraria desde 1964 tuvo mínimo éxito en reducir la desigualdad rural. Solamente cerca de un cuarto de las familias campesinas del país recibieron beneficios directos (incluyendo redistribución de tierra y colonización) (Zevallos 1985: 110-111, 131; IERAC 1984)³. Sin embargo, parece que más campesinos ganaron tierra como un beneficio indirecto de la reforma. Durante el período de tensión social y política asociada con la reforma agraria, muchos campesinos compraron tierras de los hacendados, cuyos predios los ganaron o por presión o por causa de la disolución de las propiedades grandes (Archetti y Stolen 1981, Rosero Garcés 1982, Martínez 1983: 122-23, Barsky 1984,

1 Tomado de *Ecuador Debate*, No. 20, Quito. CAAF, julio de 1990

2 Development Studies Program, Land Tenure Center, Madison, WI.

3 El porcentaje de beneficiarios es algo exagerado porque tuve que usar datos de población rural de 1974 con el número de beneficiarios de 1984.

Lehmann 1986: 8). Además, el gobierno ecuatoriano en los años 70 halló otra solución al problema de la falta de tierra del campesinado sin enojar a la élite conservadora. En este caso, el gobierno evitó la reforma agraria y fomentó en las comunidades indígenas lindantes con el páramo para que cambiaran el uso de las tierras comunales del pasto a la agricultura.

Esta presentación describe las estrategias de dos generaciones de minifundistas en Santa Lucía Arriba para aumentar sus tierras fuera de herencia. La generación de los padres expandió su tierra por medio de aparcería y compras. La generación actual consiguió tierra a través de compras y usufructo privado del páramo. En Santa Lucía, las compras de ambas generaciones de minifundistas no sucedieron por presión de la reforma agraria sino que resulta de la disolución lenta de los predios de la élite provincial en decadencia y el abandono gradual del campo por parte de la burguesía provincial. Las tierras del páramo llegaron a ser cultivadas a causa de la ‘reforma’ del uso de la tierra comunal estimulada por el gobierno. Los resultados de este estudio sugieren que incrementos de tierra (aún limitados) aumenta significativamente el ingreso familiar. Además, este estudio revela que ciertos tipos de tierra tienen un mayor impacto en subir ingresos que otros. El análisis trata de la importancia práctica y teórica de esos resultados.

La oposición continua de los grupos privilegiados a la redistribución directa de tierra a familias campesinas restringe este método de combatir la desigualdad rural en el futuro cercano. Últimamente, para desarrollar la economía nacional ecuatoriana hay que extender la base de tierra del sector minifundista y aumentar su poder de consumo. Los campesinos en cada nueva generación tienen que aumentar su disponibilidad de tierra por fuera de la herencia para preservar su economía doméstica, para producir para el mercado nacional, y para aumentar su consumo de bienes del sector industrial. Es probable que los campesinos en el futuro cercano conseguirán la mayor parte de tierras adicionales a través del mercado de tierras. Es mi esperanza que el trabajo que empezamos aquí pueda extender el acceso a la tierra del campesinado ecuatoriano, no solamente por medio del mercado libre clásico sino también por medios que fomenten la justicia social.

Santa Lucía Arriba: el contexto ecológico y estructural

La Comuna Santa Lucía Arriba está ubicada a una altura de 3.000 a 3.500 msnm en la parroquia Tisaleo, cantón Ambato, provincia Tungurahua. Las tierras más bajas de Tisaleo están ubicadas a una altura aproximada de 2900 msnm donde predomina el cultivo intensivo de frutas (principalmente manzana y mora). La agricultura en este piso ecológico depende casi totalmente del riego, abastecido por aguas de las alturas que bajan por un sistema complicado de acequias (la mayoría privadas). Las tierras cultivables de la parroquia suben en un continuo ecológico hasta aproximadamente 3600 msnm, el límite para la agricultura. Sobre aproximadamente 3000 metros, el contexto ecológico para este estudio, predominan el pasto y cosechas templadas como papas, ocas, mellocos, habas, ajo y cebolla. El páramo, utilizado tradicionalmente como pasto comunal, se extiende en Tisaleo desde más o menos los 3200 metros hasta la nevada (4900 msnm) del extinto volcán Carihuayrazo, pero pocos comuneros pastorean animales en el páramo alto.

El Censo Agrario de 1974 muestra que parcelas minifundistas predominaron en Tungurahua (cuadro No. 1). En 1974, más del 75% de los predios de la provincia eran de menos de 2 hectáreas y ocupaban solo el 12% de la tierra. En Tisaleo, la presión sobre la tierra fue aún peor. En 1974, 66% de las unidades de la parroquia incluyó menos de una hectárea y 81% menos de dos hectáreas. Predios menores de 5 hectáreas constituyeron el 96% de las unidades, pero se mantuvieron en solo 11% de la tierra de la parroquia. Sin embargo, esta presión extrema sobre la tierra en Tisaleo no fue resultado de un monopolio latifundista de los recursos. En 1974, predios privados (no comunales) con más de 5 hectáreas formaron solo 4% de las unidades y controlaron solo 8% de la tierra. La gran mayoría (81%) de la tierra en la parroquia Tisaleo es páramo, que hasta años recientes fue preservado como pasto comunal para todas las comunidades indígenas colindantes al páramo. Las haciendas predominan más en los páramos de Mocha y Santa Rosa, las parroquias vecinas de Tisaleo.

Las unidades familiares de los comuneros de Santa Lucía Arriba tenían casi todas menos de 5 hectáreas. Además, unas pocas 'haciendas' (hasta 20-30 hectáreas) estaban ubicadas en la zona, pero no son inclui-

das como casos en el estudio. Realicé el estudio durante 11 meses en 1983-84. Entrevisté una muestra del 20% de la comuna, seleccionada al azar de una lista estratificada por informantes según tierra disponible (incluyendo herencia, compras, y tierras en arrendamiento, partido y usufructo del páramo). Si incluimos solo las tierras privadas, 19% de la muestra no tenía tierra, y el 61% menos de 1 hectárea. Solamente el 9% era dueño de 1 a 2 hectáreas, y al 11% pertenecían predios de 2 a 5.6 hectáreas. Incluyendo todo el páramo aprovechado en usufructo privado en el año 1984, la cantidad de la tierra cultivada por unidades domésticas en la comuna se duplicó. Además, la distribución de la tierra en la comunidad mejoró con el aprovechamiento del páramo.

Adquisición de tierra en una comunidad minifundista

La teoría marxista predice que durante la transición al capitalismo el destino de los minifundistas es desaparecer en el proletariado y subproletariado porque son incapaces de competir con fincas más grandes y más capitalizadas. Modernizando el modelo, el análisis de los neomarxistas sostiene que el desarrollo del capitalismo latinoamericano es incompleto, dependiente, e incapaz de absorber a muchos campesinos, marginalizados de la fuerza de trabajo del sector industrial. Por eso, según la teoría, los campesinos latinoamericanos se aferran a sus pequeños predios y trabajan en una condición semiproletarizada. En esta situación, ni la tierra ni el empleo fuera del predio es suficiente para sostenerlos, y es solo una cuestión de tiempo hasta que los minifundistas caigan en el proletariado (de Janvry 1981).

Este estudio muestra que, a largo plazo, el campesinado de Santa Lucía depende para su supervivencia no solo de sus minifundios y empleo fuera de sus predios, sino también de la expansión de sus tierras a través de compras. La investigación histórica sugiere que durante la primera mitad del siglo XX, un escurreimiento de tierra abasteció el mercado de tierra debido a un lento proceso de cambio social. En cada generación, una fracción de hacendados se cansaron de la vida del campo y se mudaron a centros urbanos, muchas veces ciudades provinciales. Herederos ausentes vendieron pedazos de tierra para mantener su estilo de vida urbano o decidieron deshacerse de su he-

rencia por su fragmentación excesiva. En Tungurahua, los terratenientes ausentes dependieron, en general, del sistema de aparcería para cultivar sus tierras. Con frecuencia, los partidarios preferidos recibieron el primer aviso cuando los dueños decidieron vender tierra. Si tenían ahorros en ese momento, los partidarios pudieron aumentar sus predios.

Las compras de los padres. Durante la primera mitad de este siglo (cuando los padres alcanzaron sus años productivos), la compra, por parte de los campesinos de Santa Lucía, fue más o menos común. Solo 15% de los padres no tenía tierra y el 85% con tierra tuvo un promedio de 1.6 hectáreas. En esa generación, 64% de las familias compró tierras, y 69% de su propiedad total fue comprada. Informantes campesinos afirmaron que era relativamente fácil comprar tierra en este tiempo. Además, hay evidencia que algunos terratenientes prefirieron vender sus tierras a los campesinos. Un hacendado de la zona contó que en los años 40, cuando era soltero, tuvo que pagar una deuda que contrajo en el juego; el hacendado decidió vender 15.5 hectáreas de tierra y recibió una oferta de 11.000 sures de uno de los terratenientes principales de la zona. Siguiendo el consejo de un amigo, el hacendado ganó más vendiendo en parcelas de 0.5 a 3 cuadras (0.35 a 2 hectáreas) a campesinos vecinos⁴.

Hacia la mitad del siglo, aún más tierras aparecieron en el mercado. La burguesía provincial respondió al desarrollo de una dinámica economía nacional y se trasladó a Ambato, Quito y otros lugares. Entre 1950 y 1962, la población de Tisaleo bajó 19% debido, en parte, a la migración permanente de campesinos y en parte a la huida de la burguesía rural (Hoffmeyer n.d.: 8-9).

La oportunidad económica en la primera mitad del siglo permitió movilidad hacia arriba en la comuna, incluso surgió una nueva élite económica. Los cinco hombres con más tierra en la generación actual tuvieron padres que empezaron sus años productivos en la primera parte del siglo, sin tierra o casi sin tierra (uno heredó 0.09 hectárea). Usando una combinación de estrategias, incluyendo aparcería, venta de animales, comercio (compra y venta de cosechas), y aún tra-

4 Entrevista, Antonio Martínez, septiembre 1984

bajando como jornalero, cuatro de los padres compraron entre 5.2 y 8.5 hectáreas cada uno.

Las fortunas de los comuneros de la generación actual. Hay un problema metodológico obvio en comparar una muestra de familias que están en cualquier etapa de su ciclo de vida con sus padres, quienes han terminado o casi han terminado sus vidas productivas. Traté de controlar ese problema, aunque de manera imperfecta, separando la muestra de la generación actual en la edad de 35 años (edad del jefe de familia). A los 35 años, los comuneros empezaron a heredar y comprar tierras. El siguiente análisis de dos generaciones (si no está indicado) incluye solo los comuneros de la generación actual con mas de 35 años y sus padres. Este arreglo disminuye las diferencias entre generaciones⁵.

El éxito de la primera generación en comprar tierras en la primera parte del siglo permitió a la segunda generación heredar casi la misma cantidad de tierra que sus padres. El cuadro 2 muestra que los padres heredaron un promedio de 0.54 hectáreas, y sus hijos (hasta el tiempo del estudio) han recibido un promedio de 0.52 hectáreas. Sin embargo, la generación actual tuvo mucho menos éxito en comprar tierras que sus padres. Hasta el año del estudio, han comprado solo un promedio de 0.46 hectárea comparado al promedio de 1.20 hectáreas de sus padres. Este acontecimiento puede ser resultado del alza dramática de los precios de la tierra en años recientes debido al aumento de la población y la creciente demanda por tierra generada por las altas ganancias en cebolla y ajo. También puede ser resultado de la adquisición del páramo en usufructo privado desde 1979. La generación actual en Santa Lucía tiene menos necesidad de comprar tierras.

A pesar del estrechamiento del mercado de tierras, 61% de los comuneros de la segunda generación pudo comprar tierras, en una tasa igual a sus padres. El cuadro 3 presenta una prueba más estricta de movilidad. Examina si los miembros de la generación actual (contando individuos, no familias) superaron o rezagaron a sus padres en propiedad. Los datos indican que no hay una fuerte tendencia en cualquier

5 Los comuneros con más de 35 años tenían una edad promedio de 53 años. Las edades promedio para los cuatro grupos son las siguientes: alto = 53, medio alto = 47, medio bajo = 50, bajo = 63. Los comuneros con menos de 34 años tenían una edad promedio de 29 años.

dirección. En el grupo sobre 35 años de edad, 45% tuvo más tierra que sus padres y 44% menos (11% quedó igual). El porcentaje sin tierra propia en las dos generaciones se mantuvo casi igual. De la generación actual (contando todas las familias), 19% no cuenta con tierras propias, comparado con el 15% de sus padres.

La dinámica de la diferenciación en una comuna minifundista.

El análisis precedente sugiere que la comercialización de la economía minifundista de Santa Lucia no produjo un deterioro continuo. Más bien, la comercialización evidentemente facilitó compra de tierras y la supervivencia de la comunidad. Al mismo tiempo, no había una tendencia en cualquier generación a que aquellos con más herencia compraran más tierra que los con menos herencia. El análisis de regresión indica que para los comuneros de ambas generaciones no hay relación significativa entre sus herencias y la cantidad de tierra que compraron en el mercado⁶. Es decir que, en ninguna de las dos generaciones hubo una tendencia a que herederos más ricos necesariamente expandieran sus predios más que aquellos que heredaron poca o ninguna tierra.

Además, parece que existieron fuerzas para frenar la acumulación de propiedad de una fracción de comuneros. Aunque el cuadro 3 indica que el 45% de la muestra con más de 35 años realizó movilidad hacia arriba, al análisis indica que la movilidad hacia abajo fue más común entre los hijos de padres más ricos. El 20% de los padres con más tierra (N=15) tuvo entre 3.5 a 8.5 hectáreas (promedio de 5.8 hec-

6 El grupo de los padres heredó un promedio de 0.54 hectáreas de tierra (median = 0.18, range = 3.5, standard deviation = 0.81) y compró un promedio de 1.1 hectáreas (median = 0.17, range = 9.2, standard deviation = 1.9). Las dos variables independientes, herencia y compras, explican toda la diferencia (16% y 84%, respectivamente) en la cantidad de propiedad privada (significado a un nivel de probabilidad menos de .01). Pero, la ecuación de "least squares", regresión de herencia en compras, $Y = 1.02 + .12X$ (s.e.b. = .25) con un 95% de intervalo de confianza de -.37 a .63, no es significativa. La segunda generación, los hijos, heredó un promedio de 0.41 hectárea de tierra (median = 0.13, range = 3.0, standar deviation = 0.61.). Este grupo compró un promedio de 0.37 hectárea (median = 0.07, range = 1.6, standard deviation = 0.81). Las variables independientes juntas explican casi toda la diferencia en la cantidad de tierra propia de la segunda generación ($p = < .01$, con cada variable independiente explicando más o menos porciones iguales). La "least squares", regresión de herencia en compras da la ecuación $Y = .28 + .21X$ (s.e.b. = .18) con un 95% intervalo de confianza de -.15 a .58, que tampoco es significativa.

táreas)⁷. De sus hijos, 87% tuvo menos propiedad que los padres (variando entre 0.6 y 5.6 hectáreas, con un promedio de 1.8 hectáreas). Estos datos parecen contradecir el modelo leninista que sostiene que los campesinos más ricos se aprovechan de la comercialización para enriquecerse. Pero los resultados tampoco son totalmente sorprendentes, dada la tradición andina de partición igual de la herencia y dado que la mayoría de las familias minifundistas tienen que hacer esfuerzos tremendos para comprar tierras.

Resumen. El análisis de la adquisición de tierras por las dos generaciones en Santa Lucía indica que hubo notable movilidad hacia arriba, así como diferenciación en la generación de los padres. Pero no hay evidencia que esta estratificación fuera rígida para las dos generaciones, impidiendo la movilidad social y económica de los hijos. Al contrario, la diferenciación entre la segunda generación parece menos dura⁸. Al mismo tiempo que las unidades más grandes se fraccionan por herencia, alianzas matrimoniales y compras de tierras mejoran la posición relativa de comuneros con poca o ninguna herencia.

Hasta cierto punto, parece que la diferenciación juega un papel importante en el mantenimiento y supervivencia de esta comunidad minifundista. En cada generación, familias que acumularon capital, compraron tierras de la élite o la burguesía rural en decadencia⁹. Así

7 Esta comparación incluye solo familias de la muestra cuyo jefe tenía más de 35 años y sus padres.

8 La velocidad de diferenciación aparentemente se atrasó en la segunda generación. En la generación de los padres, los empresarios con más éxito lograron saltos relativamente grandes en aumentar su propiedad comparado con sus hijos. Por eso, había mas variancia ("variance") en el tamaño de propiedades entre la primera generación que entre la segunda generación. La "standard deviation" para propiedad de los padres es 2.1, comparada a 1.0 para sus hijos.

9 Los comuneros de la generación de los abuelos, en 1981, compraron tierras de Tomás López Naranjo (heredero de la élite colonial). Algunos de los padres compraron tierras de Joaquín E. Arias a fines de los años 20 y primeros años de los 30. Después de perder un juicio que iniciaron a las comunidades indígenas, Joaquín Arias cedió a "la comuna de Tisaleo" 43.7 hectáreas disputadas (Registro de Propiedad de Ambato, 1977, #1541). Unos pocos años después, vendió la mayor parte de su tierra en Santa Lucía en 23 parcelas de pequeño y mediano valor (entre 50 y 1.200 sucren cada una). En 1939, Arias vendió el núcleo de la hacienda (la venta final) por 9.000 sucren a Juan Paredes, miembro de la burguesía provincial. En los años 50 y 60, Paredes vendió las parcelas al campesinado local.

trajeron nuevas tierras dentro de la comunidad. Esas tierras, generalmente no fueron vendidas después a gente fuera de la comuna. De ese modo, las unidades grandes fueron progresivamente fragmentadas. A medida que se fraccionaban las propiedades, comuneros con menor poder adquisitivo pudieron comprar lotes pequeños. Dentro de Santa Lucía no se desarrolló una diferenciación permanente porque, en cada generación, la dinámica interna de minifundismo quebró, por medio de la herencia, las unidades que habían crecido, impidiendo el surgimiento de una clase 'farmer'. Así, la comunidad de Santa Lucía parece subsistir en un estado de equilibrio dinámico.

El páramo: la revolución en el uso de la tierra

Históricamente, el páramo fue la fuente de pasto natural tanto para las comunidades indígenas como para los españoles. Periódicamente, hacendados de la zona de Santa Lucía usurparon partes del páramo, y por lo menos en dos ocasiones (1883 y 1927) trataron de extender la frontera agrícola en el páramo comunal porque las tierras vírgenes darían varios años de rendimientos altos. En las dos veces, las comunas lindantes al páramo rechazaron las intrusiones y defendieron el uso tradicional de la tierra. No obstante, algunos informantes en Santa Lucía expresaron que había interés por parte de los comuneros en cultivar el páramo aún en los años 20.

Al inicio de la década del 70, el gobierno de Rodríguez Lara fomentó, enérgicamente, tal cambio. Representantes del Ministerio de Agricultura visitaban Santa Lucía anualmente para animar a "un uso más productivo de la tierra". Pero, en estos años, poderosos comuneros pastoreaban animales en el páramo (algunos informantes recuerdan que se pastoreaban hasta 200 cabezas de ovejas por familia, en los años 60) y se opusieron a su cultivo. Tradicionalmente, los dueños tienen que pagar multas si sus animales dañan las cosechas.

En el año 1973, algunos comuneros, apoyando el cambio a la agricultura, sembraron eucaliptos en el páramo, bajo la protección de la policía provincial. Dos años después, varios miembros poderosos del grupo 'ganadero' se unieron con el grupo 'agricultor' y formaron una cooperativa para cultivar el páramo en común. Aunque la cuota fue so-

lo de 10 sueldos en el primer año, los comuneros más pobres, dependientes de su jornal para comprar su sostenimiento diario, no se inscribieron en la cooperativa. Los pobres no pudieron esperar para la ganancia semestral de la siembra comunal, ni tampoco pudieron pagar las contribuciones para insumos. Otros comuneros más pudientes también se quedaron fuera de la cooperativa en los primeros años.

En 1979, los miembros de la cooperativa (siguiendo la iniciativa de otras cooperativas que explotaban el páramo) decidieron repartir lotes para usufructo privado. Como es de suponer, los comuneros que no formaban parte de la cooperativa (incluyendo los de las comunidades más bajas) se opusieron enérgicamente. Finalmente, un arreglo permitió que una parte del grupo de oposición entrara en la cooperativa de Santa Lucía Arriba. Además, el IERAC fijó oficialmente los linderos de la comuna, excluyendo del acceso al páramo a las comunidades no contiguas.

El análisis siguiente trata de los efectos de la ‘privatización’ del páramo: 1) el impacto ecológico en el páramo mismo y en el abastecimiento de aguas para la hoyada de Ambato; 2) su importancia socioeconómica para la comunidad. Los cambios en el páramo ocurrieron con rapidez. En 1979, el gobierno dividió las 1.968 hectáreas de la tierra comunal de Tisaleo entre cuatro comunidades que continuaron convirtiéndolo rápidamente a la agricultura. A fines de 1982, las comunidades cultivaban el 40% del páramo. De la tierra cultivada, aproximadamente, el 16% estaba manejada colectivamente, y 84% estaba en usufructo privado (Hoffmeyer n.d.: 36) Hacia fines de 1983, con el incremento en el número de lotes en usufructo privado, solo en Santa Lucía, 50% del páramo de Tisaleo estaba cultivado. Sin duda, este total es más alto hoy en día. Esa rápida conversión de pasto natural a la agricultura ocurrió no solamente por la falta de tierra del campesinado, sino también por el cambio de la definición legal del páramo que pasó del control de las comunidades indígenas al Estado. Aunque solo fue un cambio de definición legal, los efectos prácticos fueron enormes. Los comuneros sostuvieron que un mayor cultivo del páramo era la única manera de asegurar su reclamo legal contra el Estado y contra las comunidades cuyo acceso al páramo fue negado por el convenio del IERAC formalizando los linderos.

Los efectos ecológicos de la revolución en el uso del páramo han sido fuertes. Los declives en el páramo son muy empinados y ya en

1983-84, la erosión causada por las lluvias y los vientos había hecho efecto. Además, el uso de tractores para el arado era común en 1983-84 por falta de mano de obra (tanto doméstica como asalariada) debido a la expansión rápida de tierra disponible. El Estado subvencionó maquinaria para el uso comunal. Lamentablemente, los tractores no pueden arar por la curva de nivel en declives pendientes, y tienen que trabajar de arriba abajo, arrancando, de este modo, la capa superior del suelo de las cumbres de las colinas. El uso de maquinaria pesada en los suelos volcánicos que son relativamente jóvenes en Tungurahua, estaba destruyendo su estructura. Finalmente, el abastecimiento de agua para la hoyo de Ambato potencialmente puede ser afectada por la conversión extendida de pasto natural a cosechas anuales. En la hoyo de Ambato, el riego para la zona baja donde se cultivan frutas, depende casi totalmente de las lluvias que se infiltran en la ‘esponja’ de vegetación espesa del páramo. Con la destrucción de la ecología natural del páramo, el agua de las lluvias corre más rápido, comprometiendo su abastecimiento para el riego. En 1983-84, pocos años después de la mayor conversión, había ya un aumento de sedimento en las canales de riego e inundaciones en la zona baja.

Aunque el impacto ecológico de la transformación del páramo fue negativo, el efecto en aumentar la tierra aprovechable en Santa Lucía fue positivo, pero su influencia en mejorar la distribución no fue de suficiente alcance. Contando solo tres de los cuatro lotes de usufructo privado en el páramo, la generación actual compensó por su falta de compras¹⁰. Para ese grupo, el promedio de tierra disponible alcanzó a 1.7 hectáreas (incluyendo usufructo del páramo, herencia, compras y otras fuentes), comparado a las 1.6 hectáreas de sus padres¹¹.

El agregar lotes de usufructo en el páramo alivió parcialmente la desigualdad en la estructura agraria. El cuadro 4 compara la desigualdad en Santa Lucía con/sin lotes del páramo e indica que su adición igua-

10 El cuarto lote fue repartido en diciembre de 1983, pero no está incluido en este análisis porque no fue desmontado.

11 Esta comparación no incluye tierras que los padres tuvieron en aparcería. Esta cantidad varió durante las diferentes etapas del ciclo de vida de los padres y fue difícil enumerar para el estudio.

ló las porciones de tierra disponible a todos los grupos, menos a los más pobres. Aunque el 19% de los dueños poseía el 62% de la tierra privada, su porción disminuyó a 46% con la adición de lotes en usufructo. El grupo de minifundistas medianos, 58% de la muestra, tenía el 31% de la tierra privada, pero el 50% de la tierra aprovechable. El grupo más pobre disponía de solo el 7% de la tierra privada y 4% de la tierra disponible.

La pobreza, para esta generación de comuneros, por definición, fue resultado de su incapacidad de afiliarse a la cooperativa que explotaba el páramo. Además, los pobres no pudieron hacer compras de tierra; no participaron en el ciclo generacional de movilidad hacia arriba o hacia abajo, sino que se estancaron en la pobreza. Seis por ciento de los jefes de familia de la generación actual a la segunda generación vivieron sin tierra propia, y un porcentaje igual subsistieron con parcelas minúsculas, sin hacer compras hasta el año de este estudio (algunos vendieron tierras). La siguiente parte revisa los factores que están asociados con la pobreza en Santa Lucía.

Los pobres

El cuadro 5 indica que hasta 1983-84, 78% de la comunidad total, pero solo 29% de los más pobres, se habían inscrito en la cooperativa y pudieron recibir lotes en usufructo privado. La alta dependencia de familias sin (o casi sin) tierra de su jornal diario deja poco tiempo para la agricultura o para el día de trabajo comunal que tienen que dar los miembros de la cooperativa cada semana. Además, en el año de este estudio, la cuota de 30.000 sucrens de ingreso, efectivamente excluyó a la mayoría de los jornaleros. Aunque hay familias jóvenes entre los más pobres, este grupo tiene una edad promedio de 54 años, los más viejos de los tres estratos. Por eso, tuvieron menores posibilidades de ganar por medio de migración o trabajo artesanal. Igual importancia tiene la falta de apoyo de la familia para el grupo más pobre. Este sistema de ayuda y sostenimiento es decisivo para la supervivencia, así como para el avance del campesinado. El cuadro 5 muestra que el 65% de los más pobres tuvo jefes de familia que fueron viudos, divorciados o solteros. Además, el porcentaje de jefes de familia mujeres es más alto en el grupo más pobre.

Sin embargo, es importante subrayar que el proyecto de cultivar el páramo mejoró la vida de los pobres en varios aspectos. Los que pudieron afiliarse a la cooperativa (los del grupo medio bajo) insistieron en que su alimentación mejoró, sus hijos se enfermaron menos, y vendieron más en el mercado. Además, hubo otros efectos indirectos. Una creciente demanda de la mano de obra en la zona ocurrió debido a la expansión rápida de la tierra disponible y debido a las exigencias del trabajo colectivo. Los jornales de la zona subieron, beneficiando relativamente a los más pobres. Finalmente, el nivel de vida para la comunidad entera mejoró. La comunidad invirtió las ganancias de la producción colectiva junto con el trabajo comunal en la construcción de obras públicas que beneficiaron a toda la comunidad (incluyendo una escuela, una casa comunal, una clínica, una red de carreteras y una capilla).

El impacto de la adquisición de tierra en el ingreso familiar

Los comuneros de Santa Lucía (la muestra total) consiguieron tierras de varias fuentes: 62% heredó propiedad, 55% compró tierra, y 78% recibió páramo en usufructo privado. El cuadro 6 revisa los datos de los varios tipos de tierra. Las familias comuneras heredaron un promedio de 0.41 hectárea, compraron un promedio de 0.36 hectárea y recibieron un promedio de 0.95 hectárea en usufructo en el páramo (ver nota N°. 8). La variación es menor en la tierra heredada (.37), seguido por el páramo (.45) y la tierra comprada (.66). Una pequeña cantidad de tierra estuvo disponible por otros medios como arriendo y aparcería¹². Las diversas fuentes dan un promedio de 1.78 hectáreas de tierra disponible para las familias de Santa Lucía con una distribución de 0 a 6.45 hectáreas¹³.

Al examinar la ecuación de 'least squares', regresión del ingreso familiar en tierra, es importante controlar, al inicio, el tamaño de la fa-

12 Los reportes de aparcería probablemente fueron incompletos porque fue ilegal durante el tiempo del estudio. La extensionista que trabajaba en Santa Lucía Arriba para el Proyecto Tungurahua frecuentemente condenó la aparcería y advirtió a los comuneros que la denunciaría.

13 La tierra que ya fue repartida entre herederos está descontada en estos datos.

milia. La ecuación muestra que las variables 'trabajadores' y 'tierra' juntas explican 55% de la variación en el ingreso familiar, e indica que añadir 1.45 hectáreas de tierra (una 'standard deviation', ver cuadro 6) aumenta al ingreso familiar promedio a 34.504 sures.

Ingresa familia - $7.460 + 4.308$ (trabajos.) + 34.504 (tierra disponible)
(s.e.=5.099) (s. e.=5.766)
0.8 5.9*

R²-adj. = .55

* $p < .01$

Como noté anteriormente, los comuneros de Santa Lucía tuvieron varias fuentes de acceso a la tierra. El cuadro 1 muestra que una ‘multivariate equation’ (controlando trabajadores familiares) aumenta la porción explicada a 65% y, más importante, muestra los efectos distintos de los diferentes tipos de tierra. La variable ‘herencia’ no es significativa en esta ecuación, pero sí son significativas las variables ‘compras’ y ‘páramo’. Además, el tamaño de la mano de obra familiar es importante, pero la adición de 1.6 trabajadores familiares solo aumenta el ingreso familiar a 9.318 sucre (una cantidad mínima y mucho menos que el ingreso promedio por persona de 23.765 sucre).

Tanto las 'compras' como el 'páramo' incrementan el ingreso familiar promedio. El cuadro 6 indica que las 'standard deviations' son casi iguales (compras = 0,69; páramo = 0,67). No obstante, la 'multivariate equation' del cuadro 7 predice que la adición de una 'standard deviation' de tierra comprada mejora el ingreso familiar 2,5 veces más que la adición de una 'standard deviation' del páramo. Este resultado probablemente depende de varios factores. El páramo está distante, lo que incrementa el tiempo de ida y vuelta a las parcelas y probablemente reduce la cantidad total de trabajo invertido en las cosechas del páramo. Además, el riesgo es mayor porque las heladas dañan casi una cosecha de cada cuatro. Finalmente, muchos comuneros relegaron el páramo para la subsistencia o cosechas de baja remuneración y se cultivaron las cosechas potencialmente más valiosas en las tierras privadas que son más bajas y más cerca de las casas donde podrían guardarlas contra el robo.

Es más difícil explicar el efecto de la variable 'compras' en mejorar el ingreso familiar. Es posible que la tierra comprada sea de mejor calidad¹⁴. También, es posible que esta variable mida, en parte, las cualidades empresariales del comprador. Según esa interpretación, las familias que pueden acumular capital para hacer compras saben manejar mejor su producción, o siembran productos como cebolla o ajo que ocasionan más riesgo, pero que tienen un valor potencial más alto.

La segunda línea de análisis sugiere que los empresarios se enriquecen durante su vida. Si esto es así, la evidencia es menos clara con respecto a que esta pauta continúe por más generaciones. Los resultados de este estudio, indicando que la tierra heredada no tiene ningún efecto significativo en el ingreso familiar, sugieren que entre minifundistas no hay una tendencia a largo plazo hacia la concentración de la riqueza. Una mayor herencia aparentemente no significa una ventaja especial en aumentar el ingreso familiar de los minifundistas. Estos resultados, así como la falta de correlación entre herencia y compras, indican que en este estrato socioeconómico no hay una pauta consistente sobre que la riqueza engendra riqueza. En cada nueva generación parece que surgen nuevos empresarios campesinos. Espero que estos resultados puedan ser probados en otros lugares.

Conclusiones

La investigación mostró que en Tisaleo, con su mercado activo de tierra, una porción significativa de minifundistas de Santa Lucía pudo comprar propiedad. El mercado de tierras pareció igualar la oportunidad para muchos campesinos. El pequeño tamaño de las parcelas en venta facilitó las compras de las familias con bajo poder de consumo.

14 Variaciones en la calidad de la tierra no fueron medidas en este estudio. Es posible que la tierra comprada sea de mejor calidad. Las haciendas frecuentemente tienen tierras planas, por lo menos en una parte de su predio y una porción de las tierras compradas por los campesinos fue de las haciendas. Pero, también parte de la tierra heredada en la comunidad fue la tierra comprada de la generación anterior. Las diferencias en la calidad de la tierra probablemente no son suficientemente consistentes para explicar toda la diferencia entre la tierra comprada y la tierra heredada.

El estudio también sugirió que en Santa Lucía había obstrucciones para una diferenciación uniforme y permanente de minifundistas en el transcurso de dos generaciones. Más importante aún, la investigación indicó que existía un pequeño grupo de comuneros estancados en la pobreza por dos generaciones, sin poder beneficiarse del mercado de tierra.

El impulso del gobierno para aumentar tierra cultivable por medio de la conversión del páramo a la agricultura ayudó a más comuneros que se beneficiaron del mercado de tierras. El cultivo del páramo ayudó a aumentar significativamente los ingresos familiares. No obstante, esta iniciativa pasó por alto a más de un quinto de la comunidad. El gobierno sancionó esta ley, pero hizo poco para asegurar que los más pobres recibieran tierra. Aunque las juntas directivas de la cooperativa, por lo general, gobernaron honradamente, operó dentro del contexto del capitalismo (la libre empresa). Después de poco tiempo, los más pobres no tuvieron recursos para pagar la cuota de entrada, y no había mecanismos para darles mucha ayuda especial. De igual importancia, la iniciativa del gobierno no tomó en cuenta el problema del medio ambiente. La erosión empezó a ser un problema serio pocos años después del desmonte extenso del páramo. El abastecimiento de agua para la hoya de Ambato puede estar en peligro.

Un proyecto destinado a aumentar los predios del campesinado por medio de los mercados de tierra plantea la pregunta de si tal impulso puede acelerar la diferenciación económica del campesinado. La respuesta es probablemente afirmativa, si este impulso opera según las reglas del mercado libre. Los resultados de este estudio sugieren que durante la época de los padres, cuando se podía conseguir más tierra en el mercado, la movilidad hacia arriba fue significativa y, al mismo tiempo, la diferenciación fue más fuerte que la de los hijos. Este estudio también muestra que la diferenciación en Santa Lucía entre minifundistas no era permanente, y que había movilidad hacia arriba y hacia abajo en cada generación. No obstante, el punto fundamental para un proyecto de desarrollo es que las intervenciones desde afuera de las comunidades deben hacer esfuerzos especiales para igualar la oportunidad. Deben ayudar no solo a los campesinos empresarios, sino también tienen que tratar de que los más pobres puedan disfrutar de más tierra.

Cuadro N° 1**La estructura agraria de la provincia de Tungurahua,
cantón Ambato, parroquia Tisaleo**

Tamaño de los predios (há.)	PROVINCIA DE TUNGURAHUA				CANTON AMBATO				PARROQUIA TISALEO			
	Número	%	Area	%	Número	%	Area	%	Número	%	Area	%
sin tierra	211	(1%)	0	(0%)	152	(1%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)
0-1	16.183	(53%)	7.234	(5%)	8.975	(57%)	3.948	(6%)	794	(63%)	373	(3%)
1-2	7.466	(24%)	10.340	(7%)	4.154	(26%)	5.713	(9%)	228	(18%)	320	(3%)
2-5	4.653	(15%)	14.594	(10%)	2.033	(13%)	6.119	(10%)	185	(15%)	568	(5%)
5-10	907	(3%)	6.145	(4%)	292	(2%)	1.961	(3%)	39	(3%)	259	(2%)
10-5	792	(3%)	15.507	(10%)	222	(1%)	3.773	(6%)	18	(1%)	333	(3%)
50-200	253	(0.9%)	20.359	(14%)	22	(0.1%)	1.909	(3%)	1	(0%)	71	(1%)
200+ privada	44	(0.1%)	50.688	(34%)	13	(0.1%)	20.851	(33%)	1	(0%)	2844	(2%)
200+ comunal*	12	(0.0%)	24.006	(16%)	8	(0.0%)	19.006	(30%)	3	(0.2%)	9.500	(81%)
Total	30.521	(100%)	148.873	(100%)	15.871	(100%)	63.280	(100%)	1.269	(100%)	11.708	(100%)

FUENTE: INEC, 1979

* Incluye tierras de comunas, cooperativas, instituciones, sociedades, también como tierra comunal en usufructo privado.

Cuadro N° 2

Las fuentes de tierra privada de la generación actual
(Estatificada según tierra disponible) Comparada a la tierra de los padres*

Estratos	Nº de casos	TIERRA PRIVADA DE LA GENERACION ACTUAL (en hectáreas promedias)						TIERRA PRIVADA DE LOS PADRES (en hectáreas promedias)						
		Herencia	(%)	Compras	(%)	Total	(%)	Nº.	Herencia	(%)	Compras	(%)	Total	(%)
Alto	10	1.18	46%	1.37	54%	2.55	100%	19	0,90	31%	2.02	69%	2.92	100%
Medioalto	11	0.31	46%	0.36	54%	0,67	100%	20	0.44	43%	0.85	57%	1.48	100%
Mediobajo	9	0.34	72%	0.13	28%	0.41	100%	15	0.63	43%	0.85	51%	1.48	100%
Bajo	11	0.27	99%	0.004	1%	0,27	100%	15	0.12	13%	0.79	87%	0.91	100%
Total	41	0.52	53%	0.46	47%	0.98	100%	69	0.54	31%	1,20	69%	1.74	100%
> de 35 años	Sin datos = 6													
Total	12	0.05	77%	0.015	23%	0.065	100%	22	0.54	43%	0.71	59%	1.25	100%
< de 35 años														
No. total = 53		No. total = 91												

* La generación actual dividida a los 35 años. Los comuneros con más de 35 años están estratificados según su tierra disponible, y están comparados a sus padres (quienes no están estratificados independientemente),

Cuadro N° 3**La movilidad económica de la generación actual***

Estratos	No. de casos	Más tierra que los padres	Menos tierra que los padres	Sin cambio con tierra	Sin cambio sin tierra
Alto	20	55%	35%	10%	0%
Medioalto	20	50%	45%	5%	0%
Mediobajo	16	31%	63%	0%	6%
Bajo	17	41%	35%	12%	12%
Total	73	45%	44%	7%	4%
> de 35 años	Sin datos = 2				
Total	22	5%	85%	5%	5%
< de 35 años					
No. total	= 95				

* Los datos comparan comuneros casados independientemente a sus padres.

Cuadro N° 4**La estructura agraria de Santa Lucía Arriba en 1983-84: comparación de la desigualdad con y sin el páramo***

Estratos	# Comuneros	% de tierra privada	% de tierra disponible
Alto	19%	62%	46%
Medio alto	24%	19%	26%
Medio bajo	34%	12%	24%
Bajo	23%	7%	4%
Total	100%	100%	100%
	N = 53	N = 41.0 hás.	N = 90.8 hás.

* Incluye las tierras privadas y el páramo en usufructo privado, pero excluye la tierra en arrendamiento y aparcería.

Cuadro N° 5

**Las características socio-económicas
de tres estratos en Santa Lucía Arriba**

Tierra disponible (há.s.)	N de casos	Edad promedio	% viudos o solteros	% mujeres	Trabajadores familiares (N Promedio)*	% familias dependientes de jornales**	% familias con páramo
2-2.5	17	49	18%	12%	4.2	6%	100%
1-2	19	41	21%	21%	2.8	11%	100%
0-1	17	54	65%	35%	2.3	70%	29%
Total	53	48	34%	23%	3.1	28%	78%

* El número de trabajadores está calculado según edad (vea nota No. 12).

** Incluye familias que consiguen 50% o más de su ingreso familiar de jornales.

Cuadro N° 6

**“Means” y “standard deviations” (51 casos) para las variables:
tierra, trabajadores, e ingreso (en sucres)**

	Mean	S. D.
Herencia	0,42	0,62
Compras	0,31	0,69
Páramo en usufructo	0,96	0,67
Otra tierra	0,09	0,18
Total tierra disponible	1,77	1,42
Trabajadores familiares	3,08	1,61
Ingreso familiar	s/ 81.936	s/ 70.820
Ingreso por persona	s/ 23.765	s/ 16.632

Cuadro N° 7**Regresión de ingreso familiar (sucres) en las variables de tierra, controlando el tamaño de la familia**

	Ingreso familiar (r)	
"Intercep"		s/ 7.328
Trabajadores familiares	.50 (.00)	s/ 9.318 * (4.770) (1.9)
Herencia	.32	s/ 2.720 (11.407) 0.23
Compras	.73 (.00)	s/ 62.644 * (8.991) 6.9
Páramo en usufructo	.48 (.00)	s/ 24.499 (10.120) 2.4
Otra tierra	.22 (.11)	s/ 15.976 (34.141) 0.46

BIBLIOGRAFIA

- Archetti, Eduardo P. Y Kristi Anne Stolen. 1981. "Burguesía rural y campesinado en la sierra ecuatoriana", en: *Campesinado y estructuras agrarias en América Latina*. Quito: CEPLAES.
- Arcos, Carlos y Carlos Marchán. 1978. "Apuntes para una discusión sobre los cambios en la estructura agraria serrana", *Revista Ciencias Sociales*, 2: 13-51.
- Barsky, Osvaldo. 1978. "Iniciativa terrateniente en la reestructuración de las relaciones de producción en la sierra ecuatoriana: 1959-1964", *Revista Ciencias Sociales*, 2(5): 74-126.
1984. *Acumulación campesina en el Ecuador*. Quito: FLACSO
- Chayanov, A. V. 1966. "Peseant Farm Organization", Moscow: Cooperative Publishing House, 1925, Reprinted in *The teory of peasant economy*, edited by D. Thorner, B. Kerblay, and R.E.F. Smith, pp. 29-277. Homewood, 111: Richard D. Irwin.
- CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola). 1965. *Ecuador: tenencia de la tierra y desarrollo socio económico del sector agrícola*. Washington, D.C.: Organization of American States.
- de Janvry, Alain. 1981. *The agrarian question and reformism in Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Durrenberger, E. Paul. 1979. "An Analysis of Shan (Thailand) Household Production Decision". *Journal of Anthropological Research* 35: 477-480.
- Hoffmeyer, Hans. n.d. "Pertil de la subárea Tisaleo, Proyecto DRI Tungurahua", Unpublished report for the Integrated Rural Development Project, Tungurahua.
- IERAC (Instituto de Reforma Agraria y Colonización). 1979. *II Censo agropecuario, 1974: Tungurahua*. Quito: INEC.
1984. "20 Años de Reforma Agraria en el Ecuador: 1964-1984", Quito: IERAC.
- Lehmann, David. 1986. "Sharecropping and the Capitalist Transition in Agriculture: Some Evidence from the Highlands of Ecuador", *Journal of Development Economics*, 23: 333-354.
- Martínez, Luciano. 1980. *De campesinos a proletarios*, Quito: Editorial El Conejo.

- Murmis, Miguel. 1980. "El agro serrano y la vía prusiana de desarrollo capitalista", en Osvaldo Barsky, et. al., *Ecuador: cambios en el agro serrano*. Quito: FLACSO-CEPLAES.
- Nag, Moni; Benjamín N.F. While y R. Creighton Peet. 1978. "An Anthropological Approach to the Study of the Economic Value of Children in Java and Nepal". *Current Anthropology* 19: 293-306.
- Rosero Garcés, Fernando. 1982. "El proceso de transformación-conservación de la comunidad andina: El caso de las comunas de San Pablo del Lago", en: *Reproducción Campesina*, Quito: IIE y PUCE.
- Salomon, Frank. 1973. "Weavers of Otavalo", in Daniel R. Gross (Ed.), *Peoples and cultures of native South America*. Garden City, N.Y.: Doubleday/The Natural History Press.
- Zevallos, José Vicente. 1985. "Oil, Power and Rural Change in Ecuador: 1972-1979", Unpublished Doctoral Thesis in Development Studies, University of Wisconsin-Madison.

Mercado de tierras en Ecuador¹

Efectos del mercado de tierras

*El mercado formal y su relación con la producción,
productividad y uso racional de la tierra*

Las potencialidades productivas de cada zona, las exigencias que varían respecto a la inversión de capital requerida en cada caso y los cálculos de rentabilidad, están en la base de diferentes formas de funcionamiento del mercado de tierras, como también de los diversos procesos de reordenamiento estructural. Cada zona presenta potencialidades específicas y, por lo tanto, atrae agentes diversos y genera diferentes tipos de unidades de producción.

En términos generales se puede afirmar que dentro del campesinado costeño estarían en marcha dos estrategias centrales. Por una parte, un sector tiende a consolidar su posición pasando de la condición de subsistencia a la de pequeño productor empresarial. El desarrollo de esta estrategia requiere recursos adicionales (crédito, tecnología, comercialización) que permitan una reconversión de las prácticas culturales y/o aumentos de productividad en los cultivos tradicionales. La consolidación de esta estrategia está condicionada al acceso a los recursos financieros y a formas de articulación ventajosa con redes y canales

¹ Este artículo corresponde a dos capítulos, el 4 y el 5, tomados de *Mercado de Tierras en el Ecuador; estudio integrado, regiones litoral y sierra*. Roma: COTECA- FAO, 1995

de comercialización. Desde otro ángulo, los campesinos que mantienen su condición de propietarios o de posecionarios sin alterar sus comportamientos tradicionales, caen en un proceso de deterioro básicamente por disminución de sus bases de reproducción. La viabilidad de esta última estrategia está presionada por una incidencia cada vez mayor de la lógica empresarial que los acosa convirtiéndoles en potenciales oferentes de tierras. Su mantenimiento como propietarios está condicionado a la posibilidad de incrementos productivos y de protección estatal mediante adecuadas políticas de precios y comercialización.

En las zonas más empresariales, los capitales que provienen de la economía urbana están interesados en desarrollar el campo agrícola-ganadero-bioacuático, donde los mercados auguran alta rentabilidad.

La combinación de lógicas campesinas y empresariales, y particularmente el hecho de que en algunas áreas la consolidación de medianos y pequeños propietarios haya adquirido cierta fuerza, viene generando una escasez relativa de tierras en el mercado, que empuja los precios hacia arriba. Es claro que el alza de los precios de la tierra que se da en áreas potencialmente ricas, impone nuevas presiones a los campesinos tradicionales que intentan mantener su condición de propietarios, a veces sin suficiente apoyo para conseguirlo.

En el caso de la Sierra, las zonas que muestran más dinamismo son aquellas en las que se ha desarrollado una base productiva de alta rentabilidad y con ventajosas articulaciones al mercado externo. También en este caso los potenciales productivos, las exigencias de inversión y el cálculo de rentabilidad, son las variables decisivas en el comportamiento del mercado de tierras. Así por ejemplo, a partir de 1986, la demanda de tierras aptas para nuevos cultivos en Cayambe, identificó que el asoleamiento directo bajo los 0° otorgaba importantes ventajas para la producción de flores. Tuvo lugar, entonces, un cambio en la especialización de la zona del valle hacia la floricultura, atrayendo altos niveles de inversión y nueva tecnología. Como consecuencia se produjeron nuevas inversiones, procesos tecnificados de producción, demanda de mano de obra femenina, incremento del poder de compra de las familias campesinas y mayor demanda de prendas de vestir y electrodomésticos. Se valorizaron las tierras del valle y de las laderas, especialmente las que contaban con riego y se dinamizó el mercado libre, en un proceso constante de revaloración de la tierra con potencial

para la floricultura. En definitiva, a propósito de la incorporación de un rubro productivo se produjo una sustantiva modificación en la estructura. El capital extranjero que compró estas tierras es, en su mayoría, de origen colombiano. Podemos citar los grupos Carvajal y Cai-cedo, entre otros. El capital nacional pertenecía a empresarios serranos, aunque también participaron banqueros e industriales ligados a la producción de palma africana que han incursionado en este rubro. Se ha conformado un grupo empresarial poderoso que se apoya en alta tecnología holandesa y colombiana, con oficinas de comercialización en Estados Unidos y en Europa y altos niveles de utilidad. La situación someramente descrita, presiona sobre los campesinos tradicionales y sobre la descolectivización de la tierra, produciéndose procesos que alientan la oferta estimulada por los precios altos. Debe anotarse, sin embargo, que el proceso no es lineal, habiendo casos en los que frente a una demanda en avance, se insertan mecanismos especulativos, mediante los cuales, 'intermediarios' compran tierra, sin pensar necesariamente en las posibilidades de inversión, sino con el propósito de construir una oferta intermediada. Lo dicho se puede apreciar por la existencia de un grupo de 'oficinas de mandato' o de 'compra-venta de bienes raíces' que se han instalado en la cabecera cantonal y que actúan, ya sea en la cadena de intermediación, con la ventaja de ser 'co-nocedores' de la zona u otras veces, acaparan tierras, para con la ganancia obtenida en las ventas convertirse luego, en empresarios agrícolas. En todo caso, lo relevante es que el potencial productivo y las modificaciones en el patrón de cultivo, aparejado a las formas de vinculación al mercado, inciden en el reordenamiento fundiario y en la recomposición de los actores que en él actúan. También es notorio que en estas dinámicas, la posición del pequeño productor se restringe a constituir una oferta potencial, que se ve acosada por una demanda agresiva. La situación descrita es de difícil modificación, en tanto no se equilibren las posibilidades de acceso a la inversión, a la tecnología y no se establezcan políticas macro y sectoriales que ofrezcan horizontes de rentabilidad a la producción doméstica. En los casos en que tales condiciones se han dado, se ha logrado la consolidación de la pequeña propiedad, tal es la situación de los cebolleros de la zona de Cangahua que han logrado constituirse en un pequeño empresariado, con posibilidades de negociar ventajosamente con el capital.

Proceso similar se observa en Cañar, particularmente en la zona alta donde, desde hace 6 o 7 años, el sistema productivo se ha orientado con preferencia hacia la ganadería, ante la baja rentabilidad de los cultivos agrícolas y la escasez de fuerza de trabajo. Esto último se debe a la migración de la población masculina hacia la Costa y a los Estados Unidos. La mayor producción y productividad y los excedentes generados por esta actividad, han contribuido a valorizar las tierras de la zona, apoyar la constitución de una mediana propiedad y alentar el mercado de tierras.

Debe anotarse, sin embargo, que la dinámica del mercado de tierras no está articulada necesariamente al uso racional del suelo o a una versión de manejo adecuado del recurso. Al contrario, la articulación potencial productiva, alta rentabilidad, mercado, si no va aparejada a regulaciones que guarden relación con la seguridad alimentaria y la conservación de recursos, al fin devendrán en procesos de degradación y agravarán las condiciones de empleo e ingreso en el sector.

El mercado informal

Ventajas y desventajas para los actores

Una razón importante para la persistencia de un mercado informal de tierras es, entre otras, los largos trámites requeridos para implementar y legalizar el derecho de propiedad, cuyos costos, especialmente para los pequeños productores rurales, campesinos sin tierra o población en pobreza crítica, son altos y por ende, inaccesibles. De otro lado, la legislación pertinente no reconoce el arrendamiento de predios rústicos ni permite los acuerdos de aparcería que, sin embargo, son mecanismos recurrentes en las áreas rurales de la Costa y la Sierra.

Tanto el arrendamiento como la aparcería se pactan mediante acuerdos verbales que tienen por objeto el usufructo y no la propiedad de la tierra, durante un plazo determinado por las partes. De esta manera, los acuerdos se establecen directamente, sin recurrir a la mediación o regulación estatal, y en esta medida el acceso al recurso no tiene costo alguno.

En la Sierra, los acuerdos se realizan dentro de la comunidad y no tienen lugar con personas ajenas a ella. Incluso, en algunos sectores existen normas claras para impedir la compra o el acceso a la tierra a miembros de otras comunidades y más aún a personas de fuera. Las siembras al partir o a medias permiten el acceso a la tierra especialmente a familias jóvenes; posibilitan además la rotación de tierras, trabajo y capital, y constituyen una práctica que tiene una base económica pero que se sustenta en una red de relaciones familiares y parentales que permiten su desarrollo; forman parte de las interrelaciones productivas y sociales, en las que están en juego una serie de intercambios que constituyen manifestaciones de poder, de status político y social, de compadrazgo y amistad.

Sin embargo, en la medida que hay una mayor penetración del mercado y que la densidad de la población por hectárea aumenta, con la consiguiente presión sobre la tierra, los acuerdos verbales están dando paso a un proceso de legalización de las posesiones. Así, muchos herederos con extensiones de terreno recibidas de sus padres, siguen los juicios de posesión efectiva para obtener el título de propiedad. Igualmente, se legalizan los traspasos de tierras con la finalidad de obtener algún tipo de crédito.

En la Costa la situación es bastante similar. La existencia y permanencia de los mecanismos informales de acceso a la tierra refuerzan y otorgan validez a las relaciones simétricas, es decir, al desarrollo de una estrategia campesina que en las áreas más deprimidas permite la reproducción de las familias campesinas.

En todo caso, la operación de mecanismos informales de acceso a la tierra es cada vez menos significativa en términos de superficie cubierta y generalmente se reduce a las áreas de reciente colonización o a las comunas campesinas.

La persistencia del mercado informal se ha constituido, especialmente en el caso de la Sierra, en el único mecanismo que tienen las familias campesinas para sustentar estrategias de sobrevivencia que los protejan de los resultados de las políticas de ajuste y de las implicaciones que ellas tienen en el mercado laboral urbano. Por otro lado, tales mecanismos actúan como reguladores de la oferta, impiéndiendo, especialmente en el caso de las comunas, la proletarización absoluta.

La infraestructura productiva en el mercado de tierras

Tanto en la Costa como en la Sierra, la existencia de infraestructuras básicas de apoyo a la producción, particularmente, las de riego y la de acceso a los mercados, se ha constituido en un factor determinante para la dinamización del mercado de tierras.

En la Costa

La disponibilidad de infraestructura junto con la incorporación de la tecnología son elementos que con frecuencia se incorporan en el precio de venta de la tierra. Así, se puede hablar de un precio para la hectárea de banano con tecnología tradicional, de otro para la hectárea semitecnificada -probablemente con ciertas instalaciones de riego y lavaderos-, y de otro para la hectárea tecnificada que, además de lo anterior, posee empacadora, funicular, y quizás otras obras de infraestructura. Lo mismo se puede decir respecto al cultivo de camarón, donde lo que se vende son piscinas -no solo una extensión de tierras- que cuentan con elementos tecnológicos, cuyo costo puede ser muy variable.

En Quevedo se ofrecen principalmente predios aptos para la realización de cultivos de ciclo corto (soya, maíz, etc.), con o sin riego, cuyos precios por hectárea fluctúan entre 1.75 y 2.55 millones de sures. Pero hay también fincas que cuentan con cultivos permanentes: el precio de la hectárea cultivada con banano, sin incorporación de infraestructura ni elementos tecnológicos, es de 2.85 millones de sures.

Se comprueba la existencia de precios relativamente altos para los predios camaroneros, cuando cuentan con construcción de piscinas. El precio de la hectárea camaronera semitecnificada es de 4.50 millones de sures.

En la Sierra

La disponibilidad o no de infraestructura influye también, como en la Costa, en la determinación de los precios por el lado de la oferta. En las parroquias de Cajabamba y Sicalpa, en el cantón Colta, los precios de la tierra fluctúan entre dos y seis millones/ha (US\$1.000 a 3.000), dependiendo de la disponibilidad de riego, de la cercanía a las vías

principales y del grado de pendiente. En la zona de Gatazo, que son terrenos de buena calidad y con riego, la hectárea está valorada hasta en 12 millones.

En la zona de páramo, en Cañar, los precios de la tierra son elevados debido a que hay disponibilidad de riego, tienen la ventaja de la cercanía a la carretera panamericana y potencial para la producción ganadera.

Los minifundistas y trabajadores sin tierra frente a la dinámica del mercado de tierras

El análisis de los casos seleccionados para el estudio muestra que en los últimos años el mercado se ha constituido en la forma predominante de reasignación de la tierra. Los procesos de reestructuración del agro dependen cada vez más de dicho mecanismo, y cada vez menos de la intervención estatal que hasta la primera mitad de los años 80 representaba la vía privilegiada de asignación de aquel recurso.

La mayor importancia del mercado ocurre en el contexto de un rápido proceso de modernización del agro, cuya lógica estructuradora es el cálculo de la rentabilidad que pueden alcanzar diversas estrategias productivas, y uno de cuyos efectos es una tendencia al aumento del valor de las tierras agrícolas. Entre otros factores, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial, la introducción de nuevos cultivos, la presencia de empresas agroexportadoras y agroindustriales - que suelen actuar como entes fomentadores-, las bonanzas coyunturales de determinados mercados, vienen provocando alzas cíclicas en el precio de la tierra.

Los procesos de reasignación en curso significan una fuerte presión sobre el grupo de campesinos tradicionales que, por sufrir limitaciones en relación al acceso a recursos financieros, por dificultades para incorporar tecnologías modernas y por su posicionamiento desventajoso en el ámbito de la comercialización, no logran insertarse convenientemente en la lógica dominante. A pesar de la vigencia de una normatividad campesina tradicional que, en alguna medida, entorpece la completa 'liberalización' de la tierra con relación al mercado, la oferta monetaria proveniente de otros actores presentes en la escena agraria

acaba convirtiéndose, en algún momento, en una salida posible a la situación de estancamiento que vive el campesino tradicional.

Así, una primera constatación relativa a la participación del campesinado en el mercado de tierras es que un sector del mismo aparece como el principal oferente de tierras. Se trata, en general, del campesinado más tradicional, el mismo que aún está presente en todas las zonas, pero que viene siendo expulsado sistemáticamente del ámbito rural. Pero además, el análisis de los datos permite afirmar que buena parte de este sector de pequeños productores que se desprenden de su propiedad accedió a ella mediante la intervención del Estado, ya sea por reforma agraria, ya por colonización.

Las cifras son elocuentes. En cualquiera de los cantones, la mayor parte de las transacciones corresponde a pequeñas propiedades. Asimismo, una alta proporción de las transacciones corresponde a predios que, en algún momento, fueron adjudicados por el IERAC.

A su vez, la investigación muestra que en un alto porcentaje de las transacciones formales, el vendedor es un beneficiario de la intervención estatal, fenómeno especialmente notorio en las zonas más empresariales.

Es claro que en los cantones El Guabo, Quevedo y Cayambe, muchos de los beneficiarios de la intervención estatal, aquellos productores tradicionales que no lograron insertarse en las actividades productivas más rentables de las respectivas zonas, están desprendiéndose de sus fincas, parcial o totalmente. Igual sucede con el empresariado pecuario de corte rentable que al fin opta también por modificar sus inversiones.

De esta manera, las políticas redistributivas impulsadas desde el Estado, tanto a través de la reforma agraria como de la colonización -aparentemente exitosas en una visión estática, dada la importante superficie adjudicada-, han devenido en una fuente de oferta de tierras agrícolas, en cuanto los beneficiarios de la acción estatal no han dispuesto de recursos adicionales con los cuales impulsar un manejo eficiente de sus unidades de producción. A la luz de las consideraciones anteriores, la salvedad del caso de la zona arrocera resulta, sobre todo, del colectivismo de las formas de propiedad. Pero al estar en marcha un rápido proceso de privatización, también los beneficiarios de adjudicaciones del IERAC asentados en estas áreas, estarán crecientemente sujetos a la presión del mercado.

El desprendimiento por los campesinos de las propiedades que fueron adquiridas mediante la intervención estatal no es un fenómeno nuevo. Fauroux detectó que ya a fines de los años 70, muchos adjudicatarios de reforma agraria estaban siendo despojados de sus predios, y que la causa fundamental del despojo era el endeudamiento en que habían caído. Lo novedoso es la magnitud en la que esto está ocurriendo y el tipo de demandante de las tierras en venta. El mercado de tierras es hoy notablemente más activo, implica la expulsión desde las áreas rurales de más campesinos y constituye un escenario en el que se desenvuelven nuevos actores.

En conclusión, prácticamente en todo el país el mercado de tierras está acarreando un proceso de reestructuración fundiaria que afecta fundamentalmente a pequeños propietarios y, en las áreas en las que la acción redistributiva del Estado fue significativa, a los beneficiarios de dicha acción. Antiguos propietarios pauperizados, adjudicatarios de la reforma agraria y colonos constituyen la principal fuente de la oferta de tierras.

Conviene insistir en que, en el caso de la Costa, la población campesina que viene siendo expulsada del medio rural por las dinámicas del mercado de tierras difícilmente puede ser considerada un ‘campesinado sin tierra’. Como se ha visto, el fenómeno de la expulsión no es tan reciente, y probablemente constituye un flujo constante. Pero tampoco parece reciente lo que anotábamos respecto al destino de esta población. Fauroux, que es quien primero percibió este hecho, señala que “los más numerosos (de los campesinos expulsados) están siendo atraídos por la marginalidad urbana; hacen crecer particularmente los nuevos suburbios de aquellas pequeñas ciudades en formación que no eran, hace algunos años, más que ínfimos pueblitos o bien van a jugar su suerte en centros urbanos más importantes...” (Fauroux 1982:101) En este contexto, el campesino expulsado del campo experimenta un rápido proceso de urbanización que hace que no sea correcto definirlo como un campesino sin tierras.

Esta visión global relativa a la oferta de tierras no tiene un correlato en lo que se refiere a la demanda. Desde el punto de vista de la demanda no es posible arribar a tal nivel de generalización, puesto que los actores demandantes varían notoriamente de una zona a otra. Como se ha indicado, las potencialidades productivas de cada zona,

las exigencias variables respecto a la inversión de capital requerida en cada caso y el cálculo de rentabilidad, están en la base de diferentes formas de funcionamiento del mercado de tierras, como también de los diversos procesos de reordenamiento estructural. Cada zona presenta potencialidades específicas y, por lo tanto, atrae a diversos agentes y genera diferentes tipos de unidades de producción. Vale indicar, sin embargo, que resulta parcial, y errado, sostener que la única forma a través de la cual el campesinado participa del mercado formal es asumiendo el rol de vendedor. La expulsión de campesinos por las presiones que ejerce el mercado es la comprobación más evidente que surge del análisis ensayado en los capítulos precedentes, pero este sugiere además que respecto a los compradores se presenta una notable diversidad.

Una parte considerable de la demanda, especialmente en las zonas más empresariales, proviene de medianos y grandes propietarios, que actúan concentrando tierras. Asimismo, capitales provenientes de la economía urbana parecen interesarse en el campo agrícola-ganadero-bioacuático, cuando los mercados auguran alta rentabilidad a una actividad en particular. Sin embargo, en el intento por identificar los actores que participan en el mercado formal encontramos que hay también campesinos que adquieren tierras.

Tanto la vigencia de lógicas campesinas en algunas zonas, como la existencia de procesos de diferenciación al interior del sector de pequeños productores, entre otras, explican el que se estén desarrollando mercados intracampesinos de significación. En lo fundamental, se puede distinguir dos situaciones básicas:

- ▲ En áreas 'deprimidas' -ya sea por el escaso potencial productivo de las tierras, ya por situaciones de aislamiento- el mercado de tierras aparece dominado por una relación intracampesina simétrica, cuyo efecto más evidente es una tendencia hacia la minifundización, pero, al mismo tiempo, hacia el desarrollo de estrategias que permitan reconstituir unidades mínimas de producción, tal es el caso de Colta en la Sierra.

Un elemento recurrente en este contexto es que las relaciones culturales parecen ser determinantes al momento de definir el conjunto de arreglos relativo a la transacción. La compraventa entre parientes busca, sobre todo, restablecer unidades mínimas

de producción en el marco de agudos procesos de minifundización. Pero se ha observado que este tipo de transacción busca también dotar a los vendedores de tierras de un fondo de capital que les permita iniciar una nueva actividad, probablemente distinta de la agrícola. Esto se demuestra en el hecho que, aún cuando el traspaso ocurra entre parientes, e incluso no pase por el mercado formal, tiende a ajustarse a los precios vigentes en el mercado local. Así, en el caso de los mercados intracampesinos simétricos, ciertos principios de solidaridad se combinan con las leyes del mercado para establecer los acuerdos concretos.

Hay que señalar que los traspasos que se verifican entre campesinos iguales y particularmente entre parientes, no siempre pasan por el mercado formal. Con frecuencia, se fundan también en el derecho consuetudinario, y no es extraño que situaciones de endeudamiento aceleren la tendencia hacia la minifundización. Concluyendo, en las áreas rurales deprimidas se desarrolla un mercado de tierras intracampesino simétrico como una estrategia de asegurar el acceso a la tierra al mayor número posible de unidades familiares. La lógica implícita en estos mercados genera tendencias hacia la minifundización de las estructuras de tenencia locales. La respuesta campesina a dicha tendencia es garantizar la reconstitución de unidades mínimas de producción -a través de sucesivos traspasos de tierras-, estrategia que exige una constante expulsión de campesinos.

- ▲ Ciertos procesos de diferenciación campesina están presentes en una buena parte de las regiones.

Un sector del campesinado que ha logrado ciertos niveles de capitalización actúa como demandante y comprador de tierras. En las áreas más atractivas para el capital -tierras que permiten producciones rentables, que cuentan con infraestructura apropiada, etc.-, pequeños productores en proceso de acumulación compiten con medianos y grandes propietarios por acceder a las tierras que son colocadas en el mercado por campesinos tradicionales.

En zonas con dominancia de pequeños productores en las que existen alternativas productivas menos rentables -y en las que no se manifiestan con fuerza los intereses de grandes propietarios-, pequeños productores capitalizados que buscan ampliar su

patrimonio, a veces a través de mínimas adquisiciones, presionan sobre las tierras en manos de campesinos tradicionales.

El resultado del desenvolvimiento de mercados intracampesinos asimétricos es la consolidación de un sector del campesinado a costa de la desaparición de otro. Esto marca claras diferencias respecto a situaciones en las que las relaciones de mercado se rigen por una relativa simetría, donde la lógica implícita tiende al mantenimiento de un número determinado de pequeños productores en los límites de la reproducción. La lógica presente en los mercados asimétricos busca, en cambio, consolidar la posición de aquellos pequeños productores que han logrado ciertos niveles de capitalización o en otras palabras, garantizar mejores condiciones de viabilidad para este sector del campesinado. La información disponible obliga a matizar las afirmaciones anteriores respecto a que los beneficiarios de reforma agraria y colonización son los principales oferentes de tierras. Sin negar tal constatación, y aceptando que en las zonas más dinámicas esta constituye la forma más relevante de participación del campesinado en el mercado de tierras, no se descarta la presencia de sectores campesinos beneficiarios de la reforma agraria y sobre todo, de la colonización, que en el transcurso de los años han logrado ciertos niveles de acumulación, han asumido comportamientos empresariales y se han convertido en demandantes de tierras, logrando, en muchos casos, ampliar su base territorial.

La consolidación de medianos y pequeños propietarios depende, en todos los casos, de sus capacidades para insertarse en las actividades más dinámicas de la economía regional. A su vez, aquellas están sujetas a sus posibilidades de acceder al crédito y a las innovaciones tecnológicas, y de volcar a su favor los circuitos de comercialización. Este cuadro es tan válido para los productores arroceros de Daule, como para los medianos propietarios que diversifican su producción en la zona de colonización, y para los pequeños y medianos propietarios que se insertan en el circuito bananero en El Guabo. Es también lo mismo que se puede apreciar en el caso de los finqueros ganaderos y fruticuladores de Manabí, los productores pecuarios de Cañar y los horticultores -cebolleros en Cayambe.

Si bien los datos examinados indican que el campesinado tradicional constituye la más importante fuente potencial de oferta de tie-

rras, la información cualitativa sugiere que la respuesta campesina a las presiones del mercado es, no pocas veces, una fuerte resistencia.

Esta resistencia campesina se traduce, a la larga, en procesos de minifundización, derivados de la aplicación de los mecanismos de la herencia y/o de la realización de ventas parciales -y muchas veces informales-, a parientes, compadres y vecinos. Los campesinos asentados en áreas atractivas para el capital que intentan resistir manteniendo sus comportamientos tradicionales, se ven envueltos en una dinámica similar a la que describíamos para el campesinado asentado en áreas deprimidas: la posibilidad de resistencia depende de la capacidad para desarrollar y fortalecer arreglos simétricos intracampesinos. Aún cuando, también es claro que los campesinos que mantienen su condición de propietarios o de poseicionarios sin alterar sus comportamientos tradicionales, caen en un proceso de deterioro, básicamente por disminución de sus bases de reproducción. La viabilidad de esta estrategia es discutible en el contexto de una incidencia cada vez mayor de la lógica empresarial.

Participación del pequeño campesino y campesino sin tierra en el mercado de tierras

Participación del campesinado en el mercado formal

El análisis muestra que en los últimos años el mercado se ha constituido en forma predominante de reasignación de la tierra. Los procesos de reestructuración del agro regional dependen cada vez más de dicho mecanismo, y cada vez menos de la intervención estatal que hasta la primera mitad de los años 80 representaba la vía privilegiada de asignación de aquel recurso, en especial en la Costa ecuatoriana.

La compraventa de tierras se convierte en la forma predominante de traspaso de la propiedad en un período reciente, cuando la perdida de importancia de la intervención estatal y su suplantación por el mercado vienen ocurriendo a pasos acelerados.

La importancia del mercado ocurre en el contexto de un rápido proceso de modernización del agro, cuya lógica reside en el cálculo de la rentabilidad que pueden alcanzar diversas estrategias productivas,

y uno de cuyos efectos es la tendencia al aumento del valor de las tierras agrícolas. El mejoramiento de la infraestructura vial, la emergencia de nuevos cultivos, la presencia de empresas agroexportadoras y agroindustriales, las bonanzas coyunturales de determinados mercados, vienen provocando alzas en el precio la tierra.

Los procesos de reasignación en curso significan una fuerte presión sobre el grupo de campesinos tradicionales que por sufrir limitaciones en relación con el acceso a recursos financieros, por dificultades para apropiar tecnologías modernas, y por su posición desventajosa en el ámbito de la comercialización, no logran insertarse convenientemente en la lógica dominante.

Una constatación relativa a la participación del campesinado en el mercado de tierras es que el mismo aparece como el principal oferente de tierras. Se trata del campesinado más tradicional que viene siendo sistemáticamente expulsado del ámbito rural. Buena parte de este sector de pequeños productores accedió a ella mediante la intervención del Estado, ya sea por reforma agraria, ya por colonización.

Productores tradicionales que no lograron insertarse en las actividades productivas más rentables de las respectivas zonas, están desprendiéndose de sus fincas, parcial o totalmente.

En la zona arrocera los beneficiarios de la reforma agraria muestran una mayor capacidad de retención de sus predios. Sucesivos gobiernos han considerado estratégica la producción de arroz, políticas sectoriales han discriminado a favor de los productores de la gramínea. La combinación entre la política crediticia, las políticas de precios, tasas aduaneras preferenciales, han significado en algunos períodos una alta tasa de protección para este sector.

Las condiciones agroecológicas en zonas del litoral, en particular el hecho de que existan áreas inundables, limitan las alternativas productivas posibles y desalientan a potenciales inversionistas. Las características que asumió la intervención estatal en la zona, derivada del Decreto 1001, impuso restricciones específicas al mercado de tierras.

El hecho de que, junto con recibir una parcela, los pequeños productores arroceros hayan contado con otros apoyos del Estado -y fundamentalmente con recursos crediticios- es así un primer factor que explica la mayor capacidad para retener sus unidades, con relación a la que exhiben los beneficiarios de la intervención estatal en zonas más empresariales.

El acelerado proceso de descolectivización de la propiedad, del que dan cuenta los datos recopilados del Registro de la Propiedad, permite predecir que aumentará en los próximos años. El objetivo de la privatización es expresamente, en muchos casos, abrir la posibilidad para que el beneficiario pueda vender su propiedad y cancelar deudas.

Las políticas redistributivas impulsadas desde el Estado -aparentemente exitosas- dada la importante superficie adjudicada, han devenido en una fuente de oferta de tierras agrícolas, porque los beneficiarios de la acción estatal no han dispuesto de recursos adicionales para impulsar un manejo eficiente de sus unidades de producción. Al estar en marcha un rápido proceso de privatización, también los beneficiarios de las adjudicaciones del IERAC, asentados en estas áreas, estarán crecientemente sujetos a la presión del mercado.

Ya a fines de los años 70, muchos adjudicatarios de reforma agraria estaban siendo despojados de sus predios, la causa fundamental del despojo era el endeudamiento en que habían caído. Lo novedoso es la magnitud en la que esto está ocurriendo y el tipo de demandante de las tierras en venta. El mercado es hoy notablemente más activo, implica la expulsión desde las áreas rurales de más campesinos y constituye un escenario en el que se desenvuelven nuevos actores.

Tanto en la Costa como en la Sierra, el mercado de tierras está acarreando un proceso de reestructuración fundiaria que afecta fundamentalmente a pequeños propietarios en las áreas en las que la acción redistributiva del Estado fue significativa, propietarios pauperizados que constituyen la principal fuente de la oferta de tierras. Sin embargo, cada zona presenta potencialidades específicas y, por lo tanto, atrae a diversos agentes y genera diferentes tipos de unidades de producción.

Parte considerable de la demanda proviene de propietarios medianos y grandes que actúan concentrando tierras. En el intento por identificar los actores que participan en el mercado formal encontramos que hay también campesinos que adquieren tierras. Allí el mercado estaría generando una tendencia hacia la minifundización.

En áreas 'deprimidas' -ya sea por el escaso potencial productivo de las tierras, ya por situaciones de aislamiento- el mercado de tierras aparece dominado por una relación intracampesina, cuyo efecto más evidente es una tendencia hacia la minifundización, pero, al mismo

tiempo, hacia el desarrollo de estrategias que permitan reconstituir unidades mínimas de producción.

Los traspasos que se verifican entre campesinos iguales, y particularmente entre parientes, no siempre pasan por el mercado formal.

Procesos de diferenciación campesina están presentes. El campesinado que ha logrado cierto nivel de capitalización actúa como demandante y comprador de tierras. En las áreas más atractivas para el capital, pequeños productores en proceso de acumulación compiten con medianos y grandes propietarios por acceder a las tierras que son colocadas en el mercado por campesinos tradicionales.

Zonas con dominancia de pequeños productores en las que existen alternativas productivas menos rentables y pequeños productores capitalizados que buscan ampliar su patrimonio a través de mínimas adquisiciones, presionan sobre las tierras en manos de campesinos tradicionales. En la península de Santa Elena, la pequeña propiedad comunal retrocede regularmente bajo el efecto de un proceso de diferenciación interna que permite a los ricos comprar las tierras abandonadas por los más pobres.

Respuesta campesina a las presiones del mercado es, no pocas veces, una fuerte resistencia. Se traduce en procesos de minifundización, derivados de la aplicación de los mecanismos de la herencia y/o de la realización de ventas parciales muchas veces informales, a parientes, compadres y vecinos.

La consolidación de un sector del campesinado a costa de la desaparición de otro es consecuencia del desenvolvimiento de mercados intracampesinos. Sectores campesinos beneficiarios de la reforma agraria y de la colonización, que en el transcurso de los años han logrado ciertos niveles de acumulación, *han asumido comportamientos empresariales* y se han convertido en demandantes de tierras, logrando ampliar su base de tierra-unidad de producción.

La consolidación de los medianos y pequeños propietarios depende, en todos los casos, de sus capacidades para insertarse en las actividades dinámicas de la economía y está sujeta a sus posibilidades de acceder al crédito, a las innovaciones tecnológicas y a la posibilidad de volcar a su favor los circuitos de comercialización.

En general, se puede afirmar que están en marcha dos estrategias. Por una parte, un sector que tiende a consolidar su posición pa-

sando desde la condición de subsistencia a la de pequeño productor empresarial. Esta estrategia exige disponer de crédito, tecnología y comercialización que permitan aumentar la productividad. Por otra, los campesinos que mantienen su condición de propietarios posecionarios sin alterar sus comportamientos tradicionales, caen en un proceso de deterioro, por disminución de sus bases de reproducción.

Desde el punto de vista del mercado, las estrategias descritas imponen una limitación a la oferta de tierras. Pero la frecuente aparición de nuevas alternativas productivas rentables, y las coyunturas favorables que presentan determinados mercados internacionales, atraen un creciente grupo de inversionistas.

Se sostiene que "en aquellas zonas aptas para los llamados productos de punta de la agricultura, hay campesinos que con el aumento de precios de la tierra vendieron todas sus tierras y a buen precio".

Construir una matriz de precios de la tierra se dificultó por la necesidad de considerar múltiples variables. La diversidad regional como la calidad de los suelos, sus potencialidades productivas, las condiciones de ubicación de los predios y el acceso a los mercados, que actúan determinando rentas diferenciales.

En las zonas más dinámicas se detectan procesos de carácter especulativo que tienen que ver no solo con la relación entre el potencial productivo y las condiciones de los mercados, sino también con factores como la tecnología y el tamaño óptimo de las explotaciones. La dependencia del mercado externo exacerbaba el componente especulativo del mercado de tierras.

El desarrollo de varios cultivos y actividades ha sido posible gracias a la construcción de infraestructura y a la incorporación de tecnologías sofisticadas, elementos que con frecuencia se incorporan en la decisión de compra-venta. El ámbito de la comercialización incide también en el precio de la tierra.

La existencia, en el mercado, de propiedades 'no saneadas' afecta el precio de la tierra en la medida en que, formalmente, introduce otro criterio de clasificación de los predios. Predios ofrecidos carecen de riego, varios de ellos no tienen cultivos de ninguna naturaleza, y los que tienen alguna extensión cultivada -exclusivamente de pastos y frutales- utilizan, por lo general, tecnología tradicional. Algunos de estos predios se asientan en el área que será regada por el trasvase de la

presa Daule-Peripa, lo que explica la variabilidad en precios en el caso de la península de Santa Elena.

La información -cuantitativa y cualitativa- permite esbozar algunas ideas en relación a los aspectos informales del acceso a la tierra. Se distingue dos fenómenos; por una parte, pequeños propietarios, posecionarios y campesinos sin tierra que participan de un 'mercado extralegal' -se trata concretamente de traspasos de propiedad no registrados o de venta de derechos de posesión-; por otra, permanecen vigentes ciertas modalidades de acceso al usufructo de tierras.

En segundo término, se enfatiza la necesidad de distinguir situaciones en cuanto a la correlación entre 'mecanismos informales de acceso a la tierra', formas de asentamiento características, actividades productivas predominantes y naturaleza de los actores vinculados a los respectivos desarrollos.

Considerar los mecanismos informales de acceso a la tierra reforza:

- ▲ Su relativa importancia, más marcada en unas zonas que en otras, prueba mayor de que son las relaciones entre particulares las que se están redefiniendo;
- ▲ Da mayor realce a la vigencia de una estrategia campesina que en las áreas deprimidas, fundamentalmente, permite la reproducción de familias campesinas;
- ▲ Permite una mejor identificación de las limitaciones centrales que enfrentan los pobres rurales en las diferentes zonas.

Las características de la historia agraria y los rasgos relativos al tipo de poblamiento de su área rural, explican que aún existan determinadas zonas en las que una proporción significativa del campesinado esté compuesta por posecionarios que no han legalizado su situación de tenencia. Uno de los factores que impide a los posecionarios iniciar o concluir los trámites de legalización de la propiedad es el alto costo que estos representan.

La existencia de un amplio sector de posecionarios viabiliza la existencia de un mercado intracampesino que opera al margen de la legalidad. En la mayoría de las áreas con predominio del campesinado, una proporción de las transacciones de compraventa se refiere a la posesión -y no a la propiedad- y no son registradas. Los elementos de tra-

dencialidad, y de mutua confianza juegan un rol fundamental en la supervivencia de estas formas de transacción.

El mercado extralegal no se limita a los poseicionarios. Existe un mercado extralegal por el cual los propietarios de tierras venden a terceros sin que dicha transacción sea registrada en ninguna instancia legal. El compromiso verbal suplanta, en estos casos, a la tramitación legal, en virtud de su costo cero. Muchos traspasos de tierras entre pequeños propietarios de un sector determinado son documentados simplemente en la memoria colectiva del grupo campesino.

Las relaciones de arrendamiento y de aparcería son prácticas extendidas y, tendrían mayor vigencia entre campesinos. Estos arreglos tienden a adquirir creciente importancia dadas las mayores dificultades de acceder a la tierra a través de la compraventa.

Las relaciones precarias, que habrían retrocedido como resultado de la intervención estatal, vuelven a aparecer tanto bajo formas clásicas, cuanto como nuevos mecanismos. En la zona arrocera se ha extendido el arrendamiento de tierras, tendiendo a desaparecer la relación de aparcería. En muchos casos, es la falta de fondos para trabajar una determinada superficie lo que obliga al propietario a arrendar una parte de ella. Las relaciones de parentesco y de vecindad son elementos definitorios de los contenidos concretos del arriendo.

En las zonas más empresariales, las formas precarias de acceso a la tierra involucran en general a otro tipo de actores. En este caso, el arrendamiento y la aparcería constituyen fuentes de capitalización más claramente que en el caso de las relaciones intracampesinas.

Una nueva forma de precarismo, consiste en que el arrimado "recibe de forma nada más que verbal el derecho de utilizar un pequeño terreno para construirse su casa y cultivar una pequeña huerta; a cambio, está moralmente obligado a trabajar para el propietario del terreno, cada vez que este se lo pide, con un salario a menudo inferior al del mercado". Este tipo de relación se mantendría en las áreas más apartadas de las zonas de colonización, en la medida que en las áreas en proceso de modernización se ha tendido a formalizar las relaciones laborales.

De acuerdo a una encuesta de PRONAREG/ORSTOM en 1975, los arriendos de tierras habrían aumentado considerablemente desde 1954, especialmente al nivel de las explotaciones más pequeñas, mientras la aparcería conservaba las mismas superficies que en 1954.

Las restricciones y potencialidades de las formas actuales de participación y el mercado de tierras

Los productores, en los minifundios y en las medianas unidades agropecuarias, están abocados a mejorar tecnológicamente sus niveles de productividad para mejorar el nivel de excedentes. Existen experiencias importantes como la desarrollada por el Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario -PROTECA- (1987-1994) que logró al final de su actuación desarrollar importantes avances en 160 áreas de atención en 19 provincias del Ecuador. Los aciertos e impactos comprobados dejan un saldo positivo en cuanto al rol de la tecnología en la base de los pequeños productores, ya sea con productos de autoconsumo o los destinados a la agroindustria. En este sentido, sin mayores incrementos en inversión, pero sobre todo incorporando 'semilla artesanal', prácticas de manejo del cultivo y de aplicación de abonos y pesticidas en forma razonada, potencialmente han dado lugar a bajar costos e incrementar el volumen en la mayoría de los productos en los que apoyó el PROTECA.

Sin embargo, en ganadería mayor aún queda mucho por hacer, así como en alternativas para diversificar la ganadería menor. Lo mismo sucede en áreas de riego donde se asientan pequeños productores, para lograr mejores niveles de manejo y productividad.

En la Costa, a partir de 1995, se incorporarán cuatro mil hectáreas bajo riego en el área costera de la península de Santa Elena, provincia del Guayas, donde ya los comuneros -pequeños productores en secano- están vendiendo parte de sus tierras a inversionistas ciudadanos. Esta importante área de la Costa incorporaría finalmente 40 mil hectáreas a la producción. En un lapso de 10 años, en esta zona se desarrollará un nuevo espacio modernizado con encadenamientos intersectoriales y demanda de mano de obra especializada. Todo esto significa que la Costa y el país en general se verán abocados a un desafío para el cual falta coherencia en los diseños de política de desarrollo a largo plazo.

Por otro lado, el mercado de tierras, con la promulgación de la nueva Ley de Desarrollo Agrario del 14 de Junio de 1994, queda librado a las fuerzas del mercado, sin capacidad del Estado para intervenir, con lo cual oferta y demanda dejarán al margen a los 'campesinos sin

tierra'. Sin embargo, los campesinos, en los 30 años de intervención estatal, han recibido tierra en superficies pequeñas, que no tienen futuro si, en un buen porcentaje de ellas, no se llega con asistencia técnica moderna, apropiada y eficaz, servicios de crédito, de comercialización y de capacitación.

El proyecto de una nueva ley de desarrollo agrario, luego de un mes de arduas discusiones entre los representantes indígenas, representantes del gobierno, de las cámaras de agricultura y la iglesia, se está cursando con el carácter de urgente al Congreso para su discusión y aprobación o veto.

En un principio, los sectores indígenas se mostraron completamente contrarios a la ley presentada por el Ejecutivo, ya que sostenían que contrariaba sus intereses y su cultura. Los empresarios, en cambio, insistieron en que se necesitaba dar seguridad en la tenencia de la tierra para revitalizar el agro. El choque de estas dos posiciones condujo al amparo indígena, que provocó además el desabastecimiento alimentario, la elevación de los precios y el endurecimiento de la posición de los campesinos e indígenas, lo que desembocó en la constitución de una comisión tripartita, con la mediación de la Iglesia para reformular la ley.

En lo que tiene que ver con la injerencia de la Ley de Desarrollo Agrícola en el mercado de tierras, el capítulo VI, sobre la "Transferencia de dominio, adjudicación y titulación de tierras rústicas", estipula en el Art. 35. titulado TRANSFERENCIA que "La compra-venta y transferencia de dominio de tierras rústicas de dominio privado es libre y no requiere de autorización alguna".

Con la aplicación de este artículo, si bien se libera al agricultor del antiguo requisito de pedir autorización al IERAC para negociar tierras, también se aceleran los procesos de descolectivización que se hallan ya en curso. Anteriormente, el IERAC tenía que dar su autorización en gran cantidad de casos. Sin embargo, no llegaba a conferir ni el cinco por ciento de las autorizaciones que se solicitaban.

Más del 95% de esas transferencias de tierras se hacían, entonces, por medios ilícitos, siendo los más beneficiados los registradores y notarios que cobraban altas sumas de dinero por 'legalizar' esas transferencias, sin autorización del IERAC, lo que implica que muchas autorizaciones de transferencia se hacían con firmas ilegales.

Con el actual proyecto de ley, los trámites se agilizarían y se reducirían costos, pero también el precio de la tierra subiría, por el incremento de la demanda y la eliminación del papel regulador del Estado. También por el hecho de que los costos de adjudicación de tierras del INDA -antes IERAC- van a ser mayores. Además, las ventas de tierras se incrementarán porque las adjudicaciones que va a hacer el INDA no van a llevar la prohibición de venta como condición resolutoria. Todos estos factores, limitarán aún más el acceso de gran cantidad de pequeños productores a la tierra.

Por otra parte, el proyecto pretende favorecer a las empresas agropecuarias. De esa manera, el pequeño campesino tendrá que competir en igualdad de condiciones, lo que es difícil dados los escasos servicios de mejoramiento de la producción de que disponen los pequeños agricultores.

- ▲ Hubiese sido valioso y necesario que se introduzca en esta ley disposiciones precisas sobre minifundios y la posibilidad de dar créditos preferentes a productores minifundistas para adquirir tierras.
- ▲ El INDA deja de tener participación en este problema, ya que no va a expropiar tierras en gran cantidad, tampoco las va a adjudicar, y de hacerlo será en zonas donde hay remanentes de colonización espontánea o intervenciones en aplicación de la ley de Reforma Agraria. Se limitará su acción porque las causas de expropiación de tierras serán menos que las establecidas en leyes anteriores. En el proyecto de ley que se analiza, según su Art. 32, referente a las causales de expropiación, "las tierras rústicas de dominio privado, solo podrán expropiadas en los siguientes casos:
 - a) Cuando sean explotadas mediante sistemas precarios de trabajo o bajo formas no contempladas en esta ley como lícitas;
 - b) Cuando para su explotación se empleen prácticas que atenten gravemente contra la conservación de los recursos naturales renovables;
 - c) Cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido inexpLOTadas por más de dos años consecutivos, y siempre que no estén en áreas protegidas o de reserva ecológica o en programas sustentables de bosques.

- d) Cuando el predio esté sujeto a gran presión demográfica, siempre y cuando se incumpla por parte de sus propietarios² los enunciados establecidos en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley”

La aplicación de esta última causal está condicionada a que exista por lo menos otra de las causales, lo que hará que las expropiaciones se hagan de preferencia tomando en consideración cualquiera otra de la causales, antes que la de presión demográfica, que es una de las principales por las que las comunidades campesinas e indígenas, con escasez de tierras, solicitan expropiación de tierras aledañas, para su beneficio.

En última instancia, mientras el proyecto de reformas libera la posibilidad de incrementar las compra-ventas directas de tierra, a precios más caros, por otro lado, se mermarán las adjudicaciones que hace el INDA.

De otro lado, el proyecto de ley, en su Artículo 22, prohíbe toda forma de trabajo precario en el cultivo de la tierra, tales como arrimazgos, finquerías o formas que impliquen el pago por el uso de la tierra por quienes la trabajan por mano propia, a través de productos o servicios no remunerados. A pesar de ello, los pequeños productores seguirán utilizando estos mecanismos, para acceder al uso de la tierra y tienen derecho a pedir la expropiación de esa tierra; excepto en el caso de arrendamiento. El proyecto de ley agraria ha previsto lo siguiente:

- ▲ Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas carecen de títulos de propiedad. Esto podría dar cobertura a un segmento del mercado informal que de todas formas se con-

2 Estos artículos se refieren a la garantía de la propiedad, por parte del Estado, a las formas de aproveychamiento y trabajo de la misma, al cumplimiento de la función social de la tierra cuando está en producción, conservando adecuadamente los recursos naturales renovables, garantizando la alimentación para todos los ciudadanos y generando excedentes para la exportación; y la garantía que ofrece el Estado a los propietarios que trabajan la tierra, asumiendo personalmente o a través de formas contractuales establecidas en el Código Civil y otros cuerpos legales, los riesgos y costos de la producción.

- sidera pequeño para intervenir, ya que el Estado otorgó y legalizó tierras durante tres décadas (1964-1994).
- ▲ El Estado facilitará la integración de unidades de producción que aseguren al propietario un ingreso compatible con las necesidades de la familia, procurando la eliminación del minifundio. En zonas de minifundio se promoverá la organización de formas asociativas, tanto de servicio como de producción, sobre la base de programas de integración parcelaria. Con este objeto, los actos y contratos que persigan la integración de minifundios estarán exonerados de los impuestos de alcabala, registro y adicionales, como los prediales rústicos durante cinco años. Estas exoneraciones se otorgarán mediante resolución administrativa del Director Ejecutivo del INDA -Instituto Nacional de Desarrollo Agrario.
 - ▲ El Estado protegerá las tierras del INDA que se destinen al desarrollo de las poblaciones aborígenes, montubias, indígenas y afroecuatorianas, y las adjudicará en forma gratuita a las comunidades o etnias que han estado en posesión ancestral, bajo la condición de que se respeten tradiciones y costumbres vernáculas, incorporando bajo responsabilidad del INDA los elementos necesarios que coadyuven a mejorar los sistemas de producción, incorporando nuevas tecnologías, semillas certificadas y otros apoyos, que permitan a los aborígenes elevar sus niveles de vida. Los procedimientos, métodos y instrumentos que se empleen deben preservar el sistema ecológico.
 - ▲ Las obligaciones que estuvieren pendientes de pago a favor del Estado, por concepto de tierras que se hayan adjudicado, podrán ser pagadas durante el primer año de vigencia de la nueva Ley de Desarrollo Agrario, con el descuento del 75%.
 - ▲ Las tierras que forman o lleguen a formar parte del patrimonio del INDA, serán adjudicadas a personas naturales, cooperativas o empresas que las hagan producir eficientemente. El precio será establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros y se pagará al contado. Los valores ingresarán al Banco Nacional de Fomento, para la creación de un fondo destinado a la compra de tierras o créditos de capacitación para pequeños productores. Si los adquirientes de la tierra son campesinos o entidades asociativas de campesinos, tendrán plazo de hasta diez años pa-

ra pagar con tasas de interés iguales a las preferenciales del Banco Nacional de Fomento.

El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio -FEPP-, a raíz del levantamiento indígena de junio de 1990, organizó el fondo para la compra de tierras, con recursos parciales provenientes de una conversión de deuda realizada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Inicialmente se destinaron seis millones de dólares para otorgar créditos para adquisición y legalización de tierras y alrededor de un millón de dólares fue aportado por varias organizaciones religiosas y ONG europeas.

Desde 1992, el FEPP ha prestado apoyo a 137 organizaciones indígenas y campesinas que accedieron a 385.660 hectáreas, de las cuales, 26.954 por vía de negociación y compra y 358.806 vía legalización de la tenencia, beneficiando a 17.089 familias.

No cabe la menor duda del impacto de las acciones del FEPP para financiar mediante crédito la compra y la legalización de la tenencia de la tierra. Ha puesto al servicio de los campesinos un instrumento que, necesariamente el Gobierno se ha visto obligado a recoger en el Proyecto de Ley de Desarrollo Agrario, creando el fondo destinado a la compra de tierras (Art. 40).

La especificidad del empleo rural¹

LUCIANO MARTÍNEZ

Los cambios experimentados por el sector rural ecuatoriano durante las dos últimas décadas, han llevado a una verdadera transformación, no sólo de la estructura productiva sino también de los actores sociales. Por lo mismo, el problema del empleo debe ser interpretado con relación a las características que ha asumido la estructura agraria y los cambios recientes, tanto del sector capitalista como de la economía campesina, pero además por el surgimiento de nuevas actividades en el sector rural.

En el Ecuador, debido a la alta heterogeneidad de la estructura agraria y a la presencia de condicionamientos climáticos, ecológicos, sociales y culturales es necesario realizar análisis regionales más precisos. Igualmente, es preciso incorporar nuevos elementos teóricos para una correcta interpretación del empleo rural. Así por ejemplo, si bien la medición del empleo se ha realizado en función del proceso de producción en la agricultura, la actual situación de pobreza entre los campesinos con escasos recursos en tierra, indica que el eje agricultura - ganadería no es suficiente para explicar el empleo entre los sectores más pauperizados del medio rural²

1 Tomado de Luciano Martínez. 1992. *El Empleo Rural en el Ecuador*. Quito: INEM - ILDIS, Serie Documentos de Investigación No. 2

2 Recientes estudios en América Latina indican que existe un incremento de las actividades no agrícolas en las zonas rurales y por lo mismo, una mayor integración de los mercados de trabajo rural y urbano (De Janvry et al., 1990:5).

En esta encuesta, se consideraron dos ejes teóricos básicos:

- a) El empleo se genera principalmente en las actividades agropecuarias; y,
- b) Existe una especificidad del proceso de producción en la agricultura (Ferreira y Klein 1988).

La especificidad del proceso de trabajo en la agricultura, se refiere a las actividades que se realizan durante el ciclo agrícola o el ciclo que dura un cultivo. Sin embargo, este proceso no es continuo y no tiene el mismo tiempo de duración que el proceso de producción. Así, el proceso de trabajo se realiza en un 'tiempo corto', mientras que el proceso de producción (que abarca la siembra, mantenimiento del cultivo y cosecha), se realiza en un 'tiempo largo' (Almeida Salles 1984:116).

Por otro lado, la actividad agrícola está fuertemente determinada por factores difícilmente controlables por el hombre: el ciclo biológico y el clima. Esto genera rigideces en el proceso productivo que han sido definidas como 'inflexibilidad' en cuanto a la duración del ciclo productivo, 'variabilidad' de las tareas y 'heterogeneidad' de los trabajos según las fases diversas de los cultivos y su ubicación ecológica (Ferreira y Klein 1988:2).

Las implicaciones para el empleo rural son evidentes: mientras las empresas capitalistas pueden regular a voluntad el volumen del empleo requerido, según las fases del proceso de producción y las necesidades del proceso de trabajo; entre los campesinos esto no es posible porque "se organiza la producción a partir de un factor dado que es la fuerza de trabajo familiar" (Almeida Salles, op.cit.: 118). A esto hay que añadir que tanto el 'tiempo corto como el largo' están determinados por fenómenos naturales poco controlables por el hombre. Así pues, la discontinuidad del trabajo campesino, es decir, la práctica del tiempo corto, es lo que posibilita a su vez aprovecharlo en otros tipos de trabajos. En definitiva, la diversificación ocupacional es perfectamente funcional a la necesaria discontinuidad del trabajo agrícola. Igualmente, esta sería la explicación central para comprender porqué el trabajo agrícola para el caso de los campesinos con poca tierra no es más el determinante de los tiempos dedicados a otras actividades y, por lo mismo, tampoco es el referente básico del empleo.

También es relevante considerar las cuestiones relativas a la estacionalidad y la unidad de tiempo de trabajo. En efecto, el trabajo agrícola no es homogéneo y depende mucho de los ciclos que tiene un cultivo; es más, los campesinos manejan varios cultivos con diversos ciclos, lo que impide homogeneizar el trabajo a lo largo del año. Un corte espacial o temporal del trabajo no es un buen indicador de la actividad de los campesinos. Igual cosa sucede con la unidad de tiempo de trabajo cuya conceptualización escapa a una estandarización de corte moderno. En la realidad, es muy difícil aplicar una medida estándar en horas de trabajo por día para medir la contribución del trabajo al proceso productivo (Ferreira y Mein, op.cit). De allí que para una medición más adecuada del tiempo de trabajo se haya optado por utilizar el día de trabajo y no la hora como se lo hace en la medición del empleo urbano.

Características centrales del empleo rural

En América Latina se ha sostenido la tesis de que la agricultura representa la principal fuente de generación del empleo en el medio rural. Esto es cierto para los países con una numerosa población campesina, en donde la agricultura y la ganadería representan el 90% de la ocupación generada en el medio rural³. Dado el proceso de 'pecuarización' de la agricultura latinoamericana experimentado en las dos últimas décadas (Klein 1985), con el consabido ahorro de mano de obra, sería la agricultura la actividad que generaría más empleo en el sector rural.

Para el caso ecuatoriano, evidentemente, las actividades agrícolas constituyen todavía la principal fuente generadora de empleo rural, con el 51% del total de personas ocupadas en esa actividad, mientras la ganadería apenas llega al 9%. En relación con otros países donde se han aplicado encuestas similares, el volumen de empleo que generan las actividades agropecuarias (60%) es relativamente bajo. No obstante, exis-

3 Este es el caso, por ejemplo de los países centroamericanos. En Guatemala, el 89.3% se concentra en la agricultura y sólo el 2.9% en la ganadería. En Panamá, el 79.1% en la agricultura y el 12.5% en la ganadería. En Honduras, el 61% en la agricultura y el 5.5% en la ganadería (Ferreira 1989:22).

ten importantes diferencias regionales que marcan pautas diversas en cuanto a la dinámica de las actividades económicas y al empleo. Así por ejemplo, la sierra es una región donde la agricultura no genera mucho empleo, situación que contrasta con la costa, donde esta actividad todavía es la principal fuente de ocupación de la población rural.

Cuadro 1

**Composición del empleo rural por sexo según tipo de actividad económica
(Promedio mensual del periodo octubre 1989 a septiembre 1990)**

Actividad	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
Agrícola	931.050	51.4	675.196	56.0	255.854	42.2
Pecuaria	156.198	8.6	77.410	6.4	78.788	13.0
Artesanía	121.160	6.7	45.020	3.7	76.140	12.5
Comercio	152.181	8.4	63.874	5.3	88.307	14.5
No agrop.	415.471	22.9	341.359	28.3	74.112	12.2
Doméstica	35.915	2.0	2.126	0.2	33.789	5.6
Total	1.811.975	100.0	1.204.985	100.0	606.990	100.0

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, noviembre de 1990.

Las actividades agrícolas, en el país, son muy diversificadas y responden a condiciones ecológicas, climáticas y de mercado muy heterogéneas. En el contexto nacional, llama la atención que un producto tradicional de exportación como el banano genere un nivel bajo de empleo; mientras que los productos orientados al autoconsumo (maíz/fréjol y arroz) o a la exportación (café y cacao), mayormente en manos de campesinos, generen los más altos niveles de empleo agrícola. A estos últimos habría que añadir el maíz duro, un producto cultivado principalmente por los campesinos, pero orientado hacia la agroindustria. Esto quiere decir que la economía campesina es la que genera el mayor volumen de empleo, a pesar de no disponer de recursos abundantes⁴.

⁴ En gran parte, esto se debe a las características de la encuesta de empleo rural, aplicada a los hogares rurales y no a las empresas agrícolas o ganaderas.

Cualquier otro tipo de agregación que se hiciera con los datos, nos arrojaría una situación similar. Así por ejemplo, si agrupamos bajo el rubro 'granos básicos' (maíz/fréjol, haba, cebada, trigo y arroz), estos representan el 34,6% del total de las actividades agrícolas y tan sólo el 17,7% del total de las actividades rurales. En definitiva, la agricultura genera empleo en forma diversificada, pero los más altos índices de empleo se concentran en los cultivos de autoconsumo tanto de la sierra como de la costa, mayormente en manos de los campesinos.

La ganadería, produce un menor volumen de empleo (8.6%) y dentro de ella es más importante la ganadería extensiva, mientras la ganadería de leche es ahorrativa de mano de obra. También las actividades pecuarias demuestran que la pequeña ganadería bovina, ovina y de animales menores, manejada por los campesinos es fuente de empleo más importante que la ganadería empresarial.

Aparte de las actividades agrícolas, son las actividades no agropecuarias las más importantes en la creación de empleo, con el 22.9% a escala nacional. Considerado aisladamente este dato, indicaría una profunda transformación de la estructura del empleo en el sector rural⁵. Cerca de un cuarto del total del empleo rural se produciría en actividades que muy poco se relacionan con el medio rural. Efectivamente, un gran porcentaje de población rural se vincula con actividades modernas y trabaja en la ciudad. Si bien esto es válido para el sector que habita las periferias de las grandes ciudades, no lo es para el resto de la población rural. La explicación complementaria viene por el lado de ciertos procesos de industrialización del campo, relacionados con la expansión de actividades industriales y agroindustriales sobre áreas o espacios rurales⁶. La búsqueda de mano de obra barata en áreas

5 Para su correcta interpretación es necesario considerar que la muestra abarca un nivel de ruralidad que incluye los sectores periféricos de las grandes ciudades. Allí encontramos a personas que si bien viven en un medio 'semirural', trabajan principalmente en actividades urbanas (obreros fabriles, trabajadores de la construcción, trabajadores informales, de servicios, etc.).

6 Así por ejemplo, la expansión del cordón industrial Lasso-La Avelina en la Prov. de Cotopaxi, el complejo agro-industrial Ayora-Cayambe en la Prov. de Picobincha, la connurbación San Pablo-Atuntaqui en la Prov. de Imbabura, el cordón industrial de Durán en la Prov. de Guayas, de Huachi en la Prov. de Tungurahua, el cordón agro-industrial, Manta-Portoviejo en la Prov. de Manabí. (Castelli y Sotalin, 1986).

campesinas semiproletarizadas por parte del capital urbano, ha diversificado significativamente el empleo rural.

También son importantes las actividades vinculadas con la artesanía y el comercio que representan el 6.7% y el 8.4% del empleo rural total, porcentajes que por si solos son mucho más significativos que los generados por cualquier cultivo costeño o serrano. Esto puede indicar una estrategia de diversificación ocupacional por parte de los campesinos que no poseen tierra para dedicarla a cultivos rentables. Lo más probable es que se trate de hogares que combinan estas actividades con la agricultura de subsistencia, situación muy generalizada en provincias de alta densidad poblacional (Tungurahua, Azuay y algunas áreas de Manabí).

En su conjunto, el fuerte peso que tienen las actividades no agropecuarias, incluidas la artesanía y el comercio, para el empleo rural (con el 38% de la PEA), indica diversos procesos de modernización que afectan a las unidades domésticas ubicadas en los espacios rurales investigados. Para el caso ecuatoriano, parece importante el rol que juega la demanda ejercida sobre: a) la manufactura y elaboración de bienes de bajo costo con destino a mercados de bajos ingresos y, b) los bienes y servicios para la población rural ubicada en centros poblados (Anderson y Leiserson 1980:236).

El empleo rural por género

Las características del empleo por tipo de actividad afectan en forma diferente a los hombres y a las mujeres. El patrón del empleo en el ámbito nacional se refleja también en el caso de los hombres: la actividad más importante es la agricultura, seguida por otras actividades no agrícolas. El caso de las mujeres es diferente, pues si bien la agricultura también insume el mayor volumen de mano de obra, es más acentuada la multiocupación: el comercio, la actividad pecuaria, la artesanía y otras actividades no agropecuarias son fuentes alternativas de empleo bastante homogéneas para las mujeres. En especial, la artesanía y el comercio aparecen como actividades netamente femeninas en el medio rural y representan el 62.8% y el 58% del empleo en estas dos ramas; le sigue en importancia la ganadería con el 50.4%, mientras que en el resto de actividades la participación de los hombres es mayoritaria.

Cuadro 2

Empleo rural por región y sexo, según tipo de actividad económica
 (Promedio mensual del período octubre 1989 a septiembre 1990)
 En porcentajes

Actividad	Total	Sierra		Total	Costa	
		Hom	Muj		Hom	Muj
Agrícola	100.0	60.2	39.8	100.0	89.4	10.6
Pecuaria	100.0	45.8	54.2	100.0	57.7	42.3
Artesanía	100.0	35.7	64.3	100.0	44.3	55.7
Comercio	100.0	31.9	68.1	100.0	52.8	47.2
No-agrop.	100.0	81.4	18.6	100.0	83.4	16.6
Doméstica	100.0	7.7	92.3	100.0	3.9	96.1
Total	100.0	57.8	42.2	100.0	79.7	20.3

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, 1990.

Para un análisis del empleo rural por género, es necesario precisar las diferencias regionales. Así por ejemplo, si bien las mujeres participan con el 33.5% del empleo rural, este porcentaje sube al 42.2% en el caso de la sierra, mientras que en la costa desciende al 20.3%⁷. La mujer serrana tiene una participación mayoritaria en actividades de comercio, artesanía, ganadería e incluso en las actividades agrícolas. En cambio, los hombres se concentran más en las actividades no agropecuarias y en segundo lugar en la agricultura. Debido a la exigüedad de los recursos, en la sierra, la participación de los hombres en el empleo agrícola no es tan alta como en la costa, donde llega a representar el 89.4% del total, mientras que la participación de las mujeres es sensiblemente más baja que en la sierra. Esta diferencia importante en la participación del empleo femenino en la agricultura, se debe no sólo a

7 Nuevamente las comparaciones son ilustrativas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, las mujeres no representaban sino el 7.9% de las personas ocupadas en el sector rural. (Cfr. INE, op. cit.: 27).

la diferencia de recursos sino también a ciertos factores culturales arraigados en la población campesina⁸.

En la costa, se observa que la agricultura es una actividad predominantemente masculina al igual que las actividades no agropecuarias, así como la ganadería y el comercio. En general, las mujeres de la costa tienen una más baja participación que los varones, a excepción del trabajo en la artesanía.

Este perfil ocupacional diferente entre sierra y costa permite plantear como hipótesis que el trabajo en la agricultura costeña, donde se concentra el grueso de la PEA de esa región (55.8%), genera suficientes ingresos para la reproducción de las familias campesinas. De esta forma, no se requiere del aporte del trabajo femenino en gran escala. En cambio en la sierra, la agricultura solo insume el 47.8% de la PEA de esta región mientras que cerca de un 40% está ocupada en artesanías, comercio y otras actividades no agropecuarias. Por lo mismo, el aporte del trabajo de la mujer es indispensable ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la artesanía y en el comercio, para completar los ingresos del grupo familiar. Pero, tanto en la sierra como en la costa, el trabajo de la mujer se realiza mayoritariamente en el mismo hogar o finca, mientras que un gran porcentaje del trabajo de los hombres se realiza fuera del hogar o finca, debido a que muchas de las actividades ‘no-agropecuarias’ se ubican, como lo hemos mencionado, fuera del sector rural.

Con frecuencia se ha afirmado que el trabajo en la agricultura es realizado cada vez más por las mujeres, sobre todo en áreas de minifundio. Los datos disponibles demuestran que en casi todos los cultivos de la sierra, sean estos mercantiles o de autoconsumo, el porcentaje del empleo de las mujeres es superior al de los hombres. Este elemento debería ser tomado en cuenta en el diseño de políticas para el sector agrícola, donde una gran proporción de la mano de obra está conformada por población femenina.

Así pues, la información de la encuesta recupera el rol productivo de la mujer rural y su aporte decisivo en la agricultura, artesanía y

8 Así por ejemplo, el campesino costeño tradicionalmente tiene una opinión negativa sobre el trabajo femenino en la agricultura.

comercio. Igualmente, se recupera la importancia de las actividades domésticas vinculadas directa o indirectamente a la producción de la finca/hogar y el trabajo asalariado doméstico. Se demuestra así que además de las tareas típicas de género que desarrollan las mujeres en relación con la reproducción biológica y social de la unidad doméstica, es relevante su participación económica, aspecto descuidado en la medición tradicional del empleo.

En definitiva, el perfil del empleo rural en el caso ecuatoriano es bastante diversificado. La agricultura no es la única fuente de empleo, pues, cerca de la mitad del empleo rural se produce en diversas actividades, algunas de corte tradicional como la ganadería y artesanía, otras vinculadas con la expansión de actividades modernas como el comercio y las actividades 'no agropecuarias'. Este perfil se diferencia de lo esperado en un país andino con un predominio todavía importante de la economía campesina.

La estructura del empleo rural

La fuerza de trabajo en el ámbito rural no es homogénea y su clasificación por categoría ocupacional permite visualizar el peso de las diversas formas productivas presentes en el sector rural.

La categoría ocupacional más significativa es la de cuenta propia que sumada a la categoría trabajador familiar llega a representar el 65.1% de las personas ocupadas y el 63.6% de los días trabajados. Estos porcentajes suben bruscamente en el caso de las mujeres con el 81.0% de las personas ocupadas y el 79.7% de los días trabajados. En otras palabras, la economía campesina tiene un peso significativo en el sector rural y dentro de ella es definitivo el aporte del trabajo familiar mayoritariamente en manos de las mujeres.

Cuadro 3

PEA ocupada por sexo, según categoría ocupacional
 (Promedio del período octubre 1989 a septiembre 1990)

Categoría Ocupacional	Total		Hom		Muj	
	Número	%	Número	%	Número	%
No. personas	1811974	100.0	1204985	100.0	606990	100.0
As.Perm.	474005	26.2	379821	31.5	94184	15.5
As.Temp.	126117	6.9	109144	9.1	16973	2.8
T.famil.	526348	29.0	238217	19.8	288131	47.5
C.propia	653437	36.1	450098	37.3	203339	33.5
Prestam.	3967	0.2	2419	0.2	1549	0.2
Patrón	28101	1.6	25287	2.1	2814	0.5
No. días	40972138	100.0	27929915	100.0	13042223	100.0
As.Perm.	11297458	27.6	9119696	32.7	2177762	16.7
As.Temp.	2854040	6.9	2489525	8.9	364515	2.8
T.famil.	11034086	26.9	5144106	18.4	5889980	45.1
C.propia	15025476	36.7	10517538	37.6	4507938	34.6
Prestam.	79266	0.2	50523	0.2	28743	0.2
Patrón	681813	1.7	608527	2.2	73286	0.6

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, Cuadro No. 2 y No. 11, 1990.

En cuanto al trabajo asalariado, llega a representar el 33.1% de las personas ocupadas y el 34.5 % de los días trabajados. A pesar de este importante porcentaje de asalariados rurales, hay que diferenciar claramente entre los asalariados permanentes y los temporales. Las cifras muestran un porcentaje más alto de los primeros, mientras los segundos son poco significativos en el contexto de la fuerza de trabajo rural. Este fenómeno pondría en entredicho ciertas afirmaciones sobre las características de la fuerza de trabajo rural en el sector agrícola, en especial aquellas que plantean el crecimiento de los trabajadores temporales. Sin embargo, es necesario explicar las características que asumen actualmente los asalariados permanentes. En efecto, no se trata de una mano de obra que se proletariza en actividades agrícolas o agropecuarias sino, sobre todo, en 'otras actividades no agropecuarias', muchas de las cuales no se encuentran ni siquiera en el medio rural. En cambio, la proletarización de los temporales, sí se cumple mayor-

mente en el medio rural, en especial en las actividades agrícolas. Este sería un indicador más ajustado de la proletarización bastante restringida que actualmente se produce en el medio rural ecuatoriano.

La proletarización afecta en menor medida a las mujeres (18.3%), mientras es más significativa para los hombres (40.6%). Así pues, los perfiles ocupacionales son muy diferentes entre los sexos. Los hombres se proletarizan principalmente en otras ocupaciones no agrícolas, dentro y fuera del sector rural, mientras las mujeres se ocupan en varias actividades principalmente dentro del mismo sector⁹.

Otro de los fenómenos interesantes es la pérdida de importancia en el empleo rural de la categoría tradicional 'prestamano'. Su baja incidencia en el empleo se explicaría por el desgaste de los mecanismos de reciprocidad y también por la poca posibilidad de su implementación entre campesinos con pocos recursos. En la medida en que el perfil ocupacional se ha desplazado hacia las actividades no agropecuarias, es imposible que se reactiven este tipo de relaciones tradicionales en el proceso de trabajo. En definitiva, en el sector rural ecuatoriano existe un neto predominio de la economía campesina que igualmente es la que genera más empleo, mientras la economía empresarial capitalista no genera empleo en las actividades agropecuarias sino más bien en actividades no-agropecuarias. La proletarización es un fenómeno importante en este último tipo de actividades, situación inédita en el contexto rural ecuatoriano.

Las características de la estructura productiva y el empleo rural

Las tendencias del empleo rural señaladas hasta aquí indican importantes modificaciones en la estructura productiva del sector rural. Las actividades agrícolas han perdido peso en la generación de empleo, pero además, el sector capitalista globalmente genera menos empleo que

9 .El predominio de la categoría 'asalariados permanentes' aún para las mujeres, estaría indicando que especialmente para las jóvenes existe una demanda especializada en algunas actividades que se han desarrollado recientemente, como por ejemplo, las plantaciones de flores en la sierra.

el sector campesino. A nivel del sector rural, existen claramente dos formas productivas que compiten por los recursos en tierra y mano de obra (aunque no en capital) y, por lo mismo, no son complementarias sino en mínima escala: la economía campesina y el sector de economía capitalista.

La economía campesina, basada en el trabajo familiar y que conforma una unidad de producción-consumo, aunque no orientada únicamente al autoconsumo, es fuente generadora de empleo en las actividades agrícolas, pecuarias, artesanía, comercio; mientras la economía capitalista lo es principalmente en otras actividades no agrícolas.

Al parecer, las actividades agrícolas y pecuarias en el sector capitalista han reducido al máximo sus necesidades de mano de obra y dependen muy poco del excedente laboral de las economías campesinas. En el país existe un proletariado agrícola muy reducido que contrasta notablemente con la realidad de países donde la fuerza de trabajo campesina se articula con la agricultura capitalista (caso de la mayoría de países centroamericanos).

Por otro lado, la economía capitalista estaría más concentrada en las actividades no agropecuarias, donde se ha formado un importante proletariado proveniente del excedente poblacional rural. El caso sui generis de las actividades domésticas indica la tendencia de la proletarización femenina, fenómeno que se cumple principalmente en los centros urbanos del país.

Cuadro 4

**Distribución del empleo por categoría ocupacional,
según actividad económica**
(Promedio mensual del período octubre 1989 a septiembre 1991)

Actividad Económica	Total perm.	Asala. temp.	Asala. famil.	Trabaj. Propia	Cuenta	Prest.	Patr.
No. Person	100.0	26.2	6.9	29.0	36.1	0.2	1.6
Agrícola	100.0	15.6	8.1	38.1	36.0	0.4	1.8
Pecuaria	100.0	15.6	3.3	50.2	28.9	0.1	1.9
Artesanía	100.0	19.0	1.8	17.6	60.7	-	0.9
Comercio	100.0	7.4	1.3	24.4	64.3	0.1	2.3
No agrícola	100.0	59.7	9.2	7.6	22.5	0.1	0.9
Doméstica	100.0	61.0	10.1	6.7	22.1	0.1	-
No. días	100.0	27.6	6.9	26.9	36.7	0.2	1.7
Agrícolas	100.0	16.7	8.3	35.7	37.0	0.3	2.0
Pecuarias	100.0	17.4	3.6	47.1	29.9	0.1	1.9
Artesanía	100.0	19.4	1.7	16.2	61.7	-	1.0
Comercio	100.0	7.7	1.3	23.5	64.8	0.1	2.6
No agrop	100.0	60.5	8.8	7.1	22.6	0.1	0.9
Doméstica	100.0	62.6	10.2	7.4	19.7	0.1	-

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, Cuadro No.10 y No.17, 1990.

Las diferencias regionales son muy marcadas. La agricultura insume mayor cantidad de mano de obra asalariada en la costa (36.5 %) que en la sierra (15%), lo que explica el perfil más moderno de la agricultura costeña, donde se ubican los productos para la exportación y los agroindustriales más dinámicos. Esto sucede también con la ganadería de carne de la costa que genera más empleo asalariado que la ganadería de leche de la sierra. En general, los datos confirman el carácter ahorrativo de la agricultura serrana y las pocas posibilidades que tienen los campesinos pobres de vincularse como mano de obra asalariada. En cambio, son las actividades no agropecuarias, las que generan el mayor volumen de mano de obra asalariada permanente (66.6%), como consecuencia de una mayor vinculación campo-ciudad, la ubicación de industrias o agroindustrias en el sector rural y el desplazamiento de importantes contingentes de mano de obra con residencia rural hacia las ciu-

dades para trabajar en fábricas, en la construcción y en el sector servicios. Llama la atención el importante porcentaje de asalariados ubicados en la artesanía (21.6% en la sierra y 18.9% en la costa), situación que obedece al desarrollo de la artesanía mercantil bajo la modalidad del 'trabajo a domicilio' en numerosos pueblos y sectores rurales de provincias como Tungurahua y Azuay en la sierra y Manabí en la costa (Martínez 1991). Las actividades de comercio, en cambio, no se han modernizado sino en mínima escala y mayoritariamente se concentran en la categoría ocupacional de cuenta propia, es decir, se trata de negocios pequeños manejados en forma familiar.

La economía campesina, en el caso ecuatoriano, crea empleo inclusive en aquellos productos tradicionales de exportación, en volúmenes superiores a los de la economía capitalista. Como se puede ver en los datos que presentamos a continuación, la presencia de la economía campesina es importante en casi todos los principales cultivos del país. A pesar de que en la costa, el nivel de proletarización de la mano de obra es más avanzado, no obstante, la economía campesina genera importantes niveles de empleo en cultivos tanto para el mercado interno como para el externo. Únicamente, la caña de azúcar es el cultivo que mayoritariamente está en manos del sector capitalista. En cambio, el arroz, un cultivo altamente protegido por el Estado no se encuentra actualmente en manos de campesinos pequeños, sino de campesinos medios y también de capitalistas (FIDA 1989).

Como se puede ver en estos datos, la economía capitalista genera empleo en mínima escala en los cultivos de la sierra, mientras en los cultivos orientados a la exportación sobresale tan sólo el banano. La participación en los cultivos agroindustriales es desigual, alta en el caso de la caña y arroz y baja en el caso del maíz duro. En cambio, la economía campesina, a excepción de la caña, es más homogénea como la principal fuente de empleo en la agricultura del país.

Estos datos muestran también la progresiva desvinculación de la economía capitalista de las actividades agrícolas, inclusive de aquellos cultivos orientados a la exportación (café y cacao) y su concentración en cultivos con altos niveles de rentabilidad y mercados más seguros como el banano (mercado externo) y el azúcar (mercado interno). Recientemente, dentro del rubro otras actividades agrícolas, destaca la presencia capitalista en el cultivo de flores, hortalizas y frutas, produc-

ción orientada al mercado externo que ha recibido un gran apoyo del Estado desde la mitad de la última década y que se ha ubicado en lugares cercanos a comunidades semiproletarizadas pero con buena infraestructura y servicios.

Cuadro 5

Estructura del empleo agrícola por tipo de economía, según clase de cultivo.

(Promedio mensual del período octubre 1989 a septiembre 1990)

Cultivos	Total	Economía Capitalista	Economía campesina*
Papa	100.0	13.5	86.5
Maíz-fréjol	100.0	10.9	89.1
Arroz	100.0	48.5	51.6
Banano	100.0	48.7	51.3
Café	100.0	25.4	74.6
Cacao	100.0	29.7	70.3
Maíz duro	100.0	17.9	82.1
Caña	100.0	58.6	41.4
O. Agrícolas	100.0	21.9	78.1

* Bajo este rubro se agrupó las categorías de cuenta propia, trabajador familiar y prestamano; las otras categorías se incluyen en la economía capitalista.

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, Cuadro No. 6, 1990.

Variaciones en el tamaño de la fuerza de trabajo

En el contexto del sector rural ecuatoriano se presenta una tasa de ocupación de la fuerza de trabajo por encima del 90%. Por lo mismo, la desocupación no es un problema importante a nivel del sector rural. En cambio, la participación de los inactivos estacionales¹⁰, varía ligeramente en los diversos meses del año.

¹⁰ Para efectos del análisis del empleo rural, se considera que la población inactiva detectada en la matriz de estacionalidad, no permanece como tal a lo largo de un año calendario, al contrario, puede integrarse en algún período en alguna actividad, por lo mismo, es parte integrante de la Población Económicamente Activa (PEA) rural.

Para un análisis más adecuado de las variaciones de la fuerza de trabajo se consideró 3 subperiodos correspondientes 'grosso modo' a las fases más importantes del ciclo de cultivo: preparación-siembra, fase de mantenimiento y período de cosecha. En la medida en que el empleo rural no refleja únicamente la actividad agrícola como sucede en el caso de Centroamérica (Ferreira 1991), no se puede detectar mayores variaciones en los diversos subperiodos. Se nota, eso sí, cierta disminución de la población ocupada en el período de febrero a mayo, posterior a la fase de preparación y siembra y un ligero incremento de la fase correspondiente a la cosecha.

La subutilización de la fuerza de trabajo se la puede obtener sumando las tasas de desocupación y la inactividad estacional. De acuerdo a esto, el período de mayor subutilización corresponde al de febrero-mayo, mientras el de menor subutilización es el de junio a septiembre. Por lo mismo, se puede concluir que a escala rural, la fase de cosecha demanda la mayor cantidad de mano de obra a lo largo del año.

Existen diferencias importantes en la condición de actividad por sexo. Así, los hombres tienen una tasa de ocupación más elevada que las mujeres, lo que no quiere decir que la participación de las mujeres no sea importante. Al contrario, es notable que las mujeres, en el caso ecuatoriano, tengan una tasa de ocupación cercana al 90%, situación que no se repite en otros países donde tienen una participación menor. Se puede ver que inclusive en el período de febrero a mayo, su participación es más alta que la de los hombres, debido a que el empleo femenino no está solo vinculado a la actividad agrícola sino también a la artesanía, el comercio, la ganadería.

Igualmente la subutilización de la mano de obra varía mucho entre hombres y mujeres en los diversos subperiodos (Ver cuadro 6). Los hombres tienen el mayor porcentaje de subutilización en el período de febrero a mayo, en donde disminuye el nivel de ocupación sobre todo en la agricultura y paralelamente aumenta el volumen de los inactivos estacionales. Posteriormente, en el período siguiente (junio - septiembre) el nivel de subutilización disminuye drásticamente, pues los inactivos estacionales pasan a ocuparse en la cosecha, período de más demanda de mano de obra en la agricultura.

Las mujeres también experimentan un mayor nivel de ocupación en el período de junio a septiembre y una disminución de la subutili-

zación de la mano de obra. El alto porcentaje de inactivos estacionales en los subperiodos analizados, se debe, sobre todo, a la influencia que ejerce en estas cifras el caso de la costa, donde se registra una menor participación del trabajo femenino que, como ya lo hemos señalado, obedece a factores culturales que inciden negativamente en el trabajo de las mujeres.

Cuadro 6

Variaciones en el tamaño de la fuerza de trabajo por períodos, según condición de actividad
 (Período de octubre 1989 a septiembre 1990)

Condición Actividad	Octubre-enero	Febrero-mayo	Junio-Septiembre	Promedio mensual
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Ocupados	91.6	91.4	93.8	92.3
Desocupados	0.6	0.6	0.4	0.5
Inactivos estacional	7.8	8.0	5.8	7.2
Hombres	100.0	100.0	100.0	100.0
Ocupados	93.3	82.0	94.9	93.8
Desocupados	0.6	0.7	0.5	0.6
Inactivos estacional	6.1	17.3	4.6	5.6
Mujeres	100.0	100.0	100.0	100.0
Ocupados	88.6	87.8	91.6	89.3
Desocupados	0.4	0.4	0.4	0.4
Inactivos estacional	11.0	11.8	8.0	10.3

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, 1990.

La estacionalidad del empleo rural

En varios trabajos realizados, en especial sobre Centroamérica, se ha analizado la estacionalidad del empleo en relación con las características del proceso de producción en la agricultura. Así, la presencia de varios cultivos con un ciclo diferente genera una demanda irregular de mano de obra y, por supuesto, también de las categorías de ocupación durante un año o un período determinado (Ferreira 1991).

De esta forma, los trabajadores ubicados en una determinada categoría de ocupación, pueden durante unos meses, cambiar de status ocupacional para pasar a trabajar en cultivos con mayor demanda y bajo otra categoría ocupacional. En este caso, estaríamos en presencia de un mercado de trabajo integrado que absorbe o expulsa mano de obra de acuerdo a las necesidades de los cultivos comerciales, a lo largo de un ciclo de cultivo. Es lo que sucede, por ejemplo, en países como Guatemala, en donde los trabajadores vinculados a la economía campesina (cuenta propia y trabajador familiar), durante los meses de poca ocupación en sus parcelas, migran a trabajar como asalariados temporales en la agricultura comercial. Se produce de esta forma un "intercambio entre la agricultura familiar y la comercial" (INE 1990:35).

En el caso ecuatoriano, no se observa una estacionalidad marcada ni en la sierra ni en la costa. En efecto, el único grupo de trabajadores que tiene una estacionalidad importante en el año es el de los asalariados temporales (Ver gráfico No.1). El comportamiento de estos trabajadores es muy claro: el período de más baja ocupación se registra en los meses de enero, febrero, marzo, abril, que corresponde a la fase en que decae el empleo agrícola después de la siembra, mientras el período de más alta ocupación se ubica en los meses de junio, julio, agosto y septiembre que corresponde 'grosso modo' al de la cosecha (ver cuadro 7). En realidad, en tanto se trata del grupo de asalariados que tiene más vinculación con las actividades agrícolas, las tendencias de estacionalidad están claramente presentes a lo largo del año, tanto en la sierra como en la costa.

Lo sorprendente es que esta estacionalidad no tiene relación con ninguna otra categoría de ocupación, en especial con aquellas vinculadas a la economía campesina. No se constata ninguna estacionalidad ni para los trabajadores familiares ni para los cuenta propia. Los pri-

meros son los que en gran medida se encuentran a cargo de las actividades agrícolas y pecuarias de las familias campesinas y están conformados por mujeres, hijas y ancianos y, en menor medida, por los jefes del hogar y los hijos varones. De allí que sea muy difícil que esta mano de obra abandone el campo en búsqueda de trabajos remunerados en el área de agricultura comercial más desarrollada, pues deben hacerse cargo de las actividades de la parcela familiar. Tanto para los asalariados temporales como para los trabajadores familiares y los cuenta propia, los meses de junio, julio, agosto y septiembre son los de mayor nivel de ocupación, lo que podría explicarse más bien debido a la demanda de mano de obra ejercida por ciertos estratos campesinos con más tierra sobre los asalariados temporales. En definitiva, no se encuentra movilidad de una a otra categoría ocupacional vinculada a la demanda de los cultivos comerciales.

Gráfico 1

**Estacionalidad del empleo rural
según categoría ocupacional**

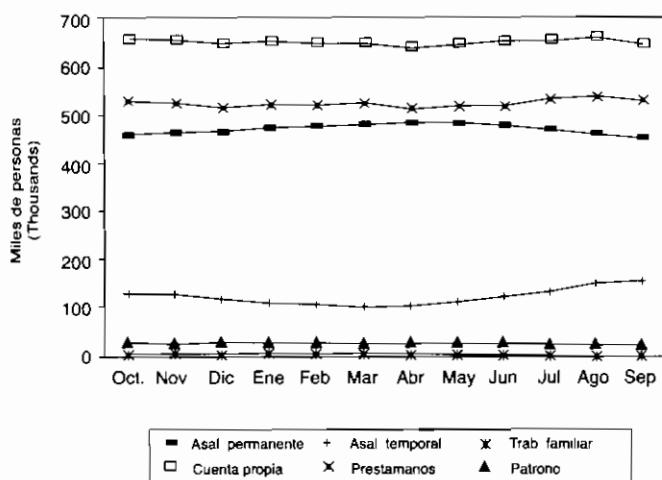
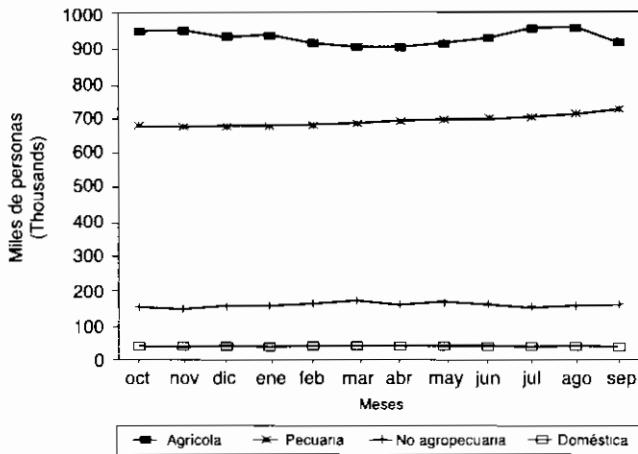


Gráfico 2

Estacionalidad del empleo rural según tipo de actividad económica



No se detecta tampoco una estrecha articulación entre los mercados de la sierra y de la costa. Se esperaría, por ejemplo, que en los meses en que disminuye la mano de obra temporal en la sierra, esta pudiera trasladarse a la costa y aparecer en los datos de los asalariados temporales de esa región, pero eso no se constata en los datos. Al parecer, hay una muy débil articulación entre los mercados de trabajo regionales, y una fuerte ‘segmentación regional’ que induce a que la lógica del funcionamiento de estos, deba buscarse al interior de las regiones y no fuera de ellas. Los patrones más importantes de la migración no se dan entre las regiones sino al interior de las mismas.

A continuación se presentan algunas hipótesis que merecen ser profundizadas en posteriores estudios:

- ▲ la vinculación de la mano de obra serrana con las actividades agro-exportadoras o agro-industriales costeñas que existían has-

ta la década de los sesenta ('cogida del arroz', zafra de la caña, trabajo en las plantaciones bananeras, etc.) cambió radicalmente con el 'boom' petrolero de los años setenta. Por un lado, muchos campesinos lograron acumular dinero en el trabajo estacional costeño, lo que sirvió para la compra de tierras en sus lugares de origen¹¹. Por otro, en algunos procesos productivos se introdujeron mejoras tecnológicas que redujeron globalmente las necesidades de mano de obra¹². Por último, se dinamizaron las actividades 'modernas' en las principales ciudades de la sierra: trabajo en la construcción, en los servicios y en menor medida en la industria, de tal modo que la demanda de mano de obra no calificada se ejercía desde lugares relativamente cercanos a los reservorios campesinos.

- ▲ En la década de los setenta, también se produce el crecimiento de pueblos y pequeñas ciudades en el 'hinterland' sierra-costa que absorbió la población de migrantes serranos, 'costeñizándolos' y convirtiéndolos en reserva de mano de obra 'in-situ' para las empresas agrícolas y agroindustriales de la costa (Santo Domingo, La Troncal, La Maná, El Carmen, La Concordia, Naranjito, etc.).
- ▲ Existe una mayor integración entre el mercado de trabajo rural y urbano, con una dinámica preferentemente intraregional, articulada al crecimiento de las ciudades intermedias (Ambato, Machala, Santo Domingo, Manta, Loja, etc.).

11 Uno de estos procesos ha sido estudiado para algunas parroquias la provincia de Tungurahua, donde los migrantes estacionales a la costa lograron comprar tierras y asentarse definitivamente en sus lugares de origen en la década de los setenta (Foster 1990).

12 Este es el caso de los ingenios azucareros de la costa, que disminuyeron significativamente la mano de obra empleada en la cosecha. En un estudio realizado en el ingenio San Carlos se señala que para la zafra de 1957 se utilizaron 6.450 trabajadores en todas las fases del cultivo, mientras que en 1983, sólo se llegó a emplear 3.741 trabajadores, una disminución del 50%. Cfr. Lentz,C., 1991:40.

La estacionalidad según el tipo de actividad

A escala general, la agricultura del país insume una menor cantidad de mano de obra durante los meses de febrero hasta mayo. No obstante, este período varía entre sierra y costa. En efecto, mientras en la sierra, coincide con la fase posterior a la siembra y por lo mismo no se requiere mayor mano de obra; en la costa, el período en que disminuye el volumen de mano de obra se ubica en los meses de octubre hasta enero; posteriormente, las necesidades de mano de obra se incrementan progresivamente hasta alcanzar su punto más alto el último cuatrimestre del período de referencia. No obstante, la variación es mínima como para poder establecer que en los meses en que disminuye levemente la mano de obra, ésta se traslada hacia otro tipo de actividades.

En cambio, en la sierra hay una mayor variación en el volumen de mano de obra, sobre todo debido al marcado ciclo de estacionalidad de algunos cultivos como el maíz-fréjol, la cebada y, en menor medida, la papa. De esta forma, los meses en que disminuyen los requerimientos de mano de obra, en especial de la economía campesina, esta puede fluir hacia otro tipo de actividades como la ganadería, la artesanía y otras actividades agrícolas.

Se puede concluir, entonces, que hay un mayor nivel de subutilización de la mano de obra en la agricultura de la sierra, la cual fluye no hacia los cultivos mercantiles o de agro-exportación ubicados en la costa, sino que se mueve dentro de la misma región.

Los datos de estacionalidad del empleo presentan también otra problemática interesante. La curva de estacionalidad de los trabajadores temporales (ver gráfico No. 1) indicaría que durante los meses de menor actividad, esta mano de obra, al menos en el caso de la sierra, no podría ser absorbida sino en muy pequeña escala por la economía campesina, en especial por los campesinos con escasos recursos. Así pues, en esta fase del año se produciría una subutilización muy marcada de la mano de obra en la sierra. En efecto, en el período comprendido entre los meses de febrero y mayo, dejarían de trabajar unas 50.000 personas en la agricultura, mano de obra que no podría ser absorbida plenamente ni por la ganadería ni por otras actividades no-agropecuarias.

Las variaciones en el nivel de empleo por subperiodos, a excepción de la agricultura y la ganadería, no son muy significativas. En el caso de la agricultura, el período de menor ocupación afecta, sobre todo, a los trabajadores asalariados temporales, una parte de los cuales buscaría trabajo en otras actividades sea en el mismo medio rural o fuera de él¹³.

La ganadería, en cambio, ocupa menos mano de obra en el primer subperiodo que coincide con el momento en que se requiere más mano de obra en la agricultura. En la medida en que se trata de actividades complementarias en la economía campesina, el flujo de mano de obra de una a otra se ajusta a las necesidades reales a lo largo del año.

Cuadro 7

**Variaciones en el empleo rural, por sub-períodos,
según tipo de actividad económica, SIERRA**

Actividad económica	Octubre-enero	Febrero-Mayo	Junio-septiembre
No. personas	100.0	98.1	99.9
Agricultura	100.0	89.7	97.8
Ganadería	87.9	100.0	92.3
No-agropecuarias	95.8	100.0	99.9
Domésticas	94.7	100.0	93.1

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares rurales, noviembre, 1990

El trabajo dentro y fuera de la parcela

En las actuales condiciones de una mayor articulación entre el campo y la ciudad, entre el sector campesino y la economía capitalista, muchas de las actividades de la población rural se realizan fuera del ho-

13 La tendencia a la combinación del trabajo asalariado con otras ocupaciones ya ha sido anotada para otros países (PREALC, 1985:14). La especificidad del caso ecuatoriano es que se aplica sobre todo para los trabajadores asalariados temporales.

gar o finca del productor. A esto se suma, evidentemente, la escasez de recursos para una mayoritaria porción de la población campesina que impide el pleno aprovechamiento de la mano de obra.

En general, a medida que una región se ha modernizado, se incrementa también el trabajo fuera, como es el caso de la costa. Pero tanto en la costa como en la sierra, el trabajo dentro descansa principalmente en las mujeres. Merece especial atención el caso de la sierra, donde el trabajo de las mujeres alcanza un alto porcentaje dentro de la finca/hogar, debido a las múltiples actividades que están a su cargo.

Cuadro 8

**Trabajo dentro y fuera, según sexo y regiones
(octubre 1989 a septiembre 1990)**
(En porcentajes)

Región y sexo	Total	Dentro	Fuera	Dentro y fuera
País	100.0	58.9	36.1	5.0
Hombres	100.0	50.8	43.3	5.9
Mujeres	100.0	75.0	21.6	3.4
Sierra	100.0	63.1	30.5	6.4
Hombres	100.0	53.6	38.5	7.9
Mujeres	100.0	76.2	19.6	4.2
Costa	100.0	50.7	45.9	3.4
Hombres	100.0	46.1	49.9	4.0
Mujeres	100.0	68.7	30.3	1.0

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, noviembre, 1990

En cambio, la alta proporción del trabajo de los hombres fuera de la parcela/hogar, indica la división del trabajo al interior de las familias campesinas: son ellos los que deben buscar trabajo en el mercado rural o urbano, mientras las mujeres se quedan a cargo de las tareas de la parcela y del hogar.

Para el caso de la actividad agrícola y pecuaria, el trabajo fuera puede perfectamente asimilarse al trabajo asalariado. Según esto, los datos confirman que ninguna de estas actividades generan un porcentaje importante de empleo fuera. El predominio del empleo dentro, en la economía campesina, es evidente. En cambio, las actividades no agropecuarias mayoritariamente generan empleo fuera de la parcela u hogar. Aquí se encuentra, como se ha mencionado, actividades no solamente rurales sino también urbanas. Por otro lado, el perfil de los asalariados es bastante nítido, se vinculan principalmente fuera de sus hogares/fincas, pero en el caso de los temporales, deben combinar con el trabajo dentro en casi todas las actividades. Los trabajadores familiares y por cuenta propia trabajan dentro en la agricultura y la ganadería, en cambio, en las actividades no agropecuarias, un importante porcentaje trabaja también fuera, en la artesanía, comercio, servicios, etc. Así pues, una significativa proporción de mano de obra campesina en las actividades no agropecuarias, debe buscar trabajo fuera de su finca u hogar, como una forma de completar sus ingresos.

Cuadro 9

Trabajo dentro y fuera por actividad económica, según categoría de ocupación

Actividad Económica	Total	Asalariado permanen.	Asalariado temporal	Trabajador familiar	Cuenta propia
Agricultura	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Dentro	74.4	-	-	98.6	97.2
Fuera	21.9	93.8	88.5	0.2	-
Dentro y fuera	3.7	6.2	11.5	1.2	2.8
Ganadería	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Dentro	79.8	-	-	99.3	96.8
Fuera	17.1	91.1	86.1	-	-
Dentro y fuera	3.1	8.9	13.9	0.7	3.2
No agropecuario	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Dentro	34.9	-	-	72.2	63.7
Fuera	57.8	90.6	89.9	24.1	30.3
Dentro y fuera	7.3	9.4	10.1	3.7	6.0

Fuente: INEM, Encuesta de Hogares Rurales, 1990.

Conclusiones

El análisis sobre el empleo rural realizado en este trabajo, nos presenta una primera imagen de los importantes cambios registrados en el perfil de la mano de obra rural como producto del proceso de modernización agraria ocurrida en las tres últimas décadas.

Un primer hecho relevante es que las actividades agropecuarias no generan un volumen importante de empleo en el medio rural, no en la medida en que podía esperarse en un país andino como el Ecuador. Este fenómeno está vinculado a las características que ha tomado el proceso de modernización en las dos principales regiones del país. En la sierra, a medida que las unidades empresariales adoptaron una estrategia ahorradora de mano de obra y las economías campesinas no lograron ampliar sus recursos, el empleo para la mano de obra se ha diversificado hacia ‘otras actividades no agropecuarias’. Esto significa que la fuerza de trabajo asalariada se vincula con mercados de trabajo no sólo en el área rural sino también en la urbana. En la costa, en cambio, debido a que la agricultura genera un mayor volumen de empleo e importantes sectores de campesinos lograron acceso a la tierra, este fenómeno es más atenuado.

Un segundo rasgo relevante es el peso que tiene la mano de obra vinculada a la economía campesina, tanto en la sierra como en la costa. El nivel de proletarización es más bien restringido en el caso ecuatoriano y en razón de que el empleo agrícola no es el más importante, los asalariados temporales tampoco son muy numerosos. Resalta, en cambio, el aporte de la fuerza de trabajo familiar en las actividades agrícolas y pecuarias que conjuntamente con los trabajadores por cuenta propia, llegan a representar el 65.1 % del total de la PEA rural del país.

Dentro de la mano de obra vinculada a la economía campesina tiene un papel significativo el trabajo de la mujer. Su alta participación en el empleo rural (33.5% de la PEA total) es otra de las características notables que recupera la encuesta realizada por el INEM. Igualmente, las diferencias regionales son significativas: en la sierra, la mujer está al frente de la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio; en la costa, la participación de la mujer es menor, en gran medida debido a las restricciones culturales existentes en las familias rurales de esta región.

En tercer lugar, es interesante comprobar que la economía campesina es la que genera más empleo tanto en los cultivos para el mercado interno como en los cultivos agroindustriales y de exportación. Seguramente, en estos dos últimos rubros, la metodología de la encuesta (dirigida a los hogares rurales) no permite captar todo el volumen de la mano de obra empleada por las unidades empresariales, pero los datos señalan la importancia del trabajo campesino en la agricultura actual. Las políticas agrarias deberían necesariamente considerar esta realidad y no concentrar su apoyo únicamente a las unidades empresariales, tal como parece darse en el momento presente.

En cuarto lugar, la ausencia de una estacionalidad muy marcada del empleo en el caso ecuatoriano obedece a cambios importantes producidos en la fase del 'boom petrolero'. En efecto, a partir de la década del setenta, se produjeron cambios en los patrones de poblamiento, se dinamizaron ciertas actividades económicas que desarticularon el modelo de vinculación de la mano de obra entre sierra y costa. Por lo mismo, los mercados de trabajo se segmentaron regionalmente y el eje de su dinámica se desplazó de la agricultura hacia otras actividades no agrícolas, muchas de ellas presentes en la ciudad y no en el campo.

En quinto lugar, se observa que únicamente en la sierra se manifiesta cierta estacionalidad de la mano de obra agrícola que se relaciona con la disminución del empleo en los meses de febrero a mayo. En esta época, decrece la actividad agrícola en esta región, pero no puede ser absorbida sino parcialmente por las otras actividades en gran parte desarrolladas por las familias campesinas. Por lo mismo, se produce en esta fase una 'subutilización' de la mano de obra rural que alcanza a unos 50.000 trabajadores, la mayoría de los cuales son asalariados temporales.

Por último, la diversificación de actividades en el medio rural, la pérdida relativa de la importancia del empleo agrícola, y el surgimiento de un nuevo patrón de inserción de la mano de obra rural, indican que en el sector rural se dieron importantes cambios que afectaron sobre todo al funcionamiento de la economía campesina, obligada a vincularse a la economía mercantil bajo parámetros 'no tradicionales'. La conclusión lógica es que la modernización también afectó a los campesinos, de manera que su predominio en el empleo no significa necesariamente una mayor inserción en la economía urbana.

riamente el afianzamiento de relaciones de producción tradicionales, sino de readecuación en el contexto de la sociedad capitalista.

La crisis que se acentúa a partir de los años ochenta, sin duda ha sido un factor que ha coadyuvado a la difícil situación del empleo entre los campesinos pobres. Para un 30% de la PEA rural, por ejemplo, cobijados como familiares no remunerados bajo el ala de la economía campesina y sin mayores recursos en tierra, significa una real situación de pobreza y el agravamiento de sus condiciones de vida.

Las necesidades de políticas de empleo diferenciadas para los diversos tipos de trabajadores, diversas actividades y sectores sociales, son más que evidentes en el momento actual. La economía campesina se ha convertido en la 'esponja' que absorbe los costos de un modelo restrictivo en cuanto al empleo, pero es una situación que no podrá mantenerse a largo plazo so pena de experimentar graves problemas sociales en la sociedad rural.

Bibliografía

- Almeida Salles, Vania. 1984. "Una discusión sobre las condiciones de la reproducción campesina"; en: *Estudios Sociológicos*, Vol II, No. 1, México: El Colegio de México.
- Anderson, D. y Leiserson, M. W. 1980. "Rural nonfarm employment in developing countries"; en: *Economic Development and Cultural Change*, Vol 28, No. 2, The University of Chicago Press.
- Castelli, B. y Sotalín, G. 1986. "Proceso de expansión urbana y cambios en el agro ecuatoriano: ejes metodológicos"; en: Le Chau, editor; *Investigación agraria y crisis*. Quito: Corporación Editorial Nacional.
- De Janvry, A., Sadoulet, E., Wilcox, L. 1990. "La mano de obra rural en América Latina"; en: *Revista Internacional del Trabajo*, Vol. 109, No. 1, Ginebra.
- Ferreira Irmao, José. 1991. "La medición y análisis del empleo rural en Honduras, según la Encuesta de Hogares de 1987", Texto para discussao No. 246, Departamento de Economía, Universidad Federal de Pernambuco, agosto.
- Ferreira, José y Klein, Emilio. 1988. Empleo Rural: Metodologías de medición, PREALC-OIT, Santiago.
- INE, Encuesta Nacional Socio Demográfica 1989. 1990. Empleo Rural, Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, junio.
- FIDA. 1989. "Informe de la Misión Especial de Programación a la República del Ecuador", Vol. I.
- Forster, Nancy. 1990. "The struggle for land and livelihood: peasant differentiation and survival during the agrarian transition in Tungurahua, Ecuador". Tesis, Ph.D., U.M.I., Ann Arbor, Michigan.
- Lentz, Carola. 1991. *Buscando la vida. Trabajadores temporales en una plantación de azúcar*, Quito: Ed. Abya-Yala.
- Martínez, Luciano. 1990 "Empleo rural y campesinado: el caso ecuatoriano"; en: *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 13, No. 1-2, Bogotá, enero-agosto.
- Martínez, Luciano. 1991. "El empleo agrícola y rural en economías campesinas productoras para el mercado interno"; en: *Les po-*

- litiques alimentaires face à la libéralisation des économies et des échanges*, Solagral Collection, Actes du colloque de Paris, Montpellier.
- Martínez, Luciano. 1991. "Los campesinos-artesanos de la sierra central del Ecuador: La provincia de Tungurahua". Quito: mimeo.
- PREALC. 1985. "El impacto heterogéneo de la modernización agrícola sobre el mercado de trabajo". Documento de trabajo. Santiago: PREALC/260, abril.
- PREALC. 1983. "Problemas metodológicos de una encuesta rural en Chile y estructura del empleo". Documento de trabajo. Santiago: PREALC/227, julio.
- Smith, Carol A. 1990. "Estrategias de sobrevivencia de los pequeños productores agrícolas de Guatemala". En: *Revista International del Trabajo*, Vol. 109, No. 1, Ginebra.

Globalización de la economía y campesinado serrano: un análisis en tres dimensiones¹

ROBERTO SANTANA²

“Si algo se ha aportado ha sido un poco de fantasía, de contactos, de ideas para empezar las cosas; esto muchas veces ha venido de afuera, pero se ha transformado en acción al encontrarse con la comunidad...” (P. Antonio, salesiano de Salinas, provincia de Bolívar).

La actualidad de una reflexión acerca de las perspectivas del campesinado indígena de la sierra dentro del marco de la imposición/adopción de las políticas neo-liberales en la agricultura, no necesita ser argumentada. Este artículo se propone abordar la cuestión a partir de tres ángulos, estrechamente ligados a las tendencias y resultados que se observan en algunos países que han adoptado más tempranamente esas políticas: el rol del campesinado en los abastecimientos nacionales de productos alimentarios, el diagnóstico para la agricultura de mercado y las incidencias organizacionales de la nueva economía. No se trata de hacer comparativismo forzado sino de extraer ciertas regularidades que permitan abordar con mayor realismo o pertinencia las adaptaciones posibles que el nuevo proceso modernizador puede seguir en las condiciones específicas de la sierra ecuatoriana.

1 Tomado de *Ecuador Debate*, No. 29, Quito: CAAP, 1993

2 GRAL/IPEALT

Abastecimientos nacionales y producción campesina

Si se sigue atentamente la evolución de la agricultura en países como Chile, o Costa Rica por ejemplo, se observa que la apertura exterior y la prioridad acordada a los productos de exportación se acompañan, en un primer tiempo, de una suerte de 'flotamiento' relativo a la suerte de las producciones para el mercado interno, traduciéndose naturalmente en una baja momentánea de los aprovisionamientos nacionales. Se observa que la escena interior está dominada por la expectativa, por la morosidad de un gran número de productores, por la reposición de los principales actores del reto agrícola, y por un cierto malestar de parte de los consumidores, confrontados estos a la escasez parcial de bienes y a la elevación coyuntural de los precios. En un segundo tiempo, la producción para el mercado interno muestra, sin embargo, una clara tendencia al mejoramiento, ciertamente no en todos los rubros, pero indiscutiblemente en los más sensibles de la canasta del consumidor. A partir de allí, una suerte de 'pilotaje a ojo' parece imponerse, no sin eficacia de parte de las administraciones, para asegurar los equilibrios necesarios de aprovisionamientos - consumo.

La constatación anterior viene a desmentir la idea más o menos extendida que, estimulando y priorizando la agricultura de exportación, las nuevas estrategias condenan las producciones destinadas al abastecimiento nacional. En realidad, nada es menos evidente. Ciento, de la misma manera que en el pasado, los mecanismos estimuladores de la modernización agrícola de hoy no se dirigen al conjunto de los productores: ellos incitan a una elevada intensificación a los agricultores grandes y medianos trabajando para el mercado nacional, pero igualmente a ciertas fracciones del campesinado, principalmente las explotaciones familiares. La entrada en el juego de estos distintos agentes económicos no es siempre simultánea y, depende de la estrategia económica de conjunto y/o de las relaciones de fuerza existentes, o deseadas, por los gobiernos, en relación con diferentes fracciones de productores.

Una primera conclusión que conviene extraer de este proceso de intensificación es que los aprovisionamientos nacionales pueden ser satisfechos muy rápidamente por las exportaciones capitalistas y familiares, las mismas que cuentan con los medios materiales y las condi-

ciones subjetivas como para reaccionar rápida y eficazmente a los estímulos de un mercado reactivado. En Chile, como en México o en Costa Rica, se observa que el tiempo no ha pasado en vano y que numerosos agricultores han adquirido el 'manejo' del mercado: así, se tiene la impresión que bastaría a los gobiernos respectivos hacer sentir un cierto número de signos positivos sobre el mercado (bandas de precios u otros), para que la respuesta favorable de esos productores se presente, en términos de oportunidad, de volúmenes y de variedad de productos.³

La segunda conclusión es que la brecha tecnológica entre estas explotaciones intensificadas y la mayor parte de las explotaciones subfamiliares o minifundiarías se ha ahondado considerablemente. Los rubros agrícolas que atestiguan esta afirmación se multiplican: trigo en el sur de Chile, trigo y sorgo en México, arroz en Panamá, frijoles en Costa Rica. En Chile, efectivamente, la política de estimulación de la producción nacional en los últimos años del gobierno militar, arrojó resultados espectaculares: rendimientos medios por hectárea del orden de 40 qq para el trigo en las explotaciones intensificadas del sur del país, contra 10 qq en las explotaciones campesinas de la misma región. Por un movimiento no tan espectacular pero del mismo signo, las producciones de granos básicos de Costa Rica, deprimidas entre 1986 y 1988, mejoran desde 1989, principalmente los frijoles y el arroz.

Es fácil entender, en tales circunstancias, que una buena parte del campesinado pobre, y no necesariamente minifundista, sea puesto 'fuera de juego'. Es decir, fuera del mercado o relegado a sus márgenes. He aquí entonces que, por arte del neoliberalismo, la cuestión de la 'viabilidad' agrícola es puesta al orden del día en nuestro continente, con una intensidad jamás vista, y todo indica que hay que interiorizar esta nueva tendencia. En los hechos, durante largo tiempo se vivió en América Latina con la idea que esta noción de 'viabilidad' no nos con-

3 Es en los casos de Chile y Costa Rica donde lo que decimos aparece con más transparencia. Ver para el primero, de Sergio Gómez y Jorge Echeñique, *La Agricultura Chilena. Las dos caras de la modernización*, FLACSO/AGRARIA, 1988. Santiago; y para el segundo, el artículo de Isabel Román en *Polémica*, N° 16 de enero-abril de 1992: "Efectos del ajuste estructural en el agro costarricense".

cernía, pese a que ella se imponía en todas las agriculturas desarrolladas. Se pensaba, y muchos lo piensan todavía, que se podía 'salvar' a través de la agricultura, la totalidad de las capas y fracciones campesinas. Era este un pensamiento fuerte, cultivado por las políticas populistas y robustecido por una producción ideológica abundante.

Lo anterior significa que los gobiernos y las instituciones de crédito agrícola tienen hoy más argumentos que nunca para discriminar al campesinado pobre. Como en Europa occidental, las administraciones hacen sus cuentas y se preguntan cuántas son las explotaciones campesinas que merecen ser 'salvadas' o dignas de atención en el marco de una asistencia técnica que deviene, para el caso, muy selectiva. Por ejemplo, en el caso de Chile, se trataría de unas 100.000 explotaciones de un total de 200.000 consideradas como minifundiarías.

Si las estrategias neoliberales terminan consolidándose, y todo parece indicar que no pasará mucho tiempo para que ello suceda también en el Ecuador –no solo porque las estrategias de substitución de importaciones son obsoletas sino, sobre todo, porque no existe hasta el momento alternativa viable que oponerle— la cuestión de la suerte del campesinado indígena deberá ser analizada con otros prismas que los empleados hasta aquí, otros respecto a los usados por el desarrollo rural oficial de los años 80, o los impulsados por algunas estrategias étnico-campesinas, o aún, distintos a los usados por ciertas ONG.

Para imaginar lo que pueden ser en ese nuevo contexto los procesos que tendrán lugar en la sierra, conviene antes que nada señalar la importante diferencia que puede establecerse entre los países que señalábamos anteriormente y el caso ecuatoriano en lo referente al peso específico de la producción campesina en el mercado nacional. En efecto, la importancia que en el Ecuador sigue teniendo la pequeña producción indica que no se puede evacuar muy expeditivamente el tema de la relación estrecha entre aprovisionamientos nacionales y producciones indígenas, contrariamente a lo que sería, por ejemplo, el caso de Chile y su pequeño campesinado no indígena e indígena. En este sentido, el Ecuador se aproxima mucho más a la realidad de varios países centroamericanos. Lo que queremos decir con esto es que, tal vez el 'umbral' de la viabilidad pueda ser situado en un nivel inferior de tamaño de la explotación, en comparación con otros países, dependiendo, por cierto, de la capacidad de negociación y de proposición de

las organizaciones representativas de los productores, pero también de una cierta restricción nacional ligada a las características de los recursos y de la estructura agraria en la sierra. Hay que pensar que, en conjunto, la proporción de tierras en manos de la población campesina es elevada y que los recursos aptos para la agricultura sufren de fuertes handicaps, de manera que eso parecería limitar el rol que podrían jugar las explotaciones medianas y grandes⁴, sobre todo aquellas de zonas templadas. Es claro que estas circunstancias favorecen la negociación del 'umbral de viabilidad', tanto más que el nivel en que este se sitúa en un momento dado, no tiene nada definitivo y queda sujeto a renegociaciones en el futuro, es decir, en función de nuevos estadios del desarrollo agrícola.

Como quiera que sea, parece realista pensar que más allá de las explotaciones familiares y aquellas subfamiliares consideradas por el 'umbral' negociado favorablemente, subsistirá un fuerte contingente de población rural en dificultad, a cuyo propósito desde ahora se puede sostener, que no será sino 'parcialmente campesina', de una parte por su posición estructuralmente marginal en el sistema productivo, y de otra, porque la agricultura será cada vez menos vivida como una 'profesión' y menos aún como abriendo una 'vía hacia el progreso'. Una actividad agrícola 'residual' subsistirá como 'apoyo' a la sobrevivencia. La verdadera actividad agrícola, con su modo de vida específico, será algo a cuyo propósito la toma de distancia se profundizará cada día un poco más. Todo esto no es enteramente nuevo en la historia de los campesinos, pero se puede constatar, hoy en día, en numerosas comunidades de campesinos indígenas; la amplificación de fenómeno de 'desvalorización' de la agricultura⁵ que arrastra consigo una pérdida de la identidad propiamente agrícola, al mismo tiempo que la progresión de comportamientos 'exóticos', y de demandas generalmente urbanas, li-

4 "Pauvreté alimentaire et crise des productions indigènes dans les Andes équatorienヌ". en *La question alimentaire en Amérique Latine*, París: ediciones du CNRS, 1990, pp. 95-127

5 Ver de Luciano Martínez Valle "El empleo en economías campesinas productoras para el mercado interno. El caso de la sierra ecuatoriana" en *European Review*, N° 53. December 1992.

gadas a la condición de asalariado o de marginal. Todo esto no tiene que ver con la identidad étnica, que es intrínseca a la mayoría del campesinado serrano, y que no puede identificarse con adscripciones excluyentes a lo rural o a lo urbano, a lo agrícola o a lo industrial, al pasado o al presente...

Diagnóstico de mercado

En la cuestión relativa al mercado, la enseñanza más importante parece ser la que tiene que ver con la capacidad de 'manejo' del mercado por los diferentes grupos de productores, cosa que por cierto, depende de la formación, de la eficiencia organizativa, de una cierta experiencia mercantil, de la 'apertura' de cada localidad o comunidad al mundo exterior. En este sentido, el problema del tamaño de la explotación o de la empresa aparece como secundario: se puede ser pequeño y vender un buen producto con un beneficio. El asunto es ¿qué vender, a quién y cómo? A tal punto esta cuestión emerge como crucial, que obliga pensar en la necesidad de una verdadera revolución de las mentalidades. Se ha vivido con ideas como las siguientes: los sistemas agrícolas campesinos (en su integridad) deben intensificarse, los campesinos son los que producen o deben producir para los abastecimientos de la población nacional, lo importante son los créditos y los insumos para producir, etc. Tales formulaciones tendían a subestimar la necesidad de una toma de decisiones productivas a partir de las características del mercado considerado como un vasto espacio de intercambios, al interior del cual pueden jugarse diversas alternativas de oferta; esas formulaciones, que eran propias de las políticas populistas, acompañando al ciclo de acumulación por sustitución de importaciones, no han dejado de tener repercusiones profundamente ideológicas que, en parte, siguen operando.

En el período precedente, es decir, del ciclo económico que perclita, el diagnóstico de la realidad campesina y agrícola que realizaban, sean las administraciones o los propios productores, estaba orientado por la certidumbre de que, en cualquier caso podía contarse con el apoyo financiero o crediticio del Estado, cualquiera que hubiera sido el estatuto de la explotación o del trabajador agrícola. Los precios

de garantía o las subvenciones eran mecanismos habituales. La lógica del diagnóstico era entonces aquella de hacer *'emergir'* una 'demanda campesina', justificar necesidades sociales antes que animar un proceso destinado a hacer '*despegar*' una producción mercantil, o a cultivar un producto '*nuevo*', o aún, fomentar fuentes de empleo no agrícolas en el medio rural. Cuando el polo de interés era el sistema agrícola propiamente dicho, se trataba mucho menos de la búsqueda de una reconversión productiva que de una intensificación sobre productos tradicionales orientados, como todavía es el caso, hacia mercados deprimidos o marginales, saldándose frecuentemente las transacciones con pérdidas netas para el productor. Los ejemplos de este tipo abundan en Ecuador, lo mismo en referencia al período dominado por la reforma agraria como al más reciente, marcado por las estrategias de desarrollo rural integral. Otra enseñanza importante, entonces, de las nuevas experiencias, es que esta modalidad de diagnóstico no se muestra operante y puede decirse que está igualmente periclitada.

En la reflexión relativa al desarrollo futuro de las comunidades campesinas, nos parece obligado provocar un desplazamiento de óptica destinado a poner en un lugar privilegiado al mercado, como un '*'campo estructural'*' a explorar que es mucho más abarcador que la mera '*comercialización agrícola*', tema tratado hasta aquí, por las diversas administraciones estatales, de manera generalmente reductora. La reflexión habitual, así como las estrategias de las organizaciones campesinas privilegiaban, por su parte, los temas de la producción, de la recuperación de la renta de la tierra, o la atribución de tierras a los trabajadores asalariados.

El éxito de la explotación '*viable*' (en el marco del '*umbral*' discutido anteriormente), y más ampliamente del nuevo desarrollo rural, pasa necesariamente por el éxito en el mercado, sea este nacional o internacional, y la cuestión central consiste entonces en interrogarse sobre las formas de articulación de estas explotaciones a mercados donde la competencia será muy fuerte, imponiendo exigencias no habituales de oportunidad, de eficiencia y de calidad de productos. Un posicionamiento a partir del mercado obliga a definir lo que desea venderse, los volúmenes de las ventas, la forma del producto (elaborado o no) y en fin, la calidad del mismo. Si a esto se agrega que en el nuevo contexto de internacionalización de la economía, el mercado

puede estar aquí o en otra parte, en la región, en el país, o en el extranjero, se evidencia toda la importancia que tiene para los equipos técnicos del desarrollo rural, así como para los responsables de las organizaciones campesinas, el otorgar a los problemas del mercado un lugar privilegiado en sus preocupaciones y actividades. Esos equipos o estructuras deben integrar necesariamente personas formadas o experimentadas en el marketing, en la información y en la gestión de empresas. Se podría incluso ir más lejos, sin riesgo de caer en la caricatura, para decir que en las nuevas condiciones creadas, tal vez el mejor responsable de un equipo de desarrollo agrícola podría ser alguien que posea un perfil muy próximo a aquel de los 'jefes de producto' de las empresas modernas, alguien que sea capaz de 'auscultar' el mercado, de descubrir clientes, de detectar las nuevas demandas, que salga a la búsqueda de interlocutores y que finique negocios. Todo eso para, en un segundo momento y en función de la relación costo-beneficio, proponer a los productores y organizaciones lo que conviene producir.

Alguien podría preguntarse si todo lo anterior tiene algo que ver con los campesinos de las comunidades serranas, generalmente vistos tan solo como víctimas de un mercado cuyos mecanismos de funcionamiento no conocen y que, por lo mismo, no controlan. Sin embargo, si el lenguaje del mercado puede aparecer como exótico para muchos de ellos, eso no significa que algunos grupos indígenas o mestizos no realicen con cierto éxito su inserción en el mercado, sea por la vía del control de circuitos comerciales, como es el caso de ciertas 'redes étnicas', sea por la vía de la venta de un producto 'nuevo', en el caso de grupos más restringidos. Se puede constatar que en todos los casos de inserción mercantil exitosa de productores serranos hay siempre una base social de comerciantes que es propia a un grupo local (ej. las familias comerciantes de sal de Salinas) o a un grupo étnico específico (ej. Otavalo). En esas familias de comerciantes habría que buscar émulo inmediato de los modernos 'jefes de productos'. Al contrario, los grupos de campesinos indígenas que no poseen ningún pasado comerciante son los que viven con más dificultades su articulación al mercado y es en relación con ellos que el desafío de la vía comercial y empresarial es más fuerte, y por lo mismo es en relación con ellos, que una 'formación para el mercado' tendrá sus mayores dificultades.

A propósito de lo dicho, sería imperdonable no detenerse en la experiencia ejemplar de los campesinos de Salinas en cuanto a lo que puede ser el desarrollo rural en el nuevo contexto. El interés de este caso de estudio es múltiple, pero aquí no señalaremos más que tres aspectos que nos parecen muy ilustrativos: 1) el desarrollo se hace a partir de un producto 'nuevo', la fabricación de quesos de larga conservación (con importante valor agregado y con efectos económicos diversificadores); 2) la apertura al mercado es la clave del éxito del proyecto estratégico y de la progresión económica de la población; y, 3) el éxito en el mercado tiene que ver con criterios selectivos, y al mismo tiempo con un nivel de eficiencia basado en principios que son propios de la gestión de empresas modernas. Estos tres puntos son detectados con énfasis por el padre Polo responsable de la Misión Salesiana en Salinas⁶ y por Galo Ramón con un equipo de COMUNIDEC⁷. No insistiremos en los aspectos de solidaridad, de ética y de disciplina en el trabajo, que forman parte esencial del patrimonio de los habitantes de Salinas, resultado de la perseverancia de un proyecto evangélico que tiene la edad de una generación.

Aquí, lo que nos interesa es destacar lo que esa experiencia tiene de interés en esta problemática del mercado. Dejemos hablar al padre Polo: "...el aporte de los suizos (proyecto de la cooperación helvética) no ha sido solo en la tecnología; sobre todo nos dieron seguridad en la comercialización. El mismo José Duback (técnico promotor del proyecto) puso una tienda, de acuerdo con el FEPP, en Quito, y nos aseguró que todo lo que se produciría se iba a vender, y esto de la seguridad psicológica en los trabajos, en el regreso de los recursos que uno pone, y de su trabajo, es fundamental en el medio campesino y a veces es subvalorado cuando se hacen estudios de factibilidad o grandes planteamientos teóricos".

El equipo de COMUNIDEC insiste, por su parte, en las formas que adquiere la inserción de Salinas en el mercado diciendo, entre otras cosas, que "la característica predominante del estilo salinero es

6 "Salinas" (entrevista al padre Antonio Polo). Archivos de COMUNIDEC. 37 págs.

7 Galo Ramón (Coordinador), *Actores de una década ganada. Tribus, comunidades y campesinos en la modernidad*. Quito: COMUNIDEC, 1992.

que sus principales empresas comunitarias no constituyen experiencias económicas totalmente autocentradas, en las que se produce únicamente para satisfacer necesidades locales sino que, inversamente, porque propone una *apertura selectiva* (énfasis mío) a través de mercados regionales, urbanos e internacionales en los que coloca los productos de las empresas comunitarias, cuyos réditos son redistribuidos asociativamente entre la población de la parroquia". Se insiste también en "el corte agro-industrial, que transforma la producción agropecuaria comercial e individual en bienes manufacturados destinados a los principales mercados urbanos del país..."

Los testimonios citados y la información de que se dispone contienen, a una escala local, los ingredientes esenciales de los nuevos comportamientos que son demandados a los productores campesinos a escala nacional; en tal sentido, podría decirse que los 'salineros' están ya (a escala de sus medios), en la economía de la 'globalización'. Ellos están señalando mejor que nadie el sentido del nuevo desarrollo rural, cuya definición no podría satisfacerse con una simple complementariedad de una línea 'productiva' y de otra 'social', pues la una y la otra aparecen demasiado determinadas por el objetivo supremo de la necesidad de asegurar los abastecimientos nacionales, al precio de sacrificar los beneficios de los productores y/o recurrir al bolsillo de los contribuyentes para asegurar precios subvencionados. Todo parece indicar que en el nuevo período, la línea productiva será 'comercial' en la rentabilidad o no habrá desarrollo. 'Lo social' no podría ser tratado sino a partir de una consideración precisa del tipo de articulación al mercado de cada grupo campesino, y por cierto, como del interés conjunto de los 'grupos viables' de campesinos, de las colectividades locales, del Estado y de las ONG.

Así, los promotores del desarrollo rural y las organizaciones campesinas se ven confrontados a la urgencia de provocar un cambio en la secuencia lógica del diagnóstico. Este paso metodológico en la programación debe poder determinar antes que nada el producto o los productos 'especializados' para la venta, determinando al mismo tiempo la 'viabilidad mercantil' de cada grupo de productores, prever el destino de los mismos, definir el sistema y las condiciones de la comercialización y, solo después, proyectar los cambios a introducir en el sistema agrícola existente, la adopción de un nuevo cultivo, la elaboración de

un producto tradicional, etc. Este viraje tiene una incidencia fundamental sobre la cuestión de la organización campesina, tema sobre el cual también parece imponerse una inflexión de la lógica empleada habitualmente con el propósito de dar prioridad a la organización ‘para la venta’, más importante, sin duda, que la organización ‘para producir’.

La organización para “vender bien”

Como se sabe, en la mayor parte de los países del continente, el panorama organizacional en el medio rural ha estado dominado, desde los años 60 en particular, por el cooperativismo campesino o agrícola, raras veces por un cooperativismo de servicios y, menos aún, de ahorro y crédito. Por razones diversas, ese cooperativismo se mostró generalmente incapaz para provocar la emergencia de una verdadera ‘profesión agrícola’ en el seno del campesinado tradicional. En efecto, más allá de la filosofía implícita o explícita (priorización de lo colectivo en detrimento de lo individual) y de los vicios estructurales (gigantismo, reivindicacionismo, burocratización...), una práctica altamente ideologizada iba de la mano con un movimiento nacido mucho menos de un proyecto autónomo de las masas campesinas, que de la voluntad gubernamental de asegurarse el control de los campos y de fidelizar una clientela electoral. La prioridad acordada a la movilización de masas y el interés por las cooperativas de gran escala son rasgos que pueden entenderse mejor a la luz del objetivo de crear ‘masa crítica’, al servicio de objetivos políticos. Esto no significa negar que los campesinos no encontraban allí su propio interés inmediatamente.

La experiencia chilena, en particular, mostró las debilidades de este tipo de cooperativismo enfrentado a las nuevas exigencias de la economía global. El fracaso económico -sumado a la persecución política de los líderes- selló el fin del cooperativismo entendido como ‘palanca’ política, al mismo tiempo que el fin del ‘monopolio’ organizacional que él pretendía detentar sobre el plano agrícola y campesino. Este balance negativo no significa, sin embargo, que se deba renunciar a una regeneración del movimiento cooperativista, pero todo indica que su renovación no puede venir sino de una revisión de marcos jurídicos poco adaptados y de una priorización de organizaciones de base de tama-

ño moderado, incluso reducido. A este respecto, una de las conclusiones mayores con relación a la experiencia de ciertas sociedades de pequeña talla creadas por pequeños agricultores chilenos que han tenido éxito en el mercado, incluso en el mercado internacional, es la importancia acordada a la escala 'útil' de la organización, porque 'las cosas salen bien cuando la organización es pequeña; cuando las organizaciones son grandes las cosas van mal'⁸.

La ineeficacia de las cooperativas para articular los grupos campesinos al mercado en condiciones de rentabilidad, hizo nacer otras formas organizacionales, más adaptadas a una gestión eficiente. Es así como en Chile se ha visto la aparición de sociedades de derecho civil, compuestas de algunas decenas de miembros; unas ligadas a la producción de exportación, otras a la gestión de tierras produciendo para el mercado interno (atribuidas en el marco de grupos de productores).

Como bien se sabe, el cooperativismo agrícola o campesino no ha tenido mejor suerte en la sierra ecuatoriana. Como lo hemos explicado en otras ocasiones⁹, la filosofía del cooperativismo oficial, sus estructuras, así como sus modos de funcionamiento, hicieron 'fricción' con los mecanismos y formas orgánicas internas a las comunidades, haciendo que los campesinos indígenas prefieran mayoritariamente a la 'comuna', forma jurídica también oficial pero que por antigua terminó siendo funcionalizada a los fines comunitarios, de modo que, la mayor parte de las veces, allí donde se implantó, la cooperativa fue vivida por los campesinos como algo 'exterior', vista como una organización simplemente 'instrumental' al servicio, muchas veces, de objetivos extranjeros al campesino y, en todo caso, una entidad que no representaba sino un interés inmediato y sectorial (acceso a la tierra, obtención de un servicio bien preciso...).

La comuna se impuso en los años 80 como 'la forma' organizativa más apropiada a los intereses indígenas; efectivamente, ella mostró una alta capacidad de negociación con el exterior. Pero, ¡atención! Es indispensable discriminar entre los diferentes campos de actividad so-

8 Sobre el tema de estas formas organizacionales, ver Rigoberto Rivera, *Los campesinos Chilenos GIA/ 3*, Santiago. 1988.

9 Roberto Santana, *Campesinado indígena y desafío de la modernidad*, Quito: CAAP, 1983.

bre los cuales los cabildos han tenido actuación. Porque, si su intervención y su eficacia son frecuentes en lo que tiene que ver con la cultura indígena (educación, alfabetización, folklore), con la obtención de servicios, o con la construcción de rutas, no es lo mismo en relación con la obtención de créditos para infraestructura productiva o insumos y, menos aún en lo referente a la inserción en el mercado, o al desarrollo de actividades empresariales comunitarias.

El punto más débil de la comuna se sitúa, precisamente, en un retardo prolongado en la modernización económica de los sistemas productivos indígenas; dicho de otra manera, su debilidad central ha estado en su ineeficacia para promover el desarrollo de una vía empresarial y de mercado entre los campesinos indígenas, excepción hecha de los escasos grupos ligados a la producción de flores, frutas u hortalizas de exportación. La marcada rigidez de los sistemas agrícolas de subsistencia, las relaciones de fuerza internas entre los grupos familiares, la carencia de capacitación técnica moderna, y la gestión fundamentalmente política -en el sentido étnico- de los cabildos, fueron características que dominaron hasta bien avanzada la década de los 80. De manera que, con escasas excepciones, tanto las comunas como las cooperativas fracasaron en provocar la modernización del sistema económico comunitario, única vía, sin embargo, susceptible de asegurar un desarrollo sostenido.

La afirmación anterior no desconoce que durante los 80 se produjeron importantes 'acumulaciones' de experiencia, de contactos, de formación de líderes y de educación en general, elementos que conforman un nuevo escenario en los comienzos de los 90; se observa, en efecto, importantes cambios en las mentalidades, una 'apertura' inédita hacia el exterior, una disposición a experimentar con nuevos métodos, con nuevas técnicas y productos, todo ello indicando un viraje fundamental. Para efectivizar todo eso en modernización económica, es decir, para provocar un avance por la vía empresarial, el desafío que enfrentan las organizaciones -de cualquier nivel que ellas sean- es de establecer una distinción clara entre el campo de liderazgo 'político' de la comuna y el campo de 'gestión' de las empresas económicas que surjan al interior de las comunidades de segundo grado o por grupos familiares. Es decir que, ellas deberán atender celosamente a que los mecanismos democráticos de funcionamiento no atenten a la

buenas marchas de los 'negocios' indígenas, como es el caso de algunas organizaciones. De ello dependerá que se valoricen esas 'acumulaciones' de que hablábamos, pues si, efectivamente, muchos sectores del campesinado indígena han hecho avances en la preparación de un terreno favorable para el 'despegue' económico y, para la modernización de las estructuras (lo que se habría conquistado en la 'década ganada' por los campesinos serranos) no es menos cierto que la concretización de proyectos estratégicos ha estado frenada por una comprensible, pero no por ello menos nefasta, identificación de ambos espacios de intervención.

Los handicaps mayores detectados al nivel de la comuna, es decir, ausencia de pugnacidad en la modernización productiva e identificación de los niveles políticos y de gestión económica, caracterizan igualmente la actividad de las organizaciones intercomunitarias o de segundo grado, independientemente que estas hayan contribuido en gran medida a crear el clima de 'apertura' reinante en la actualidad.

Las uniones o federaciones de cabildos o de comunas que proliferaron en la sierra -a partir de los años 80 principalmente- ofrecen, al menos, tres rasgos generalizados sobre los cuales conviene detenerse y, a los cuales solo parece escapar la FUNORSAL, de Salinas. El primero de estos rasgos es el marcado rol de instancias 'mediadores de servicios' que asumen esas organizaciones. Trabajando con fondos no reembolsables, su preocupación central es la consolidación de la propia estructura (locales, equipamiento, formación de los dirigentes), de manera que la redistribución a las bases comunales tiene carácter secundario (orientada principalmente a la capacitación). El segundo rasgo tiene que ver con el débil interés por el desarrollo productivo, tema a propósito del cual Galo Ramón dice lo siguiente, refiriéndose a las organizaciones de Chimborazo: "Los componentes productivos de los proyectos de las Uniones tienen un carácter experimental; no buscan efectos tangibles a corto plazo; no comprometen montos muy significativos del financiamiento global, no permite cubrir a todas las bases, o a todas las familias" (1992). Debería agregarse que cuando esos desarrollos existen, por cierto modestos, ellos ofrecen los mejores testimonios de la anarquía reinante en la gestión económica y financiera. Finalmente, el tercer rasgo tiene que ver con las limitaciones actuales de ta-

les estructuras para crear las bases de su propio sostenimiento. En parte por el efecto de 'facilidad' de los financiamientos no reembolsables, en parte por la simple razón que sus proyectos no se han integrado en la economía doméstica de las familias asociadas en la base de la organización, lo cierto es que la mayor parte de ellas no se han hecho indispensables, y buscan seguir legitimándose hasta ahora en razón de su rol mediador de servicios.

A este nivel, local o regional, la identificación, o mejor dicho, la confusión frecuente de liderazgo político y de gestión económica o de empresa, tiene una fuerte implicancia en la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo que movilice los recursos y las posibilidades de un conjunto de comunidades, como, contrariamente, es el caso de la FUNORSAL. Esta confusión perniciosa puede ser entendida, cierto, como propia del estado actual en la evolución de los liderazgos hacia la modernidad y se conjuga bien con las debilidades inherentes a sociedades que no funcionan fácilmente con sistemas contables ni de administración y que, por lo mismo, no están 'obligadas' a un gran rigor en las cuentas ni a integrar parámetros de eficiencia; al fin de cuentas los financiamientos no reembolsables no exigen estudios de factibilidad, ni evaluación de rentabilidad.

El trabajo de COMUNIDEC, citado anteriormente, insiste también sobre algo que había sido puesto ya de relieve en los trabajos del CAAP, a saber, que por abajo de las uniones o federaciones y también por abajo de las comunas, "hay grupos familiares" (1992) que formal o informalmente emprenden acciones autónomas, en especial en el ámbito de la producción-comercialización; sus resultados son con frecuencia más exitosos que allí donde las actividades productivas son abordadas por instancias de mayor cobertura. Tales casos se observan allí donde los fenómenos de 'individualización' de las economías familiares son ligados estrechamente a los éxitos obtenidos en el mercado por una 'red de comercialización', frecuentemente de base étnica. Quiere entonces decir que aquí estamos en presencia de un nivel organizacional de grupos elementales susceptibles de ser potenciado al lado de otros; independientemente del hecho de que, hasta ahora, este nivel de asociación haya estado acantonado en la venta de productos agrícolas con ninguno o muy escaso valor agregado, habría que ver allí un espacio interesante para eventuales desarrollos agro-industriales.

Conclusión y perspectivas

En suma, el panorama organizacional formal, en sus expresiones de base (comunas) y también intermediarias (uniones o federaciones), muestra una debilidad generalizada frente a lo productivo y sobre todo frente al mercado. Esta afirmación no significa, sin embargo, que el terreno no esté suficientemente 'abonado' como para esperar un salto cualitativo en un plazo prudencial. Por todas partes hay liderazgos en proceso de modernización, la apertura al mundo 'exterior' es un fenómeno generalizado, la reconversión productiva, o la diversificación de actividades -implicando innovaciones técnicas- no encuentra hoy las resistencias propias de las décadas pasadas.

Sin embargo, ciertos virajes son indispensables para ese salto cualitativo. En primer lugar, un esfuerzo en la 'formación' de personal para la organización, la administración, y la gestión contable de las empresas, acompañada de formación técnica adaptada a la estrategia productiva-empresarial elegida. A este pronóstico, el término 'formación' parece más apropiado que el de 'capacitación', expresión muy marcada por lo político y lo militante y también por lo étnico-culturalista. A este tipo de capacitación se han dedicado importantes esfuerzos en los últimos años, los éxitos son seguramente muchos, pero ha llegado el momento de privilegiar los temas de la economía y de la administración.

Ha llegado también el momento en que el tema de la estrategia empresarial (productos agro-industriales, productos no agrícolas, servicios) debe ser parte de las preocupaciones de cada nivel organizativo, ya sea que se trate de grupos de base (familias asociadas, asociaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, etc.), de la instancia comunal o de la organización de segundo grado. Incluso, no debería descartarse la formación de sociedades entre organizaciones indígenas y productores capitalistas, con vistas a producciones agro industriales o con vistas a controlar partes del mercado¹⁰. En la situación actual del campesinado serrano todo indica que las formas de la organización empresarial deben ser múltiples (comunas, sociedades basadas en la legislación civil u otra, cooperativas -sobre todo de agro-industria, co-

10 Un comentario a propósito de este aspecto aparece en un reciente artículo "Actores y escenarios étnicos en Ecuador, el levantamiento de 1990", revista *Caravelle* N°. 59. 1992 (número especial sobre la problemática indígena).

mercialización y ahorro y crédito-, uniones o federaciones) pudiendo todas coexistir de manera articulada en un espacio geográfico determinado. Para ello un cierto número de condiciones parece indispensable.

¿Cómo lograr la creación de un esquema organizacional de alcance local o regional, lo más adaptado posible a la multiplicidad de iniciativas que aparezcan? Sin duda, ninguna articulación sería exitosa sino sobre la base de definir una cierta vocación para cada nivel de organización: las uniones, ocupándose de la estrategia local o regional de desarrollo, asegurando la asistencia técnica oportuna, dándose los medios para devenir una instancia de crédito segura (captación del ahorro, fondos de capitalización, fondos de origen externo); asegurando centros de acopio, de conservación y, de elaboración, así como los circuitos de venta de los productos; las asociaciones de diverso tipo al interior de las comunidades (sociedades, cooperativas, grupos) ocupándose de la gestión de pequeñas y medianas empresas, de la innovación tecnológica, del paso a la elaboración artesanal o semindustrial. No sería realista una orientación organizativa que no estimulara al mismo tiempo las iniciativas individuales y colectivas. De lo que puede observarse en algunas comunidades que tienen éxitos comerciales (Salinas, evangelistas de Chimborazo) o, a la inversa, en otras que están mal articuladas al mercado (castigadas por su propia desarticulación interna), es de imaginar que en el futuro, el efecto más dinamizador provenga de pequeños grupos asociados, y el problema entonces para las organizaciones superiores consistirá en interesarlos en pasar a otra escala de actividades, o una especialización mayor.

Por último, y para que no haya lugar a dudas, conviene aclarar el aspecto que tiene que ver con la relación entre lo étnico y el desarrollo empresarial. Para nosotros, el lema étnico ha estado implícito en todo lo que hemos dicho a propósito de las organizaciones campesinas y no vemos ninguna incompatibilidad entre una opción política de defensa de la identidad indígena y una estrategia de modernización por la vía empresarial. Solo grupos minoritarios -indígenas o no indígenas- se atreverían a sostener hoy en día que los indígenas 'no aspiran' a ser modernos en el respeto de sus identidades respectivas.

Esta suerte de andar 'con los dos pies' lo habíamos sugerido ya en los comienzos de 1980 y el tiempo transcurrido desde entonces no ha hecho más que poner en evidencia que tal postulación era absolutamente fundada.

Los campesinos arroceros y el mercado andino^{*1}

RAFAEL GUERRERO B.

La incorporación al mercado andino debe reconocer que no todos los productores agrícolas encontrarán en ello las mismas ventajas. Tal es el caso del sector arrocero.

Introducción

La incorporación de Ecuador a la Zona Andina de Libre Comercio, y en general, la apertura de la economía ecuatoriana al mercado mundial, significa que dentro de la sociedad ecuatoriana, se expande el ámbito de vigencia de las relaciones sociales de mercado. Dicho de otra manera, el mercado -entendido como una forma específica de interacción social- adquiere una importancia que hasta ahora no había tenido en la sociedad ecuatoriana.

El desarrollo de las relaciones sociales de mercado debe traducirse en un aumento de la eficiencia y productividad de la agricultura y de la economía ecuatoriana.

Sin embargo, el aumento de la competitividad de nuestra economía plantea también interrogantes en cuanto al destino de algunos actores sociales que ahora se verán obligados a actuar bajo reglas de interacción social mucho más duras que las que estuvieron vigentes hasta ahora.

* Este artículo fue escrito en base de un ensayo titulado "Los Pequeños Productores de Arroz y la Competencia en el Mercado Andino" elaborado para IICA-ILDIS

1 Tomado de *Ecuador Debate*, No. 26, Agosto 1992

La posibilidad de un recrudecimiento de la competencia llevó, en primer lugar, a los industriales ecuatorianos a intervenir en la escena pública para demandar políticas que protejan sus intereses, aunque dentro de un marco general de aceptación de la necesidad de apertura.

En el caso de la agricultura nacional, si bien en el país en términos generales, se reconoce que se trata de un sector que se encuentra en mejores condiciones para competir, es necesario tener presente que no todos los productores agrícolas pueden hacerlo en las mismas condiciones.

Al respecto, es inquietante la posición en que se encuentra el campesinado ecuatoriano. Por un lado, la apertura de la economía representa la posibilidad de que ciertos estratos del campesinado generen procesos de acumulación y desarrollos cultivos más rentables; pero, por otra parte, existen importantes sectores del campesinado que difícilmente reúnen las condiciones necesarias para seguir actuando en el mercado bajo las nuevas reglas de interacción social.

En este artículo se hacen notar estas tendencias presentes en el campesinado ecuatoriano dedicado a la producción de arroz. Hemos creído necesario poner de manifiesto la existencia de al menos los dos grupos mencionados dentro del campesinado, para que se pueda advertir la complejidad de los efectos de la apertura sobre los pequeños productores agrícolas.

Importancia de la producción de arroz

El cultivo de arroz, tiene una considerable importancia en la agricultura ecuatoriana. Basta citar alguna información de las dos últimas décadas. La producción nacional se elevó de 154.171 tm de arroz pilado en 1970, a 350.948 tm en 1990. Es decir que la producción se duplicó en 20 años.

En lo que se refiere al área cosechada, la misma pasó de 76.000 Has, en 1970 a 152.844 Has en 1990, es decir que también aquí se registró una duplicación. Se trata pues de un crecimiento progresivo de la producción de arroz a lo largo del período considerado.

La producción de arroz está dirigida al mercado interno. El consumo nacional del grano ha aumentado considerablemente: se elevó de

190.909 tm en 1980 a 276.000 tm en 1990. Es decir, que en la última década el consumo también creció considerablemente.

Al mismo tiempo, se trata de un cultivo que ha tenido hasta ahora escasa importancia relativa en el comercio exterior ecuatoriano. En efecto, durante la última década solo se exportó arroz el año de 1987, y las importaciones no son significativas. Las mismas presentan una trayectoria errática; cayeron de 22.802 tm en 1980 a 15.000 tm en 1990, años en los cuales no se importó arroz.

Por otra parte, el arroz es un cultivo en el cual la producción campesina tiene una participación significativa. Esto puede observarse en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1

Producción campesina en la producción nacional de arroz

	1989	%	1990	%	1991	%
Producción nacional	75.592		75.080		104.682	
Producción campesina	20.803	27,50	21.386	28,40	30.380	29,00

Fuente: MAG

El cuadro registra la cantidad de hectáreas de arroz cultivada durante los tres últimos años en el Ecuador, y discrimina lo que corresponde a la producción campesina. Vale la pena aclarar que entendemos por campesinos a los productores que son propietarios de hasta 20 has. dedicadas a la producción de arroz.

Como se puede advertir en el cuadro, la producción campesina representa porcentajes significativos de la producción nacional. Para los tres años señalados representa el 28,3%. Se puede decir, entonces, que el campesinado es un importante sector en la producción nacional de arroz, y que, en consecuencia, una parte significativa de la oferta

del grano ha sido producida bajo la racionalidad específica de la producción campesina. Creemos que este puede haber tenido una importancia más o menos considerable en la formación de la oferta del grano para el mercado nacional. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, consideramos necesario analizar la política del Estado ecuatoriano en lo que se refiere a precios del arroz, crédito e insumos para la producción, pues esto nos dará una imagen adecuada de los que puede representar verdaderamente la apertura al mercado andino, y en general, al mercado mundial.

El Estado intervencionista y los agricultores

La imagen que tenemos del Estado ecuatoriano de los últimos 20 años, como un Estado que no solo es en sí mismo ineficiente sino que, además, transmite esta ineficiencia a los empresarios con sus políticas intervencionistas, es una imagen forjada en una buena medida por ciertos organismos gremiales de agricultores que supuestamente impulsan el desarrollo de una economía de mercado y un Estado eficientes.

Sin embargo, cuando se examina la política del Estado hacia la producción arrocera, se puede elaborar una imagen considerablemente diferente a la que surge de los enunciados públicos de los mencionados organismos. A continuación presentamos un cuadro que registra la evolución de la producción de arroz, los rendimientos y el nivel de protección que ha tenido la misma durante 17 años.

Cuadro No. 2

**Producción, rendimientos y nivel de protección
en producción de arroz 1970 – 1987**

Año	Producción arroz pilado	Rendimiento arroz pilado	Tasa de protección
1970	154.171	2,03	+24,2
1971	125.703	1,78	9
1972	155.227	1,95	-1,5
1973	173.375	2,09	-34,0
1974	221.767	2,19	-37,2
1975	280.673	2,13	-5,1
1976	247.171	1,90	+22,7
1977	204.764	1,91	+10,5
1978	140.796	1,73	+,8
1979	199.044	1,80	+17,1
1990	237.884	1,88	-8,5
1981	271.497	2,07	-19,8
1982	240.223	1,82	-,8
1983	170.939	1,80	-3,0
1984	273.229	1,96	+14,3
1985	353.129	2,36	+22,4
1986	359.918	1,58	+45,3
1987	296.739	2,22	-12,0

Fuente: Stewart y Cuesta, *La política de precios de arroz y sus efectos en el Ecuador. 1970-1997*. Quito 1988. MAG

El cuadro No. 2 contiene información importante sobre las relaciones del Estado y los productores de arroz. En el período considerado, es posible distinguir tres momentos. El primero se extiende desde 1972 hasta 1975; el segundo se extiende desde 1976 hasta 1983, y el tercero cubre los últimos cuatro años considerados.

Lo que caracteriza al primer momento, es un aumento de la producción y de la productividad, a pesar de que no está acompañado de una política proteccionista. El precio doméstico es inferior al precio de frontera. El aumento de la producción y de los rendimientos se produ-

ce debido a la fuerte oferta de crédito de estos años. También es importante señalar que durante estos años el gobierno de turno subsidió la importación de insumos para la agricultura.

En el momento subsiguiente es importante distinguir la política que se extiende de 1976 a 1979 y la política que cubre los cuatro años posteriores. Entre 1976 y 1979 se produce una caída tanto de la producción como de los rendimientos, ¡y esto ocurre mientras se protege la producción de arroz! Hay que tener en cuenta que durante estos años disminuyen otros incentivos que tenía la producción de arroz en años anteriores.

Pero en todo caso, la protección a la producción del grano no se traduce en un aumento de la productividad. Por lo tanto, se puede decir que la sociedad ecuatoriana pagaba por el arroz un precio que estaba por encima de lo que eran los costos sociales de producción del mismo. Es decir, la sociedad ecuatoriana despilfarraba recursos en la protección a productores inefficientes.

Entre 1979 y 1983 se eliminó nuevamente la protección. Sin embargo, desde 1984 esta última se reinstala. La producción y los rendimientos aumentan, pero con tasas de protección que llegan hasta el 45%.

Veamos lo que dicen al respecto Stewart y Cuesta: "Debido a esta protección, la siembra de arroz en 1986 superó a la de 1985 en 77 mil hectáreas. Estos niveles de protección nos indican que en 1986 el consumidor ecuatoriano pagó por el arroz doméstico un 45% más del valor FOB al productor de Guayaquil".

Dicho de otra manera, la relativa rentabilidad de la producción arrocera ha dependido ya sea de las políticas de subsidio al crédito público y a la importación de insumos y de las políticas proteccionistas. Esto significa que los productores de arroz se han apropiado de una parte de los excedentes del resto de la sociedad ecuatoriana a través de las políticas estatales mencionadas. Todo esto es bastante claro. Sin embargo, lo que ya no es tan evidente, es el hecho de que, de esta manera, se ha construido a lo largo del período en mención una particular relación entre los medianos y los grandes productores de arroz y el Estado.

En otras palabras, no han sido los campesinos los principales favorecidos con estas políticas estatales, sino los medianos y los grandes

productores de arroz, los cuales han podido aprovechar de menor manera el crédito estatal subsidiado y los precios oficiales pagados a través de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, ENAC.

La relación de los medianos y grandes productores con ENAC y el Banco Nacional de Fomento, BNF es clave para comprender lo que verdaderamente ha sido hasta ahora la racionalidad de la conducta económica de estos productores.

Vale la pena aclarar que no estamos sosteniendo que los campesinos no hayan sido favorecidos con las políticas estatales señaladas. Lo que sostenemos es que no han sido los principales beneficiados con dichas políticas.

En el país no se cuenta actualmente con información para hacer un análisis del crédito del BNF de acuerdo con los estratos de productores de arroz. Sin embargo, este análisis es importante. A nuestro juicio, revelaría que son los medianos y, los grandes productores los principales destinatarios del crédito del BNF, el cual ha tenido tasas de interés subsidiadas a lo largo del período que estamos considerando.

La razón de esto es que son estos productores los que tienen mayor capacidad de pago y, en consecuencia, pueden obtener crédito con mayor facilidad que los pequeños agricultores. Esto es lo que nos lleva a hacer esta proposición, la cual debe ser tomada como hipótesis, dado que, como decimos, no existe la información empírica necesaria para verificarla.

Sin embargo, se trata de una hipótesis importante, la cual, de corroborarse, nos permitiría una caracterización de este grupo de productores, que diferiría de aquella imagen, según la cual, se trata de un grupo de empresarios eficientes, gestores de la moderna economía de mercado.

Una cosa similar hay que decir de los precios que reciben estos productores como resultado de las políticas proteccionistas y de la actual estructura de comercialización del arroz.

Al respecto, el primer hecho que hay que destacar, es que los precios en el mercado interno no se han ubicado por debajo del precio del arroz en el mercado internacional, durante el período analizado. Dicho de otra manera, el Estado no ha castigado a los productores, imponiéndoles precios bajos artificiales. Incluso cuando la producción de arroz

no ha estado protegida, el precio doméstico se ha ubicado al mismo nivel que el precio de frontera.

Pero por otra parte, también es importante saber qué categorías de productores de arroz han podido vender su producción a los precios oficiales subsidiados, en aquellos años en los cuales ha habido protección para la producción arrocera. En efecto, no todos los productores de arroz tienen acceso a la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, ENAC. Tampoco se cuenta con información para analizar qué estratos de productores de arroz venden su producción en ENAC. Sin embargo, existen importantes diferencias de rentabilidad entre aquellos productores que pueden vender en ENAC a precios oficiales subsidiados y aquellos agricultores que se ven obligados a vender el arroz a precios de mercado.

Nuevamente, nuestra hipótesis es que los grandes y los medios productores reúnen mejores condiciones como para colocar su producción en la empresa estatal, a diferencia de los campesinos.

Aunque en principio no existe ningún impedimento para que los pequeños agricultores vendan su producción en ENAC, sin embargo, de hecho las características de la producción y, en general, de la economía de los mismos, determina que se vean obligados a vendérsela a los comerciantes locales.

Vale la pena detenerse en esto, aunque, como ya señalamos, no sea posible hacer un análisis de la oferta de arroz que compra ENAC, teniendo en cuenta los estratos de productores.

En primer lugar, los pequeños productores tienen en general escaso acceso al crédito formal, de modo que para financiar sus cultivos se ven obligados a recurrir a prestamistas y comerciantes locales. Uno de los compromisos que adquiere el campesino al obtener el préstamo, es el de venderle la cosecha al comerciante. Por lo tanto, los campesinos no pueden ofertar libremente su producción.

En segundo lugar, el campesino necesita dinero urgentemente después de la cosecha, y lo que ha caracterizado a la empresa estatal es el pago atrasado a los productores. La consecuencia es que los campesinos prefieren vender su producción a los comerciantes locales. A esto hay que agregar el hecho de que para ENAC lo rentable es comprar volúmenes significativos de arroz y no las pequeñas cantidades que pueden ofertar campesinos que apenas cultivan dos o tres hectáreas.

Se puede afirmar, entonces, que los pequeños productores venden su producción sobre todo a los comerciantes locales y que, en consecuencia, no han sido los principales favorecidos por los precios oficiales subsidiados cuando ha habido protección para la producción de arroz.

Esto no significa, por supuesto, que los campesinos no vendan en absoluto arroz a ENAC. Más aún, sobre todo los productores más pequeños -que poseen entre 0 y 5 Has- son los que tienen dificultades para colocar su producción en ENAC. Los campesinos acomodados sí ofertan su producción a ENAC.

Es importante aclarar que la empresa estatal no compra toda la producción nacional de arroz, de modo que la competencia entre los productores por colocar su producción en la misma es fuerte.

Aunque ENAC no compra cantidades muy significativas de la producción nacional de arroz, es lo suficientemente importante como para tener cierta influencia sobre el precio de mercado del grano en momentos de cosecha y generar un grupo de productores privilegiados cuya supervivencia no está fundada en el aumento de la eficiencia de sus unidades de producción y que, en consecuencia, constituyen una carga para la sociedad. En el siguiente cuadro pueden observarse las compras de ENAC durante 14 años.

Cuadro No. 3**Participación de la ENAC en la compra de
arroz nacional 1973 - 1987 (arroz pilado)**

Año	Producción	Rendimiento arroz pilado	Tasa de arroz pilado	protección
1970	154.171		2,03	+24,2
1973	173.375		0	.0
1974	221.767		7.727	3,5
1975	280.673		26.694	9,5
1976	247.171		4.710	1,9
1977	204.764		14.581	7,1
1978	140.796		7.965	5,6
1979	199.044		5.609	2,8
1980	237.884		36.457	15,3
1981	271.497		26.118	9,6
1982	240.223		27.760	11,5
1993	170.939		0	.0
1984	273.229		47	.0
1985	353.129		17.896	5,1
1986	359.918		79.708	22,1
1997	296.739		96.246	37,4

* Cifras proporcionadas según notas del delegado de ENAC en la bolsa de productores agropecuarios del 86-12-16. Fuente: Stewart y Cuesta; *La política de precios del arroz y sus efectos en el Ecuador. 1970 - 1997*. Quito, MAG, 1988

En el cuadro se puede ver que la mencionada empresa tiene una capacidad de compra limitada. Las compras de ENAC se hacen para influir sobre el precio de mercado. Se trata de impedir que el precio de mercado se 'derrumbe' en el momento de la cosecha de invierno, adquiriendo una parte de la producción, a precio subsidiado. Pero esto equivale a crear un grupo privilegiado de agricultores.

Ya señalamos que los campesinos también venden su producción en la empresa estatal, especialmente los campesinos acomodados, de modo que el grupo de privilegiados no está compuesto exclusivamente

de no campesinos, pero se puede sostener que son sobre todo medianos y grandes productores los que se benefician de la política de comercialización del Estado.

Consideramos que lo señalado hasta ahora aporta importantes elementos de juicio para juzgar posibles efectos de la apertura comercial sobre la producción de arroz en el Ecuador, aunque para emitir un juicio sobre los efectos de la misma sobre el campesino arrocero es necesario agregar nuevos elementos de análisis.

Por lo pronto, se puede afirmar que la apertura, al aumentar la competencia, va a racionalizar la producción de arroz, obligando a los productores a elevar la productividad. Decimos esto pensando sobre todo en los medianos y grandes agricultores que hasta ahora se han beneficiado de las políticas estatales mencionadas.

En efecto, hay que tener en cuenta que algunos de los socios del Pacto Andino tienen niveles de productividad en la producción arrocería, superiores a la productividad nacional, lo cual va a obligar a los agricultores ecuatorianos a racionalizar su conducta económica, como condición de su propia supervivencia. Las diferencias en la productividad pueden observarse en el Cuadro No. 4.

Cuadro No. 4

**Rendimiento de la producción de arroz en
Ecuador, Perú y Colombia (tm/há)**

PAÍS	1989	1990
ECUADOR	3,38	3,34
PERÚ	3,73	3,67
COLOMBIA	5,20	5,40

Fuente: MAG, FEDEARROZ

El cuadro muestra lo que son los actuales rendimientos en la producción de arroz en tres de los socios del Pacto Andino. El Ecuador es el país que tiene rendimientos más bajos. La participación en el Mercado

Andino significa que los productores tienen que racionalizar sus unidades de producción, volviéndolas eficientes y competitivas, como condición de su propia supervivencia y de la economía nacional.

Sin embargo, la competencia no va a afectar solamente a los medianos y grandes productores. También los campesinos tendrán que modernizarse. Veamos cuáles son las posibilidades que tienen de hacerlo.

Los campesinos y la modernización

Lo que nos interesa analizar son las posibilidades que tienen los pequeños productores de arroz de introducir innovaciones en sus unidades de producción, que les permitan reducir sus costos de producción y competir en el mercado.

Nuestra proposición es que se pueden distinguir dos estratos de campesinos dedicados a la producción de arroz. Los campesinos acomodados están en condiciones de introducir innovaciones tecnológicas que aumenten los rendimientos. En cambio, los agricultores más pequeños tendrán dificultades para hacerlo.

Para hacer el análisis hemos seleccionado dos cantones que nos parecen representativos de dos procesos diferentes, por un lado, el cantón Daule, ubicado en la provincia del Guayas, y por otro, el cantón Vinces, perteneciente a la provincia de Los Ríos.

El cantón Daule es representativo de procesos de modernización de la producción arrocera, ocurridos desde principios de la década de 1970, como consecuencia de la reforma agraria y de la política de 'siembra del petróleo', desarrollada entre 1972 y 1975 por el gobierno de entonces.

A diferencia de Daule, Vinces es un cantón que durante los últimos veinte años tuvo dificultades para modernizarse. Si bien fue afectado por el proceso de reforma agraria y los sistemas sociales de producción sufrieron cambios importantes, la agricultura de la zona agraria siguió siendo tradicional -incluso la agricultura de los medianos y grandes productores.

En los dos cantones ha habido durante los últimos veinte años un importante desarrollo del campesinado, pero mientras en Daule se

formó un campesinado moderno, con posibilidades de acumulación, en Vinces existe un campesinado tradicional, que no ha podido modernizarse. Con la apertura, la suerte de estos dos grupos será diferente.

Es importante aclarar que en los dos cantones no existen solamente campesinos. Por lo tanto, la información que vamos a presentar no se refiere exclusivamente al campesinado, sino el conjunto de los productores de los dos cantones. Sin embargo, también presentaremos información específica sobre el campesinado. En el siguiente cuadro podemos observar los rendimientos en producción de arroz de los dos cantones.

Cuadro No. 5

**Rendimiento de la producción de
arroz en los cantones Daule y Vinces (tm/há)**

	1989	1990	1991
DAULE	3,66	3,50	4,13
VINCES	2,91	3,32	3,53

Fuente: MAG

Las cooperativas de Daule que aparecen en el cuadro son bastante representativas de lo que ocurre en el cantón, entre los campesinos. Se trata de campesinos acomodados, que pueden realizar hasta tres cosechas de arroz al año y que durante los primeros años de la década de 1970 recibieron un importante apoyo del Estado, sobre todo en crédito y asistencia técnica.

Las cooperativas de Vinces son representativas de un campesinado que no pudo acceder a extensiones significativas de tierra. Poseen un promedio de dos hectáreas, dimensión que, para los campesinos de la costa ecuatoriana, es reducida.

Como se puede notar en el cuadro, las diferencias en los rendimientos son importantes. Mientras en Daule se obtiene un promedio de 48.4 sacos por ha., en Vinces el promedio es de 20.29 sacos. Es decir, que el rendimiento de Vinces es apenas el 54.9% del rendimiento que se obtiene en la zona de Daule.

La información presentada se refiere al cultivo de arroz de invierno, pero las diferencias anotadas también se presentan en el cultivo de verano.

Cuadro No. 6

Rendimiento de la producción de arroz en las cooperativas de Daule y Vinces

DAULE	Sacos/há	VINCES	Sacos/há
Luz Herminia			
Salvador Allende	49,0	Firmeza	28,2
S. Henrique	43,0	L. Murielado	20,2
23 de Agosto	43,0	Los Angeles	21,3
Nueva Estancia	50,0	Luz María	19,9
Barbasco	40,0	Luz y Patria	17,7
Alianza Definit	57,0	M. Guizasola	12,9
Victoria Definit	57,0	Nueva Vitalia	17,7
PROMEDIOS	48,42		20,29

Fuente: J. Luna; Los procesos de diferenciación campesina en el contexto cooperativo, Machala. DISE, 1979, y UNOCAVB; Resultados de la investigación sobre comercialización, Vinces, 1989.

La tecnología

A diferencia de lo que ocurre en Daule, los pequeños productores de Vinces se caracterizan por no usar semillas certificadas. Si bien los campesinos adquieren de vez en cuando semilla en el mercado, las variedades que adquieren no están adaptadas para la zona.

Pero lo más significativo desde el punto de vista de la racionalidad de estas economías es que el campesino no está interesado en comprar semilla certificada. Guarda la semilla que adquiere, y la usa durante varios ciclos productivos, con lo cual se produce un proceso degenerativo de la misma, que se traduce en una caída de los rendimientos.

Además, es importante hacer notar que la dimensión de las parcelas de los campesinos de Vinces dificulta el uso de la tecnología mecánica, y en particular, de los tractores. Se trata de extensiones de tierra pequeñas en las cuales se vuelve difícil el movimiento de la maquinaria y se elevan los costos del uso de la misma. Por este motivo, los campesinos de Vinces tienen dificultades para arrendar maquinaria en época de siembra. Asimismo, en lo que se refiere a obras de infraestructura para riego, la diferencia entre los dos grupos de cooperativas es muy fuerte: mientras las cooperativas de Daule cuentan todas con obras de infraestructura (muros de contención), las cooperativas de Vinces carecen por completo de los mismos. También se puede decir que, debido a la pequeña dimensión de las parcelas, las inversiones en infraestructura muchas veces no son rentables.

Este es el caso de los pozos para obtención de agua. El costo de los mismos no se justifica para la pequeña escala de la producción campesina en Vinces.

Campesinos acomodados y campesinos pobres

La información presentada hasta ahora sobre las tendencias de la producción campesina, apunta a fundamentar la proposición que hiciéramos al iniciar este trabajo, según la cual ciertos sectores campesinos pueden incorporarse al proceso de modernización y que otros tienen o van a tener importantes dificultades para hacerlo.

Como ya hemos señalado, la competitividad de las unidades de producción va a depender de su capacidad para aumentar sus rendimientos y, de esta manera, reducir sus costos de producción. Para esto es necesario introducir innovaciones tecnológicas, las cuales deberán ser tanto más importantes cuanto que, como hemos visto, países como Colombia y Perú tienen rendimientos significativamente superiores a los nuestros.

Dichas innovaciones tecnológicas solo podrán llevarse a cabo si los campesinos cuentan con el capital necesario como para adquirirla en el mercado. Lo que caracteriza a los dos grupos de campesinos que hemos venido analizando es, precisamente, el hecho de que los campesinos de Daule, a diferencia de los campesinos de Vinces, poseen capa-

cidad de acumulación. Analicemos en primer lugar la información disponible sobre la extensión de las propiedades de los dos grupos de campesinos seleccionados.

Cuadro No. 7

**Nivel técnico de la producción de arroz en
los cantones Daule y Vincé 1991**

	Riego de Transplante (hás)	SEMITEC (hás)	Siembra Siembra (hás)	Siembra tradicional directa (hás)
DAULE	5.444	2.887	1.142	1.217
VINCÉS	478	195	852	522

Fuente: MAG

Como se puede advertir en el cuadro, existen importantes diferencias en los rendimientos entre los dos cantones. Esto revela lo que hemos dicho, en el sentido de que la producción de arroz en Daule es más moderna que en Vincés.

Si bien la información del cuadro no se refiere a todo tipo de productor de arroz, las diferencias anotadas también existen entre las unidades de producción específicamente campesinas. El siguiente cuadro pone esto de manifiesto.

Esto obedece al hecho de que una de las características de las unidades de producción de Vincés, es la escasez de capital. Esto significa que el productor tiende a reducir sus desembolsos monetarios; por lo tanto, no compra semilla certificada, para reducir así sus costos monetarios, aunque esto conlleve una caída de los rendimientos.

Por otra parte, existen importantes diferencias entre los dos cantones y, en particular entre los campesinos, en lo que se refiere a obras de infraestructura y mecanización de los cultivos. Veamos primero la información a nivel cantonal.

En el cuadro constan cuatro sistemas de siembra del arroz. El primer sistema es el más moderno. Se trata de un sistema que cuenta con riego, lo cual permite un control oportuno del agua. Tanto en el primer sistema como en el segundo se utiliza semilla certificada.

En cambio, lo que ocurre con los últimos sistemas es que no cuentan con riego, sino que dependen de las lluvias. En los dos casos se usan formas muy tradicionales de siembra manual y no hay utilización de maquinaria en otras labores.

Como se puede observar, en el cantón Daule tienden a predominar los dos primeros sistemas de siembra, por oposición a Vinces, donde son dominantes los sistemas tradicionales de siembra.

Es importante destacar el hecho de que el sistema de "riego por transplante" se caracteriza por contar con obras de infraestructura y de bombas de riego; por lo tanto, tienen poco control sobre el agua, lo cual, por una parte, significa que el riesgo del cultivo es bastante alto, y por otra parte, la falta de control sobre el agua también incide negativamente sobre los rendimientos.

De los cuatro sistemas de siembra que figuran en el cuadro No. 8, el más tradicional es la siembra con espeque. Como se puede ver, es el que más se utiliza en la zona de Vinces, y particularmente entre los campesinos. Estos han empezado a utilizar el voleo como sistema de siembra, pero la siembra con maquinaria es poco común entre pequeños productores que carecen de dinero para arrancarla.

Cuadro No. 8

Sistema de siembra en los cantones Daule y Vinces

	Transplante	Máquina	Espeque	Voleo
DAULE	3.747	1.143	1.159	4.641
VINCES	—	815	1.232	—

Fuente: MAG

Por último, veamos lo que son las diferencias en los sistemas de riego de los dos cantones. Ya anotamos algo al respecto, pero es necesario detenerse en esto debido a la importancia que tiene para el cultivo de arroz. El siguiente cuadro contiene la información pertinente.

Cuadro No. 9**Sistema de riego en los cantones Daule y Vinces**

	Altamente Tecnificada	Riego de transplante	Siembra directa	Poza	Tradicional siembra directa
DAULE	150	3.693	3.111	1.408	
VINCES			1.199	1.375	

Como ocurría en el caso de la información sobre sistemas de siembra, también es el caso de los sistemas de riego, la agricultura de los campesinos de Vinces es la más tradicional.

El llamado cultivo de poza es el mejor ejemplo al respecto. Se trata del cultivo del arroz en el verano, el cual se realiza en aquellas depresiones del terreno que, durante la estación lluviosa, han sido inundadas. Se siembra a medida que desciende progresivamente el agua.

Lo que aparece en el cuadro como cultivo altamente tecnificado no sólo cuenta con sistema de riego; además utiliza maquinaria, cosechadora, control fitosanitario. Esto último casi no se utiliza en los sistemas de cultivo predominantes entre los campesinos de Vinces. El riego, el uso de semilla certificada, la utilización de maquinaria, la fertilización, etc., son todas tecnologías que reducen los riesgos del cultivo y/o elevan los rendimientos. Esto es lo que se expresa en los altos rendimientos relativos de los productores del cantón Daule con respecto a Vinces. Ahora bien, las características que hemos encontrado a nivel cantonal en lo que tiene que ver con la tecnología de la producción de arroz, también se puede verificar a nivel de los dos grupos de cooperativas de Daule y Vinces, respectivamente, sobre las cuales ya presentamos alguna información. Veamos el siguiente cuadro, referente al uso de bombas de agua y tractores en las organizaciones mencionadas.

Cuadro No. 10

**Uso de tractores y bombas de agua
en las cooperativas de Daule y Vinces**

	Bombas de agua	Tractor	Ubicación
Luz Herminia	1	16P	DAULE
Salvador Alle	2	10P	DAULE
S. Henrique	4	25P	DAULE
23 de Agosto	1	12P	DAULE
Nueva Estancia	1	12P	DAULE
Barbasco	2	24P	DAULE
Alianza Definit	1	12P	DAULE
Victoria Definit	1	8P	DAULE
Guayabo	-	-	VINCES
Firmeza	-	-	VINCES
L. Murialdo	-	-	VINCES
Los Angeles	-	-	VINCES
Luz María	-	-	VINCES
Luz y Patria	-	-	VINCES
M. Guizasola	-	-	VINCES
Nueva Vitalia	-	-	VINCES

Fuente: J. Luna; Los procesos de diferenciación campesina en el contexto cooperativo. Machala; DISE 1979; y UNOCAVB. Resultados de la investigación sobre comercialización, Vinces.

En el cuadro se pueden observar, a nivel de las cooperativas, las mismas tendencias que encontramos a nivel cantonal. Como puede verse, las cooperativas de Daule tienen en su mayoría bombas de riego y tractores, a diferencia de lo que ocurre en Vinces, donde solo una tiene tractor.

Es importante aclarar que esto no significa que los campesinos de Vinces no utilicen tractor para preparar el suelo. En realidad arriendan la maquinaria. Pero lo que revela el cuadro -y esto es bien importante- es que las cooperativas de Daule están más capitalizadas que las de Vinces.

El cuadro No. 11 muestra que los socios de las cooperativas de la zona de Daule poseen en promedio propiedades con extensiones de tierra superiores a las propiedades de los campesinos de las cooperativas de Vinces. Si bien los promedios presentados solo corresponden a las organizaciones que figuran en el cuadro, esta tendencia es válida para cada uno de los cantones en mención.

Cuadro No. 11

Promedio de hectáreas por socio en las cooperativas de Daule y Vinces

DAULE	Hás.	VINCES	Hás.
Luz Herminia	25,7	Guayabo	8,0
Salvador Alle	4,0	Firmeza	16,4
S. Henrique	6,1	M. Guizasola	1,0
23 de Agosto	2,2	L. Murielado	6,7
Nueva Estancia	4,2	Los Angeles	4,2
Barbasco	14,8	Nueva Vitalia	8,6
PROMEDIOS	9,50		7,40

Fuente: J. Luna; Los procesos de diferenciación campesina en el contexto cooperativo. DISE 1979; y VV.AA; La situación de los campesinos en ocho zonas del Ecuador, Quito, 1984

Más aún, es importante hacer notar que la información del cuadro no discrimina entre tierras para la producción de arroz y otros cultivos. En el caso de los campesinos de Daule, la mayoría de la tierra que recibieron es tierra con vocación arrocera, al extremo de que tienen dificultades para introducir otros cultivos.

En cambio, en Vinces los campesinos recibieron cantidades más o menos significativas de tierra dedicada sobre todo a la producción de cacao. Esto significa que las parcelas dedicadas a la producción de arroz propiamente dicha, son bastante más reducidas de lo que dice el cuadro; aproximadamente, el 50% de esas dimensiones.

Hemos hecho referencia a la dimensión de las propiedades por varias razones, pero, en primer lugar, porque de la misma depende la capacidad de pago de un campesino. Dicho de otra manera, la posibilidad de obtener préstamos por parte de la banca del Estado, durante los últimos veinte años ha dependido fundamentalmente del valor de las tierras en propiedad de los campesinos.

Por otra parte, una de las características de los campesinos de Daule es su nivel superior de capitalización, el cual se expresa claramente en la existencia de cierto capital fijo. Este está representado por las obras de infraestructura para riego, las bombas de agua y la maquinaria. Pero también en lo que se refiere al capital circulante existen diferencias apreciables. En efecto, lo que caracteriza a los campesinos de Vinces es el hecho de hacer relativamente pocos gastos en insumos como fertilizantes y pesticidas.

Lo que hemos dicho sobre el capital y la tierra en las dos economías campesinas, nos permite extraer una primera conclusión: a diferencia de lo que ocurre con los campesinos acomodados de Daule, entre los campesinos pobres escasean dos factores de producción, esto es, tierra y capital.

Esto tiene importancia para comprender la diferencia que existe entre las economías del campesinado pobre y de los campesinos medios, con posibilidades de acumulación. En las dos economías se compra y se vende mano de obra asalariada, pero los ingresos que se obtienen en cada una por el mismo concepto tienen una función diferente. Veamos el siguiente cuadro.

Cuadro No. 12

**Jornales comprados y vendidos en las cooperativas de Daule
(en sucre de 1976)**

	Jornales No.	Vendidos valor	Jornal extra Familia valor
Luz Herminia	285	20.160	3.158
Salvador All -	-	-	-
S. Henrique	360	25.200	9.740
23 de Agosto	180	18.120	4.480
Nueva Estancia	225	33.150	12.602
Barbasco	264	18.480	18.209
Alianza Definit	60	4.200	3.600
Victoria Definit	72	5.040	8.556
Fco. Acosta	-	-	-
Mariana de Jesús	-	-	-

Fuente: J. LUNA; Los procesos de diferenciación campesina en el contexto cooperativo. DISE 1979, Machala

Se puede decir que en las primeras cuatro organizaciones, ya en la época de la investigación, había en marcha un proceso de acumulación de capital. Pero es importante advertir que la posibilidad del mismo no depende, exclusivamente, del hecho de que el productor venda más mano de obra de la que compra.

Los campesinos pobres generalmente no compran mano de obra sino que, al contrario, venden la suya propia, y sin embargo, en sus unidades de producción no se verifican procesos de acumulación. Por lo tanto, los ingresos monetarios que ciertas unidades de producción obtienen de los jornales que compran y venden sólo pueden ser interpretados como parte de un proceso de acumulación si se tiene en cuenta también los ingresos que obtiene la familia campesina por concepto de la producción agropecuaria.

Ahora bien, el análisis realizado por Jorge Luna de las cooperativas arroceras de la zona de Daule, revela, precisamente, que en algunas de ellas se estaban verificando procesos de acumulación de capital, como puede observarse a continuación.

Cuadro No. 13

**Ingresos netos en algunas cooperativas arroceras de Daule
(en sucre de 1976)**

	Ingreso Total	Gastos	Ingreso Neto
Luz Herminia	72.660	24.732	13.963
Salvador Allende	18.000	8.514	9.486
S. Enrique	148.995	65.646	83.349
23 de Agosto	54.120	18.451	35.669
Nueva Estancia	81.150	23.594	57.556
Barbasco	138.480	66.967	71.513
Alianza Definitiva	49.200	11.406	37.794
Victoria Definiti	41.040	24.635	16.405
Fco. Acosta	48.720	25.272	23.448
Mariana de Jesús	39.120	8.846	30.274
Comejen	36.000	17.803	18.197
Sr. de los Milagros	84.600	29.644	54.956

Fuente: J. LUNA; Los procesos de diferenciación campesina en el contexto cooperativo. DISE 1979, Machala

Según señala Jorge Luna, los ingresos netos señalados permiten hablar de la constitución de un fondo de acumulación en 8 de las 12 cooperativas estudiadas, pues a junio de 1976, el costo de la canasta mínima de bienes y servicios sumaba la cantidad de 4.087 sucrens. Si se comparan los dos últimos cuadros se podrá apreciar que los ingresos que la familia obtiene por venta de mano de obra son relativamente importantes en la constitución del mencionado fondo de acumulación, pero de este último no se puede dar cuenta solo con los ingresos monetarios que la familia obtiene por venta de mano de obra.

La misma información que hemos presentado sobre las cooperativas de Daule revela que, incluso al interior de estas cooperativas, ya en aquella época (1976) estaba en marcha un proceso de diferenciación campesina que, así como daba origen a un grupo de campesinos acomodados, también generaba campesinos que no podían mantener su proceso productivo en escala ampliada.

Ecuador: Pobreza rural¹

PETER LANJOUW²

Introducción

En Ecuador, el estudio de pobreza, en sus numerosas dimensiones, tiene una rica tradición. Este estudio ha producido un razonable cuerpo de conocimientos sobre el standard de vida de los pobres, en términos no solo del ingreso, sino también del acceso a los servicios básicos, niveles de educación, situación nutricional y de salud. No obstante, salvo varias excepciones, la pobreza rural ha sido poco analizada al nivel de país. Uno de los mayores impedimentos para ampliar el debate hacia ese campo ha sido la carencia de estadísticas confiables al nivel de hogares.

El propósito de este trabajo es contribuir con nuevos datos a la comprensión de la economía y pobreza rurales. Con este fin, el análisis se detiene en la reciente *Encuesta de Condiciones de Vida* (1994)³, una investigación al nivel de hogares, de propósito múltiple, diseñada en forma muy semejante al formato de la *Living Standards Measurement Survey (LSMS)* desarrollada en años recientes por el Banco Mundial. Si bien la evidencia y la investigación presentadas son básicamente descriptivas, donde los datos lo permiten, también se han realizado comentarios sobre los basamentos causales de la pobreza rural y sugerido potenciales medidas de política.

1 Tomado de *Cuestiones Económicas* No. 27. Quito: Banco Central del Ecuador, diciembre de 1995

2 Banco Mundial

3 En adelante ECV

La organización del trabajo es la siguiente. En la próxima sección se pasa revista, brevemente, a algunos aspectos destacados del conjunto de datos usados en el análisis, contrastando el tipo de información disponible en esta encuesta con la que puede encontrarse en investigaciones anteriores. La tercera sección examina la pobreza rural en el contexto más amplio de la pobreza ecuatoriana. También se analiza la distribución de los niveles de vida y el lugar en que encaja la desigualdad rural dentro del mapa nacional. La cuarta sección revisa algunas de las variables correlacionadas con la pobreza descritas en este informe y cuestiona el significado de ser pobre en el agro ecuatoriano. La quinta sección se desprende del análisis anterior para examinar más detenidamente la economía agraria. En este aspecto se han hecho varias preguntas relevantes: si existen vínculos entre la distribución de la tierra, la pobreza rural y la eficiencia agrícola; si los pobres difieren marcadamente de los no pobres en cuanto a patrones de cultivo; si la intensidad de los cultivos varía con la condición socioeconómica del agricultor; si los trabajadores agrícolas forman una clase dentro de la población rural particularmente en riesgo de caer en pobreza; y, si tiene importancia la propiedad de animales domésticos y de ganado. En la sexta sección se enfoca la economía rural no agrícola. En este capítulo se trata de conocer si los pobres del campo participan en el sector no agrícola de la economía rural y que importancia tiene este sector como medio para superar la pobreza. La séptima sección contiene un ejercicio econométrico en el que se asocia simultáneamente una serie de factores correlacionados con la pobreza, medida en varias formas distintas. El propósito de este esfuerzo es identificar aquellos indicadores cuya asociación con la pobreza se mantiene robusta, incluso cuando se los analiza en forma concurrente con otras variables. La sección final ofrece algunos comentarios.

La organización de este trabajo, en especial la elección de los aspectos examinados, ha sido motivada especialmente por el análisis contenido en el estudio *Rural Qualitative Assessment (RQA)* del Banco Mundial (1995, Working Paper 5, parte II), que contiene los resultados de una investigación realizada en siete pueblos del área rural ecuatoriana, usando técnicas cualitativas, con el propósito de obtener una idea de cómo los pobres ven sus propias condiciones de vida. El *RQA* no pretende extender sus resultados a toda el área rural del país.

La dimensión del estudio, así como la muestra y las técnicas de las entrevistas utilizadas, impiden tal generalización que, por otro lado, nunca fue su propósito. El *RQA* es especialmente útil como complemento al más sistemático análisis intentado en estas líneas. Si bien no se puede extender a todo el país la experiencia de un número relativamente pequeño de aldeanos, sí es posible preguntar si las circunstancias y los procesos detectados en una investigación cualitativa pueden considerarse significativos en un ámbito mayor. El *RQA* es útil como guía para reflexionar sobre la pobreza rural ecuatoriana, despertando preguntas de especial importancia y procurando indicadores para sus posibles explicaciones.

La Encuesta de Condiciones de Vida en el Ecuador

Este análisis, basado en la investigación tipo *LSMS* para Ecuador (1994), utiliza como indicador central de bienestar una medida de consumo de los hogares. Esta es una importante diferencia con esfuerzos anteriores de medición de la pobreza rural ecuatoriana, basados en el ingreso. Los méritos relativos de medidas diferentes -incluidos consumo e ingreso- para identificar a los pobres han sido analizados por Chaudhuri y Ravallion (1993) y discutidos adicionalmente por Ravallion (1994). En lo esencial, se sostiene que las medidas de consumo no son tan propensas a fluctuar con variaciones estacionales o alteraciones de las cosechas (de tal forma que una encuesta instantánea proporcionaría indicios razonables de los niveles de vida a largo plazo), y que la información sobre el consumo es de más fácil recolección y en consecuencia menos propicia a adolecer de omisiones importantes. Un atractivo adicional de una encuesta que incluye información detallada sobre el consumo es que permite el cálculo, a partir de los datos, de una línea de pobreza absoluta basada en el consumo calórico. De hecho, este enfoque ha sido asumido para el presente estudio.

La crítica importancia de datos confiables y completos sobre los niveles de vida, cuando el análisis de la pobreza se hace a partir de encuestas de hogares, no debe exagerarse. Este punto puede ser explicado al trabajar en ciertos aspectos específicos que surgen de una encuesta alternativa. Antes de terminar la *ECV*, la única fuente de informa-

ción de alcance nacional relativamente reciente sobre niveles de vida rural era la *Encuesta permanente de hogares: Estacionalidad del empleo rural 1990* (INEM). Esta investigación cubre 4000 hogares entrevistados en 1990. La base de datos contiene información sobre ingresos, ocupación, tenencia de la tierra y otros aspectos de las economías de subsistencia. Aunque muy útiles para muchos propósitos, los datos adolecen de importantes limitaciones al aplicarlos al análisis de la pobreza. Surgen dos problemas fundamentales, probablemente a consecuencia del hecho de que la encuesta originalmente estuvo diseñada para medir la condición ocupacional y los ingresos, y no necesariamente los niveles de vida en forma más amplia. En primer lugar, la base de datos recoge información sobre el producto bruto agrícola de las familias campesinas, pero no sobre los costes de cultivo incurridos. Al usar unidades de valor, se puede expresar el producto agrícola en términos de valor y a partir de esto, obtener una medida del ingreso agrícola bruto. Sin embargo, es erróneo usar este ingreso como una aproximación a los niveles de vida relativos, pues los costes de cultivo pueden variar drásticamente entre campesinos. Es imposible convertir el ingreso bruto en neto, pues no se dispone de presupuestos agrícolas para los diferentes tamaños de unidades productivas o tipos de ingresos; además, es claramente inaceptable suponer que los insumos son uniformemente utilizados por todos los campesinos.

El segundo problema con los datos del INEM es que la encuesta adolece de falta de información sobre ingresos para una fracción importante de la población rural no involucrada en la agricultura, ni participación explícita del mercado de trabajo. Se ha omitido, en consecuencia, información sobre los ingresos de unos 1600 individuos (de un total de cerca de 6000 informes con alguna forma de actividad económica que reporta ganancia). Estos son comerciantes, sastres, carpinteros, albañiles, pescadores, etc., todos activos cuentapropistas. Es probable que muchos de estos individuos puedan considerarse pobres (en la medida en la que la pobreza está vinculada a la actividad informal en pequeña escala), pero resulta claro que esas formas de ocupación bien podrían constituir eventuales mecanismos para escapar de la pobreza.

Estas dos falencias tendrían implicaciones contraproducentes en la medición de la pobreza. Exagerar el ingreso agrícola tendería a reducir su incidencia en las áreas rurales, mientras que omitir un com-

ponente relevante del ingreso de los hogares (al menos para una porción de ellos) produciría sobredimensionamientos. No se conoce la importancia relativa de los errores detectados, pero queda claro que cualquier estimación de la pobreza rural, basada en un indicador defectuoso de los niveles de vida, sería poco confiable. Nótese que en las áreas urbanas los defectos de medición del ingreso agrícola presumiblemente serían casi inocuos, pero si no han sido capturados ciertos componentes del ingreso (como ganancias en fuentes informales), todavía operaría un sobredimensionamiento de la pobreza urbana.

En el *Perfil de Pobreza* (Hentschel and Lanjouw 1995), se describe la metodología adoptada para transformar la información sobre las adquisiciones de una amplia gama de bienes de consumo en una cifra agregada de consumo de los hogares⁴. Para nuestros propósitos se ha tomado atención especial a los 1374 hogares residentes en áreas rurales (de un total de 4391 encuestados).

El argumento desarrollado enfatiza la distinción entre 'pobres' y 'no pobres', como si fuera la mejor, o la única forma de comparar hogares y personas. Sin embargo, de hecho esta práctica en realidad ha sido adoptada con propósitos demostrativos, en beneficio de la claridad. Esta vía tiene la potencial desventaja de oscurecer el hecho trascendente de que la pobreza en realidad no es una condición excluyente. Existe un amplio espectro de privación, con los situados justo bajo la línea de pobreza considerablemente mejor que los que se encuentran lejos de ella. La atención de los planificadores no necesariamente debe dirigirse a la cantidad de 'pobres'; en una situación en la cual se intenta maximizar el ataque a la pobreza con limitados recursos públicos, se justifica enfocar la acción sobre los pobres situados justo por debajo de la línea, pues ellos requieren de menos transferencias para convertirse en 'no pobre'. En consecuencia, si bien resulta útil enfatizar el contraste entre pobres y no pobres, con el fin de ilustrar un punto, se debe tener presente que este mecanismo no deja de ser algo toscos.

4 Esta metodología es también explicada en un documento separado: Jesko Hentschel and Peter Lanjouw (1995) *Aggregating Consumption Components for Poverty Analysis: Principles, Illustrations and Sensitivity* LSMS Working Paper, World Bank, Washington D.C. Detalles sobre la metodología aplicada para calcular la línea de pobreza están también en el *Perfil de Pobreza* (Hentschel y Lanjouw, 1995).

La pobreza rural dentro de la pobreza total

En el Cuadro 1 se establece el alcance de la pobreza en el Ecuador, por regiones y por sectores urbano y rural. Los cálculos correspondientes se han obtenido sobre la base de dos líneas de bienestar, la 'línea de pobreza extrema' y la 'línea de pobreza' descritas en el *Perfil de la Pobreza*. Se han aplicado tres medidas diferentes: incidencia (que corresponde a un recuento de los pobres bajo las respectivas líneas de pobreza), profundidad (que toma en consideración la distancia respecto de la línea de pobreza) y severidad (que pondera con pesos mayores a los puntos más alejados de la línea de pobreza). Calculada desde la línea de pobreza, la incidencia de ésta llega al 35 por ciento. Con respecto a la misma línea, la incidencia de la pobreza rural alcanza el 47 por ciento, mientras que en áreas urbanas es de alrededor de la mitad, un 25 por ciento. Al comparar las tres principales regiones del país, se tiene que la pobreza rural es mayor en el Oriente, luego la Costa y por último la Sierra. En los tres casos, la incidencia en el sector rural es considerablemente mayor que en el urbano. El escrutinio a partir de indicadores diferentes al número de pobres revela que las clasificaciones regionales no están distribuidas en forma igual. De hecho, cuando se considera la medida de severidad, se encuentra que en la Sierra, la pobreza es más severa que en la Costa lo que altera la clasificación obtenida a partir de la medida de incidencia.

¿Cómo se puede comparar esta medida de pobreza rural con trabajos anteriores? Una incidencia del 47 por ciento es significativamente menor que las calculadas a partir de fuentes alternativas, usualmente análisis sustentados en el ingreso (Cuadro 2). Existen varias explicaciones para esta discrepancia. La más importante es que el factor de escala que se ha usado para derivar la línea de pobreza corresponde a esa fracción del presupuesto de gastos destinada a artículos no alimenticios de quienes pueden en principio tener sus requerimientos de alimentación mínima. La mayoría de estudios realizados en Ecuador utilizan un factor de escala diferente, especialmente el que se usó para derivar la línea de vulnerabilidad. El 67 por ciento de pobreza que produce el escoger como punto de ruptura la línea de vulnerabilidad, se encuentra mucho más cercana a otras estimaciones realizadas en el área rural ecuatoriana.

Más aún, ya se ha descrito otras posibles fuentes de discrepancia en las estimaciones, en especial que las cifras de ingresos usadas

en otros análisis acarrean problemas (como los de la investigación del INEM (1990), que sirve de sustento a las estimaciones de Cabrera et.al). Estas fuentes pueden omitir componentes del ingreso potencialmente importantes y en consecuencia deprimir el verdadero nivel de vida de ciertos hogares de las áreas rurales.

De lo expuesto previamente surgen al menos tres observaciones. En primer lugar, algunas veces es útil dar marcha atrás y preguntarse cuál es el propósito de un perfil de pobreza. La idea es ayudar a identificar los subgrupos de población más vulnerables y que enfrentan mayores tribulaciones. Es mucho más importante conocer las condiciones de vida y causas de la pobreza de los grupos más vulnerables. Una cifra del 80 por ciento -básicamente la población entera- no ayuda a obtener una visión apropiada y consecuentemente casi no contribuiría al diseño de programas para contrarrestarla.

En segundo lugar, si el grueso de la discusión se concentra alrededor de números específicos para medir su incidencia, se puede argumentar que es de importancia secundaria. Usualmente es mucho más difícil, dado el objetivo de priorizar políticas y acciones, tener la capacidad de realizar comparaciones entre sectores, por ejemplo, o entre regiones. Los niveles reales de pobreza no son esenciales cuando el interés es comparar varios grupos.

Esto conduce al tercer punto, en particular, que donde se realizan comparaciones de pobreza, es importante establecer cuan robustas son ellas. Interesa conocer si, por ejemplo, la Costa rural puede ser considerada más pobre que la Sierra rural, sin importar el tipo de medida que se desea emplear, o la localización exacta de la línea de pobreza. Si una comparación llega a considerarse robusta, confiere mayor seguridad a la priorización de esfuerzos en la región o sector que se determine más pobre. Por el contrario, si las comparaciones son frágiles, se hace menos atractivo asumir preferencias en las acciones a tornar.

En años recientes, los adelantos en la medición de la pobreza han simplificado la aplicación de estas técnicas, al tiempo que se han consolidado los criterios de robustez comparativa⁵. El proceso comien-

⁵ La literatura sobre medición de pobreza usando técnicas estocásticas ha venido creciendo rápidamente. Pueden encontrarse buenas revisiones del tema en Atkinson (1989), Howes (1993) y Ravallion (1994).

za con un gráfico de las funciones de distribución de las poblaciones a ser comparadas. En el Gráfico 1 se compara la función de distribución del área rural con la del área urbana. Por la teoría subyacente a estas técnicas se puede afirmar que, como las dos curvas no se intersecan en ningún punto, es mayor la pobreza de la población representada por la curva que yace en cualquier lugar sobre la otra curva. *Esto es verdad no solo para la incidencia de pobreza, también lo es para cualquier otra medida de pobreza de uso común.* Más aún, se puede dibujar una línea vertical que represente la línea de pobreza en cualquier lugar a lo largo del eje horizontal y confirmar que el resultado se mantiene, esto implica que el resultado es robusto sobre cualquier posible línea de pobreza. En consecuencia, a partir de este gráfico se concluye con claridad que la pobreza rural es mayor que la urbana.

También se puede notar en el Gráfico 1 que la línea de pobreza empleada en el Cuadro 1 (correspondiente a S/. 45.500 quincenales por persona) corta la función de distribución rural en donde es particularmente pronunciada. Esto indica que ajustes relativamente pequeños en el sitio preciso de la línea tendrán gran impacto en la incidencia de pobreza medida, correspondiente a esa línea de pobreza. Por ejemplo, si se aplica la línea de vulnerabilidad a S/. 60.000 (un incremento de alrededor de US\$ 0,50 a US\$ 2.00 por día por persona), la incidencia de la pobreza en áreas rurales subirá del 47 al 67 por ciento, mucho más cercana a cifras obtenidas en estudios previos⁶.

En el Gráfico 2 se desarrolla un ejercicio similar para comparar las poblaciones rurales de las tres principales regiones del país. En este caso, todas las curvas se intersecan en algún punto. Si utilizando las líneas de pobreza del Cuadro 1, la Costa rural puede aparecer menos pobre (basada en la medida de incidencia) que su contraparte serrana,

6 Nótese en este punto que se ha dispuesto convencionalmente ajustes del gasto por variaciones espaciales de los costes de vida. Esto permite comparar todos los gastos respecto a la misma línea de pobreza. Un acercamiento alternativo, pero equivalente, habría sido comparar los gastos nominales contra líneas de pobreza que tomen diferentes valores en los diferentes lugares del país. El procedimiento seguido -de ajuste al gasto- consistió en disminuir los gastos nominales dentro de cada ciudad muestral por la relación de la línea de pobreza específica a esa ciudad con el promedio ponderado poblacional de todas las líneas de pobreza extrema.

el resultado cambia con una línea de pobreza de alrededor de S/. 30.000 quincenales per capita, y con líneas inferiores se produce una reclasificación. En forma similar, con líneas de pobreza extrema, incluso el Oriente rural puede parecer menos pobre que la Sierra rural. Debido a que las funciones de distribución se intersecan con cualquier línea, no se puede afirmar que la jerarquización obtenida sobre la base de la medida de incidencia, también pueda obtenerse con medidas alternativas. En consecuencia, no se puede obtener una clasificación por regiones, robusta para cualquier línea de pobreza y para toda medida posible. Esto alerta contra afirmaciones que colocan en peor posición a una región, con respecto a otras.

De la aplicación de estas técnicas de 'dominancia estocástica' se ha concluido que las comparaciones entre pobreza urbana y rural son muy fiables, y que indican, sin lugar a dudas, que en áreas rurales la pobreza es mayor que en áreas urbanas. Esta conclusión interesa en el más amplio contexto latinoamericano, dada la percepción -aparentemente extendida- de que en América Latina, la pobreza se está convirtiendo en un fenómeno urbano. Esta noción parece sustentarse en la idea de que si bien la pobreza rural puede ser alta, la población urbana latinoamericana está creciendo mucho más rápido, por lo que los pobres urbanos también están creciendo a un ritmo más acelerado⁷. Sin embargo, del análisis previo queda claro que el número de pobres es solo una forma de medir la pobreza, y si la diferencia entre áreas rurales y urbanas en Latinoamérica como un todo es comparable a la observada en Ecuador, no es probable que la idea prevaleciente sea correcta, incluso si se relaja el juicio implícito de que las distancias bajo la línea de pobreza no acarrean un peso adicional. En la medida en la que la actual percepción está influyendo significativamente en el desarrollo de políticas y acciones, se puede pedir precaución.

Antes de concluir esta sección, se comenta en breve sobre el grado de desigualdad del consumo. Se ha argumentado en el *RQA* que es difícil justificar la noción de una población rural homogénea, en términos de niveles de vida. Los pueblos de una misma región no solo pue-

⁷ Mientras este proceso también viene ocurriendo en Ecuador, más del 60 por ciento de los pobres del país todavía viven en áreas rurales (véase Cuadro I).

den diferir marcadamente entre sí en términos de niveles medios de consumo, también al interior de los pueblos pueden ocurrir considerables variaciones en las circunstancias de los diferentes hogares e individuos. Este punto de vista se ve apoyado por el examen del compendio de medidas de desigualdad del Cuadro 3. Para todo el Ecuador rural, el coeficiente de Gini para el consumo es de 0.38. Esto indica claramente una alta dispersión de los gastos en consumo. Muy posiblemente, también es menor que la magnitud de la desigualdad del *ingreso* en las áreas rurales.

Al comparar áreas rurales y urbanas, la desigualdad es notoriamente mayor en las segundas. Esto es verdad para el país en conjunto, y tanto para la Sierra como para la Costa, sin importar el tipo de medida de desigualdad⁸. Sin embargo, en el Oriente la desigualdad rural es consistentemente mayor en las áreas rurales.

El significado de la pobreza en las áreas rurales

¿Qué significa tener gastos de consumo inferiores a la línea de pobreza? Nuestra aceptación del gasto de consumo como un indicador significativo de los niveles de vida se verá reforzada si se encuentra que entre los fundamentos de otros indicadores, que intuitivamente asociamos con el bienestar, se observan patrones similares entre los pobres y los no pobres a los del consumo (incluso sino se puede ofrecer una descripción precisa de *como* estos indicadores mejoran la calidad de vida). En forma adicional, la identificación de indicadores relacionados con la pobreza (definida ésta en términos del gasto de consumo) proporciona una *proxí* de pobreza en situaciones en que no se dispone de cifras sobre consumo.

8 Nótese que las diferentes medidas de desigualdad, al igual que las diferentes medidas de pobreza, ponderan con diferentes pesos a los gastos localizados a lo largo de la distribución del ingreso. Las medidas de pobreza otorgan un peso nulo a los gastos por sobre la línea de pobreza y pesos positivos a los gastos bajo esa línea (con variaciones que dependen de la forma de medirla). Se puede ver que el coeficiente de Gini pondrá más los gastos que se encuentran alrededor del centro de la distribución del gasto, mientras que Atkinson mide con valores mayores de e, adjuntando mayores pesos a los gastos que se encuentran al fondo de la distribución (Atkinson, 1970).

Por esta razón, en el Cuadro 4 se revisan algunos de los más importantes indicadores relacionados con la pobreza presentados en el *Perfil de la Pobreza* de Hentschel y Lanjouw (1995). Se puede comparar no solo cuán bien estas variables describen gráficamente a los pobres y no pobres de las áreas urbanas, también se puede examinar el grado de divergencia entre áreas rurales y urbanas en términos de estos indicadores.

La propiedad de bienes de consumo durables se grafica muy cercanamente con la jerarquización de los hogares basada en el consumo. En forma consistente, los pobres poseen menos bienes durables que los no pobres. Es marcada la división entre áreas rurales y urbanas. El 37 por ciento de los habitantes rurales no pobres tienen acceso a un refrigerador, frente al 70 por ciento de los no pobres de las áreas urbanas. En forma similar, el 26 por ciento de los no pobres rurales poseen un televisor a colores, frente al 62 por ciento de los no pobres urbanos. En el Ecuador, los televisores en blanco y negro están extensamente distribuidos. En las áreas urbanas, la posibilidad relativa de los pobres de poseer esos artefactos, es mayor con relación a los no pobres (quienes tienen mayor posibilidad de poseer un televisor a colores), mientras que en las áreas rurales se mantiene el hecho de que los pobres tienen menores posibilidades de poseer ese tipo de televisor. El hecho de poseer automóviles constituye una marcada diferencia entre pobres y no pobres: uno de cada cuatro no pobres urbanos tiene acceso a vehículo mientras el acceso de los pobres rurales es de uno por cada cien.

En Ecuador, los no pobres urbanos tienden a vivir en casas más grandes que los no pobres de áreas rurales. En promedio, los pobres, tanto de áreas urbanas como rurales, viven en casas de similar tamaño. Sin embargo, la aglomeración dentro de las viviendas es más alta entre los pobres de las áreas urbanas. En términos de calidad de vivienda y materiales de construcción, existe una marcada distinción entre los pobres de áreas rurales y urbanas. Los de áreas rurales son considerablemente más propensos a vivir en casas de lodo, con paredes de madera y pisos de tierra. Incluso los no pobres de las áreas rurales tienen mayores posibilidades de habitar en casas inferiores a las de familias urbanas.

Las redes eléctricas se encuentran ampliamente difundidas, incluso en áreas rurales. Más del 60 por ciento de los pobres rurales tie-

nen acceso a una red eléctrica. Por cierto que esto nada dice sobre la calidad de esos servicios, especialmente sobre su confiabilidad. Similares comentarios son aplicables a las redes de agua. Los hogares rurales tienen mucho menos posibilidades de estar unidos a una red de agua que los hogares urbanos. No es sorprendente que los dispositivos para desperdicios y basura sean raros en las áreas rurales aunque los no pobres de ellas tienen mucho mayores posibilidades de adquirir estos servicios que los pobres. Las redes de alcantarillado también son mucho más comunes en áreas urbanas que en rurales, pues incluso los no pobres de las áreas rurales se benefician menos de estos servicios que los pobres de las áreas urbanas. En este contexto, tal vez merece mencionarse que no queda claro que las áreas urbanas y rurales *deban* obtener similares niveles de servicios de alcantarillado y redes de agua. En las áreas urbanas, las densidades poblacionales son en tal magnitud mayores, que en el evento de no disponerse de esos servicios, los riesgos de salud serían inmensos. También es verdad que los precios unitarios de servicios en red serían considerablemente mayores en áreas rurales. Al decidir si es aceptable la distribución actual de los servicios, también se hace necesario preguntar si existen otras alternativas, como si el hecho de que una familia rural no disponga de agua canalizada signifique que no tiene acceso a ningún tipo de agua potable.

En las áreas rurales, los niveles de educación se mantienen marcadamente bajos. El 94 por ciento de los jefes de familia pobres de las áreas rurales no han avanzado más allá de la primaria. Incluso entre los no pobres este porcentaje se encuentra sobre el 80 por ciento. En las áreas urbanas, el 75 por ciento de los jefes de hogar pobres han recibido una educación similarmente pequeña, en comparación al 42 por ciento de los no pobres urbanos.

En el área rural, aquellos hogares que reciben asistencia por enfermedad deben viajar casi el doble que un hogar urbano, antes de acceder al tratamiento. Estas estadísticas no reflejan el hecho de que en áreas rurales es probable que muchas más afecciones permanezcan sin tratamiento. Entre los hogares pobres, en especial en áreas rurales, las enfermedades que deben recibir tratamiento frecuentemente son atendidas por curanderos que no son médicos ni enfermeras calificadas. El tratamiento médico se busca en curanderos, farmacéuticos y comadronas.

Cerca de uno de cada diez pobres rurales habla una lengua aborigen, y casi todos ellos también hablan español. En las áreas urbanas casi no se hablan idiomas aborígenes.

El consumo de alcohol poco refinado es considerablemente más común en las áreas rurales que en las urbanas, con un promedio diario más de tres veces superior⁹. En las dos áreas, los no pobres tienden a consumir mucho más que los pobres pero, a su vez, los pobres rurales consumen mucho más que los urbanos. La asociación entre pobreza y alcoholismo, especialmente en áreas rurales, ha sido notada extensamente en América Latina. Una estimación de la participación de la pobreza en Guatemala presta atención al problema del consumo de alcohol y recalca los efectos sociales destructivos de esa práctica.

No es sorprendente que el número de calorías consumidas diariamente por cada persona sea mayor entre los no pobres. Es interesante notar que en las áreas rurales el consumo calórico es mayor que en las áreas urbanas. En promedio, los pobres rurales consumen 1.621 kilocalorías diarias por persona, mientras que los pobres urbanos consumen 1568 kilocalorías. También los no pobres rurales consumen más calorías que los urbanos. Se presume que esto se relaciona con el hecho de que en el área rural los niveles de actividad física son mayores que en las ciudades. La mayor ingestión de alimentos de los hogares rurales también se ve reflejada en el hecho de que la parte del presupuesto total dedicada a la alimentación es considerablemente mayor, en promedio, a lo presupuestado en áreas urbanas. La participación de los alimentos en el gasto es particularmente alta entre los pobres rurales. Sin embargo, si ese indicador fuese tomado como base para realizar comparaciones de niveles de vida, resultaría que, en promedio, incluso los no pobres de las áreas rurales están en circunstancias mucho peores que los pobres de las áreas urbanas.

9 Nótese que 73 mililitros por familia por día equivalen casi a 27 litros de licor por familia al año. Al asumir que en cada familia beben unas dos personas y que una botella normal contiene 750 mililitros, esto corresponde a cerca de 1,5 botellas por bebedor cada mes.

Agricultura y pobreza rural

La pobreza rural está estrechamente vinculada a las oportunidades y restricciones económicas prevalecientes en ese sector. La agricultura sigue siendo la actividad más importante, emplea el mayor número de personas y provee la mayor parte de los ingresos de los hogares rurales. De hecho, es común escuchar que, para cualquier propósito, la agricultura es la economía rural. Esta percepción no se justifica en el caso ecuatoriano; existe una economía rural no agrícola que es un medio primordial para escapar de la pobreza. En consecuencia, en la sexta sección se explorará la importancia que tienen, para la pobreza rural, las actividades no agrícolas. Sin embargo, el punto de partida para examinar los determinantes de la pobreza rural es la agricultura. Se considerarán seis aspectos, a saber: la distribución de la tierra y los acuerdos relativos a su tenencia, los patrones de cultivo y los excedentes de mercadeo, el tamaño de la propiedad agrícola y la productividad, la intensidad del cultivo, el trabajo agrícola, y la propiedad del ganado y los animales domésticos.

Distribución y tenencia de la tierra

En Ecuador, como casi en toda América Latina, la distribución de la tierra ha permanecido desde hace mucho en el centro de atención. Se ha argumentado que la desigualdad en la distribución de la tierra es una explicación determinante en la persistencia de la pobreza rural. En este país, la reforma agraria se produjo a inicios de la década de 1960 y se institucionalizó mediante la creación del IERAC, el organismo adjudicatario de las tierras del Estado. Como desde 1974 no se ha realizado un censo agrícola, ha sido difícil establecer, con precisión, la forma en que ha evolucionado, hasta el presente, la distribución de la tierra. En el Cuadro 5 se muestra un detalle de la distribución de la tierra en las regiones costera y serrana, basado en las cifras censales de 1954 y 1974, y derivadas del ECV de 1994. Teniendo presente las diferencias de tamaño y estructura de la encuesta de 1994 y los censos agrícolas, la evidencia sugiere que el impacto del proceso de reforma agraria ha sido modesto.

Entre 1954 y 1974, en la Sierra, el número de unidades agrícolas de los dos tipos más pequeños declinó como porcentaje de todos los tipos, de 90.4 por ciento a 87.9 por ciento, solo para subir nuevamente a 89.1 por ciento en 1994. Las unidades agrícolas de los dos tipos más grandes nunca representaron más del 1.6 por ciento en todo el periodo. Sin embargo, como superficie de tierra, parece que han ocurrido ciertas mejoras modestas. Entre 1954 y 1974, las unidades agrícolas más pequeñas incrementaron su participación en la superficie total, del 16 por ciento al 21,4 por ciento, y luego incrementaron más todavía su participación, pero solo ligeramente, a 22,2 por ciento en las dos décadas subsecuentes. La mayor reducción en la participación de los dos tipos de unidades agrícolas más grandes también se produjo entre 1954 y 1974, con una declinación de 42,7 por ciento a 40,5 por ciento. En la Costa, el periodo 1954-1974 presenció una disminución en el número de unidades agrícolas de los dos tipos más pequeños, así como en los dos tipos más grandes. Este proceso de incremento en la proporción de unidades agrícolas de mediano tamaño continuó hasta 1994. Sin embargo, en términos de superficie el proceso no fue tan claro; entre 1974 y 1994 las unidades grandes revertieron la tendencia previa al incrementar su participación en la superficie total a expensas de propiedades pequeñas y medianas. La impresión general que se obtiene del Cuadro 5 es que en 1994, la distribución total de la tierra es muy similar a la que prevalecía durante los dos censos anteriores, aunque se han incrementado el número de unidades agrícolas -significativamente- y el área total de tierra.

La medición de la desigualdad en la tenencia de la tierra confirma la impresión de una distribución pronunciadamente sesgada (Cuadro 6). Se han usado dos criterios de medición: tierra trabajada y tierra poseída. El primero toma en consideración el hecho de que ciertos cultivos incluyen los arriendos y no consideran la tierra no arrendada. Al medir la distribución de la tierra respecto a todos los hogares del sector rural, el coeficiente de Gini para la tierra cultivada es muy alto, de 0.86 (y de 0.89 en términos de tierra poseída). Declina a 0.80 para la tierra cultivada, si se excluyen los hogares no dedicados al cultivo, y sube ligeramente a 0.82 cuando se excluyen de la distribución de la propiedad de la tierra las familias no propietarias. La distribución de la tierra es similarmente desigual en Costa y Sierra, pero más iguali-

taria en el Oriente. La tenencia media (en términos de tierra cultivada o poseída) es menor en la Sierra.

¿Se encuentran los pobres entre quienes tienen menos tierra en el sector rural? Esta percepción subyace a buena parte de la discusión sobre pobreza rural. El Cuadro 7 examina la relación entre pobreza y tenencia de la tierra *per capita* en el Ecuador rural. Sea cual sea la medida de pobreza usada, existe una clara relación entre su alcance y la tenencia *per capita* de los hogares. Este patrón es especialmente notorio si se usan medidas sensibles a la distribución. No resulta obvio a primera vista que la ocurrencia de este patrón fuese algo esperado, incluso sabiendo que la tierra es un activo de importancia crítica en las áreas rurales. Esto se debe a que la calidad de la tierra puede variar drásticamente. En términos topográficos y agroclimáticos, Ecuador es un país muy heterogéneo. Incluso dentro de una misma zona, como la Sierra, la calidad y condiciones para el cultivo en los valles son mucho mejores que en las laderas y en los páramos. Es plausible que un pequeño pedazo de tierra de valle represente un valor económico considerablemente mayor que una buena porción de ladera o páramo. El hallazgo de una relación inversa entre tenencia de la tierra y pobreza sugiere que, si bien la calidad de la tierra varía, la relación entre tamaño y calidad no es tan cercana.

Esto sirve para recordar que lo realmente trascendente es el acceso a los servicios de la tierra. Estos servicios dependen de factores como la calidad del suelo, la pendiente, la disponibilidad de agua, y cosas por el estilo. En el Cuadro 5 se vio que el área agrícola se ha expandido en la Costa y en la Sierra. En la medida en que la tierra recientemente anexada es de inferior calidad, conforme se desmontan y cultivan laderas cada vez más altas, no puede esperarse que al proveer acceso a los pobres a ese tipo de tierra se pueda producir un gran progreso en sus niveles de vida¹⁰.

La disponibilidad de tierra para cultivo de los hogares no necesariamente se restringe solo a las porciones de su propiedad. En el

10 De hecho, se ha argumentado que la presión agrícola en las laderas de los Andes se incrementó después de la reforma agraria de 1964 (Whittaker y Coyler, 1990).

Cuadro 8 se detectan rentas de tierra razonablemente dispersas, amparadas en varios tipos de acuerdos contractuales. En todo el sector rural, alrededor del 6 por ciento de hogares no propietarios están dispuestos a arrendar tierra y, en consecuencia, mantenerse como agricultores; cerca del 47 por ciento de todos los hogares rurales han informado de alguna forma de arrendamiento y su incidencia no es más significativa entre pobres o no pobres.

Es frecuente que los contratos de tierra permanezcan sin especificación en la base de datos, pero se puede afirmar que se refieren tanto la tenencia compartida como los contratos contra pago en efectivo. La tenencia compartida es más común entre hogares pobres, mientras que los arriendos ocurren más entre los no pobres, pero las diferencias son ligeras. Tanto para hogares pobres como para no pobres, estos dos tipos de convenios representan cerca del 30 por ciento de todos los contratos. La tenencia compartida parece más común en la Sierra, mientras que el pago de arriendo prevalece en la Costa. Sin embargo, también en la Costa el cultivo compartido es más importante entre los pobres. Las teorías que estudian la compartición del cultivo enfatizan las ventajas de ese tipo de contratos desde la perspectiva de la repartición del riesgo entre los agentes, de tal forma que la incidencia relativamente alta de tenencia compartida entre pobres no es algo sorprendente.

Patrones de cultivo, excedentes comercializados y la relación productividad tamaño de la unidad productiva

En Ecuador, los patrones de cultivo varían con la topografía y el agroclima. Las especies cultivadas en la Costa no se utilizan en la Sierra, aunque los sembríos costeños también se dan en el Oriente (Cuadro 9). En la Costa, los cultivos más comunes son el arroz, el cacao, el café y el banano. El arroz es el preferido de los costeños. La participación media del valor total del arroz es de 49 por ciento para los agricultores pobres en comparación al 51 por ciento para los no pobres. Los patrones de cultivo en la Costa no varían mucho entre pobres y no pobres, aunque el maíz es relativamente más común entre los no pobres.

En la Sierra, se siembran una variedad mucho mayor de cultivos. Ninguno de ellos, sin embargo, alcanza la importancia individual

que tiene el arroz en la Costa. El más cercano es la fruticultura, que representa en promedio el 16-17 por ciento del valor total del producto de los agricultores. En la Sierra, el cultivo del café tiende a ser más importante para los no pobres que para los pobres. Este también es el caso del tomate de árbol y del choclo. En contraste, los pobres son mucho más propensos a sembrar cebada y alfalfa. El maíz, las papas y los frijoles son importantes tanto para pobres como para no pobres. En el Oriente, los tres cultivos más extendidos son la Yuca, frutas y plátano. Yuca, frutas, café y cacao son relativamente más importantes para los pobres, mientras que el maíz capta la preferencia de los no pobres.

La extensión en la cual los agricultores participan en la economía de mercado varía marcadamente entre las tres regiones y también está ligada a la pobreza (Cuadro 10). En la Costa, en promedio, el 70 por ciento del producto se vende en el mercado, comparado con el 39 por ciento y 36 por ciento en la Sierra y en el Oriente, respectivamente. Sin embargo, los agricultores costeños pobres tienden a retener una porción mayor del producto para consumo doméstico. En la Sierra y el Oriente también se observa este comportamiento¹¹.

Productividad y tamaño de la unidad productiva

Saber si los pequeños agricultores son más eficientes que los más grandes es una cuestión que se discute desde hace rato. Si existe evidencia convincente de que este patrón es verdadero, al argumento en pro de la distribución de tierra, basado en la equidad -previamente explicado-

11 Una de las observaciones del RQA hace referencia a la participación de los hogares en la economía monetaria, a saber que los agricultores más grandes (no necesariamente más pobres) están más dispuestos que los más pequeños a cultivar excedentes más allá de lo necesario para el autoconsumo. Esta idea se ve moderadamente apoyada cuando se examina la relación entre los excedentes medios comercializados y la clase de tipo de tenencia de tierra en términos per capita, a escala general en el Ecuador. Sin embargo, esta relación varía de región a región. En la Costa, parece ser que los agricultores más grandes venden al mercado una fracción más pequeña de su producto total. Por contraste, en la Sierra, los más pequeños tienden a retener el grueso de su producción, mientras los más grandes están casi por completo orientados hacia el mercado. En el Oriente se observa un comportamiento similar al serrano.

puede añadirse otro, basado en la eficiencia. Puede esperarse que la redistribución de la tierra, desde los grandes propietarios hacia los pequeños agricultores, propicie el incremento del producto. Resulta difícil establecer la eficiencia relativa de pequeños productores *vis-á-vis* grandes productores por la misma razón explicada antes, en términos de la relación entre pobreza y tenencia de la tierra. Si la tierra de los pequeños agricultores tiende a ser de mejor calidad, entonces una relación inversa tamaño-productividad observada podría ser equivocadamente atribuida a diferencias en la eficiencia.

En el Cuadro 11, esta relación se examina al nivel de todos los cultivos, así como solo para el arroz, fruta y maíz, para los agricultores que informaron solo disponer de esos cultivos. Al nivel de todos los agricultores, un incremento del 10 por ciento en el tamaño de la tierra producirá un incremento en valor del producto bruto de un 5,5 por ciento. Existe evidencia de rendimientos fuertemente decrecientes al incrementarse el tamaño de la unidad productiva. Si se considera solo aquellos agricultores que obtienen la gran mayoría de su producto agrícola del arroz (suponiendo que la tierra dedicada al arroz es de calidad uniforme), los rendimientos parecen declinar incluso más agudamente con el tamaño de la unidad productiva. Aunque el tamaño de la muestra se hace más pequeño cuando se considera el cultivo del maíz, se observa el mismo comportamiento. En cuanto a los fruticultores, todavía se mantiene la evidencia de mayores rendimientos entre pequeños agricultores, pero la relación es más débil que en otros cultivos. Al experimentar con agrupamientos alternativos de cultivos (incrementando el número de observaciones y todavía controlando la calidad de la tierra) no cambia la percepción. Globalmente, los pequeños productores agrícolas logran mejores rendimientos que los grandes¹².

¿Por qué las propiedades pequeñas se cultivan en forma más exitosa, en términos de producto por hectárea, que las propiedades grandes? Una hipótesis bastante extendida es que los pequeños agricultores usan el factor trabajo en forma más intensiva que los grandes porque son capaces de atraer el trabajo familiar con ese propósito. La ve-

12 Estos hallazgos han sido replicados con la base de datos de la encuesta del INEM (1990). *Encuesta Permanente de Hogares: Estacionalidad del Empleo Rural*.

racidad de este argumento depende de la medida en la cual fuentes alternativas de empleo se encuentren disponibles para los miembros de la familia. Si algunos de los miembros no pueden encontrar empleo, entonces el coste de oportunidad de su trabajo en la unidad productiva es muy bajo y se puede aplicar trabajo adicional hasta un punto en el que su producto marginal es muy bajo. Otra pregunta que surge es ¿por qué los agricultores más grandes no arriendan su tierra a los más pequeños si estos últimos son capaces de lograr una productividad mucho más alta? En este punto cobra importancia la seguridad de la propiedad de la tierra. Si los más grandes temen que por arrendar su tierra la perderán, entonces, por lo general, se mostrarán renuentes a participar en ese tipo de transacciones.

Acceso a insumos complementarios

En el Ecuador rural, los agricultores pobres gastan significativamente menos que los no pobres en semillas, fertilizantes y pesticidas (Cuadro 12). Este comportamiento es mucho más evidente en la Costa y en la Sierra. En el Oriente, el gasto medio por hogar en semillas, fertilizantes o pesticidas es considerablemente más modesto.

En promedio, los hogares del Ecuador rural informan de deudas muy grandes, cercanas a los S/. 900.000 por hogar (Cuadro 13). Este promedio se debe en gran parte al hecho de que los no pobres costeños informan de préstamos de más de S/. 2,5 millones por hogar. En promedio, los hogares pobres del Ecuador rural informan de préstamos de alrededor de un quinto de esa cantidad. De los pobres que informan haber pedido prestado, la gran mayoría se encuentra en la Costa; las transacciones en el mercado de crédito de la Sierra rural parecen poco frecuentes, aunque es digno de mencionar que, en esta región, los pobres tienden a pedir prestado más que los no pobres.

En la Costa, las mayores deudas de los no pobres parecen ser una combinación tanto de créditos más grandes como de mayor cantidad de hogares deudores. Esto es menos evidente en la Sierra y en el Oriente. En la Costa, los hogares piden prestado a varias fuentes, incluida una porción significativa a los prestamistas locales de dinero. En la Sierra y el Oriente, las principales fuentes de crédito son insti-

tuciones formalizadas, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), aunque pocos hogares informan haber pedido prestado a esas instituciones alguna vez. Como lo sugiere el RQA, las comunidades serranas son posiblemente mucho más cohesionadas que en la Costa. Los acuerdos de asistencia mutua no son poco frecuentes. Es posible que los encuestados sobre transacciones en el mercado de crédito no perciban esos acuerdos recíprocos como transacciones de crédito, aunque por supuesto, pueden ser consideradas como tales. Sin embargo, parece claro que si tales acuerdos están ampliamente diseminados y representan el tipo más importante de transacciones de crédito en las comunidades serranas, se verán afectados por la naturaleza relativamente poco diversificada de las economías comunitarias. Si ocurre una calamidad que afecte a todo el pueblo, como una sequía, los miembros de la comunidad tendrán dificultades en recurrir a sí mismos por ayuda financiera, pues todos habrán sido afectados en forma simultánea.

Una respuesta frecuente en el RQA, a preguntas sobre qué sienten los pobres que sería útil para mejorar su situación, es la asistencia técnica. Efectivamente, de la información del ECV para Ecuador, aparece con claridad que muy pocos hogares informan haber recibido forma alguna de asistencia técnica en el año previo a la encuesta (Cuadro 14). Al nivel de todo el país, así como regional, los no pobres tenían más posibilidades de haber recibido asistencia técnica que los pobres. Estas cifras no proporcionan ninguna indicación sobre la calidad de la asistencia recibida por los agricultores y resulta evidente que de corazón se desea asistencia técnica relevante y apropiada, que propicie una mayor productividad agrícola.

En el Ecuador rural, la propiedad de activos productivos es muy escasa, pues menos del 20 por ciento de los hogares han informado poseer alguno de los activos incluidos en el Cuadro 15. Parece existir base para distinguir entre pobres y no pobres en la Costa rural en términos de equipo de riego. En la Costa rural es mayor la probabilidad de que un pobre tenga una bomba de agua, antes que un no pobre, pero es más probable que el no pobre tenga otro tipo de equipos de riego. Esto apoya los descubrimientos del RQA para las comunidades costeñas, que las disponibilidades de agua son muy importantes para los agricultores.

El trabajo agrícola

Entre los pobres de las áreas rurales es posible distinguir entre dos grupos de personas u hogares. Uno está compuesto por agricultores marginales involucrados en cultivos relativamente atávicos, orientados a la subsistencia. El otro grupo lo conforman trabajadores agrícolas, personas que cuentan con salarios ganados en fincas, plantaciones y haciendas. En el Ecuador rural, el salario agrícola se encuentra muy extendido. El 40 por ciento de los hogares pobres tiene al menos un miembro de familia que complementa el ingreso familiar con un salario agrícola como principal actividad económica (Cuadro 16). Este porcentaje sube al 55 por ciento cuando se incluyen hogares que tienen al menos un miembro de familia que dedica algo de su tiempo al trabajo asalariado. Sin embargo, entre regiones, la importancia relativa del trabajo asalariado varía de manera pronunciada. En la Costa, más del 79 por ciento de los hogares pobres tienen alguna relación salarial, mientras que en la Sierra el porcentaje correspondiente es del 40 por ciento y en el Oriente del 39 por ciento. En todas las regiones, el trabajo agrícola asalariado se asocia más cercanamente con los pobres que con los no pobres.

En la Sierra y en el Oriente es poco común que el trabajo agrícola no tenga al mismo tiempo cierta implicación con el cultivo doméstico, pero esto ocurre menos en la Costa. En esta última región, el 28 por ciento de los hogares pobres tiene un miembro de familia empleado como trabajador agrícola, al tiempo que su hogar no tiene sus propios cultivos. Esos hogares frecuentemente se distinguen por su particular vulnerabilidad, con relación a los agricultores, pues si suceden períodos de cosechas deficientes, están expuestos por dos frentes: oportunidades de empleo agrícola reducidas y, al mismo tiempo, tienen que comprar su alimentación a precios crecientes.

La propiedad de ganado y animales domésticos

En el RQA, la importancia para los pobres de la propiedad de animales se consideró secundaria, en cuanto fuente de ingreso, accesoria a los cultivos. Poseer animales también puede constituir un almacenaje

atractivo si no están disponibles instituciones de ahorro alternativas. En el Cuadro 17 se puede apreciar que la posesión de vacas es considerablemente más frecuente entre los no pobres de la Costa que en cualquier otro lugar. Los pollos también son mucho más frecuentemente poseídos en la Costa que en otras regiones, aunque no existe mucha diferencia entre los pobres y los no pobres en términos del número medio poseído. En la Sierra, la propiedad de cuyes y conejos es mucho más común que en las otras dos regiones, lo que concuerda con la extendida práctica entre comunidades andinas de criar estos animales. Sin embargo, en conjunto, la observación más interesante que surge del Cuadro 17 es que excepto por vacas y pollos, la tenencia de animales no parece variar drásticamente con la condición de pobreza de un hogar. Adicionalmente, y tal vez como explicación, la propiedad de animales no es en promedio muy grande, excepto -una vez más- de pollos y vacas en la Costa.

Empleo rural no agrícola

En muchos países, la economía rural no agrícola es un sector relativamente poco entendido. Esto no debe sorprender dado que se la define, esencialmente, en forma negativa: toda la actividad económica que ocurre en las áreas rurales que *no* es agricultura. Como resultado, ese sector es típicamente muy heterogéneo y es difícil obtener información más que parcial sobre el significado de las actividades extrañas a las unidades agrícolas. Desde la perspectiva del análisis de la pobreza, el empleo no agrícola puede ser un indicador de extrema indigencia o un signo de ascenso social. Para individuos que son, por una u otra razón, excluidos de las actividades agrícolas (tal vez debido a su edad, por enfermedad o por incapacidad) el trabajo fuera de la unidad agrícola puede representar la opción de último recurso. Tales individuos podrían, por ejemplo, ocuparse en la recolección de cascajo en el pueblo o en el mercado local para revenderlo. En el otro extremo del espectro, el trabajo fuera de la unidad agrícola puede ofrecer la oportunidad de escapar de la pobreza por medio de la adquisición de una fuente de ingresos más altos y regulares. La relación entre el sector no agrícola y el agrícola es muy estrecha. Las actividades no agrícolas pueden contri-

buir a mejorar la productividad agrícola a través de la producción de insumos agrícolas y, al mismo tiempo, la elevación de los ingresos agrícolas puede estimular la expansión de actividades no agrícolas, en especial servicios y manufactura de bienes de consumo básico. En países como China y otros de Asia del Este, el sector no agrícola ha sido central en la determinación del ritmo y dirección del cambio de los niveles de vida rural; se calcula que cerca de un tercio del PIB chino proviene de empresas municipales que emplean unos 100 millones de personas. Ese tipo de empresas también existe en el Ecuador, aunque a una escala mucho más modesta (véase recuadro).

Recuadro No. 1**Pelileo-Jeans, una sastrería en la Sierra ecuatoriana**

El pueblo de Pelileo está localizado a cerca de 200 km. al sur de Quito, en la provincia serrana de Tungurahua. El pueblo tiene una población de 26.000 habitantes y está conectada por un camino pavimentado a la ciudad de Ambato, distante unos 20 km. En Pelileo existen unas 400 empresas que producen jeans. Esta actividad comenzó a inicios de la década de 1970 cuando un empresario comenzó a subcontratar la manufactura de esas prendas con los hogares del lugar. Durante la década siguiente se produjo una rápida expansión de esas actividades. Mientras que Pelileo se ha especializado en la confección de jeans, otras comunidades de esa provincia lo han hecho con calzado, tejidos y camisas. En total, unas 3000 personas están empleadas en una u otra función por la economía del jean. Pocas firmas son grandes (unas 15 de las 400 emplean alrededor de 70 personas), pero la mayoría son empresas familiares, con un promedio de no más de 5 miembros. La mayoría de las empresas familiares operan mediante subcontratos con firmas mayores.

Muchas de las firmas pequeñas están localizadas alrededor del pueblo, donde los hogares combinan su actividad manufacturera con la agricultura. En años recientes, la agricultura en esta parte de la provincia del Tungurahua se ha estancado, y la confección representa un importante, aunque modesto, complemento del ingreso de los hogares. En las empresas familiares, una persona, usando una sola máquina de coser, confecciona un par de jeans de calidad modesta en unos 45 minutos. El coste de los insumos para producirlos es de unos US\$ 5.00 y la ganancia recibida por cada par de pantalones es de aproximadamente unos US\$ 0.60. Para una empresa de seis miembros, con cada miembro confeccionando tal vez unas 9 horas diarias, seis días a la semana, las ganancias totales por semana casi llegan a los US\$ 220. En muchas de estas empresas, las mujeres y los niños constituyen la fuerza de trabajo. Para estas personas, con frecuencia son escasas las fuentes alternativas de ingreso.

Las empresas mayores producen jeans de mejor calidad en aproximadamente 27 minutos (comparados con los 23 minutos por par en los EE.UU). Un par de esos pantalones tiene en Quito un precio alrededor de US\$ 14. A diferencia de los productos de menor calidad, hechos por empresas familiares, y usualmente comerciados localmente con etiquetas burdamente imitadas, estos jeans se venden con sus propias marcas y se exportan a Colombia, Perú e incluso tan lejos como Canadá.

El gobierno, a través del Banco Nacional de Fomento, ha provisto crédito para las pequeñas empresas, en cantidades que van de los US\$ 1500 a los US\$ 5000. Este crédito se encuentra disponible a una tasa de interés relativamente atractiva (alrededor de un 36 por ciento anual en términos nominales), pero los costes de transacción adicionales implícitos en la corrupción, demoras y complicaciones demoran significativamente el coste total del crédito en el BNF. Una institución financiera privada conocida como INSOTEC proporciona créditos por similares montos a una tasa de alrededor del 6 por ciento mensual. Con todo, el crédito está disponible, pero es caro. Unos pocos empresarios de Pelileo han recurrido a tales fuentes de financiamiento, prefiriendo recurrir al ahorro y a fuentes de crédito informal.

Fuente: Entrevista personal con el presidente de la Cámara de Comercio de Pelileo, Ecuador, mayo de 1994.

El Cuadro 18 proporciona un corte de las actividades no agrícolas por ocupación principal. En la medida en que existen personas casualmente empleadas en el sector no agrícola, el cuadro subestima la extensión en la que la población rural ecuatoriana está involucrada en actividades no agrícolas. No obstante, en el Ecuador rural en conjunto, el 31 por ciento de la población no pobre tiene como ocupación primaria el sector no agrícola. La cifra correspondiente para los pobres es del 19 por ciento.

En la comparación entre regiones, las actividades no agrícolas son particularmente importantes en la Sierra y el Oriente, mientras que en la Costa solo el 10-15 por ciento de la población activa está empleada fuera de la agricultura. En la Sierra, cerca del 40 por ciento de los no pobres y casi el 30 por ciento de los pobres están empleados fuera de la agricultura. En todas las regiones, el porcentaje de los pobres involucrados en empleos no agrícolas es menor al de los no pobres, lo que sugiere que para quienes pueden obtener esos empleos, efectivamente esta es una vía importante para eludir la pobreza. Una consideración trascendente es cuanto peor sería la situación de los pobres con un trabajo no agrícola, si no lo hubieran podido conseguir. Trabajos no agrícolas regulares y permanentes son, probablemente, los más atractivos para los hogares rurales, pues con ellos se reduce la exposición a fluctuaciones asociadas al cultivo agrícola. Excepto porque se observa

una menor incidencia en el empleo no agrícola, entre las regiones, y entre los pobres y los no pobres, los patrones de conducta son similares cuando se concentra la atención en el porcentaje de la población activa empleada en actividades no agrícolas permanentes y regulares.

Al interior de la Sierra, las actividades más importantes en el sector no agrícola, tanto para pobres como para no pobres, son la comercial, la manufactura y los tejidos. Sin embargo, todas estas ocupaciones son relativamente más comunes entre los no pobres que entre los pobres. En la Sierra, parece no haber un tipo particular de ocupación más común entre obreros pobres que entre no pobres.

En la Costa, la ocupación no agrícola más importante es el comercio (para pobres y para no pobres), el transporte (para los no pobres) y la 'otra' categoría (que incluye predominantemente una variedad de servicios). En el Oriente, los empleos no agrícolas ocurren virtualmente en todas las categorías siendo, una vez más, el comercio la más importante. En todos los casos, el empleo está concentrado entre los no pobres.

Poner atención solamente en las ocupaciones *principales* no es apropiado para comprender la importancia del sector rural no agrícola. La interrelación entre el sector no agrícola y la agricultura es que esas actividades frecuentemente ocurren en períodos de retroceso agrícola. Más aún, se sabe que el empleo no agrícola es atractivo para las mujeres, quienes tratan de complementar el ingreso del hogar mediante ganancias no agrícolas en actividades a tiempo parcial. En el Cuadro 19 se examina el empleo en las actividades no agrícolas, tanto para ocupaciones principales como secundarias. Además, se dividen esas actividades entre hombres y mujeres. Cuando se asume esta más amplia definición del empleo en el sector no agrícola, resulta que al menos una de cada dos personas en edad de laborar del grupo no pobre tiene alguna ocupación en ese sector. Para los pobres, la cifra correspondiente es del 38 por ciento. Y lo que es más sorprendente, el porcentaje de mujeres empleado en ese sector (para pobres y no pobres) es mayor que la cifra respectiva de hombres.

Mientras que las ventas son la actividad no agrícola más importante, tanto para hombres como para mujeres, el porcentaje de mujeres empleadas en esas actividades es casi el doble que la de hombres. Otra ocupación relativamente más importante para las mujeres que para los

varones es el tejido. Una vez más, hay unas pocas ocupaciones no agrícolas en las cuales los pobres tienen más probabilidades de estar empleados que los no pobres. Dos excepciones importantes son la construcción (para los hombres) y el servicio doméstico (para las mujeres).

Análisis econométrico

Esta sección tiene un triple propósito: en primer lugar, se trata de juntar los dispares argumentos del análisis precedente mediante la evaluación de sus relaciones con la pobreza rural; en segundo, se pretende identificar las variables correlacionadas con la pobreza rural; finalmente, se pretende retroceder un paso, desde el enfoque de la incidencia de la pobreza (implícito en las comparaciones pobres/no pobres que se han venido realizando), para examinar adicionalmente los factores asociados con la profundidad y severidad de la misma. Se informa de los resultados de dos tipos de modelos. A su turno, se han estimado modelos para cada región, a la luz del hecho de que las circunstancias de la pobreza pueden variar sustancialmente entre regiones (aunque se ha demostrado que no son muy prometedores los esfuerzos encaminados a clasificar las regiones en términos del grado o extensión de la pobreza). Las especificaciones que se publican son versiones restringidas de lo que originalmente fueron posibles modelos mucho más amplios (que comprendían todo el rango de variables descritas en las secciones procedentes). En la medida en que muchas de las variables están correlacionadas entre sí, su poder explicativo adicional es muy escaso. Las especificaciones restringidas que se publican son, en consecuencia, las que incluyen aquellas variables independientes y significativamente asociadas con la pobreza (aunque, como se verá, la misma especificación para una región no necesariamente indica el mismo grado de significancia para una variable particular, de acuerdo a las diferentes medidas asumidas).

Se estiman dos modelos Tobit para la brecha de pobreza y para el cuadrado de ella, respectivamente, y un modelo Probit para la probabilidad de ser pobre. Como la brecha de pobreza, y su cuadrado, es continua para aquellos hogares por debajo de la línea de pobreza, interesa investigar si ciertas variables independientes se encuentran aso-

ciadas más fuertemente con diferentes grados de pobreza. A pesar del modelo, es importante enfatizar que los resultados no deben interpretarse como implícitas relaciones causales. Es completamente posible que una variable considerada exógena haya causado pobreza, ésta puede más bien 'causar' aquella variable. El valor de este ejercicio radica en la observación de que donde se encuentra una asociación significativa entre pobreza y una variable explicativa, esa relación es pertinente si se controla el resto de las variables en la especificación. Como tal, esa variable explicativa puede interpretarse como representativa de asociación con la pobreza, *independientemente* de la asociación entre la pobreza y las otras variables explicativas.

En el Cuadro 20 se presentan los resultados de los modelos Tobit para la brecha de pobreza, para la Costa, Sierra y Oriente. Todas las variables que intuitivamente se ha considerado están asociadas con la pobreza, confirman en los modelos, esa expectativa. En todas las regiones, la mayor cantidad de tierra *per capita* reduce significativamente la profundidad de la pobreza. Esta relación es más pronunciada en la Sierra. En la Costa, si un hogar está involucrado principalmente en agricultura de subsistencia (por ejemplo, vendiendo en el mercado menos del 30 por ciento de lo que produce) es significativamente más probable que sea muy pobre. En la Sierra, la relación entre agricultura de subsistencia y pobreza no es estadísticamente significativa más allá del 80 por ciento de confianza, pero conserva el mismo signo. En el Oriente, los excedentes comercializados parecen no tener un influjo específico sobre la pobreza. Ciertos cultivos se encuentran relacionados con la severidad de la pobreza en la Costa, Sierra y Oriente. En la Costa, los plantadores de cacao tienen propensión a la pobreza, mientras que los agricultores de maíz dulce serranos y de maíz en el Oriente están menos expuestos a ser pobres, controlando el resto de variables. En las tres regiones, si el jefe de familia no tiene educación de nivel secundario, su hogar es significativamente más propenso a ser más pobre que el de familias educadas. También para todas las regiones, mientras mayor el número de miembros de la familia empleados en un trabajo no agrícola regular, menor la posibilidad de que el hogar conste entre los muy pobres. Es interesante que el acceso a alguna forma organizada de tratamiento de los desperdicios reduce la brecha de pobreza, controlando independientemente otras variables.

Un grupo adicional de variables parece ser importante en la Sierra y en el Oriente. En esas regiones, la severidad de la pobreza está claramente ligada a si el jefe de familia habla un idioma aborigen. Además, en estas dos regiones, si el hogar consume gas, está significativamente menos expuesto a la pobreza. En la Sierra y el Oriente, los hogares con viviendas más grandes también están menos representados entre los muy pobres.

En la Sierra, si el hogar se beneficia de asistencia técnica agrícola, si está conectado a una red telefónica, o si dispone de algún sistema de alcantarillado, tiene factores adicionales que ayudan a describir la severidad de la pobreza. En la Costa y en el Oriente, estas variables no parecen ser independientemente importantes. A su vez, en el Oriente, el acceso a la red eléctrica fue de significación adicional e independiente.

Los cuadros 21 y 22 repiten el análisis, usando las mismas especificaciones previas, para cada región, pero aplicando el modelo Probit a la cantidad de individuos y el modelo Tobit para la severidad de la pobreza, respectivamente. Las conclusiones más amplias que se obtuvieron en el Cuadro 20 se mantienen. En el caso de medir la pobreza por el número de pobres, pocas de las variables explicativas son significativas, pero el análisis basado en la severidad de la pobreza se asemeja mucho al del Cuadro 20.

Antes de terminar esta sección, es necesario notar brevemente que las variables no incluidas en las especificaciones reportadas en los cuadros 20-22, se encontraron en general no significativas. Variables tales como género de la cabeza de familia, propiedad de activos productivos y ganado, acceso o uso del crédito, etc., se encuentran no correlacionadas con la pobreza, independientemente de las medidas incluidas en esas especificaciones.

Conclusiones

La pobreza en el Ecuador rural es intensa y muy difundida y, más aguda que la urbana. Las clasificaciones regionales de pobreza no tienen peso; las conclusiones que consideran la pobreza relativa de una región frente a otra son sensibles al lugar en que se ha colocado la línea de pobreza y la medida de pobreza empleada.

Sin embargo, la economía rural, y en consecuencia los determinantes de la pobreza, es muy diferente entre regiones. Existe una gran heterogeneidad entre Costa y Sierra en términos de la organización agrícola, los tipos de cultivo, etc. La agricultura de la Costa es más dinámica, con mayor utilización de fertilizantes y pesticidas, y con más agricultores que venden su producto en el mercado. No obstante, en la Costa, la distribución de la tierra sigue siendo muy desigual, pues existe un gran número de agricultores marginales.

Más aún, en la Costa, un gran número de hogares tiene sus miembros empleados como asalariados agrícolas. Esta mayor relación de los pobres con la agricultura costeña significa que están más expuestos a los riesgos del consumo y del ingreso asociados con fallas en las cosechas causadas por sequías, etc.

Cuestiones relativas a la calidad de la tierra son de importancia particular en la Sierra. En las regiones montañosas de los Andes, la tierra es mucho más heterogénea en pendiente, pluviosidad, altitud, etc. Adicionalmente, en la Sierra, los hogares que tienen cultivos son relativamente menos propensos a vender sus productos en el mercado. Mientras que la variable que mide la agricultura de subsistencia se encontró no significativa en las estimaciones econométricas, es muy probable que esté correlacionada con un hogar parlante de lengua aborigen, tanto en la Sierra como en el Oriente. En estas dos regiones se encontró que la condición racial está fuertemente ligada a una pobreza mayor.

Las variables de infraestructura investigadas se limitaron a conexiones y accesos de los hogares, y no han permitido un estudio de la contribución de la infraestructura al empleo y al ingreso del hogar. Tampoco se pudo evaluar la calidad de los servicios de infraestructura que están disponibles. No obstante, parece que el acceso a la infraestructura está estrechamente asociado a la pobreza rural. La medida en la cual la infraestructura contribuye a mejorar el acceso a empleos no agrícolas y a una mayor productividad agrícola, amerita investigaciones más avanzadas.

La tierra está muy ligada a los niveles de vida en el Ecuador rural. Los hogares con una menor cantidad de propiedad per capita tienen un mayor riesgo de incurrir en pobreza y están más representados entre los extremadamente pobres. También se ha determinado, basados

en el ECV, que la productividad de la tierra declina con el tamaño de la unidad productiva. Esta combinación sugiere que un mejor acceso de los pobres a la tierra, en realidad, podría mejorar el producto agrícola y disminuir la pobreza. Por supuesto que las restricciones políticas de una reforma agraria concertada podrían ser muy considerables, y la experiencia previa con programas de redistribución de la tierra sugiere que en el Ecuador esas restricciones son muy importantes. Sin embargo, la experiencia reciente de Colombia indica (véaseBinswanger 1995) algunas posibilidades de optimismo. En un clima de reforma económica, en que están siendo desmantelados precios y otras ayudas para los grandes terratenientes, la opción de que esos propietarios abandonen la actividad y vendan voluntariamente sus tierras se hace mucho mayor. Estos desarrollos también pueden indicar una oportunidad de efectuar cambios en la distribución de la tierra en Ecuador.

El análisis econométrico ha establecido varios factores estrechamente ligados a la pobreza rural. Aparte de la ya mencionada concentración de la propiedad agrícola, mejores niveles de educación y acceso a empleos no agrícolas son factores críticamente importantes en la descripción de la pobreza, sea que se la mida por el número de pobres o recurriendo a medidas sensibles a la distribución de la pobreza. En forma separada, en la Sierra y el Oriente, hogares aborígenes tienen un riesgo mayor de pobreza, mientras que en la Costa, los agricultores de subsistencia están muy expuestos. El acceso a servicios de infraestructura, tales como alcantarillado, gas, teléfono o electricidad parecen ser importantes, aunque en grado variado de acuerdo a la región.

Por último, en las áreas rurales, el sector no agrícola parece ofrecer un camino importante para salir de la pobreza. Este es un sector particularmente importante para las mujeres. No queda claro que medidas específicas de política deben tomarse para alentar la expansión de este sector, tal vez exceptuando el apoyo a la manufactura y comercio rurales con infraestructura apropiada. Quizá la mejor perspectiva sea concretarse a remover los impedimentos que puedan existir para su expansión. Posterioreinvestigaciones sobre posibles créditos y restricciones regulatorias podrán determinar los pasos apropiados.

Anexo

Cuadro No. 1

Ecuador: pobreza por región. Medidas de síntesis Línea de pobreza definitiva (45,446 sucrex por quincena)

		Incidencia	Número	Profundidad de pobres	Severidad
Costa	Urbana	0.26	954,566	0.07	0.03
	Rural	0.50	988,014	0.15	0.06
Sierra	Urbana	0.22	502,947	0.08	0.04
	Rural	0.43	1,095,975	0.14	0.07
Oriente	Urbana	0.20	11,172	0.05	0.02
	Rural	0.67	198,925	0.30	0.16
Nacional	Urbana	0.25	1,468,685	0.07	0.03
	Rural	0.47	2,282,914	0.15	0.07
Total		0.35	3,751,599	0.11	0.05

Línea de pobreza extrema (30,733 sucrex por quincena)

Costa	Urbana	0.09	314,406	0.04	0.02
Sierra	Rural	0.22	431,018	0.11	0.05
	Urbana	0.11	258,840	0.06	0.03
Oriente	Rural	0.20	504,448	0.11	0.06
	Urbana	0.07	3,885	0.03	0.02
Nacional	Rural	0.50	148,320	0.27	0.16
	Urbana	0.09	577,131	0.05	0.03
Total		0.15	1,660,917	0.08	0.04

Fuente: Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994).

NOTAS:

1. Los gastos en las diferentes regiones y sectores fueron ajustados mediante un índice de precios Laspeyres basado en los costes diferenciales de una canasta alimenticia que produce 2237 kilocalorías por persona por día (Cabrera, Martínez y Morales 1993: 95 y 98). Esta canasta está basada en los patrones de consumo de los quintiles segundo y tercero de la población (en términos de gasto nominal per capita).
2. Incidencia, profundidad y severidad de la pobreza están medidas con el índice Foster-Greer-Thorbecke con parámetros 0,1 y 2, respectivamente (véase Ravallion, 1994).

Cuadro No. 2**Estimaciones previas de pobreza rural en el Ecuador**

Estudio Ecuador	Año de referencia	Incidencia de pobreza rural %	Número total de pobres en áreas rurales	Participación de pobres en total pobreza nacional %
Scott (1987)	1980-82	65	2,900,000	n.a.
de Janyry y Gilman (1991)	1987	75	3,750,000	n.a.
Cabrera, Martínez y Morales (1993)	1990	88	3,823,000	53
Guzmán (1994)	1993	92	4,230,000	49
Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994) Línea de pobreza	1994	47	2,282,914	61
Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994) Línea de vulnerabilidad	1994	67	3,274,000	59

Cuadro No. 3**Desigualdad del consumo: medidas de síntesis**

		Coeficiente De Gini	Medida de Atkinson _=1.0	Medida de Atkinson _=2.0
Costa	Urbana	0.38	0.21	0.36
	Rural	0.35	0.18	0.30
Sierra	Urbana	0.46	0.31	0.52
	Rural	0.40	0.24	0.41
Oriente	Urbana	0.40	0.24	0.40
	Rural	0.43	0.27	0.41
National	Urbana	0.43	0.26	0.43
	Rural	0.38	0.22	0.37
TOTAL		0.43	0.27	0.44

Fuente: Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994).

NOTAS:

1. La unidad de observación es el gasto en consumo per capita.
2. Los gastos en las diferentes regiones y sectores fueron ajustados mediante un índice de precios Laspeyres basado en los costes diferenciales de una canasta alimenticia que produce 2237 kilocalorías por persona por día (Cabrera, Martínez y Morales 1993: 95 y 98). Esta canasta considera los patrones de consumo de los quintiles segundo y tercero de la población (en términos de gasto nominal per capita).

Cuadro No. 4

**Indicadores adicionales de pobreza
Varios indicadores de calidad de vida:
Comparaciones entre áreas rural y urbana**

	Ecuador		Urbana		Rural	
	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Porcentaje de personas con acceso a bienes de consumo durables						
Refrigerador	19%	58%	32%	70%	9%	37%
Televisor a color	10%	49%	22%	62%	3%	26%
Televisor blanco y negro	54%	57%	66%	57%	45%	55%
Receptor radio/casete	56%	75%	61%	79%	53%	68%
Bicicleta	30%	46%	30%	51%	30%	38%
Automóvil	2%	21%	3%	25%	1%	13%
Características de la vivienda						
Número medio de cuartos	2.6	3.4	2.5	3.6	2.6	3.1
Número de personas por cuarto	3.3	1.9	3.6	1.9	3.2	2.2
% de casas con paredes de barro	11%	7%	8%	5%	13%	11%
% de casas con paredes de madera	13%	6%	5%	2%	19%	13%
% de casas con pisos de tierra	13%	5%	10%	3%	15%	9%
Acceso a servicios básicos						
Usuarios de electricidad	76%	92%	98%	99%	62%	77%
Conexión de agua	31%	57%	54%	76%	16%	24%
Tratamiento de desperdicios	24%	50%	60%	76%	1%	6%
Alcantarillado	46%	77%	75%	92%	27%	50%

Cuadro No. 4 (continuación)

	Ecuador		Urbana		Rural	
	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
Nivel educacional del jefe de familia						
Sin educación	24%	10%	14%	5%	30%	19%
Escuela primaria	63%	46%	61%	37%	64%	63%
Solo escuela secundaria	11%	26%	21%	33%	5%	14%
Educación superior	2%	17%	4%	25%	0%	4%
Acceso a cuidados de salud						
Minutos de viaje antes de iniciar el tratamiento	30	25	17	19	39	35
% de hogares que han tratado informalmente al menos una dolencia	33%	26%	30%	22%	35%	31%
Idioma						
Solo idioma nativo	1%	0%	0%	0%	1%	0%
Idioma nativo	6%	1%	1%	0%	9%	3%
Consumo de licor						
Mililitros por hogar por día	12	41	5	24	16	73
Consumo de alimentos						
Calorías consumidas por día (kcals por persona)	1600	2883	1568	2792	1621	3041
Distribución alimenticia	55%	46%	49%	40%	60%	55%

Cuadro No. 5**Distribución de la tierra: 1954 - 1994**

Región y tamaño (ha)	% Unidades			% Área total		
	1954	1974	1994	1954	1974	1994
Sierra						
0-5	81.7	77.1	80.2	10.8	12.7	14.1
5-10	8.7	10.8	8.9	5.2	8.7	8.1
10-20	4.0	5.3	3.2	4.8	8.7	5.5
20-50	3.0	4.1	5.2	7.3	16.2	20.9
50-100	1.4	1.3	1.0	7.6	11.0	8.4
100-500	0.9	1.2	1.6	16.1	22.9	42.9
500+	0.3	0.2	0.0	48.3	19.8	0.0
Total	100	100	100	100	100	100
N1	260	388	389	2,737	3,096	3,233
Costa						
0-5	73.1	70.3	51.9	3.0	6.6	5.1
5-10	10.5	21.0	12.5	3.9	6.0	3.8
10-20	6.2	7.5	9.9	5.1	9.1	6.1
20-50	5.6	6.6	11.5	12.5	18.7	16.4
50-100	2.4	1.8	4.3	11.0	10.6	13.5
100-500	1.8	1.6	3.3	23.0	26.5	33.5
500+	0.4	0.2	0.6	41.4	15.7	21.6
Total	100	100	100	100	100	100
N1	85	228	239	2,979	3,854	5,801

Fuente: Scott (1987) trazados sobre Maletta (1984) para las cifras de 1954 y 1974. Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994) para las cifras de 1994.

NOTA:

1. Unidades y hectáreas en miles.

Cuadro No. 6**Distribución de tierra cultivada y tierra poseída en Ecuador**

	Sierra	Costa	Oriente	Ecuador
TIERRA CULTIVADA				
Incluidos todos				
Número de hogares en la muestra	612	497	265	1374
Promedio cultivado (ha)	5.59	12.4	12.8	8.55
Coeficiente de Gini	0.87	0.87	0.78	0.87
Solo agricultores				
Número de hogares en la muestra	390	275	168	833
Promedio cultivado (ha)	8.48	19.3	17.9	13.1
Coeficiente de Gini	0.80	0.80	0.69	0.81
TIERRA POSEIDA				
Incluidos no propietarios				
Número de hogares en la muestra	612	497	265	1374
Promedio cultivado (ha)	5.19	11.8	12.5	8.10
Coeficiente de Gini	0.89	0.89	0.79	0.89
Solo propietarios				
Número de hogares en la muestra	365	234	162	761
Promedio cultivado (ha)	8.39	21.2	18.1	13.5
Coeficiente de Gini	0.82	0.80	0.69	0.82

Fuente: Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994).

Cuadro No. 7**Pobreza y tenencia de tierra per capita**

Tenencia de tierra per cápita	Porcentaje de la pob. Rural	Porcentaje de gasto per cápita (al mes)	Incidencia de la pobreza	Brecha de pobreza (x 100)	Severidad de pobreza
No campesinos	32.9%	S/. 62,418	43.4%	13.2%	5.6
0 - 1 ha.	46.9%	S/. 55,564	51.5%	17.9%	8.9
1 - 2.5 ha.	9.3%	S/. 63,921	51.5%	15.8%	7.9
2.5 - 5 ha.	4.6%	S/. 58,147	33.8%	13.0%	5.8
5 - 30 ha.	5.8%	S/. 88,700	39.9%	9.8%	3.6
30+ ha.	0.5%	S/.371.006	0.0	0.0	0.0
Ecuador rural	100%	S/. 62,292	47.1%	15.4%	7.2

Fuente: Encuesta sobre las Condiciones de Vida (1994).

Cuadro No. 8**Acuerdos de uso y tenencia de la tierra en el Ecuador rural**

	Porcentajes de hogares rurales				Porcentaje de hogares rurales pobres			
	Costa %	Sierra %	Oriente %	Ecuador %	Costa %	Sierra %	Oriente %	Ecuador %
Sin tierra	44.1	39.2	31.2	40.2	44.9	32.1	30.3	36.9
No campesinos	35.9	34.1	29.5	34.5	36.2	28.6	27.0	31.5
Campesinos sin tierra	9.2	4.1	27	5.6	8.6	3.5	3.3	5.5
Arrendadores	50.6	44.7	34.3	46.5	50.9	41.3	32.5	44.5
De los cuales:								
Tenencia compartida	9.9	25.3	12.0	19.5	14.2	29.9	12.9	22.0
Arriendo por dinero	14.8	7.2	9.0	10.5	9.7	9.2	9.3	9.3
Pago en trabajo	0.9	0.7	1.2	0.9	2.4	1.0	0.0	1.6
Otros/ n.a.	74.1	66.7	79.4	70.3	75.0	61.0	79.9	68.1

Cuadro No. 9

**Proporción del valor del producto bruto agrícola
para cultivos seleccionados**

	Hogares que cultivan					
	Costa		Sierra		Oriente	
	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres	Pobres	No pobres
	%	%	%	%	%	%
Arroz	49	51	1	1	1	1
Cacao	10	11	1	1	7	3
Café	10	9	2	5	6	4
Banano	3	2	0	0	3	3
Cebada	0	0	7	3	0	0
Maíz	4	9	11	7	6	8
Papas	0	0	lo	7	0	1
Tomate de árbol	0	0	4	12	0	0
Maíz suave	1	0	9	15	1	4
Fréjol	2	1	7	7	1	2
Alfalfa	0	0	6	2	0	0
Legumbres	0	0	2	3	0	0
Morocho	0	0	3	1	0	0
Habas	0	0	2	1	0	0
Trigo	0	0	3	1	0	0
Chocho	0	0	2	0	0	0
Hortalizas	0	0	2	2	0	1
Ajo	0	0	0	1	0	0
Yuca	2	2	1	1	29	23
Plátano	4	3	0	3	23	24
Caña de azúcar	2	0	0	0	0	2
Fruta	9	8	17	16	19	18

NOTA:

1. Las participaciones medias se obtuvieron a partir del promedio del valor del producto de un cultivo particular con relación al valor total producido por los hogares.

Cuadro No. 10

**Producto vendido en el mercado
como porcentaje del valor total producido**

	Hogares agricultores		
	Pobres %	No pobres %	Todos %
Costa	64	73	70
Sierra	34	42	39
Oriente	37	34	36
Ecuador	45	54	50

Promedio de excedentes comerciados y tenencia de tierra per capita

Tamaño de la tierra (per capita)	Costa %	Hogares agricultores		
		Sierra %	Oriente %	Ecuador %
<1 ha.	71	37	29	49
1-2.5 ha.	71	45	46	55
2.5-5 ha.	68	60	35	61
5-30 ha.	68	50	44	59
30+ ha.	59	84	56	65
Todos	70	39	36	50

Cuadro No. 11**La relación productividad-tamaño de la tierra en el Ecuador rural
Regresión del valor del producto bruto contra la tierra
cultivada (logaritmos)**

	Todos los cultivos	Arroz	Fruta	Maíz
Tierra cultivada	0.550 (20.31)	0.368 (4.210)	0.870 (4.560)	0.578 (5.530)
Constante	12.57 (213.9)	14.08 (108.2)	12.65 (28.72)	11.45 (54.14)
R ²	0.283	0.167	0.311	0.320
No. de observaciones	1045	91	48	67

NOTAS:

1. En paréntesis estadísticos t.
2. Los resultados de la regresión de la primera columna relacionan el valor total del producto agrícola bruto con el total de tierra poseída entre todos los hogares agrícolas.
3. Los resultados de las columnas 2-4 controlan el cultivo y se aplican a aquellos agricultores que obtienen el grueso de su producto bruto de un solo cultivo (al menos el 80). En consecuencia se asume que los agricultores dedican toda su tierra a ese producto en particular. Los datos no permiten atribuir una fracción de las tenencias totales de tierra a cultivos específicos cuando el hogar cultiva más de un producto.
4. Al estrechar la atención a aquellos agricultores que obtienen el 100 de su producto bruto del cultivo respectivo se reduce el número disponible de observaciones (especialmente entre fruticultores y productores de maíz) pero no se afectan apreciablemente los perímetros estimados.
5. La agregación por cultivos similares, por ejemplo cereales, fruta y árboles, o vegetales y tubérculos, se incrementa el número de observaciones disponibles. Por ejemplo, antes que buscar sólo a cultivadores que obtienen el 80 por ciento de su producto bruto del arroz, se puede agrupar agricultores que obtienen una fracción similar del producto de la cebada, alfalfa y trigo. Este ejercicio no tiene un impacto marcado en los parámetros estimados, pero reduce el ajuste de la regresión.

Cuadro No. 12

**Capital agrícola e intensidad del cultivo entre hogares campesinos
Gasto anual medio en semillas, fertilizantes y pesticidas**

		Semillas	Fertilizantes	Pesticidas
Costa	No pobres	23791	272244	202815
	Pobres	2615	40484	22823
Sierra	No pobres	36368	176819	210520
	Pobres	35945	142001	150772
Oriente	No pobres	9817	5784	9499
	Pobres	3053	4360	6698
Ecuador	No pobres	30441	207633	199869
	Pobres	21257	94654	93145
Total		26731	161987	156750

Cuadro No. 13

Deuda relevante y porcentaje de préstamos de los hogares agrícolas

		Deuda media relevante	Porcentaje de préstamos de todos los hogares			
			BNF %	Prestamista %	Familiar %	Otra fuente %
Costa	No pobres	2581238	7	13	2	22
	pobres	1126220	4	12	14	13
Sierra	no pobres	91506	2	0	0	1
	pobres	208108	2	0	0	2
Oriente	no pobres	820440	3	0	0	4
	pobres	281055	2	0	0	2
Ecuador	no pobres	1092731	4	5	1	10
	pobres	554701	3	4	1	6
Total		875357	3	5	1	8

Cuadro No. 14**Asistencia técnica y propiedad de activos agrícolas
Hogares agricultores**

		Porcentaje de hogares que reporta haber recibido asistencia técnica		
		Cualquier asistencia	Privada	Pública
		%	%	%
Costa	no pobres	3	1	2
	pobres	1	1	0
Sierra	no pobres	5	3	2
	pobres	1	1	0
Oriente	no pobres	6	5	1
	pobres	0	0	0
Ecuador	no pobres	4	2	2
	pobres	1	1	0
Total		3	2	1

Cuadro No. 15**Valor medio de todos los activos agrícolas por hogares y
frecuencia relativa de propiedad**

		Valor por hogar de todos los activos	Tractor	Vehículo	Generador	Bomba de agua	Otro equipo de riego
			%	%	%	%	%
Costa	no pobres	1644795	0	7	1	13	5
	pobres	377223	0	0	1	17	3
Sierra	no pobres	1072818	1	3	1	1	0
	pobres	374781	0	1	0	1	1
Oriente	no pobres	660407	1	1	3	2	0
	pobres	103581	0	0	1	0	0
Ecuador	no pobres	1280800	1	5	1	6	2
	pobres	356802	0	0	1	7	1
Total		907487	0	3	1	6	2

Cuadro No. 16**Trabajo agrícola en el Ecuador rural**

	Costa		Sierra		Oriente		Ecuador	
	No pobre %	Pobre %	No pobre %	Pobre %	No pobre %	Pobre %	No pobre %	Pobre %
Porcentaje de hogares con al menos un miembro relacionado con la agricultura como su principal actividad	86	92	69	76	64	92	75	83
Porcentaje de hogares con al menos un miembro relacionado en el cultivo familiar como su actividad principal	43	43	52	55	53	96	49	52
Porcentaje de hogares con al menos un miembro asalariado agrícola fuera de la propiedad familiar como su principal ocupación	47	67	14	24	9	18	27	40
Porcentaje de hogares con al menos un miembro relacionado de alguna manera con actividad agrícola remunerada fuera de la familia	60	79	20	40	19	39	36	55
Porcentaje de hogares que no cultivan pero con un miembro relacionado con pagos agrícolas remunerados fuera de la granja familiar	19	29	5	12	1	7	11	18

Cuadro No. 17

Animales domésticos y ganado de propiedad de los hogares
Número medio de animales poseído por familia

Ganados y animales domésticos	Costa		Sierra		Oriente		Ecuador	
	No pobre	Pobre						
Vacas	11.5	4.9	3.6	2.5	5.8	3.8	6.8	3.5
Borregos	0	0	1.6	2.4	0	0	0.9	1.4
Cabras	0.2	0.2	0.2	0.1	0	0	0.2	0.1
Cerdos	4.4	4.7	1.9	1.6	0.6	0.4	2.9	2.6
Cuyes y conejos	0.8	0.2	5.0	3.2	2.1	0.3	3.3	1.9
Pollos	25.4	21.2	5.1	3.3	3.3	2.4	13.0	9.9
Pavos	1.1	0.9	0.2	0.1	0	0	0.5	0.4
Patos	3.4	3.0	0.7	0.1	0.4	0.4	1.8	1.2
Caballos burros o mulas	1.5	1.2	0.5	0.4	0.6	0.2	0.9	0.7

Cuadro No. 18

Actividades no agrícolas en el Ecuador rural (principales actividades)
Porcentaje de la población activa

Población involucrada en:	Costa		Sierra		Oriente		Ecuador		
	No pobre	Pobre	Total						
Pesca	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Minería	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Tejidos	0	1	5	2	1	0	3	1	2
Transporte	1	1	2	1	3	0	2	1	2
Construcción	0	1	4	4	2	2	3	3	3
Manufactura	0	1	6	6	3	1	4	4	4
Ventas	7	3	12	7	7	3	10	5	8
Servicio doméstico	1	1	1	2	3	1	1	1	1
Procesamiento de alimentos	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Otros	6	2	7	6	21	4	7	4	6
Actividades no agrícolas	15	10	38	28	43	12	31	19	27
Porcentaje de la población activa empleada en ocupación no agrícola permanente y regular	14	6	34	22	35	11	28	15	22

Cuadro No. 19

**Actividades no agrícolas en el Ecuador rural
(ocupaciones secundarias)**
Porcentaje de la población activa

Población involucrada en:	Varones			Mujeres			Ecuador		
	No pobre	Pobre	Total	No pobre	Pobre	Total	No pobre	Pobre	Total
Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minería	.0	1	0	0	1	0	0	1	0
Tejido	2	1	2	8	4	6	5	2	4
Transporte	6	4	5	0	0	0	4	2	3
Construcción	8	9	8	1	1	1	5	6	5
Manufactura	8	6	7	5	3	5	7	5	6
Ventas	13	8	11	24	14	20	17	10	14
Servicio doméstico	0	0	0	3	6	4	1	2	2
Procesam. alimentos	1	0	1	3	1	2	2	0	1
Otros	10	5	8	12	14	13	11	8	10
Cualquier actividad no agrícola	48	34	42	56	44	51	52	38	45

Cuadro No. 20

**Análisis multivariado de la pobreza
Modelo Tobit para la brecha de pobreza**

	Costa	Sierra	Oriente
Constante	-0.107 (0.093)	0.151 (0.043)	0.208 (0.022)
Tierra per capita	-0.020 (0.000)	-0.035 (0.000)	-0.025 (0.000)
Agricultor de subsistencia (menos del 30% del producto bruto vendido en el mercado)	0.130 (0.039)	0.055 (0.179)	-
Participación del cacao en el producto total	0.247 (0.044)	-	-
Participación del choclo en el producto total	- (0.064)	-0.190 (0.064)	-
Participación del maíz en el producto total	- -	- (0.026)	-0.431 (0.026)
Jefe de familia con educación menos que secundaria	0.110 (0.075)	0.127 (0.033)	0.188 (0.002)
Proporción de empleados en empleos regulares no agrícolas	-0.906 (0.000)	-0.595 (0.000)	-0.675 (0.015)
Sistemas organizados de tratamiento de la basura	-0.302 (0.027)	-0.279 (0.058)	-0.217 (0.019)
Jefe de familia de habla aborigen	- -	0.138 (0.009)	0.214 (0.000)
Conexión de gas	- -	-0.174 (0.000)	-0.139 (0.013)
Número total de cuartos en casa	- -	-0.027 (0.061)	-0.047 (0.005)
Hogar receptor de extensión agrícola	- -	-0.386 (0.009)	-
Conexión telefónica	- -	-0.284 (0.097)	-
Alcantarillado	- -	-0.127 (0.001)	-
Conexión eléctrica	- -	- (0.049)	-0.111 (0.049)
Log Likelihood (M)	-228.73	-276.66	-95.75
Log Likelihood (O)	-262.60	-366.93	-179.71
Observaciones totales	497	612	265
Observaciones en cero	308	366	137
Observaciones > cero	189	246	128

NOTA:

Valores de probabilidad asimptótica entre paréntesis.

Cuadro No. 21

**Análisis multivariado de la pobreza
Modelo probit para la razón número de pobres**

	Costa	Sierra	Oriente
Constante	-0.299 (0.122)	0.285 (0.218)	0.522 (0.144)
Tierra per capita	-0.056 (0.001)	-0.101 (0.000)	-0.073 (0.006)
Agricultor de subsistencia (menos del 30% del producto bruto vendido en el mercado)	0.139 (0.508)	0.160 (0.227)	-
Participación del cacao en el producto total	0.945 (0.019)	-	-
Participación del choclo en el producto total	- (0.178)	-0.411	-
Participación del maíz en el producto total	- -	-	-1.011 (0.156)
Jefe de familia con educación menos que secundaria	0.264 (0.168)	0.391 (0.029)	0.564 (0.011)
Proporción de empleados en empleos regulares no agrícolas	-2.566 (0.000)	-1.514 (0.000)	-1.875 (0.048)
Sistemas organizados de tratamiento de la basura	-0.796 (0.046)	-0.612 (0.133)	-0.560 (0.076)
Jefe de familia de habla aborigen	- -	0.334 (0.072)	0.680 (0.001)
Conexión de gas	- -	-0.406 (0.001)	-0.422 (0.061)
Número total de cuartos en casa	- -	-0.061 (0.162)	-0.170 (0.009)
Hogar receptor de extensión agrícola	- -	-1.000 (0.021)	-
Conexión telefónica	- -	-0.806 (0.102)	-
Alcantarillado	- -	-0.455 (0.000)	-
Conexión eléctrica	- -	-	-0.357 (0.121)
Log Likelihood (M)	-301.98	-339.88	-122.05
Log Likelihood (O)	-330.11	-412.36	183.53
Observaciones totales	497	612	265
Observaciones en cero	308	366	137
Observaciones > cero	189	246	128

NOTA:

Valores de probabilidad asimptótica entre paréntesis.

Cuadro No. 22

**Análisis multivariado de pobreza
Modelo Tobit para la severidad de la pobreza**

	Costa	Sierra	Oriente
Constante	-0.067 (0.035)	0.078 (0.094)	0.010 (0.097)
Tierra per capita	-0.010 (0.000)	-0.022 (0.000)	-0.018 (0.000)
Agricultor de subsistencia (menos del 30% del producto bruto vendido en el mercado)	0.084 (0.006)	0.032 (0.197)	-
Participación del cacao en el producto total	0.102 (0.095)	-	-
Participación del choclo en el producto total	- (0.091)	-0.108 (0.091)	-
Participación del maíz en el producto total	- -	- (0.019)	-0.302 (0.019)
Jefe de familia con educación menos que secundaria	0.053 (0.086)	0.071 (0.056)	0.129 (0.001)
Proporción de empleados en empleos regulares no agrícolas	-0.455 (0.000)	-0.367 (0.000)	-0.429 (0.022)
Sistemas organizados de tratamiento de la basura	-0.143 (0.036)	-0.151 (0.095)	-0.118 (0.055)
Jefe de familia de habla aborigen	- -	0.098 (0.003)	0.138 (0.000)
Conexión de gas	- -	-0.112 (0.000)	-0.096 (0.009)
Número total de cuartos en casa	- -	-0.019 (0.034)	-0.030 (0.007)
Hogar receptor de extensión agrícola	- -	-0.234 (0.012)	-
Conexión telefónica	- -	-0.158 (0.142)	-
Alcantarillado	- -	-0.073 (0.002)	-
Conexión eléctrica	- -	- (0.039)	-0.076 (0.039)
Log Likelihood (M)	-85.25	-139.90	-32.72
Log Likelihood (O)	-118.69	-229.39	-114.81
Observaciones totales	497	612	265
Observaciones en cero	308	366	137
Observaciones > cero	189	246	128

NOTA:

Valores de probabilidad asimptótica entre paréntesis.

**Políticas agrícolas y
desarrollo rural en el Ecuador:
con referencia a Morris D. Whitaker**
**(Evaluación de las Reformas a las Políticas Agrícolas
en el Ecuador Vol. I y II, IDEA, 1996)¹**

LOUIS LEFEBER²

El avance del sector comercial, de la agricultura y de la industria es importante, pero por un largo tiempo éste no puede absorber, y en el futuro previsible no absorberá a los desempleados y subempleados en puestos de trabajo asalarialdo. Aumentar la productividad de la mayoritaria y empobrecida población marginal rural-urbana, depende de políticas que requieren de la intervención estatal directa en áreas que no sean únicamente las del sector comercial.

Introducción³

Los dos volúmenes que constituyen punto de referencia de mis observaciones (en adelante mencionados como el Reporte) fueron prepara-

1 Tomado de *Ecuador Debate*, No. 43. Quito: CAAAP, abril 1998.

2 Louis Lefebre, Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe (CERLAC), York University, Profesor Emeritus de Economía de la Universidad de York en Toronto, Canadá, nacido en Hungría, en 1924. Obtuvo su PhD en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1957. Enseñó economía en las universidades de Harvard, Stanford, MIT, Brandeis, y actuó como asesor de agencias de las Naciones Unidas (CEPAL, UNIDO, ECAFE, etc.), gobiernos nacionales (India, Grecia, y varios países latinoamericanos). Banco Mundial, BID, Alianza para el Progreso, etc. Ha publicado libros, monografías, y artículos científicos sobre economía política, desarrollo, y planificación en la India, Grecia y Latinoamérica.

3 Louis Lefebre y Liisa North son beneficiarios de una beca del Consejo de Ciencias Sociales.

dos para el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Ecuador y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con la asistencia financiera del BID, PL480 y USAID, y con la cooperación de IDEA. El Reporte presenta un panorama de los cambios ocurridos en la economía ecuatoriana desde 1992, año en el cual el Gobierno ecuatoriano tomó, o aceleró el ritmo, de ciertas políticas de estabilización.

Es en ese contexto que los efectos de los cambios de políticas en el sector agrario y su contribución a la economía nacional son analizados. El Reporte es un documento potencialmente influyente en el diseño de políticas económicas, tanto por el auspicio internacional de alto nivel, como por el amplio uso de información estadística en apoyo de sus argumentos. En consecuencia, sus conclusiones y recomendaciones requieren una cuidadosa consideración.

El enfoque sobre la estabilización económica presentado en el Reporte es esencialmente similar al adoptado en la mayor parte del hemisferio americano, esto es: reducción del tamaño del sector público y del déficit fiscal, desregulación de los mercados, privatización, liberalización de los mercados de capitales, devaluación, y un desplazamiento de la economía hacia el mercado libre. El argumento sostenido en el Reporte se concentra en efectos económicos concebidos muy limitadamente, el supuesto implícito es que cualquier cosa que promueve el crecimiento económico también contribuye al avance del bienestar social y los intereses políticos democráticos. En este sentido, el análisis realizado en el Reporte es fuertemente ideológico. Este carácter ideológico está reforzado por un subyacente dualismo, por no decir maniqueísmo: que las decisiones y políticas basadas en razones de mercado que promueven una orientación externa o de mercado internacional de la economía son intrínsecamente 'buenas'; por el contrario, aquellas políticas destinadas a establecer controles sobre el mercado, a favore-

les y Humanidades de Canadá (SSHRC) y expresan su agradecimiento a esa institución, cuyo apoyo hizo posible el presente trabajo que forma parte de un proyecto sobre la relación entre el desarrollo de empresas económicas populares y las políticas macro-económicas. El autor quisiera agradecer a Pablo Andrade por su valioso trabajo de traducción y a Luciano Martínez, Liisa North y Carlos Larrea por sus comentarios.

cer una orientación interna de la economía, o del mercado doméstico, son intrínsecamente ‘malas’. En consecuencia, el Reporte enfatiza constantemente la orientación hacia el mercado internacional, la cual, mediante un desarrollo basado en las exportaciones, produciría un efecto de goteo (*trickle-down*) que naturalmente beneficia a los trabajadores y a los sectores de menor ingreso de la población. Es necesario anotar que aún algunos de los promotores originales de esa ideología como el Banco Mundial, ahora califican con mayor precaución sus ideas respecto a las posibilidades de *trickle-down*. Dentro de esa orientación particular, el Reporte provee una revisión del espectro total de políticas macro y microeconómicas implementadas en la historia reciente y actual del país. En la presente revisión crítica, no entrará a discutir las opiniones y conclusiones de los autores del Reporte acerca de tan amplio rango de materias, aún cuando el contexto en el cual se hallan presentadas incluye, y se refieren, al sector agrícola. En su lugar, he preferido concentrarme en aquellos temas que se relacionan más directamente con los problemas básicos de una política para el desarrollo agrario y rural.

De hecho, aún cuando difiero con los argumentos del Reporte acerca del rol central de las exportaciones en la promoción del desarrollo, o con respecto a las funciones propias de los gobiernos y los mercados, no trataré de probar la bondad del polo opuesto de muchas de las opiniones expresadas por los autores. En varios aspectos, mi desacuerdo no es respecto de la existencia de un problema que exige solución, sino con el enfoque particular del Reporte a esa solución⁴.

Concentrarse en el desarrollo de mercados domésticos no implica necesariamente descuidar el comercio internacional. Las políticas destinadas a promover la capacidad exportadora de una nación son importantes para generar las divisas extranjeras necesarias para las importaciones y el pago de los intereses de la deuda internacional así co-

4 Por ejemplo, estoy fuertemente en desacuerdo con la idea de que la austeridad fiscal debe ser una política para mejorar la balanza comercial. En su lugar, favorecería, entre otras, la creación de impuestos a bienes suntuarios, la mayoría de los cuales son importados y no producidos domésticamente.

mo su amortización. Es necesario reconocer los efectos calamitosos del excesivo y, frecuentemente contradictorio, conjunto de controles que han caracterizado a la economía ecuatoriana en general y su sector agrícola en particular. Algunos de esos controles fueron instituidos debido a una comprensión inadecuada del funcionamiento de la economía, y otros para la defensa implícita o explícita de intereses particulares. Aún más, no hay una justificación racional para el tipo de substitución de importaciones que se promovió en el Ecuador a partir de la interpretación o aplicación errónea de las tesis de Prebisch/Singer sobre el desarrollo, o para aquellos subsidios por servicios públicos y otras actividades que son provistas no para aumentar la eficiencia económica o mejorar el bienestar social, sino debido a la falta de voluntad política de los gobernantes para resistir presiones de grupos de interés particular.

Debe reconocerse que los mercados tienen una función socioeconómica positiva en la organización de la economía pero, parafraseando a un difunto economista de la India, Sukhamoy Chakravarty, los mercados no pueden ser los amos, sino los sirvientes del interés público. Este último requiere del rápido incremento de la capacidad adquisitiva de las clases de menores ingresos y del uso inteligente de regulaciones, tal y como se hizo en Japón y posteriormente en Corea del Sur y Taiwan⁵.

La evidencia del desarrollo asiático

Los prototipos usuales de un desarrollo exitoso basado en la promoción de exportaciones, Corea y Taiwan, en realidad se desarrollaron bajo condiciones que incluían la orientación hacia el comercio internacional solamente como uno de los componentes de un conjunto de factores iniciales complejos (y en ningún caso el único). Entre esos factores fue importante el mejoramiento de la distribución de ingreso, esto es, el crecimiento del poder adquisitivo de los sectores de la población con bajo

5 Véase Louis Lefebre. "What Remains of Development Economics?" en: *Indian Economic Review*, Special Number, Vol. XXVII, 1992.

ingreso, un efecto producido por políticas gubernamentales deliberadas, tales como la reforma agraria. En Japón, fue la ruptura con el patrón feudal de tenencia de la tierra e ingreso altamente concentrados, correspondiente a su estructura económica militar-industrial, lo que hizo posible el cambio de la post-guerra hacia un desarrollo basado en el mercado doméstico y el comercio internacional. Un cambio que, a su vez, fue reforzado por los subsidios -existentes hasta la actualidad- provistos para el mantenimiento de los sectores tradicionales, los cuales continúan siendo responsables de casi el 40% de la economía japonesa.

Del caso japonés se deriva una lección importante: los cambios en los patrones de propiedad, ingreso, y distribución cambian la estructura de poder. La evidencia muestra que los cambios en esos patrones minan las bases del poder económico y político de los terratenientes y otras clases dominantes que obstaculizan el desarrollo de procesos democráticos. Al efectuar esa transformación, la estructura de la demanda también cambia desde bienes suntuarios hacia el consumo masivo de productos básicos.

Japón y los llamados exitosos 'Tigres Asiáticos' han usado efectivamente el mercado, al mismo tiempo que mantenían fuertes controles directos e indirectos sobre la inversión y el comercio internacional⁶. En Japón y Corea, y en alguna medida también Taiwán, el financiamiento del desarrollo económico ha provenido esencialmente de fuentes domésticas, a través de créditos de apoyo proporcionados por el Estado. A pesar del colapso de los mercados que ha afectado recientemente a las economías de mercado asiáticas, aquellas que fallaron en mejorar las estructuras en la distribución del ingreso y que no desarrollaron instituciones para el mantenimiento de controles efectivos sobre la inversión y el comercio internacional -como por ejemplo Tailandia, Indonesia y Filipinas- probablemente van a experimentar mayores difi-

6 Véase, por ejemplo, Manfred Bienefeld, "The Significance of the Newly Industrializing Countries for the Development Debate", en *Studies In Political Economy* 25 (Spring 1988), and Liisa North, "Que pasó en Taiwan? Un Relato de la Reforma Agraria y de la Industrialización rural", en Luciano Martínez V. (ed.), *El Desarrollo Rural Sostenible* (Quito: FLACSO, 1997).

cultades en reconstruir sus economías que aquellas otras economías que cuentan con mercados domésticos sólidamente establecidos. Evidentemente, las condiciones para la asistencia financiera dictadas por el FMI -mayor austeridad fiscal y desmantelamiento de algunas de las instituciones domésticas de control- pueden en el futuro cercano agravar los problemas actuales de las economías asiáticas⁷.

Aún en el marco de la tendencia prevaleciente hacia la globalización, la parte más importante de la demanda tiene que provenir del mercado interno antes que del mercado internacional. Esto debido a que la demanda interna se encuentra sujeta, principalmente, a controles nacionales y a la capacidad de compra interna, en lugar de incontrolables fluctuaciones de la demanda internacional⁸.

La evidencia en el caso ecuatoriano

El Reporte revisa las políticas que se han adoptado en el Ecuador para liberalizar la economía. El texto reconoce los esfuerzos iniciales del gobierno de Rodrigo Borja para liberar el comercio internacional, pero da mayor crédito al gobierno de Sixto Durán Ballén por sus reformas macroeconómicas y sectoriales, aún cuando estas últimas no alcanzaron las metas inicialmente propuestas. Aún así, el Reporte argumenta que la economía ecuatoriana ha respondido favorablemente a las políticas económicas del gobierno de Durán Ballén; como evidencia en favor de esa afirmación, señala que la tasa de inflación disminuyó en un 60% en el período de ese gobierno (1992-1996), mientras que la economía creció en una tasa promedio de 3.2% entre 1988 y 1995. Las exportaciones, con creciente participación de productos industriales y agrí-

7 Es importante anotar que en este caso la posición del Banco Mundial es contraria a las recomendaciones del FMI que exige mayor austeridad fiscal.

8 Es necesario destacar para el caso ecuatoriano que el Ecuador Poverty Report (1995) del Banco Mundial señala las vulnerabilidades de la economía ecuatoriana a "shocks" externos - junto con bajas tasas de ahorro interno, carencia de innovación tecnológica y bajos retornos de la inversión - como una explicación para el "patrón de bajo crecimiento del Ecuador en el pasado inmediato" (Vol. I: vii, edición en inglés).

colas no-tradicionales, se incrementaron a una tasa cercana al 13% durante el período. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento de las exportaciones provino de productos agrícolas primarios, los cuales representaron cerca del 50% del total de exportaciones.

Con respecto al sector agrícola en sí, el Reporte indica un crecimiento sectorial de 2.9% en promedio para 1988-1995 y 3.6% en el último año del período, esto es, 1995. En contraste, de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial (*World Development Report –WDR– 1997*) la tasa anual de crecimiento de la agricultura fue de 4.4% para 1980-90 y de 2.5% para 1990-95. Debido a que las medias han sido calculadas sobre la base de diferentes períodos de tiempo, las diferencias entre las dos fuentes pueden no ser contradictorias en términos numéricos. Pero, el Reporte falla en revelar que *la tasa promedio de crecimiento anual de la agricultura en realidad cayó* en el período en el cual las políticas de estabilización fueron introducidas. Si la tasa de crecimiento fue 3.6% en 1995, el promedio de los cuatro años precedentes tiene que haber sido inferior al 2.5%. El crecimiento de las exportaciones de flores y alimentos procesados es, sin lugar a dudas, impresionante, pero refleja el hecho de que en términos absolutos ambas actividades arrancaron desde niveles iniciales muy bajos.

Podría, tal vez, argumentarse que el alto crecimiento de la agricultura en 1995 fue consecuencia de la liberalización. Sin embargo, resulta más probable que tal crecimiento sea la respuesta de un mercado previamente deprimido al rápido crecimiento de la demanda norteamericana (estadounidense) y a la ampliación de los mercados andinos. En cualquier caso, ni el crecimiento de las exportaciones de flores y alimentos procesados, ni el mejor rendimiento de 1995 afectaron a la participación relativa de la agricultura en el PIB: el valor agregado del sector fue de 12% del PIB en 1980, y permanecía en 1995 en 12% (*WDR 1997*)⁹. Estas cifras, en combinación con la información disponi-

9 El Reporte muestra cifras contradictorias para la participación de la agricultura en el PIB. El cuadro 1, Vol II, p.11, da el 12% para 1994, lo cual es consistente con la cifra del Banco Mundial para 1995, como se ha mencionado arriba. En contraste, el gráfico 1 del Vol. II, p. 77, presenta una cifra algo por encima del 17% para 1994 y 1995. Es razonable asumir que la cifra menor es correcta, en tanto que es consistente, además, con la información disponible para años anteriores.

ble sobre población y empleo, indican una falla fundamental en la política implementada.

Mientras que el crecimiento anual de la población fue de 2.5% entre 1980-90, y de 2.2% para 1990-1995, durante el mismo período la fuerza laboral creció a un ritmo del 3.5% y 1.2%, respectivamente. Sin embargo, el incremento correspondiente en la tasa de participación de la fuerza laboral no puede atribuirse al incremento en las oportunidades de empleo. Las estadísticas sobre pobreza sugieren que el crecimiento de la tasa de participación es, muy probablemente, un indicador de la necesidad de buscar ingresos adicionales por parte de personas (miembros de familia) que antes no formaron parte de la fuerza laboral activa.

El ingreso per cápita se ha incrementado marginalmente, pero la productividad total, medida a través de la proporción entre fuerza laboral y el producto, no lo ha hecho. Aun más, como lo afirma el Reporte (pág. 11, vol. II), en 1994, la cifra arriba citada del 12% que representa la participación de la agricultura en el PIB fue producida por el 37.8% del total de la fuerza laboral. Simultáneamente, la proporción de la misma en el sector informal fue de 25.7%. Tomando los dos sectores en conjunto, el 63.5% de la fuerza laboral está involucrada en actividades de baja productividad; por tanto, la mediana del ingreso¹⁰ tiene que permanecer significativamente por debajo del nivel de ingreso per cápita.¹¹

Las estadísticas de ingreso y distribución de consumo confirman esta conclusión. En 1994, con un coeficiente de desigualdad de Gini de 46.6, la participación en el consumo del 10% inferior de la población era

- 10 La mediana constituye el ingreso de un receptor ubicado de tal manera que la mitad de la población recibe más y la otra mitad recibe menos que él. En una sociedad de alta concentración de ingresos, la mediana necesariamente queda por debajo del ingreso per cápita (eso es, el medio). Por ejemplo, mientras que el ingreso per cápita en el Ecuador alcanza los \$1,600 dólares, la mediana del ingreso se encuentra por debajo de la línea de pobreza de \$ 700 dólares. (Cifras calculadas por Carlos Larrea basándose en la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, 1994, del Banco Mundial).
- 11 El Reporte sobre el Desarrollo del Banco Mundial (WDR 1997), usando una definición diferente de fuerza laboral y empleo, da para 1980 y 1990, respectivamente, 40% y 33% del total de empleo en la agricultura, y 20% y 19% en la industria. El resto corresponde a servicios y el sector informal. La consecuencia es que durante la década hubo un incremento de 20% en el empleo en el sector servicios e informal.

del 2.8%, y del quintil inferior de 5.4% del total nacional (WDR 1997). Dado que la mayoría de las personas en los grupos de menor ingreso residen en el área rural, el nivel de pobreza rural, como fue confirmado por el Banco Mundial (*Ecuador Poverty Report 1995*), ha sido significativamente peor que la pobreza en el área urbana. No es de sorprenderse, entonces, que los rigores excesivos de la vida rural produzcan altas tasas de migración hacia áreas urbanas. Esto se confirma por la rápida tasa de crecimiento de las áreas urbanas entre 1980 y 1995; un promedio anual de 3.9%, una cifra que es significativamente mayor que la tasa promedio de crecimiento de la población en el mismo período (WDR 1997).

Aún en las mejores condiciones, el desarrollo urbano no puede avanzar a una tasa lo suficientemente rápida como para absorber ese nivel de migración rural en actividades razonablemente productivas. Sin oportunidades de ingreso adecuadas, los migrantes desempleados o subempleados están obligados a depender financieramente de su familia, de la ayuda pública o privada o, como lo indica el crecimiento de las tasas de criminalidad urbana, en algunos casos de actividades delincuenciales. En consecuencia, existe un costo social significativo producido por la falta de programas de desarrollo rural de base amplia. Este costo, el cual es mensurable, debe tomarse en consideración en las decisiones políticas que se refieren a la asignación de recursos entre áreas urbanas y rurales¹².

Al contrario del argumento del Reporte, la culpa por los continuos problemas sociales y económicos no puede atribuirse a los fracasos gubernamentales en implementar a fondo el llamado programa de estabilización que fue inicialmente prometido por el gobierno de Durán Ballén. Ese programa implicó un tratamiento de choque, cuya dureza habría sobrepasado los márgenes de tolerancia de una democracia. La destrucción de formas tradicionales de producción rural y artesanal habría causado enormes, posiblemente explosivos incrementos en el desempleo y subempleo; la inestabilidad social resultante podría haberse convertido en lucha de clases, con consecuencias impredecibles.

12 Véase Louis Lefebvre, "Trade, Employment and the Rural Economy" en M. Yamada, ed., *Ciudad y Campo en América Latina* (Osaka, Japón: The Japan Centre for Area Studies 1997).

En realidad, tales políticas solo pueden ser implementadas por medios totalitarios, como ocurrió en Chile, país en el cual el conflicto social fue resuelto por el poder militar y policial. En cualquier caso, los costos sociales de la drástica reestructuración neoliberal son inmediatos y muy altos, y las repercusiones económicas iniciales pueden fácilmente ser negativas. Los beneficios, cuando existen, se mostrarán únicamente con considerable retraso¹³.

Es innegable que para un desarrollo social y económico amplio se necesitan cambios sustanciales en la economía ecuatoriana. El cambio está requerido, aún cuando no sea por otra razón, porque la estructura actual no conduce al crecimiento, menos aún al tipo de crecimiento que es compatible con el mejoramiento de los estándares básicos de vida. Con el patrón de crecimiento actual de menos del uno por ciento anual del ingreso per cápita, se necesitarán setenta años para que se duplique. Si la relación entre ingreso per cápita y la mediana del ingreso no cambia, la mediana también requerirá igual tiempo para duplicarse. Pero, debido a los efectos de las políticas neoliberales, puede esperarse que la brecha entre uno y otro crezca en el tiempo¹⁴.

Esto es evidentemente inaceptable. El crecimiento tiene que ser acelerado, y la relación entre ingresos per cápita y la mediana del ingreso debe cambiar en favor de este último. En otras palabras, se requiere una masiva redistribución del ingreso.

13 Por ejemplo, en Chile los ingresos per cápita solo recientemente han recuperado su nivel de 1973, esto es, más de veinte años después de la imposición del régimen militar y la reestructuración neoliberal. Aún más, en la medida que muchas políticas de distribución del ingreso y la riqueza del gobierno de Allende fueron revertidas, es razonable concluir que la mediana del ingreso en Chile continúa estando por debajo de los niveles anteriores al Golpe. Los argumentos que enfatizan los beneficios económicos del Golpe son ideológicos: el Golpe no estuvo motivado por el estado de la economía, sino por un severo conflicto de clases. Vale la pena apuntar que en las elecciones de abril de 1973 el porcentaje de votos en favor del gobierno de Allende se incrementó. De haberse permitido al país continuar en el sendero democrático, aún con un crecimiento económico modesto en las dos décadas pasadas, habrían aumentado los niveles de bienestar económico y social en un grado mayor del que existe actualmente. En el caso de Argentina, los beneficios esperados de las reformas neoliberales introducidas e implementadas por el gobierno de Menem no se han materializado.

14 Asumiendo una tasa de crecimiento de la población del 2%, un incremento porcentual del 4% anual en el ingreso podría duplicar el ingreso per cápita en 35 años.

Un cambio efectivo en la dirección arriba sugerida, no provendrá de ninguna manera mediante la implementación completa del paquete de reformas económicas propuesto inicialmente por el gobierno de Durán Ballén. Esto no quiere decir que no ameriten consideración las recomendaciones que hace el Reporte para la eliminación de ciertos tipos de subsidios y gastos gubernamentales socialmente injustificables. No importa si los subsidios fueran eliminados, siguiendo las recomendaciones señaladas en del Reporte o de alguna otra manera, queda claro que en el largo plazo los ingresos per cápita y la mediana del ingreso no se incrementarán y que la estabilidad social no podrá mantenerse por medios democráticos, sin una relación sustentable entre el crecimiento de la productividad y los déficits fiscales y comerciales.

Lo anterior no implica, sin embargo, que la reestructuración tenga que seguir las prescripciones neoliberales. Si el crecimiento de la productividad es suficientemente alto, la economía puede crecer dentro de déficits temporales de los dos tipos (comerciales y/o fiscales). La cuestión es entonces, como generar un crecimiento de la productividad adecuado o en escala suficientemente amplia como para crear el resultado deseado.

Para este tipo de reestructuración, el Reporte no ofrece guía alguna. Por el contrario, aboga por la eliminación de déficits y otras reformas neoliberales como un prerequisito, o condición, para el logro del crecimiento de la productividad. En otras palabras, al estipular una secuencia causal que es el polo opuesto del arriba mencionado, el Reporte acepta la sabiduría tradicional de la comunidad financiera internacional¹⁵.

15 Con relación a esto, es necesario clarificar lo que significan la productividad y el crecimiento de la productividad. Es probable que la productividad de trabajadores asalariados se incremente en reacción a las políticas de mercado neoliberales. En consecuencia, los empresarios del sector privado, en particular aquellos que se encuentran involucrados en procesos agrícolas o industriales relativamente intensivos en el uso de capital, se beneficiarán. Pero, si estas políticas neoliberales son acompañadas por incrementos de desempleo y subempleo, como ha ocurrido con frecuencia, es muy probable que la productividad general - medida por la relación entre ingreso nacional y la fuerza laboral total (eso, la suma del empleo y desempleo) - decrezca. Además, si se incluye en el cálculo de los cambios en la productividad, los costos públicos y privados de mantener el número adicional de personas sin trabajo, la cifra obtenida puede significar una pérdida económica catastrófica como resultado de la introducción de las políticas económicas neoliberales. Véase Lefebvre, op.cit., 1997.

En cambio, el enfoque hacia la reestructuración debería permitir una transferencia gradual del trabajo desde actividades de baja a alta productividad sin destruir o minar la base económica de los grupos de menor ingreso. En razón que estos últimos son primariamente rurales o migrantes rurales, el esfuerzo naturalmente debe concentrarse en la reconstrucción de la economía rural. Esta, a su vez, requiere una comprensión de la interacción entre factores económicos, políticos, y sociales en los niveles nacional y sectorial, pero primero y sobre todo, depende de la voluntad política¹⁶.

La importancia de la agricultura

El Reporte reconoce el papel significativo de la agricultura en la economía ecuatoriana (pág. 53 ss., Vol. I). El sector está presente en todas las regiones del Ecuador -la Costa, la Sierra y el Oriente-; emplea cerca del 40% de la fuerza laboral, genera cerca del 50% de las divisas extranjeras, y produce un amplio rango de bienes para el consumo doméstico y el uso industrial. Pero, salvo algunas excepciones, la eficiencia del sector no se compara con su importancia en la economía. Como he anotado arriba, su valor agregado ha sido del 12% del PIB.

Evidentemente, los efectos combinados del crecimiento de la población y la pobreza han presionado sobre la disponibilidad de tierra, incluso aquella utilizable marginalmente para el cultivo y/o la ganadería. Las áreas cultivadas se han incrementado al punto de que para 1990, prácticamente, toda la tierra de calidad, tanto como la mayoría de las tierras marginales fueron incorporadas a la producción.

La extensión de cultivos hacia tierras marginales -incluyendo tierras públicas protegidas- ha creado altos costos sociales y bajos rendimientos en promedio. Entre otras cosas, el Gobierno ha tenido un control bastante limitado sobre el uso de las tierras públicas protegidas. Los costos privados de la colonización y explotación de estas últi-

16 Véase en conexión con este punto Louis Lefebvre, "The Paradigm for Economic Development", en *World Development* (January 1974), y "Critique of Development Planning in Private Enterprise Economies", en *Indian Economic Review* 2, Vol IX (New Series 1974).

mas han sido pequeños con relación a los costos del incremento de la productividad de tierras previamente cultivadas; sin embargo, los costos sociales han sido mucho mayores.

En comparación con otros países latinoamericanos, en Ecuador la productividad total ha permanecido baja para un amplio espectro de productos agrícolas. La productividad se ha incrementado principalmente en la producción para mercados de exportación (banano y café), mientras que se ha deteriorado, con algunas excepciones, con relación a los productos para consumo doméstico. Los incrementos en la producción del 1.4, 0.8, y 1.9% en arroz, papas, y maíz duro, respectivamente, estuvieron por debajo del incremento de la tasa de crecimiento de la población.

El Reporte confirma que la gran mayoría del crecimiento de la producción ha provenido de la extensión de cultivos hacia tierras adicionales, en lugar del incremento de la productividad del sector agrícola. Asimismo, el Reporte culpa a las políticas restrictivas -macroeconómicas y sectoriales- que generaron precios bajos e incentivos insignificantes, inadecuada base científica, y el limitado acceso a técnicas mejoradas. Confirma que no ha existido suficiente inversión en investigación ni en la extensión de servicios y capital humano, mientras que se manifiesta una dependencia en insumos naturales en lugar de insumos industriales modernos.

Elementos de políticas para la agricultura comercial

Las observaciones precedentes merecen tomarse en cuenta; sin embargo, para propósitos del análisis político se debe diferenciar entre las condiciones y requerimientos del sector agrícola comercial y aquellos de la agricultura marginal. En lo que sigue llamaré 'comerciales' a todas aquellas unidades de producción agraria que venden una parte sustantiva de su producción en los mercados comerciales, monetizados, y consideraré a todo el resto del sector agrícola como 'marginal'.

Como sostiene el Reporte, para el sector comercial de la agricultura se requiere una política de precios que asegure retornos reales de la inversión lo suficientemente altos como para motivar a los productores a realizar el esfuerzo necesario para incrementar la productivi-

dad. Los términos reales de intercambio entre el sector industrial (incluyendo los insumos importados) y agrícola deben favorecer a este último. En realidad ha ocurrido todo lo contrario.

Es más, los retornos tienen que ser lo suficientemente altos como para proveer un margen de seguridad contra los riesgos e incertidumbres causados por los caprichos tanto de la naturaleza como de los mercados. La capacidad para asumir riesgos se incrementa con el tamaño de la operación agrícola y el acceso a crédito; pero, la disposición para adoptar nuevas tecnologías que pueden requerir el uso creciente de insumos industriales o de capital, esto es, la disposición para asumir riesgos, es una función de las expectativas con respecto de la rentabilidad de la inversión.

La adopción de nuevas tecnologías puede ser una espada de doble filo. La demanda de trabajo no se incrementa necesariamente en la misma proporción que el incremento de la productividad; en muchos casos puede incluso disminuir¹⁷. Si el desarrollo urbano-industrial no es capaz de absorber el crecimiento del excedente de mano de obra rural, y si es que no existen políticas gubernamentales de creación de empleo apropiadas, el desempleo y el sector agrícola marginal necesariamente van a incrementarse. Los agricultores marginales carecen, por supuesto, de la capacidad para tomar riesgos y por tanto no puede esperarse que lleven a cabo inversiones basadas en sus propios recursos.

En realidad, en respuesta a las políticas de estabilización del gobierno de Durán Ballén, los retornos reales del sector agrícola comercial cayeron significativamente. Entre 1993 y 1995, los precios de los fertilizantes se incrementaron abruptamente mientras que los precios que los agricultores recibieron declinaron para un amplio espectro de sus productos. Los precios de los productos para el consumo doméstico

17 Este podría ser el caso del sector agrícola comercial ecuatoriano; lamentablemente la información disponible es inadecuada. Puede citarse, sin embargo, el comentario de un terrateniente ecuatoriano que va directo al punto: "la importancia de la industrialización está en que alivia a las haciendas de trabajadores indeseables". En relación con esta afirmación, es importante señalar que mientras la participación de la agricultura ha permanecido constante en el Ecuador, la participación de la industria en el valor agregado del PIB ha declinado desde el 38% en 1980 hacia el 36% en 1995 (WDR 1997. Tabla 12). ¡Esta es la capacidad de la industria ecuatoriana para absorber trabajo.

resultaron particularmente afectados (Vol. I: 62-63). Mientras que la disminución de los precios de los productos exportables contribuyó al incremento de las exportaciones, la producción comercial agrícola para consumo doméstico se deterioró. Por tanto, los incrementos de producción -cualesquiera sean estos- se debieron principalmente a la expansión de la agricultura marginal.

La necesidad de mejorar la distribución del ingreso

El fenómeno descrito se refiere fundamentalmente a las opciones y contradicciones básicas de la política económica del Ecuador. De hecho, constituyen un dilema que el Reporte no reconoce ni explora.

El problema reside en la fuente y el crecimiento de la demanda. Sin lugar a dudas es correcto, como lo sugiere el Reporte, que la caída en los precios de los productos para consumo doméstico refleja la baja tasa de crecimiento del ingreso y la baja elasticidad del ingreso para el consumo básico. Pero, el bajo crecimiento del ingreso ha sido una consecuencia de las políticas de estabilización, las cuales han aumentado significativamente el desempleo y el empobrecimiento de las ya miserables clases trabajadoras. La demanda por bienes básicos domésticamente producidos es función del poder de compra de la población de bajos ingresos; este segmento fue minado por políticas específicamente orientadas a restringir la demanda doméstica.

En cuanto a la cuestión de las elasticidades del ingreso para la demanda de bienes básicos, estas siguen bajas como reflejo de la distribución del ingreso prevaleciente. Pero, la conclusión estadística y el argumento basado en ella se mantienen solo mientras las desigualdades en la distribución de ingreso actuales no cambien. Las clases medianas y los trabajadores con empleo estable tienen, por supuesto, bajas elasticidades para productos agrícolas básicos. Así, las políticas que llevan al incremento de los ingresos de estos sectores no se convierten en aumentos significativos de la demanda por productos agrícolas. Pero este no es el caso para los pobres sin dinero quienes requieren urgentemente una mejoría de su nutrición básica: otorgueles poder de compra y se convertirán inmediatamente en compradores de bienes agrícolas básicos. Su elasticidad de ingreso para la producción agrícola

la básica es, si no uno, cercana a uno (o, en otras palabras, dedicarían sus ingresos adicionales al consumo básico)¹⁸.

El desarrollo de la agricultura comercial es evidentemente una preocupación central del gobierno ecuatoriano y sus asesores internacionales. En consecuencia, tanto los políticos ecuatorianos como sus asesores internacionales deben enfrentar esta realidad fundamental: no existe una política de precios que pueda mantener precios de mercado estables para los productos agrícolas básicos, y retornos adecuados para los agricultores, sin asegurar primero una demanda adecuada de consumidores domésticos. Esta afirmación no puede ser desechada como ‘meramente ideológica’, es una proposición básica que es ajusta al análisis de todos y cada uno de los tipos de economías de mercado.

Por supuesto que precios estables de piso que garanticen retornos mínimos aceptables y protección contra los caprichos de los mercados pueden ser mantenidos por el Gobierno. Esto motivaría mayores niveles de producción comercial de bienes básicos para los mercados domésticos; pero esto, a su vez, nos enfrenta al problema de la absorción, el cual no puede resolverse sin mejorar primero la distribución del ingreso. De una u otra manera, queda claro que la distribución del ingreso está al fondo del problema. Las expectativas basadas en ideas desgastadas de las teorías del goteo (trickle-down) únicamente postergarían la adopción de aquellas medidas políticas que transferirían poder adquisitivo a las manos de los pobres.

Elementos de políticas para el sector agrícola marginal

Los problemas de la marginalización y del sector agrícola marginal requieren intervención directa del Estado. El Reporte, alineado con su compromiso ideológico por minimizar los gastos estatales y la intervención directa en la economía, no reconoce que las políticas que podrían avanzar el desarrollo de la agricultura comercial son, en su mayoría, irrelevantes para el sector marginal de la agricultura¹⁹. Tampo-

18 Véase Lefeber, “The Paradigm for Economic Development”, op. cit. (1974).

19 Uso el calificativo ‘en su mayoría’ en reconocimiento del hecho de que los agricultores marginales que comercializan una pequeño parte de su producto en mercados monetizados se benefician también de mejores precios.

co reconoce que la adopción de nuevas tecnologías en la agricultura comercial puede causar el desplazamiento de mano de obra. Este ha sido el caso, por ejemplo en México, donde la incursión de compañías transnacionales en la producción agrícola orientada a la exportación ha resultado en crecientes intensidades de capital y reducción de empleo²⁰. En casos alternativos, donde una alta intensidad de mano de obra en la producción ha sido retenida por los productores comerciales, por ejemplo en la consolidación del sector chileno de exportación de frutas por las transnacionales, el trabajo estacional inestable sin beneficios sociales y la alta incidencia de envenenamiento por productos agro-químicos han mantenido a los trabajadores (los recolectores de fruta) al margen de la existencia²¹.

El avance de la agricultura comercial puede conducir a, o estar acompañado por, un proceso de marginalización, sea por la vía de la sustitución de mano de obra por capital, o por condiciones de trabajo precarias. Este no es un argumento en contra de la adopción de políticas que favorezcan el crecimiento del sector agrícola comercial, sino un reconocimiento de la necesidad de implementar medidas que contrarresten los efectos potencialmente perjudiciales del crecimiento de la agricultura comercial. Marginalización, extensión de la agricultura de subsistencia hacia tierras marginales, y el uso inadecuado de recursos naturales por parte de agricultores de subsistencia pueden ser revertidos solo mediante políticas efectivas para mejorar la distribución del ingreso.

Aún cuando el sistema de impuestos prevaleciente y la implementación de leyes impositivas pueden sin lugar a dudas mejorarse y tornarse más eficientes y equitativas, los medios más importantes para mejorar la distribución del ingreso no son las transferencias directas de ingreso. Esos medios consisten en la redistribución de la riqueza por medio de la reforma agraria y varias otras medidas que incrementan la demanda de mano de obra en trabajo asalariado o auto-empleo con un ingreso salarial mínimo aceptable.

²⁰ Véase, por ejemplo, Lefeber, op. cit. (1997:19).

²¹ Véase R. Swift, "Interview with A. Alvarez Cerdá"; en *The New Internationalist* (December 1977).

Reforma agraria y organizaciones asociativas en la agricultura

La reforma agraria debe jugar un rol central para establecer las pre-condiciones del desarrollo rural. Esto es particularmente cierto para Ecuador donde, a pesar de algunos esfuerzos en el pasado hacia una reforma agraria, la distribución de la propiedad de la tierra ha permanecido escandalosamente sesgada. En 1994, el coeficiente de Gini era 0.86 para la tierra trabajada en las áreas rurales del Ecuador y 89 en términos de la propiedad de la tierra, cifras muy altas de concentración. En la Sierra, 1.6% de las propiedades agrícolas ocupaban el 42.9% de la tierra, y en la Costa, 3,9% ocupaban el 55.1% de la tierra (World Bank, Ecuador Poverty Report, 1995, Vol. II: 105-6). Teniendo en consideración el incremento continuo de la agricultura marginal, las estadísticas de distribución de la tierra no pueden haber mejorado desde esas fechas.

Aún cuando el Reporte reconoce la existencia de desempleo, pobreza, y los costos privados y sociales de las invasiones a tierras protegidas y marginales, condena los esfuerzos del gobierno de Borja en 1991 y 1992 para dividir algunas de las propiedades agrícolas de mayor tamaño. Al mismo tiempo, desecha los esfuerzos por llevar adelante formas colectivas y cooperativas de agricultura como improductivas, “como ha ocurrido en cualquier otro lugar del mundo” (Vol. I:105).

Los esfuerzos del gobierno de Borja pueden ser cuestionados, sin lugar a dudas, pero por razones diferentes a las que el Reporte señala. La intención fue correcta, pero la planificación y ejecución fueron defectuosas. Las invasiones, ocupaciones por la fuerza y la venta forzada de algunas haciendas grandes, así como la inseguridad resultante fueron consecuencia de planes inadecuados de redistribución y de una implementación ineficiente. Debe entenderse que si las expectativas de los desposeídos son elevadas y frustradas, la consecuencia será una respuesta desordenada y potencialmente violenta.

Los planes para intervenciones redistributivas tienen que ser adecuadamente preparados e implementados sin retraso si se quiere

evitar el desorden. Aún más, debe proveerse la infraestructura necesaria y el capital básico junto con la propiedad de la tierra²².

Con respecto a la imputada ineficiencia de la agricultura cooperativa o colectiva “en cualquier parte del mundo”, los autores del Reporte deberían familiarizarse con la experiencia cooperativa en Hungría, la cual convirtió el país en el granero y el centro turístico de los países del antiguo Pacto de Varsovia, o con el éxito de las cooperativas en el distrito de Comilla en el antiguo Pakistán Oriental (ahora Bangladesh), o con aquellas otras en el Estado de Maharashtra en la India, o con las cooperativas en Taiwan, o Mondragón en el País Vasco español, para mencionar algunos ejemplos ilustrativos²³.

Al igual que la reforma agraria, las cooperativas o formas asociativas también deben ser cuidadosamente planeadas y estructuradas de acuerdo con los propósitos particulares a los que se espera que sirvan. Estas pueden variar desde organizaciones de comercialización y compra hasta cultivos asociativos de tierra en propiedad individual o communal. Las cooperativas y formas asociativas funcionan mejor en áreas con experiencia comercial establecida, que es el caso de la mayoría de las localidades en la Sierra y la Costa.

En relación con este tema, debe enfatizarse que las organizaciones o movimientos asociativos no son incompatibles con un desarrollo basado en el mercado, aunque no se nutran del característico individualismo desenfrenado del capitalismo norteamericano. Incidentalmente, la institución de los ‘gremios de productores agropecuarios’ es-

22 En Chile, por ejemplo, hubo un bien concebido plan para la reforma agraria, el cual fue legislado pero sólo parcialmente implementado bajo el gobierno de Frei. Cuando el gobierno de Allende llevó a cabo el plan, la paciencia de los beneficiarios potenciales estaba agotada y, en consecuencia, ocurrió una desordenada ocupación de tierras. Además, el proceso sufrió frecuentemente de una transferencia inadecuada de animales y otro capital productivo hacia los beneficiarios.

23 Existe una amplia literatura sobre el tema, demasiado amplia como para citarla aquí. Para una lista de referencias, preparadas en relación con el proyecto de investigación en el Ecuador del que estos comentarios sobre desarrollo rural forman parte, véase J. Cameron y L. North, “Las asociaciones de granjeros y el desarrollo agrícola en Taiwán: su (ir)relevancia para otros contextos socio-políticos”, *Ecuador Debate* 42 (Diciembre 1997). Vale señalar que los diseños institucionales de las cooperativas arriba mencionadas tienen poco que ver con la manera en que las cooperativas han sido organizadas en el Ecuador.

tá a un paso de las organizaciones cooperativas, y muchas de sus funciones actuales y potenciales se superponen con estas últimas²⁴. El propio Reporte es favorable al fortalecimiento de la institucionalidad de los gremios.

Sea que los beneficiarios de la reforma agraria opten por trabajar su tierra individualmente como unidades familiares o dentro de un marco asociativo, la reforma en sí contribuiría significativamente a aliviar la pobreza y el desempleo. Está bien establecido que la productividad y el uso intensivo de mano de obra son inversamente proporcionales al tamaño de la propiedad de la tierra²⁵. Aún si el crecimiento en la intensidad de la mano de obra se debe principalmente a la participación creciente de miembros de la familia, la tasa de desempleo decrecería, porque aquellos que de otra manera buscarían trabajo en mercados urbanos o locales, serían retenidos en la granja.

Obras Públicas. A partir de la ideología subyacente al Reporte, los autores no podían considerar la acción del Estado para la creación de empleo. Y estarían en lo correcto si tal gasto no fuese mas allá de un ‘maquillaje’ por objetivos políticos, o incluso humanitarios. La obra pública para construir pirámides es factible bajo condiciones keynesianas de falla del mercado, cuando los medios (capital y otros insumos) existen para la producción con empleo total de la mano de obra potencial. Pero en el caso de un excedente laboral, cuando el sector privado no tiene los medios para emplear a la fuerza laboral potencial, las obras públicas destinadas a la inversión productiva son la única alternativa al desempleo crónico²⁶.

24 Véase Rubén Flores. “Diagnóstico de los Gremios de Productores Agropecuarios: Una propuesta de Trabajo para el fortalecimiento de los Mismos” (Programa Sectorial Agrícola, mimeo, borrador). Julio de 1996.

25 Véase por ejemplo, A.K. Sen, “Size of Holdings and Productivity”, *Economic Weekly*, Vol. 16 (1964).

26 Tal vez no debería decir “la única alternativa” al desempleo. Existe la posibilidad de subsidiar los roles de pago de las empresas, de manera de mantener la productividad de la fuerza laboral en relación con un salario mínimo acordado. Si el subsidio se otorga según el número de empleados, y se financia mediante impuestos a las ganancias, está en el interés de los productores incrementar el empleo por sobre los niveles del mercado, al hacerlo así, el subsidio compensa el monto pagado como impuestos sobre las ganancias. Véase L. Lefeber, “Planning in a Surplus Labour Economy”, *American Economic Review*, Vol. LVIII (June 1968).

La agricultura en general, y el sector de subsistencia en particular, proveen amplias oportunidades para el uso productivo de obras públicas. La medida de la productividad es el incremento en la producción de las granjas o de las regiones escogidas para la creación de empleo, a través de la inversión pública. El requisito primario para la ampliación de cultivos es el control de aguas, esto es, irrigación y drenaje; estos son trabajos de infraestructura que pueden mejorar la productividad y contribuir directamente a la conservación de los suelos²⁷.

En la medida de lo posible, el uso de insumos importados debería evitarse. Pero aún más importante, esos trabajos de infraestructura pueden y deben construirse con excedentes de mano de obra locales o regionales, o con mano de obra de la agricultura marginal, utilizando métodos intensivos en mano de obra. Esto debe enfatizarse, debido a que en varias ocasiones anteriores en que se han emprendido trabajos de construcción de infraestructura rural en el Ecuador fueron ejecutados por compañías constructoras y trabajadores con equipo pesado contratados en Quito y Guayaquil, y llevados hacia el sitio de construcción. En otras palabras, se empleó tecnología intensiva en capital en lugar de mano de obra local y métodos intensivos en trabajo. Esto contradice el propósito de la creación de empleo.

La obra pública intensiva en mano de obra contribuye al empleo y al poder de compra para consumo básico por parte de los sectores de bajos ingresos. Si los incrementos resultantes en producción agrícola alcanzan o exceden el costo real del salario-consumo de los trabajadores comprometidos en la construcción de infraestructura rural, los gastos estatales correspondientes y la demanda adicional por bienes de consumo básico no son inflacionarios.²⁸

27 Por ejemplo, la construcción de terrazas y de colectores de agua en las montañas (empleando "forros" de poliéster, como por ejemplo en ciertas regiones Himalayas de la India) puede ser muy efectiva para aumentar la productividad y conservar el suelo en áreas montañosas.

28 Obras públicas intensivas en la utilización de mano de obra local se podrían implementar para generar empleo e ingresos para la población afectada actualmente por el Fenómeno del Niño, al igual que para la reconstrucción del sistema agrícola de la Costa.

Ciencia y tecnología. El Reporte insiste correctamente en que la base científica para el desarrollo y el conocimiento tecnológico tienen que ser mejorados. Se puede concordar con que, entre otras cosas, el sistema educativo desde los niveles primarios hasta los universitarios debe fortalecerse.

Respecto a la tecnología, el Reporte reconoce la importancia del uso intensivo de mano de obra en la agricultura. Es dudoso, sin embargo, que unidades agrícolas comerciales de gran tamaño puedan ser motivadas a emplear estos métodos de producción que no favorezcan sus intereses inmediatos de lucro. La pregunta importante es si los sectores agrícolas pequeños y marginales pueden adoptar tales tecnologías. Sobre este punto el Reporte no tiene mucho que decir.

Hasta donde llegan mis comentarios, sería presuntuoso introducir sugerencias que no estén basadas en una constatación directa y técnicamente competente de las condiciones prevalecientes en las distintas regiones y sectores rurales del Ecuador. En su lugar, propongo al lector consultar la experiencia competente y de alcance mundial del Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia²⁹. Varios de sus proyectos, en América Latina, se han concentrado en mejorar la calidad de los suelos en ambientes marginales, sistemas sustentables y agro-empresas para agricultores de pequeña escala, manejo comunitario de recursos acuíferos en estribaciones de montaña, y el impacto ambiental del uso de tierra. Los planificadores de políticas, funcionarios gubernamentales y no gubernamentales, preocupados con el desarrollo rural y de tierras marginales podrían beneficiarse de una relación de trabajo con el Centro.

Conclusión

Como había indicado al iniciar esta reseña, mi propósito no fue presentar un panorama del desarrollo ecuatoriano diametralmente opuesto al del Reporte. Pero debe quedar claro que, aún cuando muchas de sus preocupaciones políticas están justificadas, su fe subyacente en la ca-

29 Puede buscarlo en internet en www.ciat.cgiar.org

pacidad de un mercado libre de toda regulación para avanzar hacia un proceso de desarrollo democrático y justo es impracticable y por tanto, inaceptable. El avance del sector comercial de la agricultura es importante, pero por un largo tiempo este no puede absorber, y en el futuro previsible no absorberá, a los desempleados y subempleados en puestos de trabajo asalariado. Aumentar la productividad de la mayoritaria y empobrecida población marginal rural-urbana, depende de políticas que requieren de la intervención estatal directa en áreas que no sean únicamente las del sector comercial.

Existen, por supuesto, peligros en todo enfoque que requiere mayores intervenciones estatales y gasto público. Uno es el mal manejo y desperdicio de recursos estatales, lo cual pone en riesgo la capacidad para producir crecimiento y desarrollo y puede conducir a la inflación.

Existe, sin embargo, un riesgo aún mayor. Y este se debe a la convicción de las clases dominantes, los hacendados y los miembros de los grupos de altos ingresos, que su posición privilegiada justifica su uso extravagante de recursos internos y extranjeros, su consumo suntuario y la sumisión de las personas socialmente subordinadas. Estas actitudes, si dominan el proceso político, con frecuencia llevan a reorientar, de una u otra manera, para propósitos de apropiación privada, los recursos que están destinados y que deberían estar consagrados a mejorar el bienestar de las poblaciones marginales. Sea que esa apropiación se realice por medios legales o ilegales, provoca corrupción social. Sólo el ejercicio de una voluntad política fuerte puede proteger contra esos riesgos.

Aspectos políticos-sociales del manejo de los recursos naturales en la cordillera occidental de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua¹

LEONARD FIELD*

La presión de los sistemas antrópicos, y particularmente los sistemas de acumulación socioeconómica relacionados directamente con la economía mundial, están causando estragos sobre los sistemas naturales en velocidades y superficies mayores que en ningún momento en la historia, provocando una visión pesimista del futuro, que incluye el espectro de un colapso total.

Introducción

Esta visión, a su vez, ha provocado una preocupación compartida a escala mundial, reflejada, a pesar de las posibles críticas a ella, en la Agenda 21 de las Naciones Unidas. Aún cuando se restringe una investigación o discusión del manejo de los recursos naturales a un ámbito socio-geográfico determinado, como es el caso de este artículo, sería un acto de ceguera desconocer la importancia de esta preocupación global en la construcción de las perspectivas desde las cuales estudiamos el tema, en términos de un problema que requiere ser resuelto. En forma cada vez más acelerada, se puede observar la formación de iniciativas,

¹ Tomado de *Ecuador Debate*, No. 37; Quito: CAAP, abril de 1996

* Investigador del CAAP.

foros, consorcios y comités a escala internacional e intercontinental cuyo mandato asumido es el de focalizar investigaciones y políticas hacia las soluciones buscadas.

Dentro de la Agenda 21 de las NNUU (raíz de tanta reasignación de fondos para financiar los aparatos referidos) se incluye una mención específica de la problemática del manejo de los recursos naturales en áreas montañosas. Se observa esta problemática en cuatro términos: a) la fragilidad de los sistemas ecológicos de montaña, cuya destrucción afectaría los sistemas hídricos de todo el mundo; b) la pobreza comparativa de la gran mayoría de la población que habita las montañas; c) la diversidad cultural presentada por las poblaciones nativas de las áreas montañosas (incluyendo un reconocimiento a lo sagrado de muchas montañas) y d) la biodiversidad que es producto de las variedades de entorno físico y cultural en las zonas de montaña. En el presente artículo nos concentraremos específicamente sobre un caso de manejo de los recursos naturales en una área de montaña.

Como ocurre con frecuencia, cuando surge una nueva inquietud compartida en 'todo el mundo', esta se manifiesta en diversas formas, algunas de las cuales son en sí mismo inquietudes.

El primer fenómeno inquietante resulta del inevitable hecho de que, al globalizar las inquietudes, ocurren procesos muy forzados de síntesis de una diversidad de situaciones y dinámicas. Esta simplificación es procesada (en el sentido de captar la imaginación) a nivel internacional, y devuelta en la forma de iniciativas que no corresponden, en un alto grado, a las problemáticas locales, y aún menos a las dinámicas, condiciones e iniciativas locales. Esto conduce a la construcción de proyectos cuya relación costo/beneficio es extremadamente baja y desgastan no solamente recursos sino, voluntades. Esto ha ocurrido frente a la problemática del desarrollo rural, y es previsible frente al tema del manejo de los recursos naturales.

La segunda inquietud tiene que ver con las formas que asume la reproducción de la burocracia internacional. Afortunadamente, una parte importante de la investigación básica necesaria para la implementación de la Agenda 21 ha sido delegada al Grupo Consultivo de la Investigación Agropecuaria Internacional (CGIAR en sus siglas inglesas), que es, quizás, uno de las instancias menos burocráticas y más eficientes de la institucionalidad multilateral (y una de las más decididas).

das en el esfuerzo por la descentralización de la toma de decisiones estratégicas). Sin embargo, aún a este nivel de investigación directa (diríamos, más aún a este nivel) se subraya el enorme distanciamiento entre las preocupaciones científicas y las condiciones lujosas del sistema internacional de investigaciones, en relación con las preocupaciones y condiciones de los sistemas nacionales.

Una tercera inquietud se refiere a algunas de las popularizaciones de la problemática que exaltan los valores de conservar, no solamente los recursos naturales en sí, sino las sociedades locales en una especie de armonía original (percibida desde la sociedad occidental), y damnifican las macro-fuerzas del desarrollo. Sin desconocer ni los valores positivos ni la destrucción que preocupan a los exponentes de este enfoque, es inquietante observar un deslizamiento por encima de los procesos y luchas cotidianas que en el nivel local buscan no solamente la sobrevivencia sino una mínima equidad económica y social². Por lo menos, en el área estudiada por el CAAP, diversas manifestaciones de estos micro-procesos están en el centro de la problemática.

A la vez, hay que reconocer la existencia de un amplio debate académico que se ha dado en el mundo en torno al tema. Este debate se ha centrado en el manejo a cuatro niveles: el manejo personal e individual de una entidad social que controla directamente los recursos sobre los cuales ejerce el manejo, un manejo colectivo determinado por decisiones autónomas tomadas por el conjunto de los miembros de un grupo; un manejo político ejercido sobre una sociedades que tienen una relación más o menos directa con un conjunto común de recursos naturales y, un manejo político ejercido sobre varias sociedades que tienen relaciones, principalmente indirectas, con con-

2 Por ejemplo, en Vol. 5 No. 1 de *People & the Planet*, apoyado por el Fondo de Población de las NNUU (UNPF), la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), de 22 páginas de artículos, 4 se dedican a un resumen de la problemática mundial, 4 a la conservación de parques, 2 a la recuperación de tecnologías perdidas, 2 a lo destructivo del turismo, 6 a la conservación de lo sagrado y solamente 4 a discusiones específicas de los procesos de degradación y sus causas, excluyendo de consideración en estas a las estrategias y conflictos de la misma población.

juntos dispersos de recursos. A la vez, estos niveles están cruzados no solamente por la diversidad de características de los recursos enfocados (suelos, agua, forestales, otra vegetación natural, fauna), sino también por las diferencias entre sociedades y lo que se entendería como la 'cultura de manejo' dentro de estas. Finalmente, la problemática debatida está fuertemente matizada por las preocupaciones particulares de los académicos involucrados: la construcción de institucionalidades, la sostenibilidad ecológica, la cuestión de género, el pluralismo étnico o cultural, la inclusión de los recursos en las cuentas económicas, etc.

A manera de linternas de diferentes intensidades, cercanías y ángulos que resaltan o sombrean facetas de un paisaje tridimensional, esta multiplicidad de enfoques académicos nos permiten, ver (como también esconden) un sinnúmero de facetas de una problemática en sí mismo multidimensional. Cada visión es nítida, pero no es sorprendente que, cuando un investigador se inserta y trata de acompañar, comprender situaciones y procesos locales, su visión se vuelve borrosa. Inevitablemente, la nitidez es parcial y esto provoca una cuarta inquietud sobre la relación actual entre la investigación académica y la construcción y operacionalización de propuestas de intervención que, por otra parte, constituyen la finalidad de la asignación financiera, de la cual la investigación académica es también participante y a la que se trata de forzar a dar respuestas globales.

Las cuatro inquietudes expresadas de ninguna manera invalidan, ni la preocupación global en sí, ni aún muchos de los esfuerzos valiosos realizados en el marco de las cuatro esferas dentro de las cuales hemos registrado las preocupaciones señaladas. Sugieren, sin embargo, que a estos esfuerzos se debe sumar un mayor énfasis en acompañar la diversidad de procesos específicos y a veces contradictorios que se puede observar en cualquiera área limitada de montaña, registrarlos empíricamente y sintetizarlos localmente, desvirtuándonos en lo posible de prejuicios teóricos o ideológicos. Este quinto esfuerzo propuesto no es un rechazo al esfuerzo de lograr síntesis o construcciones teóricas a escala global, sino que reclama una reasignación de por lo menos algunos recursos económicos, institucionales y humanos hacia la construcción de una información empírica más amplia y equilibrada.

Marco conceptual del ensayo

Por las razones antes señaladas, no hemos construido un marco teórico altamente elaborado. Sin embargo, es evidente que se requiere contar con algún marco conceptual para operar. Hacia ello, se anota una mínima reflexión sobre el significado práctico del manejo de los recursos naturales, lo que conduce a una conceptualización operativa y relativamente explícita, que puede si así lo deseamos, utilizarse con relación a acercamientos teóricos más profundos.

Si usamos el sentido más occidental del término 'manejo', que predomina en las discusiones de políticas, el concepto de recursos naturales manejados es bastante discutible. ¿Cómo pueden los recursos ser naturales y manejados a la vez? Evidentemente, existen respuestas operativas a esta aparente contradicción (p. ej. las reservas ecológicas y los controles o las vedas sobre tasas de extracción de recursos) que, sin quitarles importancia, son respuestas generalmente específicas y constituyen intervenciones a escalas muy restringidas respecto a la problemática global. Aún en estos dos ejemplos, podemos percibir que el 'manejo' no es de los recursos en sí, sino del grado de presión antrópica que se ejerce sobre ellos.

En la práctica, la gran mayoría de instancias en las que se problematiza el manejo de los recursos naturales, se refieren a los impactos causados por determinados usos de los recursos. Este enfoque sobre usos e impactos tiene las virtudes de: a) obviar una discusión necesaria pero aún inoportuna sobre la conceptualización del manejo en sí, y b) reflejan mejor la relación social entre la preocupación y los recursos objetos de ella. En este artículo, tratamos de observar una relación causal entre los principales impactos de observar en un área relativamente extensa de la cordillera occidental, y los procesos socioeconómicos determinantes de los usos que provocan los impactos observados.

El área

El área materia de este análisis, corresponde a un sector de la cordillera occidental, entre los nevados Illinizas y Chimborazo, de las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua, ocupando un espacio de cerca a 5.000 kms² y una alta gama de zonas agroecológicas.

Las laderas que suben a la cordillera desde los 2.800 msnm en el valle central de la sierra son, en su gran mayoría, secas, con una población rural predominantemente indígena y con altas tasas de migración temporal. Los pueblos locales de esta zona sufren un proceso de decrecimiento demográfico debido principalmente a migraciones definitivas. Por el grado de erosión y escurrimiento de aguas, y también porque muchas partes de esta zona reciben pocas precipitaciones (por debajo de los 500 mm/año) se trata de una zona con productividad agropecuaria extremadamente baja, salvo en los lugares en los cuales hay agua de riego, y de muy pocas opciones productivas.

Hacia arriba de la zona mencionada anteriormente, se encuentra que los páramos y los valles altos que cruzan a estos, soportan poblaciones que en algunos lugares son relativamente densas y dinámicas. Las diferencias locales entre estas dinámicas constituirán uno de los puntos referenciales de este artículo. Se trata de comunidades netamente indígenas que ahora controlan tierras que anteriormente eran, en su mayoría, haciendas muy tradicionales de propietarios ausentistas. Se trata también de la principal zona ovejera del país, y uno de los pocos lugares ecuatorianos en los cuales la crianza de llamas es totalmente difundida. En la parte sur, los páramos son más altos, húmedos y hostiles, mientras que, en el norte, la cuenca alta del río Toachi es más seca. El impacto de las erupciones cuaternarias del volcán Quilotoa se demuestra en la presencia de suelos con aceptables y aún altos contenidos de nutrientes minerales, pero con una formación estructural extremadamente frágil. En aquellas partes de estas tierras que están bajo agricultura encontramos graves problemas de erosión. En el sur, los procesos más lentos de génesis edafológica han dejado suelos más profundos y estables.

Por debajo de la cota de los 3.200 msnm encontramos un pequeño contorno específico en los valles que conducen hacia la costa pero que aún sostienen muchos rasgos serranos. Se encuentra una población campesina y pueblerina mucho más mestiza pero que no pierden sus relaciones (a veces muy conflictivas) con las comunidades indígenas de altura. A pesar de los rasgos comunes con los pueblos serranos mencionados en la primera zona, no sufren las mis-

mas deficiencias hídricas y, además, logran combinar una producción ganadera en las estribaciones con la producción local más intensiva.

Las partes bajas de las parroquias del nor-occidente de Tungurahua constituyen una situación intermedia entre la zona anterior y la primera. Si bien son parte de la franja serrana de pequeños pueblos y comunidades templadas, con una población étnicamente mixta, su acceso a riego, y sus lazos comerciales tradicionales con las estribaciones externas de la cordillera, a más de su cercanía al comercio ambateño, les ha creado un contorno un tanto sui géneris para el país.

En las estribaciones propiamente dichas, desde los 2.600 msnm hasta los 1.200, encontramos una población de colonos relativamente dispersa. En aquellos sectores desmontados hace varias décadas, comunidades locales mantienen una agricultura precaria, mientras que en la mayor parte de esta zona, se encuentra más bien una producción ganadera extensiva en base a pastizales establecidos dentro del bosque neblina secundario. En ambos casos, las pendientes y las dificultades de comunicación constituyen limitantes al desarrollo socioeconómico, aunque en los pisos de los valles principales la producción de caña ha permitido el establecimiento de poblaciones más concentradas y de pueblos aún en proceso de crecimiento.

En el subtrópico, la composición social es más compleja: colonos mestizos de la sierra, montubios de las zonas cacaoteras, distintas generaciones indígenas provenientes de las partes altas, inmigrantes de Loja, etc. constituyen una población dinámica y creciente. La topografía es variada; en general, los escarpamientos de las estribaciones terminan en colinas más suaves entre valles estrechos pero relativamente planos. Aún así, las pendientes son fuertes en las laderas, y si bien los sistemas predominantes de cultivo, fundamentados en pastos y cultivos perennes, son protectivos de los suelos, estos siguen siendo un recurso en riesgo.

De los 5.000 kms², que constituyen el área, alrededor de 1.200 son páramo y 1.800 kms² son bosque neblina y subtropical, intervenidos de alguna manera en su mayoría. Es decir que un 60% de la zona está bajo coberturas vegetales pero que, a pesar de ser el producto de una interferencia del hombre, se reproducen naturalmente.

Los principales impactos observados y su valorización

Haciendo abstracción de los procesos específicos, se puede observar cuatro grandes categorías de impactos sobre los principales recursos naturales:

1. La expansión de la frontera agrícola sobre áreas de páramo y de bosque.
2. La extracción de recursos no-renewables o no-renovados (principalmente la deforestación).
3. La erosión de los suelos.
4. La contaminación de las aguas.

Estos impactos provocan otras consecuencias, no menos drásticas pero más difíciles de medir, como la pérdida de recursos genéticos florísticos y la desaparición de fauna.

La información con que se cuenta para el área sobre la perturbación de los sistemas hídricos es mucho menos nítida, aunque se supondría que una de las consecuencias más graves de los problemas anotados sería un cambio en la regularidad de los caudales. Sin embargo, se trata de un impacto reconocido por la población local solamente como 'discurso aprendido'. No existe un reconocimiento de que la destrucción de la capa vegetal podrá causar la desaparición de fuentes de agua, simplemente porque en la experiencia local esto no ocurre. Esta evidencia (o ausencia de evidencia) local discrepa de la información técnica proveniente de otras fuentes. En experiencias e investigaciones de largo aliento del CAAP en la sierra norte, por ejemplo, se pudo constatar a inicios de esta década una reducción muy marcada de los caudales en sistemas de agua potable, instalados al inicio de la década anterior. Estas reducciones han sido concurrentes con expansiones de la frontera agrícola en áreas de páramo, siendo asumida por parte de la población local como una relación causal entre los dos fenómenos.

Esta diferencia entre los criterios locales y los 'lugares comunes' de los criterios de técnicos y ciudadanos preocupados por el tema, no se limita solamente a casos en los cuales la evidencia empírica es ambigua. Argumentaríamos que si bien alrededor de los temas de las pérdidas o contaminaciones de los suelos y el agua existe un consenso pluralista en el sentido de que tratamos de impactos netamente negati-

vos, no existe un consenso similar con respecto a las primeras dos categorías, que se refieren principalmente a la pérdida de recursos vegetales. Argumentamos, por lo tanto, que estos fenómenos deben ser tratados de otra manera.

La cuestión de las valorizaciones y como las hacemos no surge normalmente (fuera de un contexto de discusión filosófica) hasta que haya una evidente discrepancia o contradicción. Al examinar en el área las contradicciones principales con respecto a la pérdida de hábitat y de recursos naturales, podemos identificar dos.

La primera es la obvia contradicción entre la realización presente del valor económico de un recurso versus su conservación como recurso futuro. Esta contradicción se manifiesta con respecto a recursos no renovables extraídos (como la explotación aurífera en las estribaciones y el subtrópico), a los recursos que podrían ser renovados pero no lo son (especialmente las especies en vías de extinción) y, a la pérdida de hábitat constituidos por flora y fauna teóricamente renovables pero que dependen también del espacio, que en el caso de la primera categoría de impactos es el principal recurso de contención. Esta contradicción es susceptible, en teoría por lo menos, a un manejo. Existen técnicas de proyección, simulación y optimización operacional dinámica que permiten identificar el uso más racional (siempre en términos de la valorización económica) del recurso.

Las limitaciones de estas técnicas son conocidas: dependen de la definición de relaciones cuantificadas para las cuales se requiere más información empírica, dependen de 'escenarios' políticos y económicos, no solamente nacionales sino mundiales; requieren todavía de un trabajo teórico para ganar fortalecimiento interno frente a los inevitables errores de medición y predicción de escenarios. Se precisa de un consistente trabajo teórico y empírico para entender mejor las relaciones entre las diferentes escalas de manifestación de la contradicción. Sin embargo, estas limitaciones también marcan pautas de trabajo y nos ofrecen esperanzas concretas hacia el futuro de que este trabajo pueda contribuir a la construcción de soluciones. Precisamente, porque los términos conceptuales básicos son claros es que tratamos de identificar el uso más racional en términos económicos.

La segunda contradicción se manifiesta por cuanto no hay un consenso con respecto a los términos conceptuales básicos: se trata de

las discrepancias entre valorizaciones que no pueden medirse satisfactoriamente en términos de una cuantificación monetaria.

La primera categoría de contradicciones en este grupo pueden identificarse en términos de valores que se reconocen como ‘intrínsecos’ y de sistemas de valorización con un derecho autónomo de establecer sus propios términos de referencia.

Entre las valorizaciones específicas en contradicción dentro de esta categoría, encontramos el valor intrínseco aducido a la naturaleza como tal (frecuentemente con mayor pasión por parte de quienes no tienen que vivir directamente de ella) versus el valor intrínseco de un paisaje manejado y armonioso. Si bien esta contradicción puede surgir dentro de un mismo sistema de valorización también puede surgir desde los lados opuestos de una frontera socio-cultural o étnica. Lo central, sin embargo, es que se trata de una competencia entre distintas armonías o apreciaciones de la armonía, para ocupar un mismo espacio y si bien un sistema cultural como el occidental puede argumentar una capacidad de discriminar y preferir entre armonías similares, no se lo puede hacer socialmente entre armonías distintas. Esto se acepta como cuestión de preferencia individual y resiste cualquier intento de llegar a consenso alguno y peor aún a consensos operativos.

Cuando se trata, en esta misma categoría de discrepancias, entre códigos que siendo consistentes pueden crear y conducir éticas distintas pero mutuamente reconocibles, el problema de fondo es un poco distinto. Las valorizaciones son signos de un esquema más amplio, que puede referirse a lo sagrado o a lo humanístico (entonces la naturaleza no representa un valor en sí para la sociedad, sino un signo de otro valor). La Constitución garantiza la libertad de conciencia pero no de derecho a sus signos. Este es un tema cuya importancia puede ser fácilmente distorsionada a través de una excesiva mistificación, pero resulta por lo menos muy probable que, detrás del poco interés demostrado por todas las comunidades del área en resembrar especies nativas en las quebradas y otras áreas tradicionales de recolección de leña, no estemos frente a una apatía, sino a signos de un esquema específico y tradicional de la relación entre el hombre y la naturaleza.

La tercera categoría de discrepancias en este grupo se refiere a aquellas de carácter económico (en términos del uso de recursos escasos para la satisfacción de demandas elementales y sociales), sin que

los valores económicos sean commensurables con valores monetarios. Dentro de esta categoría se deben ubicar los posibles valores 'monetarizables' futuros, cuya probabilidad de realización no puede ser calculada. Este es el caso de aquellos recursos genéticos, en su mayoría ni siquiera conocidos en sí, cuya futura utilidad está por verse. También debemos ubicar aquí la cuestión de la relación entre el uso del suelo y la seguridad alimentaria. La parte gruesa de la problemática de la seguridad alimentaria se ubica a escala familiar: ¿cómo asegurar que haya comida en la casa en los 'momentos duros' cuando los ingresos esperados o el uso planificado de reservas hayan fracasado? Aquella parte del uso del suelo que normalmente se analiza en relación con la seguridad, escapa de los parámetros normales de una optimización, porque constituye el último recurso. Al analizar los sistemas locales de producción, se interfiere en la especificación del sistema, para asegurar que una parte de la tierra, mínima pero commensurable con lo observado en la práctica, sea usada para esta finalidad. Dado que se trata de un uso, en circunstancias específicas cuando el consumo no puede realizarse con el uso de dinero (porque no lo hay), el uso del dinero como medida de valor pierde todo sentido. Cuando comparamos lo que significa para un grupo humano expandir su frontera agrícola en función de una mayor seguridad alimentaria, con lo que están perdiendo como posibles pero inespecíficos valores futuros, en los recursos genéticos naturales que dejarán de existir, es evidente que el análisis económico objetivo (referido a medidas comunes de valor) no sirve para proponer racionalizaciones en el uso de los recursos.

Cruzando ambos grupos de contradicciones en la valorización de los recursos, tanto las económicamente mensurables como los no-económicos y no-mensurables, encontramos otra problemática muy sensible y que afecta claramente las diferencias que podemos observar en la apreciación de valores en nuestras primeras dos categorías de impacto. Esto refiere a la injusta estructura de dominación social y expropiación de excedentes económicos, en los cuales la población del área está inserta, lo cual no afecta exclusivamente a los indígenas, aunque más a ellos. Entonces, cuando por ejemplo, se compara la realización presente de un valor económico con su realización futura, no es automático pensar que el mismo grupo vaya a percibir el valor de esta relación.

Este argumento ha sido utilizado con cierta razón por la Cámara de Agricultura de la 1ra. Zona, para explicar porque no se puede hacer un mejor manejo de los recursos naturales bajo la legislación agraria anterior. Con más razón todavía se puede entender porque los grupos sociales que están entre los más relegados prefieren tener sus valores asegurados. El uso del suelo establece por sí derechos consuetudinarios (y aún ciertos derechos formales). La expectativa del uso no establece derecho alguno, y si bien, el mal manejo de los recursos naturales puede, bajo la legislación agraria actual, quitar derechos formales, esto depende de definiciones y operativizaciones aún por establecerse y, lo que es más, no es útil para incrementar la seguridad en los derechos de quienes están en el fondo de la jerarquía social.

Además, muchos de los valores económicos y no económicos que se perciben en la conservación de los páramos y los bosques no pueden ser apropiados por las poblaciones locales, ya sea porque, como en el caso de los recursos biogenéticos, no disponen de la tecnología o el capital para hacerlo; o porque, como en el caso del agua, la mayor parte fluye naturalmente a otros contornos sociales, o porque, como en el caso de la búsqueda cada vez más aguda de consolaciones espirituales, o estéticas en la naturaleza, se trata de una demanda derivada más del estrés de la clase media urbana, que de la población que se enfrenta con ella para sacar el pan diario.

El dimensionamiento de los impactos

Las bases empíricas para establecer un adecuado dimensionamiento de los impactos en el área son lamentablemente deficientes y, en algunos casos, ambiguas.

Expansión de frontera agrícola

Podemos diferenciar entre los procesos de extensión hacia arriba de los sistemas de cultivo al borde del páramo, y la extensión de pastizales dentro del bosque neblina.

En los páramos que arriba de Saquisilí y Pujilí se extienden hacia Guangaje, se puede observar que extensas áreas anteriormente

usadas para pastoreo están bajo tractor. Se trata de un proceso muy dinámico, que se extiende año tras año, actualmente con más de 50 kms² involucrados. Alrededor de Tigua, en cambio, el proceso no es tanto de incorporación de nuevas zonas, sino de una extensión más homogénea, hacia arriba de las tierras labradas en todo el valle alto.

En el bosque neblina, se puede observar dos procesos distintos: el primero (mayormente localizado en las estribaciones de la cordillera de Chugchilán y al norte de Sigchos) consiste en la consolidación y extensión de pastizales establecidos hace casi 20 años, en cuyo proceso el bosque es casi completamente reducido; el segundo, es el establecimiento en forma puntual y dispersa en medio del bosque, de nuevas pequeñas áreas de desmonte y pastizales por parte de nuevos colonos (situación observable en los bosques al occidente de los Illinizas). También en el subtrópico se presenta una expansión, especialmente hacia arriba, de la frontera agrícola, reemplazando el monte con cultivos perennes.

La extracción de recursos no renovables ocurre principalmente en las estribaciones y el subtrópico. Ambos sectores tienen depósitos minerales (sobre todo, auríferos) y han existido minas en Macuchi, cerca a La Maná y en Sigchos. Recientemente, se han abierto nuevas minas de oro al sur de La Maná, pero estas, como los otros depósitos conocidos en el área, son de relativa baja concentración y requieren, por lo tanto, de una alta inversión de capital fijo para ser medianamente viables. De mayor importancia para la zona es la extracción de maderas finas y semifinas. Este proceso se mantiene, en parte, en áreas dentro de la misma frontera agrícola, en las que los mejores árboles fueron conservados durante el desmonte, aunque la mayor extracción ocurre dentro del bosque (razón por la cual se lo considera secundario). El CAAP aún no ha logrado cuantificar el proceso por la dificultad de consolidar la información al respecto. No es que esta información sea secreta, aunque la ley forestal la está empujando en esa dirección, sino que es un tanto 'discreta', parte de toda aquella discreción cotidiana que sostiene los flujos comerciales locales, en medio de una convivencia entre vecinos. Mencionaremos las dos principales dificultades en el cálculo de la extracción, porque son en sí reveladores de la dinámica. Una estimación empírica se dificulta por la complejidad de las vías de intermediación. Si bien existen intermediarios mayoristas en la zona (tanto de madera, cuanto de carbón), estos estiman que por sus

manos pasa una proporción minoritaria de la madera, con variaciones de cálculo entre el 5% y el 40%. Aún si se contabilizara, con todo el cuidado del caso, la cantidad de madera que estos comerciantes manejan, existiría un rango de error probable de 800% al usar el dato para proyectar la extracción real. Si, en cambio, se buscara estimar la extracción a través de un modelo de oferta y demanda, este nos plantearía la dificultad operativa de cuantificar la oferta, ya que la información cuantitativa de los comerciantes sugiere una elasticidad de demanda que es extremadamente variable entre una especie y otra, pero también muy cambiante en el tiempo. Los cambios en el tiempo dependen de modas en las industrias de la construcción y de la ebanistería, y en menor grado de las tecnologías para su uso.

A pesar de estas dificultades para estimar cuantitativamente los flujos de extracción de madera, toda la información coincide en que las especies de mayor interés para el mercado son ya bastante difíciles de conseguir, comparado con la situación hace 20 años, cuando 'estuvieron a la mano'. Debemos asumir entonces que estos recursos de madera están cerca a su desaparición, salvo en los lugares más apartados de la red vial. Se trata de una depredación casi total de los recursos, no solamente en unos 1.000 kms² de los 1.800 kms² existentes de bosque, sino al interior de los aproximadamente 1.000 kms² dentro de frontera agrícola en estas zonas de estribaciones intermedias y subtropicales.

La erosión

La erosión severa afecta sobre todo a los suelos frágiles del valle alto del río Toachi, en el centro-norte de la zona del páramo, y las laderas secas interiores de la cordillera. En el primer sector, se pueden distinguir dos sub-áreas: una en las vertientes del volcán Quilotoa y en el cañón del río Toachi, donde el suelo se ha perdido completamente, continuando un progreso de erosión en el substrato rocoso, mientras que alrededor de esta, hay una zona en la que todavía existe suelo y la agricultura es aún posible. Evidentemente, la erosión de la primera sub-área es más dramática: el paisaje es casi lunar. Pero el efecto económico de la actual erosión, en gran medida eólica, en la segunda sub-área es más importante por cuanto reduce la producción potencial y de he-

cho, afecta a las poblaciones de Guangaje, Tigua y Zumbagua, que están principalmente concentradas en esta sub-área. Entre ambas sub-áreas, la superficie afectada es aproximadamente de 500 kms² de los cuales cerca de 200 km² están en la primera sub-área y el resto en la segunda.

En la zona entre Toacaso y Cusubamba, en la vertiente oeste de la cordillera, la erosión también es dramática, por el grado alcanzado sobre todo en las pendientes principales. El impacto en esta zona se ha hecho sentir desde hace mucho tiempo, y en consecuencia se puede observar una tendencia constante hacia el abandono de la agricultura en las tierras afectadas.

En las estribaciones y en el subtrópico, la erosión ha sido más intensa en aquellos valles, como el del río Angamarca entre otros, en los que una deforestación que terminó hace varias décadas ha dejado a los suelos sin uso. Hay procesos activos de erosión en las áreas de extensión de pastizales, sobre todo por el deslizamiento masivo de suelos en las pendientes más fuertes, pero todavía no constituyen un problema grave.

Hay que observar que en todos los casos de erosión existen serias dificultades en cuanto la estimación de la cantidad de tierra perdida. Las mediciones de la ORSTOM en la zona de Zumbagua, y extrapolaciones de mediciones hechas en la cuenca alta del río Ambato, sugieren que debemos estar considerando tasas cercanas a las 100 toneladas métricas de suelo perdido por hectárea por año en la sub-área de las comunidades de Guangaje, Tigua y Zumbagua. Esta estimación, sin embargo, parece inconsistente si la comparamos con la perdurabilidad de algunos de los sistemas de producción en las comunidades. Si bien una apreciación del área, comparada con la situación hace 20 años, confirma efectivamente un avance visible de la erosión, esta se halla aún lejos del desastre total, que en esa época se predecía para el sub-área, como también está lejos del grado de pérdida de tierras de cultivo que se proyectaría sobre la base de la cifra citada.

La contaminación de aguas

La contaminación física por el suelo erosionado, y un cierto grado de contaminación biológica, constituyen dos problemas que más severa-

mente afectan el área. La contaminación química que afecta a zonas aledañas de bananeras en la costa o de producción intensiva de frutales en la sierra, está relativamente ausente en los sistemas presentes en el área.

También hay que observar que existen problemas de estimación en torno al tema de la contaminación de las aguas. Por una parte, hay insuficientes mediciones hechas; por otra, los datos que regresan de los laboratorios con frecuencia son contradictorios y, finalmente, la información en posesión de municipios o del antiguo IEOS es casi inaccesible³.

Los factores que determinan los impactos y las cadenas de causalidad

Los factores determinantes generalmente operan en una forma combinada, aún en los casos más nítidos de un impacto inmediato causado por un factor específico, esto normalmente ocurre ante la presencia de condiciones que determinan o limitan la capacidad de los sistemas locales de responder al factor en cuestión. En el área, se puede observar cuatro factores principales:

-
- 3 Uno de los mejores ejemplos de esta dificultad se presentó en el estudio de IICA de 1993, sobre impactos ambientales en el área aledaña de implementación del proyecto de Desarrollo Rural Integral Tungurahua. Tomando miligramos de fosfato por litro en el agua de riego como un indicador de la contaminación por el uso de pesticidas, y usando una metodología correcta de medir el grado de contaminación en la entrada y en salida del sistema de riego en una zona de uso de pesticidas, se obtuvieron los siguientes resultados:

- En el sistema intensivo de frutales de hoja caduca, en Huachi: a la entrada 0,23 mg/l, a la salida 0,25 mg/l.
- En el sistema de tomate de árbol con hortalizas comerciales en Cuiquicha: a la entrada 1.76 mg/l, en el medio 0.69 mg/l, a la salida 3.14 mg/l.
- En el sistema de producción de tomate de árbol, en Valle Hermoso debajo de Pelileo Viejo: a la entrada 2.41 mg/l, a la salida 0.25 mg/l.

En el último sistema, que se supondría el más contaminante por la frecuencia de uso de las pesticidas, el agua aparentemente se ha limpiado al cruzar los campos de cultivo, hasta el punto de volverse potable (por debajo de 0,3 mg/l), mientras que en los otros sistemas, o no hay cambio significativo, o hay cambios inexplicables.

1. La expansión de los mercados o sistemas de comercialización alrededor de productos específicos.
2. Inversiones en infraestructura o en la dotación de nuevos recursos financieros o tecnológicos.
3. El crecimiento orgánico de sistemas de producción o de grupos humanos existentes (acumulaciones primarias de capital, crecimiento demográfico, etc.)
4. En menor grado que los otros tres factores, se puede observar los denominados 'ciclos viciosos de pobreza'.

La presencia de estos, u otros factores, plantean que la relación causal entre los factores y los impactos es extremadamente compleja, a la vez que puede ser específica a cada localidad y sistema de producción. Sin embargo, valdría recuperar y contrastar algunas situaciones en el área.

Así, la expansión de determinados mercados, o la dinamización de las relaciones entre la población local y mercados existentes, que es indudablemente uno de los objetivos de los proyectos locales de desarrollo, ilustra las contradicciones entre el esfuerzo de la población local por integrarse al desarrollo nacional, y la cuestión del manejo de recursos.

Dos ejemplos ilustrarán las variaciones en esta causalidad: cerca a La Maná se está construyendo, con capital local, una procesadora de yuca y otros tubérculos subtropicales. Con la expectativa de una demanda asegurada, muchos pequeños productores están sembrando yuca en laderas anteriormente cubiertas con cultivos perennes o aún con monte. Esto ha producido una intensificación notable en la erosión. El proyecto es excelente y podría constituir un buen ejemplo del papel del capital local en el mejoramiento de la situación económica de una población significativa. Una respuesta de condenación del capitalismo como el causante de los daños del mundo, a más de ser irrelevante en las circunstancias, en este caso es equivocado. El problema reside en el inadecuado manejo de las laderas dentro de un contorno productivo dado. La naturaleza del problema ecológico no cambiaría si la fábrica fuera propiedad de una organización popular, como ocurre en el caso de algunas empresas de procesamiento de yuca.

En el páramo alrededor de Tigua se observa una expansión de la frontera agrícola para abrir tierras destinadas al cultivo principalmen-

te de cebolla. La tecnología de manejo es adecuada (los problemas de erosión son muy reducidos) y los ingresos de los productores han mejorado. El problema reside en la pérdida de vegetación protectora en las cimas de los sistemas hídricos. A su vez, pone en la mesa del debate la cuestión sobre quienes tienen derecho a recibir los beneficios de los recursos de montaña.

Sin embargo, la expansión de mercados no siempre trae impactos negativos. En el noroccidente de Tungurahua, la creciente demanda de forraje en las zonas cercanas a Ambato ha provocado un cambio interesante en el uso del suelo cerca al páramo, para la producción de avena forrajera. El impacto sobre el suelo, comparado con el sistema de cultivos tradicionales, se estima como positivo. Por otra parte, la incorporación de comunidades indígenas de esta zona en la fabricación de chompas de cuero y de camisas ha aliviado la presión sobre la tierra y algunos grupos poblacionales, arriba de Pasa (y Picaigua en menor medida), aparentemente están descendiendo hacia los pueblos.

La dotación de infraestructura vial casi siempre contrae impactos negativos. El principal impacto, sin embargo, no es tanto la degradación causada por la construcción de los caminos, sino por la aceleración de los procesos de avance de la frontera agrícola, de deforestación y de la incorporación de sistemas de cultivo más agresivos. Esto es patente sobre todo en el norte del área. En cambio cuando se introduce el recurso agua de riego, se puede observar, en muchos casos, un balance positivo, como ocurre al oeste de Toacaso, en tanto permite el desarrollo de una mejor estructura del suelo, evitando en mucho la erosión eólica. Generalmente, los problemas iniciales de erosión por incremento del mal manejo del agua, se reducen con la introducción de más pastos y forrajes a la producción.

Por lo expuesto, la cuestión de las cadenas causales, relacionadas con procesos de crecimiento orgánico o interno de los sistemas socio-productivos locales, es más compleja.

A manera de conclusión

Es por demás evidente que las cadenas causales de la degradación de los recursos naturales, observadas con todas las limitaciones del caso

en este ensayo, tiene su origen final en los modelos y estructuraciones de acumulación económica imperantes a nivel global, que condicionan y modelan la legítima búsqueda, por parte de las poblaciones locales, de participar de alguna manera (equitativamente o no) en los beneficios de inventario de esta acumulación.

Por otro lado, creemos que muchas de las preocupaciones que aquí se han registrado, tanto en términos generales en la introducción, cuanto en términos específicos para el caso de los ecosistemas de montaña discutidos, pueden ser generalizadas, con los matices respectivos, hacia otros aspectos de la problemática global del manejo de los recursos naturales.

La necesidad de construir una mejor base de información empírica permitirá mejorar sustancialmente la discusión necesaria entre todos los actores, conduciendo tanto a una mejor comprensión de la problemática en sí, así como al entendimiento de la diversidad de intereses involucrados, lo que esperaríamos, ayudará a proponer, al menos, líneas de políticas locales y nacionales de solución.

La consolidación de una mejor información empírica requerirá la asignación de recursos para la investigación de base, pero también hay mucho que se podrá hacer con los datos existentes en el país. Disponer públicamente de bases como las encuestas SEAN (Sistema de Estadística Agropecuaria Nacional) de INEC, permitiría entender una parte significativa de las tendencias en el uso del suelo en todo el país; ordenar mejor y poner a disposición la información del Consejo Nacional de Recursos Hídricos permitiría relacionar variaciones en caudales de agua con cambios en los usos de recursos.

Facilitar el acceso a la información disponible a través de satélite y fotografías aéreas del Instituto Geográfico Militar permitiría dimensionar la problemática de una forma mucho más global, tanto en el ámbito local cuanto nacional; la incorporación a este proceso de la información cartográfica de 1976-7 de PRONAREG ayudaría a comprender las dinámicas de mediano aliento, etc.

El desarrollo de las agroexportaciones en el Ecuador: la primera respuesta empresarial¹

WILLIAM F. WATERS

En América Latina, el sector agropecuario tradicional se caracterizó por la relación hacienda-minifundio y la dominación de una clase reducida de grandes propietarios en lo que se refiere al mercado de trabajo, producción, y concentración del poder (De Janvry 1981; Gómez 1989). Este fenómeno se presentó en diversas formas que incluyen la producción para el mercado mundial, principalmente a través de la exportación de alimentos y materias primas.

El caso ecuatoriano es ilustrativo de este proceso; su integración al mercado mundial se dio hace más de un siglo (Ortiz 1981). La base de la economía agroexportadora tradicional fue la concentración de la propiedad en manos de los terratenientes/exportadores y el uso de una variedad de formas de mano de obra asalariada y no asalariada (Guerrero 1983). A partir de 1948, se dio el auge bananero, por el cual el Ecuador alcanzó el primer puesto en la exportación (Larrea 1987).

En las décadas de los años 60 y 70, se produjo una serie de transformaciones en todos los sectores de la sociedad ecuatoriana referentes a la industrialización y urbanización y la conformación de una clase media, con el consiguiente aumento de la demanda de productos alimenticios elaborados (Barsky y Cosse 1981). En el sector rural, la re-

1 Tomado de *Latinoamérica Agraria hacia el Siglo XXI*. Quito, Ceplae, 1993

forma agraria fue impulsada por una fracción de la clase terrateniente que, anteriormente, había iniciado modificaciones significativas en la estructura de producción agropecuaria que resultaron en una agricultura de gran escala, más tecnificada, especializada e intensiva en el uso de capital (Barsky 1984).

El crecimiento del sector agroindustrial en el Ecuador también condujo a una convergencia de intereses de los agricultores de gran escala, ganaderos, industriales, comerciantes y Estado, para reemplazar el modelo agroexportador tradicional con un modelo de sustitución de importaciones, produciendo una gran diversificación de la producción industrial y el inicio de procesos industriales en la agricultura (Palán 1989).

En las décadas de los años 70 y 80, la producción agropecuaria experimentó una serie de transformaciones dramáticas, como se desprende del cuadro 1, en donde se presentan datos sobre la producción de diversos productos agrícolas y ganaderos para los años 1970-1985. En el cuadro 2, se muestran datos similares para 1986-1989². En el primer cuadro se observan cuatro tendencias importantes:

- a. El área dedicada a la producción de alimentos básicos para el mercado interno disminuyó entre los períodos 1970-1974 y 1980-1984, mientras la producción de estos alimentos decreció en 345.000 toneladas. Esta tendencia es particularmente impactante cuando se toma en cuenta que la población aumentó en más de 2.5 millones de personas durante este período (CONADE/UNFPA 1987).
- b. El área dedicada al cultivo de productos agroindustriales aumentó en más de 74 mil hectáreas en el período estudiado, mientras la producción de estas mercancías se incrementó en más de doscientas mil toneladas.

2 Se presentan los datos para los períodos en dos cuadros porque el método de recopilación no fue el mismo. Los datos para los años 1970-1985 provienen de estimaciones anuales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras los datos para los años 1985-1986 son los resultados de una muestra probabilística realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se presentan los datos para los años 1970-1985 utilizando promedios en los períodos de cinco años, lo cual permite una mejor apreciación de las tendencias generales y reduce el efecto de cambios coyunturales y transitorios.

- c. El área dedicada a los cultivos tradicionales para la exportación decreció notablemente, pero la producción aumentó en más del 25 por ciento, debido principalmente al aumento del rendimiento.
- d. El área dedicada a pastos casi se duplicó entre los períodos 1970-1974 y 1980-1984. Este cambio se relaciona con el decrecimiento del área dedicada a la producción de alimentos básicos, en favor del incremento de áreas para la producción de leche y carne y sus derivados; cambio que no significó un mejoramiento del estado nutricional de su población (Freire et. al. 1988).

Cuadro 1**Producción agropecuaria y área dedicada al cultivo. Ecuador, 1970-1985**

Período	Producción		Área Cosechada			
	1000 TM	% de 1970-74	1000 HA	% de 1970-74		
A. Alimentos Básicos (1)						
1.970-1974	1595,7	100,0	720,4	100,0		
1975-1979	1329,4	83,3	666,7	92,5		
1980-1984	1250,3	78,4	651,1	90,4		
1985	1317,4	82,6	365,1	50,7		
B. Productos agroindustriales (2)						
1.970-1974	3442,9	100,0	201,3	100,0		
1975-1979	4149,2	120,5	268,9	133,6		
1980-1984	3670,3	106,6	2575,6	136,9		
1985	3533,8	102,6	308,8	153,4		
C. Productos de exportación (3)						
1.970-104	224,8	100,0	591,1	100,0		
1975-1979	2517,1	89,1	610,7	103,3		
1980-1984	2086,2	73,9	671,5	113,6		
1985	2231,1	79,0	792,4	134,1		
D. Ganadería						
	mil HA Pastos	% de 70-74	Millón l Leche	% de 70-74	mil TM Carne	% de 70-74
1.970-104	2249,6	100,0	730,4 ⁽⁴⁾	100,0	11,0	100,0
1975-1979	3482,6	154,9	825,4	113,0	22,6	205,5
1980-1984	4281,3	190,4	945,4	129,4	38,2	347,3
1985	4432,2	197,1				

Fuente: MAG. 1985. Estimación de la Superficie Cosechada y de la Producción Agrícola del Ecuador.

- (1) Fréjol, arveja, lenteja, habas, chochos, maíz suave, trigo, arroz, cebada, lechuga, col, zanahoria, tomate, cebolla, papas, yuca y camote.
- (2) Maíz duro, palma africana, soya, algodón, maní y caña de azúcar.
- (3) Bananas, café, cacao y abacá.
- (4) Cifra para 1972-1974.

Cuadro 2**Producción agropecuaria y área dedicada al cultivo. Ecuador, 1986-1989**

Año	Producción 1000 TM	Área Cosechada		% de 1986
		1000 HA	% de 1986	
A. Alimentos básicos				
1986	1500,8	100,0	736,3	100,0
1987	1601,1	106,9	729,0	99,9
1988	1837,4	122,4	728,0	98,9
1989	1725,3	115,0	710,9	96,6
B. Productos agroindustriales				
1986	3844,0	100,0	420,7	100,0
1987	4139,0	107,7	466,9	111,0
1988	3738,9	97,3	450,8	107,2
1989	4401,5	114,5	499,4	118,7
C. Productos de exportación				
1986	2900,0	100,0	871,8	100,0
1987	2832,6	97,7	830,0	95,2
1988	3025,3	104,3	851,9	97,7
1989	2802,4	96,6	884,4	101,4

Fuente: INEC/MAG (1986-1990). SEAN. Sistema Estadístico Agropecuario Nacional.

El cuadro 2 muestra que en la segunda mitad de la década de los años 80, la producción de alimentos básicos aumentó ligeramente, reflejando la tecnificación parcial en el subsector; al mismo tiempo que creció la agroindustria y se estancó la producción de los productos tradicionales para la exportación.

Frente a las limitaciones en el mercado interno relacionado con la desarticulación social (De Janvry 1981), el estancamiento relativo de la producción tradicional para la exportación y las oportunidades de entrar en nuevas áreas de agroexportación, grupos empresariales bus-

caban mecanismos para diversificar sus portafolios en la segunda mitad de la década de los 80. En el cuadro 3, se observa la evolución de la exportación de productos agroindustriales y no tradicionales durante este período. Se advierte una clara tendencia de crecimiento; el valor FOB de estos productos aumentó en 349,3 por ciento entre 1985 y 1991, mientras que su volumen creció en 248,4 por ciento.

Cuadro 3

Exportaciones de productos agroindustriales y no tradicionales. Totales, 1985-1991

Año	Volumen (1000 TM)	Valor (miles US\$)
1985	7.700,6	8.009,1
1986	9.566,5	9.937,6
1987	12.927,3	13.233,7
1988	16.746,8	15.074,0
1989	224.463,8	21.643,0
1990	26.169,9	28.608,8
1991*	26.829,6	35.981,8

Fuente: Banco Central/Fedexport (1992, datos no publicados)

* Enero-octubre.

El cuadro 4 muestra el valor de los productos agroindustriales y no tradicionales más importantes para el período 1985-1991. Se observa un aumento espectacular en varios de los rubros, especialmente entre los productos procesados (incluyendo jugos y conservas), en los que se aprovecha un valor agregado importante. Se destaca, en particular, la categoría de “preparados comestibles diversos” entre los que el desarrollo del concentrado de maracuyá fue particularmente notable, siendo aproximadamente el 60 por ciento de esta clase. En la categoría de “plantas y partes de plantas” se distingue la quinua, que siendo un alimento tradicional y casi exclusivamente rural, en la actualidad se exporta para un segmento del mercado especializado: los vegetarianos. Entre las frutas frescas, que provienen mayormente de la Costa, resalta el melón, que contribuye a casi la mitad del valor del rubro. En

cuanto a las legumbres frescas, es particularmente notable el crecimiento en el valor de la exportación de brócoli congelado, desde cero en 1989 a US\$ 32.400 en 1990 y US\$ 552.200 en los primeros diez meses de 1991.

Por otro lado, se nota el crecimiento vertiginoso de la floricultura, en 1.522 por ciento entre 1985 y octubre de 1991, con un incremento del valor en 3.055 por ciento en el mismo período. Dicho crecimiento se debe a una serie de factores (Waters 1991):

- ▲ La tecnificación e intensificación de la producción;
- ▲ un aumento en el número de productores. Solamente entre 1990 hasta la fecha, se incrementó en alrededor de 35 a más de 70;
- ▲ un aumento del número de variedades de exportación; comenzó con claveles, luego con rosas, y alcanzó a más de cuarenta variedades en el presente;
- ▲ un alto nivel de inversión, sobrepasando los US\$ 200.000 por hectárea, principalmente por grupos de inversionistas no agricultores quienes diversifican sus portafolios de inversiones;
- ▲ el ingreso de importantes capitales extranjeros;
- ▲ las excelentes condiciones agroecológicas;
- ▲ la disponibilidad de mano de obra barata;
- ▲ la cercanía a los mercados mundiales principales, especialmente los Estados Unidos.

Cuadro 4

**Exportaciones de productos agroindustriales
y no tradicionales. Por rubro, 1985-1991 (miles US\$).**

Rubro	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991 ¹
Cereales	9	44	89	12	3	10	108
Cereales Elab.	9	13	27	7	26	58	85
Legumb. Frescas ²	7	43	60	54	53	149	796
Legumb. prep.	77	661	716	396	626	1320	1862
Frutas frescas	1341	1561	1440	1436	1973	1860	1232
Elab. banano	1089	1056	2154	5174	6328	6288	6155
Frutas conserva	69	129	250	544	263	595	700
Jugos fruta	1006	1000	1382	628	1418	1086	2393
Especias	127	38	115	36	70	197	68
Prep. diversos	3730	3671	3413	2672	1658	3442	5812
Plantas	20	16	23	13	4	6	187
Flores	526	1706	3566	4102	9225	13598	16584

Fuente: Banco Central-Fedexport (1992, datos no publicados).

¹ Enero-octubre.

² Incluye legumbres refrigeradas, congeladas o conservas.

Estos datos demuestran que el Ecuador se ha embarcado en una reestructuración del sector agropecuario. Si bien las transformaciones descritas arriba son todavía incipientes e inconclusas, se observa una reorientación no solamente en el uso de los clásicos factores de producción, sino además en una nueva estrategia empresarial, que se relaciona con factores nacionales e internacionales.

Estrategias empresariales en el contexto fordista de producción y consumo

En el presente acápite, examinaremos los elementos de la respuesta empresarial que conduce a una nueva participación en el sistema alimenticio/agropecuario a nivel mundial: flexibilidad, estandarización y alta capacidad de inversión.

Flexibilidad en los sistemas productivos

Uno de los factores que ha conducido al desarrollo del sector de agroexportaciones no tradicionales es su alto grado de flexibilidad y diversidad. Este factor puede ser considerado en términos de: (a) condiciones agroecológicas, (b) capacidad de empatar la producción con las demandas de consumo en los países importadores, y (c) formas de contratación.

El Ecuador tiene condiciones agroecológicas únicas en el mundo. Si bien las agroexportaciones tradicionales (banano, café y cacao) se localizaron en la región tropical de la Costa, las no tradicionales provienen no solamente de esa región, con condiciones ecológicas adecuadas para la producción de una vasta gama de frutas y hortalizas tropicales y semi-tropicales, sino también de la Sierra, que ofrece condiciones de suelos, temperaturas, intensidad de luz y otros factores que son inigualables en el mundo para la producción de hortalizas y flores, estas últimas en invernaderos, en la mayoría de los casos. De igual forma, se ha planteado la producción de cultivos tropicales en la región amazónica.

La producción de agroexportaciones no tradicionales refleja una nueva inserción en los mercados mundiales. Dicho de otra forma, esta parte dinámica de la economía y sociedad ecuatorianas depende de vinculaciones extranjeras. Son los países importadores los que determinan cuáles productos van a importar y en qué momento. La política específica depende de varios factores: volumen de producción nacional, producción de países vecinos u otros países que reciben prioridad por razones políticas y, el volumen de consumo. El caso más notorio, hoy por hoy, no es un cultivo no tradicional, sino el banano, eje vertebral de las exportaciones agrícolas ecuatorianas, que actualmente está sujeto a cupos y a un arancel de 20 por ciento en los países de la Comunidad Europea, que han decidido favorecer a sus excolonias. De igual forma, la exportación libre de impuesto de melones ecuatorianos a los Estados Unidos se limita a una variedad (honeydew), y solamente durante el período de noviembre 15 hasta enero 15. Las exportaciones fuera de esta temporada están sujetas a un arancel de 35 por ciento. Siendo un cultivo de ciclo corto, la producción de este producto se orienta a las mencionadas fechas.

La forma de producción de los cultivos no tradicionales varía según factores de intensidad de cultivo, nivel de inversión requerida, conocimientos y contactos con los mercados internacionales y los estándares de calidad. Se puede entender la forma de producción en términos de la manera en la cual se adquiere la materia prima (Glover y Kusterer 1990). En el Ecuador, se observa tres formas principales: (a) producción directa por grandes empresas, quienes también se encargan de la exportación; (b) contratación entre procesadoras y/o exportadoras y grandes empresas agropecuarias; y (c) contratación entre procesadoras y/o exportadoras y pequeñas empresas (campesinos). La producción, procesamiento y exportación directa por grupos campesinos no existe en el país.

El mejor ejemplo de la producción y exportación de cultivos no tradicionales por parte de grandes empresas es el de las flores. Dado su alto nivel de inversión, el nivel de calidad exigida, y la necesidad de mantener vinculaciones flexibles y dinámicas en los países importadores, este sector se limita a un número reducido de empresas, las que se encargan de todos los componentes de la producción: adquisición de equipos, insumos y tierra³, contratación de mano de obra y control de la misma, manejo del producto antes y después de la cosecha, preparación para exportación, transporte nacional e internacional y venta a través de intermediarios, quienes trabajan a consignación.

Un ejemplo de la vinculación entre procesadora/exportadora y grandes empresas es el de brócoli. La empresa que procesa y exporta la gran mayoría de ese producto se encuentra cerca de Lasso, provincia de Cotopaxi. Por lo general, sus proveedores son hacendados de la zona, quienes han transformado parcelas pequeñas (normalmente menos de 20 hectáreas) de sus haciendas ganaderas (que normalmente tienen al menos 500 hectáreas en total) para la producción de brócoli. Algunos de ellos, inclusive, son accionistas en la compañía. Si bien las técnicas de producción no excluyen a otros productores (por ejemplo, los campesinos del sector), la forma de contratación, que requiere la entrega del producto en la planta y la determinación de calidad por la misma com-

3 Dada la intensidad de producción, el factor tierra no es cuantitativamente importante; la producción de flores para la exportación se hace en alrededor de 400 hectáreas.

pañía, restringe efectivamente la provisión del producto a hacendados locales. De hecho, hacendados de áreas más distantes, quienes optaron por experimentar con parcelas muy pequeñas (una hectárea) no lograron las economías de escala y el contacto personal con la empresa, necesarios para una relación provechosa por parte del productor.

En las áreas tropicales de la Costa, algunos productos no tradicionales son cultivados por empresas grandes, medianas y pequeñas. Sin embargo, al igual que en el caso descrito anteriormente, la procesadora/exportadora determina las condiciones de contratación, las que varían entre productos. Por ejemplo, el exportador más importante de tomate industrial y fréjol ("fréjol de palo") ha aumentado la cantidad de fréjoles procesados de 105 toneladas en 1988, a 2.500 toneladas en 1990, a través de una expansión en el área en producción (de 50 hectáreas a 1.400 hectáreas) y el número de agricultores (de 30 a 760). Pero en ese período, la misma empresa incrementó la producción de tomate industrial, de 250 toneladas en 1988 a 8.950 toneladas en 1991 a través de una expansión en el área bajo producción (de 9 hectáreas a 319 hectáreas), acompañado por un decrecimiento en el número de agricultores con contratos (de 8 en 1988, a 173 en 1990 y 114 en 1991). Al igual que en el caso de Guatemala, donde una gran parte de la producción para la exportación de cultivos no tradicionales es realizada por pequeños productores (Stonich 1990), se está optando por contratar productores medianos y no pequeños, y complementar la adquisición de materia prima a través de contratos con la producción directa.

Estandarización en la producción de cultivos no tradicionales

La producción para la exportación presupone que los estándares de calidad son establecidos por los países importadores, ya que la calidad (no solamente en términos de salud o nutrición, sino fundamentalmente estéticos) es un elemento clave en el consumo fordista. En lo referente a los productos agropecuarios, las preocupaciones son tres: apariencia física, presencia de plagas o insectos y existencia de residuos químicos procedentes de la fumigación.

Para llegar a los niveles establecidos de calidad estética, y para evitar la presencia de plagas o insectos, se ha generalizado el uso de

medios químicos. Evidentemente, para satisfacer los dos requisitos al mismo tiempo, se requiere de un balance muy fino. Adicionalmente, los productos permitidos para cada cultivo y los niveles de residuos tolerados son establecidos por organismos estatales en los países importadores (la Food and Drug Administration, en el ejemplo de los Estados Unidos); lo mismo ocurre con la detección de insectos o plagas (el Animal and Plant Health Inspection Service -APHIS- en el mismo ejemplo). En estos casos, se establecen los procedimientos requeridos para la importación. Por ejemplo, la exportación de mangos del Ecuador a los Estados Unidos requiere de la sumersión de cada fruta en agua caliente para matar la mosca de fruta, y los pasos a seguirse en los puertos de embarcación son controlados por representantes de estos organismos (pagados por los productores).

El caso del melón es ilustrativo de la estandarización de calidad según los criterios de los países importadores. Llamaremos al ejemplo "el caso de la mosca fantasma". Como se mencionó anteriormente, se permite la exportación únicamente del melón honeydew a los Estados Unidos, y solo entre el 15 de noviembre y el 15 de enero. A más de proteger a productores norteamericanos, mexicanos y guatemaltecos, esta regulación tiene como objetivo permitir el ingreso del producto durante los meses fríos del invierno; los melones ecuatorianos solamente ingresan en los puertos del Atlántico norte (desde Baltimore hacia el norte), presumiblemente para que cualquier mosca de fruta muera. Pero, la producción de melones para la exportación está restringida a un área declarada libre de la mosca (los productores exportadores a los Estados Unidos son 18), y cada finca es constantemente monitoreada por un representante de APHIS, utilizando trampas aprobadas por el mismo organismo. Entonces, se supone que ningún melón exportado tiene la mosca. Sin embargo, a pesar del monitoreo y la exportación a puertos fríos, se prohíbe el ingreso del melón ecuatoriano en 16 de los 50 estados norteamericanos.

Estos casos ilustran un elemento fundamental del consumo fordista en los países industrializados. Se encuentran productos estándares de alta calidad durante todos las temporadas del año. En este sentido, el mundo entero es el proveedor de los bienes de consumo a estos países.

Capacidad de inversión

Los datos sobre la producción de flores en la Sierra ecuatoriana indican que dos de cada tres productores no son agricultores, sino más bien profesionales urbanos. En cambio, en la Costa parece que los productores de cultivos no tradicionales son agricultores quienes han diversificado su producción. El nivel de inversiones evidentemente varía entre cultivos, según la intensidad de producción. Sin embargo, como regla general, se puede afirmar que las inversiones son mucho más elevadas que la producción para el mercado interno, debido principalmente a la necesidad de acoplarse con las características de calidad exigida, cantidades requeridas y demandas disponibles.

Para ilustrar el caso de la producción de alta inversión, el cuadro 5 presenta datos sobre una empresa floricultora de 1.42 hectáreas. Se observa que a pesar de la inversión en equipos, fungibles, manejo y mano de obra, se propone producir una ganancia positiva en el segundo año de operaciones. A más de la inversión inicial, los costos de operación son altos: el egreso solamente para fertilizantes, fungicidas e insecticidas programado para el año 1990 es de US\$ 18.912. Este costo es únicamente el 35,6 por ciento de los costos de producción y 14,7 por ciento de los costos totales.

Sin embargo, las ganancias programadas justifican la inversión: incluyendo la pérdida durante el primer año (antes de la exportación inicial) la ganancia fue de S/. 507'419.150 que al tipo de cambio de 720 en 1990, equivale a US\$ 704.749 por el período 1989-1996, por una unidad de menos de una hectárea y media.

Cuadro 5**Egresos e ingresos programados, empresa floricultora de la Sierra norte ecuatoriana, 1989-1990 (miles de sures).**

Año	Ingresos (ventas)	Costo de venta	Egresos		Total
			Costos de operación	Trabajo e Impuestos	
1989	0	19.150,17	18.200,00	0	(37.350,17)
1990	124.416	38.300,34	36.400,00	18.021,93	49.715,66
1991	145.152	38.300,34	36.400,00	25.538,73	70.451,66
1991	145.152	38.300,34	33.993,00	26.411,27	72.858,66

Fuente. Anónimo 1989. Préstamo para el financiamiento parcial de la inversión requerida en el cultivo de rosas. Quito: Manuscrito.

Conclusiones

Los empresarios dedicados a la exportación de productos agrícolas no tradicionales en el Ecuador orientan sus actividades alrededor de dos consideraciones referentes a los mercados disponibles. Primero, la gran mayoría de los ecuatorianos no son consumidores importantes, ya que la desarticulación social se expresa en salarios bajos y alimentos baratos. Segundo, la estandarización fordista de producción y consumo en los países industrializados incluye prácticamente a todo el mundo como proveedor potencial.

En este trabajo no hemos considerado el impacto de las transformaciones descritas en la población campesina que abastece el mercado laboral para la producción de agroexportaciones no tradicionales. Tampoco hemos analizado el papel de la unidad doméstica campesina en el sector, particularmente en lo que se refiere a la mano de obra femenina. Dado el uso intensivo de la mano de obra en estos cultivos, este factor es de suma importancia. Sin embargo, consideramos que, desde la perspectiva empresarial, el factor de mano de obra es prácticamente una constante, ya que su disponibilidad no es una limitante. Más bien, su bajo costo lo convierte en una ventaja comparativa.

Podemos concluir que la agricultura latinoamericana está experimentando una serie de transformaciones radicales tendientes a una reestructuración al nivel de producción, consumo e intercambio. En un sentido, la participación en el sector de las agroexportaciones es una opción entre varias alternativas de inversión industrial. Es decir, es dable el movimiento entre inversiones en la producción de, por ejemplo, flores, brócoli, bujías y químicos industriales. En otro sentido, las características únicas (biológicas y socioculturales) de la producción agrícola representan obstáculos a su plena racionalización fordista. No obstante, el sector de agroexportaciones claramente refleja la incorporación del Ecuador (y otros países de la región) en un régimen fordista mundial de producción y consumo.

Bibliografía

- Anónimo. Préstamo para el financiamiento parcial de la inversión requerida en el cultivo de rosas. 1989. Quito: manuscrito.
- Barsky, O. 1984. *La Reforma Agraria Ecuatoriana*. Quito: Corporación Editora Nacional/FLACSO.
- Barsky, O. y G. Cosse. 1981. *Tecnología y Cambio Social: las Haciendas Lecheras del Ecuador*. Quito: FLACSO.
- CONADE/UNFPA. 1987. (Consejo Nacional de Desarrollo/Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población). *Población y Cambios Sociales*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- De Janvry, A. 1981. *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*. Baltimore (USA): The Johns Hopkins University Press.
- Freire, W., H. Dirren, J. O. Mora, P. Arenales, E. Granda, J. Breilh, A. Campaña. R. Paéz, L. Darquea y E. Molina. 1988. *Diagnóstico de la Situación Alimentaria Nutricional y de Salud de la Población Ecuatoriana Menor de Cinco Años - DANS*. Quito: CONADE/MSP.
- Gómez, S. 1989. Nuevos sectores dominantes en la agricultura latinoamericana. *Estudios Rurales Latinoamericanos* 12 (1):7-29.
- Glover, D. y K. Kusterer. 1990. *Small Farmers, Big Business: Contract Farming and Rural Development*. Londres: Macmillan.
- Guerrero, A. 1983. *Los Oligarcas del Cacao*. Quito: Editorial El Conejo.
- Larrea, C., ed. 1987. *El Banano en el Ecuador*. Quito: FLACSO/Corporación Editora Nacional.
- Ortiz, G. 1981. *La Incorporación del Ecuador al Mercado Mundial. La Coyuntura Socioeconómica 1875 - 1895*. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Palán, S. 1989. *La Nueva Cara del Agro Ecuatoriano: Estado, Crisis y Agroindustria*. Quito: CIUDAD.
- Stonich, S. C. 1991. The promotion of non-traditional agricultural exports in Honduras. *Development and Change* 22 (4):725-756.
- Waters, W. F. 1991. Rosas y claveles: reestructuraciones de la agricultura ecuatoriana y nuevas agroexportaciones. Quito: Universidad San Francisco de Quito, Serie Documentos U.S.F.Q.; No. 5.